

UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

TOMO I



Emilio Alberto De Ygartua Monteverde

Un nuevo orden mundial

Tomo I

Emilio Alberto de Ygartua Monteverde

Un nuevo orden mundial
Tomo I

Primera edición. 2026

D. R. © Emilio Alberto de Ygartua Monteverde

D.R. © Universidad Olmeca, A.C.
Carretera federal Villahermosa-Escárcega, km
14.329 margen derecha, ranchería Coronel Tra-
conis 3^{ra} sección, C.P. 86265, Centro, Tabasco,
México.

Diseño de portada: Brenda Ivonne Basurto Aguilar

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de la Universidad Olmeca, A.C.

ISBN versión impresa: 978-970-96938 6-7

ISBN versión digital: 978-970-96938 7-4

Hecho en México / *Made in Mexico*

Un nuevo orden mundial

Tomo I

Emilio Alberto de Ygartua Monteverde



UNIVERSIDAD OLMECA
Rojz de Xibitun

Índice

Prólogo	9
Introducción	12
La visión de Claudia Sheinbaum en la asamblea de la Asociación Nacional de Bancos: un llamado a la colaboración y el desarrollo	51
Los desafíos del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo papa León XIV en un contexto geopolítico complejo	61
El ascenso del papa León XIV: un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica	69
La India y Pakistán: un conflicto históricamente cargado de tensiones	77
La huella de José «Pepe» Mujica en la izquierda: un legado de ética y compromiso social	87
Los efectos de la nueva ley de comisiones a las remesas en México: un análisis integral	93
El cambio climático no da tregua: México se calienta más que el promedio del planeta	101
China y Estados Unidos llegan a un acuerdo para la reducción de aranceles	107

Sheinbaum llama a movilizaciones si EE. UU. avanza con impuesto a remesas	113
Las apuestas fallidas de Trump	127
Trump versus Harvard	137
El Tribunal de Comercio de Estados Unidos declara ilegales los aranceles de Trump, un juez los activa. La decisión en manos de la Suprema Corte	143
Trump ordena a sus embajadas suspender las entrevistas a aspirantes a estudiar en Estados Unidos	149
Impacto de las microcredenciales en la formación de competencias suaves en el marco del Plan México	157
La geopolítica de la esperanza: un compromiso con el humanismo y la educación inclusiva	165
Universidad Olmeca: compromiso permanente con la educación sostenible y transformadora	175
Un paradigma común para el bienestar: temas centrales para el foro CELAC en tiempos de inseguridad	193
La corriente ideológica detrás de Donald Trump: un análisis geopolítico	209
La postura de Claudia Sheinbaum ante la violencia gubernamental hacia migrantes y su compromiso internacional	225
La escalada de la violencia contra migrantes en la era Trump: un análisis crítico	233
Joseph Stiglitz: con Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos	243

Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán y mata al jefe de la Guardia Revolucionaria	253
Panorama geopolítico mundial: riesgos y desafíos	261
Sheinbaum planteó al G7 una cumbre para el bienestar	267
Pedro Sánchez: adelantar elecciones generales o retrasar el fracaso, he ahí el dilema	275
El gobierno de Estados Unidos fabrica indocumentados	287
Democracia y disrupción digital: retos para la educación superior iberoamericana	295
Los BRICS en la nueva era geopolítica: desafíos y oportunidades	305
El Babel norteamericano	321
La ley fiscal de Trump amenaza la esperanza económica de la relocalización de empresas en México	331
La actividad económica en México acumula 21 meses a la baja	341

Prólogo

Hay libros que explican el mundo. Otros, más escasos, nos obligan a repensarlo. *El Nuevo Orden Mundial de Trump: entre el proteccionismo y la disrupción global* pertenece claramente a esta segunda categoría.

El doctor Emilio De Ygartua aborda uno de los momentos más complejos y definitorios de nuestra era con una virtud poco común: claridad conceptual sin simplificación, rigor histórico sin dogmatismo y una mirada crítica que rehúye tanto la complacencia ideológica como el alarmismo superficial. Desde las primeras páginas, el lector comprende que no está frente a un ensayo coyuntural, sino ante una obra que busca interpretar los movimientos tectónicos que están reconfigurando el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no es tratado aquí como un episodio aislado ni como una anomalía política, sino como el síntoma más visible de un agotamiento profundo: el del consenso liberal, el multilateralismo de posguerra y la promesa de una globalización benévola y ordenada. Con una narrativa bien documentada y una estructura sólida, el autor nos guía desde Bretton Woods hasta la multipolaridad contemporánea, mostrando cómo Estados Unidos pasó de arquitecto del sistema global a su principal disruptor.

Uno de los grandes méritos de esta obra es su capacidad para integrar dimensiones históricas, económicas, geopolíticas y culturales en un solo marco interpretativo. El análisis del ascenso de China, del trumpismo como fenómeno global, de la erosión democrática y de la migración forzada no se presenta como capítulos aislados, sino como partes interconectadas de un mismo proceso: la transición hacia un orden internacional más fragmentado, más volátil y, sin duda, más incierto.

Conozco al doctor De Ygartua no solo como rector universitario y académico riguroso, sino como un pensador comprometido con la formación de ciudadanos críticos y conscientes de su tiempo. Este libro refleja esa vocación. No pretende dictar conclusiones cerradas, sino provocar preguntas incómodas: ¿qué ocurre cuando las reglas dejan de ser compartidas?, ¿puede sostenerse un sistema internacional sin instituciones legítimas?, ¿estamos entrando en una era de cooperación forzada o de confrontación permanente?

En un mundo saturado de opiniones rápidas y análisis superficiales, esta obra ofrece algo mucho más valioso: contexto, profundidad y perspectiva histórica. Leerla es un ejercicio de responsabilidad intelectual, especialmente para quienes toman decisiones en los ámbitos académico, político, empresarial y social.

Este prólogo no busca anticipar respuestas, porque el propio libro demuestra que aún no las hay, sino invitar al lector a recorrer un análisis serio y bien argumentado sobre el fin de un orden mundial y el incierto nacimiento de otro. En ese tránsito, el doctor Emilio De Ygartua nos recuerda que entender el mundo no es un lujo académico, sino una condición indispensable para poder actuar con prudencia, responsabilidad y visión de futuro.

Luis Durán

Semblanza biográfica de Luis Durán

Luis Durán es Director General de RLH Properties, una importante plataforma latinoamericana de desarrollos de lujo. Su amplia trayectoria ejecutiva incluye:

Liderazgo industrial: Fue Director General del Grupo Industrial Monclova (GIMSA), a cargo de operaciones industriales, energéticas y mineras.

Consultoría estratégica: Dirigió la firma boutique Strategy Primus.

Sector educativo: Ocupó posiciones ejecutivas, incluida la Dirección General, en Laureate Education México, liderando las dos mayores universidades privadas del país (UVM y UNITEC).

Negocios internacionales: Fue Vicepresidente de Mercados Internacionales de FEMSA Cerveza, gestionando marcas como Dos Equis y Tecate fuera de México.

Actualmente es miembro de varios consejos directivos (Atlas Beverages, Christel House, entre otros) y ha participado en organismos empresariales como COPARMEX. Es economista por el ITESM y tiene una maestría en Negocios Internacionales de Thunderbird School.

Introducción

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó un punto de inflexión histórico. Su triunfo electoral no representa simplemente la continuidad de una presidencia anterior, sino la consolidación de un modelo disruptivo que desafía décadas de consenso global y anuncia la llegada de un nuevo orden mundial.

Su victoria no fue solo un voto por un individuo, sino un rechazo a las élites tradicionales y a un sistema globalista percibido como fallido por una parte significativa del electorado. Representa la culminación de una tendencia populista que valora la soberanía nacional y la identidad cultural por encima de los compromisos supranacionales y las alianzas históricas, señalando un profundo realineamiento en la política interna estadounidense y, por extensión, en la dinámica geopolítica global.

La disrupción del orden global se manifiesta en la erosión de instituciones multilaterales, la renegociación unilateral de tratados internacionales y una mayor volatilidad en las relaciones comerciales. Trump ha cuestionado abiertamente pilares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos climáticos, priorizando los intereses nacionales por encima de la cooperación global. Esta postura genera una incertidumbre

estratégica sin precedentes, obligando a las naciones a reevaluar sus propias políticas exteriores y sus alianzas.

Este momento es históricamente significativo porque marca el posible fin de la era unipolar posterior a la Guerra Fría, donde Estados Unidos actuaba como hegemónico benevolente y garante de un orden liberal. Con Trump, la primacía estadounidense se redefine en términos de unilateralismo y pragmatismo transaccional, acelerando la multipolaridad y reconfigurando el tablero geopolítico. Se vislumbra una era donde el poder duro y la ventaja económica dictan las reglas, en detrimento de la diplomacia tradicional y los valores compartidos.

En la práctica, «America First» se traduce en una política exterior de «o estás conmigo o contra mí», con un enfoque implacable en la protección de la industria y el empleo nacionales a través de aranceles y barreras comerciales. Busca reducir la dependencia de las cadenas de suministro globales, repatriar la manufactura y renegociar acuerdos que considera desfavorables. Esto no es solo una estrategia económica, sino una filosofía que permea todos los aspectos de la política exterior, desde la seguridad hasta la migración, buscando proyectar una imagen de fortaleza y autosuficiencia.

La comunidad internacional reacciona con una mezcla de consternación, adaptación y resistencia. Aliados tradicionales como Europa y Canadá buscarán fortalecer sus propias esferas de influencia y cooperación regional, mientras que potencias revisionistas como China y Rusia podrían ver una oportunidad para expandir su alcance. La incertidumbre sobre el compromiso de Washington con sus aliados podría llevar a una carrera armamentista o a la búsqueda de nuevos equilibrios de poder, mientras que los organismos internacionales luchan por mantener su relevancia en un entorno cada vez más fragmentado.

A diferencia de su primera presidencia, este segundo mandato de Trump se perfila como un movimiento más consolidado y con menos restricciones. Con una base política más afianzada y posibles cambios en la composición del Poder Legislativo y el Judicial, podría tener una mayor libertad para im-

plementar sus políticas disruptivas. Los mecanismos de contención que operaron en su primer periodo podrían ser más débiles, y su agenda de desmantelamiento de las regulaciones y los acuerdos podría avanzar con mayor celeridad y determinación, transformando no solo el panorama internacional, sino también el propio tejido institucional de Estados Unidos.

El fin de Bretton Woods: adiós al orden de posguerra

Los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, sentaron las bases para una nueva arquitectura económica global tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal era evitar el caos económico del periodo de entreguerras, promover la estabilidad monetaria y fomentar el crecimiento del comercio internacional. Esto se logró mediante el establecimiento de un sistema de tipos de cambio fijos, anclado al dólar estadounidense (que a su vez era convertible en oro), y la creación de instituciones fundamentales que definirían el orden de posguerra por más de siete décadas.

Entre las instituciones más destacadas de Bretton Woods se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión era asegurar la estabilidad financiera global y proporcionar asistencia en balanza de pagos para evitar devaluaciones competitivas; y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), conocido hoy como el Banco Mundial, enfocado inicialmente en la reconstrucción posguerra de Europa y posteriormente en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en países en vías de desarrollo. A estos se sumó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que luego se transformaría en la Organización Mundial del Comercio (OMC), para liberalizar el comercio global a través de la reducción de aranceles y barreras no arancelarias.

A lo largo de las décadas, este sistema, aunque adaptándose a desafíos como el fin de la convertibilidad del dólar en oro en los años 70 y la posterior flexibilización de los tipos de cambio, propició una era de prosperidad sin precedentes. El multilateralismo, la apertura comercial y la cooperación financiera se convirtieron en los pilares de la globalización, permi-

tiendo una integración económica profunda y una reducción significativa de la pobreza a nivel mundial. El sistema de Bretton Woods se adaptó y evolucionó, demostrando una notable resiliencia y una capacidad de fomentar el crecimiento y la estabilidad.

Sin embargo, la visión de Donald Trump representa una ruptura radical con este legado. Sus políticas de «America First» se traducen en una estrategia unilateral y transaccional que desmantela los principios de Bretton Woods. La imposición de aranceles a importaciones de países aliados y rivales, la retirada de acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su constante cuestionamiento de la OMC, debilitan la premisa de un sistema de comercio libre y basado en reglas. Esta postura transforma los aranceles de herramientas económicas a armas geopolíticas, socavando la confianza y la predictibilidad que el orden de posguerra había construido.

El abandono del multilateralismo implica consecuencias profundas. Se erosiona la capacidad de las naciones para abordar desafíos globales que requieren acción conjunta, como el cambio climático, las pandemias o la proliferación nuclear. En el ámbito económico, se corre el riesgo de caer en un ciclo de guerras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro globales y una fragmentación económica que podría ralentizar el crecimiento y aumentar la inestabilidad. La cooperación internacional, vital para la gestión de crisis, se ve comprometida por una visión que prioriza el interés nacional a ultranza, percibiendo las relaciones internacionales como un juego de suma cero.

Ante este cambio de paradigma, otras naciones han comenzado a reaccionar. Tradicionales aliados, como los países de la Unión Europea y Canadá, han buscado fortalecer sus propios lazos comerciales y diplomáticos, e incluso establecer nuevos acuerdos con socios alternativos. Potencias como China han emergido como defensoras (al menos retóricamente) del libre comercio y el multilateralismo, buscando llenar el vacío dejado

por el liderazgo estadounidense y consolidar su propia esfera de influencia. Esta reconfiguración provoca una mayor volatilidad e incertidumbre, obligando a las economías emergentes a recalibrar sus estrategias de desarrollo en un entorno geopolítico en constante cambio.

Un mundo pos-Bretton Woods, en la visión de Trump, se perfila como un escenario de bloques económicos rivales, donde la ley del más fuerte y la negociación bilateral predominan sobre las normas y las instituciones multilaterales. Es un futuro donde la diplomacia tradicional cede terreno al pragmatismo transaccional y la capacidad de presión. La desaparición de un «hegemón benevolente» podría dar paso a una multipolaridad desordenada, sin una arquitectura clara para la resolución de conflictos económicos y geopolíticos, lo que aumenta la probabilidad de fricciones y tensiones persistentes en el ámbito global.

Del Estado benefactor a la confrontación arancelaria

1945-1989: El consenso de posguerra y el Estado benefactor.

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Occidente adoptó un modelo de Estado benefactor, caracterizado por una fuerte intervención estatal en la economía para garantizar la seguridad social, el pleno empleo y la redistribución de la riqueza. Este periodo estuvo marcado por la Guerra Fría, que consolidó dos bloques ideológicos y económicos. En el mundo occidental, el sistema de Bretton Woods (tipos de cambio fijos, dólar-oro) proporcionó estabilidad financiera global, permitiendo un crecimiento económico sostenido y la expansión de las redes de seguridad social. Se buscaba mitigar las fluctuaciones del mercado y proteger a los ciudadanos de sus riesgos inherentes, estableciendo un «contrato social» que prometía progreso y estabilidad a cambio de consenso.

1989-2008: El momento unipolar y el auge neoliberal.

La caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin de la Guerra Fría y el inicio de un «momento unipolar» dominado por Estados Unidos. El libre mercado, la desregulación, la privatización y la globalización se erigieron

como el paradigma económico dominante, conocido como neoliberalismo. Se promocionó la apertura de mercados y la reducción de barreras comerciales y de inversión, con la promesa de una prosperidad global sin precedentes. Instituciones como la OMC vieron su poder crecer, facilitando la integración económica mundial. Aunque generó crecimiento y redujo la pobreza en algunas regiones, también exacerbó la desigualdad y la precarización laboral en otras, sembrando las semillas de futuras crisis.

2008-2024: Crisis, desilusión y ascenso de China. La crisis financiera global de 2008, originada en el sector hipotecario estadounidense y extendiéndose rápidamente por el mundo, expuso las vulnerabilidades del modelo neoliberal y la excesiva desregulación. La respuesta de los gobiernos (rescates bancarios, políticas de austeridad) generó una profunda desconfianza en las instituciones y las élites. Paralelamente, China emergió como una potencia económica global, desafiando el orden liderado por Occidente con un modelo de capitalismo de Estado que integraba elementos de mercado con una fuerte planificación central. Su ascenso alteró el equilibrio geopolítico y económico, cuestionando la hegemonía estadounidense y la validez universal del modelo occidental.

2025+: La era Trump, proteccionismo y «America First». La presidencia de Donald Trump representa una ruptura radical con los principios del libre comercio y el multilateralismo que habían guiado la política exterior estadounidense desde Bretton Woods. La doctrina «America First» priorizó los intereses nacionales de los EE. UU. a ultranza, impulsando políticas proteccionistas como la imposición masiva de aranceles a productos importados, incluso de aliados tradicionales. Esto marcó un giro de 180 grados, transformando a Estados Unidos de arquitecto del orden económico global en su principal disruptor, y redefiniendo las relaciones internacionales como transaccionales y bilaterales, con una clara predilección por la confrontación económica sobre la cooperación.

La transición del Estado benefactor al modelo trumpista no es una evolución gradual, sino una reorientación abrupta y dramática. Este viraje de 180 grados en la política económica es-

tadounidense —de ser el principal defensor del libre mercado y las instituciones multilaterales a abrazar el proteccionismo más agresivo desde la década de 1930— refleja una profunda transformación de las fuerzas políticas y económicas globales. La globalización, si bien generó vastos beneficios económicos a nivel mundial, también dejó a su paso bolsas de descontento, especialmente en las regiones industriales de las economías desarrolladas que sufrieron la deslocalización de empleos y la precarización laboral.

Las fuerzas que impulsaron este cambio son multifacéticas. La creciente desigualdad económica, el estancamiento de los salarios reales para una parte significativa de la población en Occidente, y la percepción de que las élites se beneficiaron desproporcionadamente de la globalización, crearon un caldo de cultivo para el populismo. La crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión, al desacreditar el modelo neoliberal y exponer la fragilidad de un sistema que parecía beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. La promesa de «hacer a América grande otra vez» de Trump resonó con sectores de la población que se sentían olvidados por el sistema económico y político establecido.

Las consecuencias sociales y políticas de esta transición son de gran alcance. El ascenso del nacionalismo económico ha provocado un aumento de las tensiones comerciales y una fragmentación de las cadenas de suministro globales, lo que amenaza la eficiencia económica y la estabilidad. Políticamente, se observa una erosión del multilateralismo y una tendencia hacia la bilateralidad transaccional, debilitando la capacidad de la comunidad internacional para abordar desafíos globales complejos como el cambio climático o las pandemias. Socialmente, la polarización ha aumentado, con debates intensos sobre la identidad nacional, la migración y el papel del Estado en la economía, marcando el fin de un consenso que duró más de setenta años.

Este nuevo paradigma sugiere un futuro donde las alianzas tradicionales se redefinen y la competencia entre grandes potencias se intensifica, no solo en el ámbito militar sino,

crucialmente, en el económico. La noción de un orden basado en reglas da paso a una lucha por la influencia donde el poder económico se ejerce como una herramienta geopolítica. El legado de Bretton Woods, aunque adaptado y cuestionado a lo largo de las décadas, finalmente se enfrenta a un desafío fundamental que podría alterar de forma irreversible el panorama global.

El breve momento unipolar estadounidense. «El fin de la historia» proclamado por Francis Fukuyama en 1989 resultó ser una ilusión. La caída del Muro de Berlín y el colapso soviético no inauguraron una era de hegemonía estadounidense permanente, sino apenas un interludio de tres décadas. La fractura de la URSS puso fin a la confrontación bipolar, pero el mundo unidireccional bajo el liderazgo estadounidense duró poco. Mientras el socialismo real se desmoronaba en Europa del Este, en Asia emergía un competidor formidable que transformaría radicalmente el tablero geopolítico global.

Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, el mundo pareció quedar suspendido en un optimismo hegemónico. La tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia cobró fuerza, sugiriendo que la victoria de la democracia liberal y el capitalismo de mercado representaba el punto culminante de la evolución ideológica de la humanidad. Se creyó, con una mezcla de euforia y complacencia, que el modelo occidental había demostrado su superioridad definitiva, y que el camino hacia un futuro de paz, prosperidad y consenso global estaba ahora despejado. La ausencia de un rival ideológico o militar comparable a la URSS otorgó a Estados Unidos una posición de poder sin precedentes.

Este momento unipolar se tradujo en una dominación estadounidense que abarcaba lo militar, lo económico y lo cultural. Militarmente, EE. UU. se erigió como la única superpotencia, capaz de proyectar su fuerza globalmente sin contrapesos significativos, como se evidenció en la Guerra del Golfo.

Económicamente, Washington impulsó con vigor la globalización neoliberal a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y una OMC fortalecida, promoviendo la desre-

gulación, la privatización y la apertura de mercados. Culturalmente, la influencia de Hollywood, la música pop, las marcas globales y la cultura de consumo estadounidense se extendió por cada rincón del planeta, simbolizando un estilo de vida aspiracional y la «americanización» del mundo.

La hegemonía estadounidense durante las décadas de 1990 y 2000 se ejerció mediante la promoción de la democracia, la intervención en conflictos regionales bajo el manto de «policía mundial» y la expansión de una red de alianzas que consolidaron su liderazgo. Sin embargo, esta posición única también generó un sentimiento de *hubris*, una arrogancia que llevó a la creencia de que EE. UU. podía actuar unilateralmente sin necesidad de un amplio consenso internacional. Las intervenciones militares, a menudo justificadas por la difusión de la democracia, y la imposición de su modelo económico sin matices culturales o sociales, sembraron las semillas del resentimiento y la inestabilidad en diversas regiones.

A pesar del aparente triunfo, las grietas en la fachada del fin de la historia no tardaron en aparecer. La invasión de Irak en 2003, un conflicto costoso y prolongado sin una justificación clara de armas de destrucción masiva, expuso los límites del poder militar estadounidense y la futilidad de la imposición externa de la democracia.

La crisis financiera global de 2008, originada en el corazón del sistema capitalista estadounidense, reveló las vulnerabilidades estructurales del modelo neoliberal y minó la credibilidad del liderazgo económico de Washington. Estos eventos, junto con el ascenso del terrorismo global y la creciente multipolaridad, fueron las primeras señales de que el momento unipolar era, en efecto, un breve interludio.

Mientras Estados Unidos se deleitaba en su victoria pos-Guerra Fría, otras potencias se posicionaban silenciosamente. China, en particular, aprovechó este periodo para integrarse estratégicamente en la economía global, acumulando vastas reservas y modernizando su ejército sin desafiar abiertamente la hegemonía estadounidense. Europa, por su parte, avanzaba en su propia integración, buscando una voz más unificada en el es-

cenario mundial. La ilusión de una dominación americana permanente subestimó la resiliencia de la historia y la inevitable emergencia de nuevas dinámicas de poder, demostrando que el mundo es intrínsecamente multipolar y que el ascenso de una potencia no es la aniquilación de todas las demás.

La segunda revolución China: Deng Xiaoping y el capitalismo de Estado

El contexto prerreforma y el giro pragmático. Antes de la llegada de Deng Xiaoping al poder a finales de los años 70, China se encontraba en un estado de profunda crisis económica y social, producto de décadas de políticas erráticas como el Gran Salto Adelante y la devastadora Revolución Cultural. La agricultura estaba estancada, la industria era ineficiente y la población vivía en una pobreza generalizada. El legado de Mao Zedong había dejado un país ideológicamente férreo, pero económicamente atrasado y aislado del mundo.

Fue en este contexto que Deng Xiaoping, un veterano pragmático del Partido Comunista que había sido purgado dos veces, lanzó en 1978 las Cuatro Modernizaciones (agricultura, industria, defensa y ciencia/tecnología). Su famosa frase «no importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones» sintetizaba el enfoque utilitarista que priorizaba los resultados económicos sobre la ortodoxia ideológica, un giro radical para el comunismo chino.

Estas modernizaciones implicaron una serie de reformas audaces, comenzando por la descolectivización agrícola con el sistema de responsabilidad familiar, que devolvió incentivos a los campesinos y disparó la producción de alimentos. En el sector industrial se permitió la creación de pequeñas empresas y se introdujeron mecanismos de mercado. Para fomentar la innovación se priorizó la inversión en educación y se envió a miles de estudiantes al extranjero.

Deng también inició una cautelosa pero firme apertura al exterior. Se establecieron zonas económicas especiales en ciudades costeras como Shenzhen, Zhuhai, Xiamen y Shantou. Estas zonas, verdaderos laboratorios de capitalismo en suelo co-

munista, ofrecían exenciones fiscales, mano de obra barata e infraestructura para atraer inversión extranjera y fomentar la exportación. Fueron revolucionarias porque representaron una ruptura con el modelo autárquico maoísta, sirviendo como puentes para la integración de China en la economía global. Este proceso no estuvo exento de riesgos políticos, y Deng navegó la oposición conservadora dentro del partido con gran habilidad, consolidando su visión de un socialismo con características chinas.

El resultado y sus implicaciones globales

El «milagro» económico chino no tiene precedentes. En apenas cuatro décadas, China pasó de ser un país agrario empobrecido a la segunda economía mundial y un actor global indispensable. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema y se construyó la mayor clase media de la historia humana. Este crecimiento estuvo impulsado por una combinación de manufactura de exportación, inversión en infraestructura y una gradual liberalización de los mercados, todo bajo la supervisión estratégica del Partido Comunista.

La apertura a la inversión extranjera y la transferencia de tecnología fue crucial. Empresas occidentales acudieron a China en busca de menores costos de producción y un vasto mercado, lo que impulsó la modernización tecnológica y la capacidad productiva del país. Grandes ciudades como Shanghái y Pekín experimentaron una transformación urbana masiva, con millones de personas migrando del campo a la ciudad. Esto trajo consigo un cambio drástico en los estilos de vida, con un aumento en el consumo, el acceso a bienes y servicios antes impensables y una mejora en la calidad de vida general. Las reformas educativas también desempeñaron un papel fundamental al crear una fuerza laboral más capacitada y orientada a la innovación.

A diferencia de las reformas de la Perestroika soviética, que condujeron al colapso del sistema, el modelo chino logró un equilibrio precario: abrazó el capitalismo de mercado sin ceder el control político centralizado del Partido Comunista.

Esta «ingeniería social» permitió a China cosechar los beneficios de la globalización sin desestabilizar su estructura política. Sin embargo, este rápido desarrollo también tuvo sus costos: una creciente desigualdad social, una degradación ambiental severa y la persistencia de desafíos en derechos humanos.

Las reformas de Deng sentaron las bases para las ambiciones globales actuales de China. El país acumuló enormes reservas de divisas, modernizó su ejército y se convirtió en un líder en sectores como la tecnología 5G, la inteligencia artificial y las energías renovables. La visión de Deng no solo transformó a China, sino que reconfiguró el orden geopolítico mundial, preparando el escenario para la multipolaridad que desafiaría el momento unipolar estadounidense.

La Nueva Ruta de la Seda: ambición imperial china. La iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, representa la mayor inversión en infraestructura de la historia moderna. Con una proyección de más de un billón de dólares, busca reconstruir y expandir las antiguas rutas comerciales, conectando vastas regiones de Asia, África, Europa y América Latina a través de una intrincada red de infraestructuras terrestres y marítimas. Esta iniciativa se inspira en la histórica Ruta de la Seda, que facilitó el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente durante milenios, pero su alcance y ambición van mucho más allá, marcando un hito en la estrategia geopolítica china del siglo XXI.

Alcance global. Más de 150 países participan en proyectos de infraestructura financiados por China.

Poder geopolítico. Crea dependencias económicas que se traducen en influencia política estratégica.

Desafío a los EE. UU. Ofrece una alternativa al orden económico liderado por Washington desde 1945.

La BRI se estructura en dos componentes principales: el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda (terrestre) y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. El cinturón terrestre se enfoca en la construcción de autopistas, ferrocarriles, oleoductos y gasoductos a través de Asia Central, Rusia y Europa, revitalizando

conexiones continentales. La ruta marítima, por su parte, prioriza la expansión y modernización de puertos marítimos y otras infraestructuras costeras a lo largo de los océanos Índico y Pacífico, creando una vasta red que facilita el transporte de mercancías y el acceso a nuevos mercados. Ejemplos prominentes incluyen el puerto de Gwadar en Pakistán, el puerto del Pireo en Grecia, el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung en Indonesia y el ferrocarril Adís Abeba-Yibuti en África.

La financiación de estos megaproyectos proviene principalmente de bancos estatales chinos, como el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China, así como del Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), una institución multilateral liderada por China.

Este modelo de financiación, que a menudo implica préstamos a largo plazo a los países participantes, ha sido objeto de debate y controversia, en particular por la llamada «diplomacia de la trampa de la deuda». Un caso emblemático es el puerto de Hambantota en Sri Lanka, que, tras no poder cumplir con los pagos de su deuda con China, tuvo que ceder su control a una empresa china por 99 años, generando preocupaciones sobre la soberanía y la influencia china.

Más allá de la infraestructura física, la BRI es una herramienta fundamental para la expansión del «poder blando» y la influencia cultural de China. A través de intercambios educativos, medios de comunicación y la promoción de la cultura china, Pekín busca consolidar su imagen como un socio confiable y un modelo de desarrollo alternativo al occidental. Esto se alinea con la visión de Xi Jinping del «sueño chino» y el «rejuvenecimiento de la nación», proyectando a China como una potencia global líder.

Las potencias occidentales y otros actores regionales han reaccionado con una mezcla de cautela y preocupación. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han criticado la falta de transparencia, los estándares ambientales y laborales, y las posibles implicaciones geopolíticas de la BRI. Han lanzado iniciativas competitivas, como el plan Build Back Better World de EE. UU.

y el Global Gateway de la UE, buscando ofrecer alternativas de financiación y desarrollo de infraestructura. También existen serias preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de muchos proyectos de la BRI, que a menudo se llevan a cabo en regiones sensibles ecológicamente y pueden desplazar a comunidades locales sin una compensación adecuada.

Además, la naturaleza dual de algunas infraestructuras (puertos o aeropuertos que pueden tener usos tanto civiles como militares) ha generado inquietud sobre las posibles implicaciones estratégicas y militares de la BRI, especialmente en puntos clave del comercio marítimo global.

La pandemia de COVID-19 y los recientes desafíos económicos globales han afectado la implementación de la BRI, con retrasos, renegociaciones de deudas y un mayor escrutinio sobre la viabilidad y sostenibilidad de algunos proyectos. A pesar de estos obstáculos, la Iniciativa de la Franja y la Ruta sigue siendo la piedra angular de la política exterior y económica de China, un ambicioso proyecto que busca reconfigurar el orden mundial y solidificar la posición de China como una potencia hegemónica global.

La gran paradoja: del libre comercio al proteccionismo

América primero. La ironía histórica es mordaz: Estados Unidos, arquitecto y defensor del libre comercio durante ocho décadas, se convierte bajo Trump en su principal adversario. Los aranceles, antes considerados reliquias del pasado económico, resurgen como instrumentos centrales de la política exterior.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo emergió como la potencia hegemónica, sino que también diseñó y lideró un sistema económico global basado en los principios del libre comercio. Instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que luego se transformaría en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), fueron pilares fundamentales de esta visión.

Durante décadas, este marco permitió a las empresas estadou-

nidenses acceder a mercados globales, asegurar cadenas de suministro eficientes y fomentar la innovación a través de una competencia abierta, contribuyendo a un crecimiento económico sostenido y a la expansión de la influencia política y cultural de Washington.

Sin embargo, a principios del siglo XXI, una serie de factores económicos y políticos comenzaron a erosionar este consenso. La globalización, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también trajo consigo la deslocalización de industrias, la pérdida de empleos manufactureros en regiones clave de EE. UU. y un aumento en el déficit comercial, especialmente con el ascenso de China como potencia económica. Estos desafíos alimentaron un creciente resentimiento entre segmentos de la población que se sentían dejados atrás, allanando el camino para discursos populistas que culpaban al libre comercio de los males económicos internos.

Fue en este contexto que la administración Trump lanzó su programa «América primero», marcando un drástico alejamiento de la ortodoxia económica republicana y del multilateralismo global. Se impusieron aranceles masivos sobre las importaciones de acero y aluminio, afectando a aliados tradicionales como la Unión Europea, Canadá y México. Posteriormente, se desató una guerra comercial a gran escala con China, gravando miles de millones de dólares en productos chinos, desde tecnología hasta bienes de consumo.

Estas medidas, presentadas como un medio para proteger a las industrias nacionales y reequilibrar la balanza comercial, representaron una ruptura frontal con la ideología de libre mercado que el Partido Republicano había defendido históricamente, abrazando en su lugar una forma de nacionalismo económico.

El impacto de estas políticas fue complejo y a menudo contraproducente. Los consumidores estadounidenses se enfrentaron a precios más altos en una variedad de productos, ya que los aranceles eran, en efecto, impuestos pagados por los importadores y, en última instancia, por los compradores. Las empresas estadounidenses vieron interrumpidas sus cadenas de

suministro y enfrentaron costos adicionales, mientras que los agricultores, particularmente dependientes de las exportaciones, sufrieron duramente por las represalias arancelarias de países como China.

La guerra comercial generó incertidumbre económica y desaceleró el crecimiento global, con otros países, como la Unión Europea y China, respondiendo con sus propios aranceles sobre productos estadounidenses, en un ciclo de ojo por ojo.

La contradicción ideológica entre el capitalismo de libre mercado y el proteccionismo se hizo evidente. Mientras el capitalismo aboga por la competencia, la eficiencia y la asignación óptima de recursos a través de mercados abiertos, el proteccionismo busca blindar industrias nacionales a expensas de la competencia externa, a menudo a un costo más alto para el consumidor.

La promesa de que «América primero» revitalizaría la manufactura y reduciría los déficits comerciales tuvo resultados mixtos. Aunque algunas industrias pudieron ver un alivio temporal, el déficit comercial no se redujo significativamente y la reindustrialización prometida no se materializó a la escala esperada, en parte debido a la complejidad de las cadenas de suministro globales y a la automatización.

Las consecuencias a largo plazo para el liderazgo global y la credibilidad de Estados Unidos son profundas. Al erosionar las instituciones multilaterales que había ayudado a construir y al adoptar una postura transaccional y unilateral, Washington socavó la confianza de sus aliados y abrió espacios para que otras potencias, como China, intentaran reconfigurar el orden global.

Esta desviación del libre comercio también afectó a numerosos países en desarrollo que habían basado sus estrategias de crecimiento en el acceso a los mercados estadounidenses, encontrándose de repente en un paisaje comercial impredecible y potencialmente hostil, con sus propias economías vulnerables a las decisiones arancelarias de las grandes potencias. La gran paradoja no es solo un capítulo en la política comercial de EE. UU., sino un sismógrafo de los cambios tectónicos en la geopolítica mundial.

Aranceles como armas: la nueva diplomacia coercitiva

Tradicionalmente, los aranceles han sido herramientas económicas para generar ingresos, proteger industrias nacientes o como medidas defensivas dentro de un marco de normas comerciales establecidas. Sin embargo, bajo la administración Trump esta función se transformó radicalmente. Los aranceles dejaron de ser meros instrumentos de política comercial para convertirse en una forma de diplomacia coercitiva y armas económicas, imponiéndose no solo a adversarios como China, sino también a aliados históricos, vecinos fronterizos y socios comerciales tradicionales. Esta estrategia busca transformar las relaciones económicas internacionales en campos de batalla donde la lealtad y las concesiones políticas se extraen a través de la amenaza y la imposición de tarifas.

Objetivos del proteccionismo trumpista:

- Revertir déficits comerciales mediante la imposición unilateral de gravámenes.
- Forzar la relocalización de las cadenas productivas en suelo estadounidense.
- Presionar a aliados para aumentar gastos militares y reducir su autonomía estratégica.
- Debilitar instituciones multilaterales que limitan la soberanía nacional percibida.
- Obtener concesiones políticas en áreas no comerciales, como la inmigración.

La implementación de estos aranceles se llevó a cabo con una agresividad sin precedentes y una justificación a menudo basada en la seguridad nacional, incluso cuando se aplicaban a productos de socios cercanos. Se impusieron aranceles al acero y aluminio importados, afectando directamente a la Unión Europea, Canadá y México. Posteriormente, la guerra comercial con China escaló, gravando miles de millones de dólares en productos, desde componentes tecnológicos hasta bienes de consumo, con el objetivo declarado de frenar las prácticas comerciales desleales y el robo de propiedad intelectual.

Lo que distinguió esta aproximación fue la desvinculación de los aranceles de las meras disputas comerciales para vincularlos directamente con cuestiones políticas más amplias. Un ejemplo paradigmático fue la amenaza de imponer aranceles a todos los productos mexicanos si no se tomaban medidas más estrictas en la frontera para frenar la migración ilegal, demostrando cómo los instrumentos económicos se transformaron en palancas para negociaciones no comerciales. De manera similar, la presión arancelaria sobre la Unión Europea y Canadá estuvo a menudo acompañada de llamados a aumentar sus contribuciones a la OTAN o a alinearse con ciertas posturas geopolíticas estadounidenses.

El impacto psicológico y diplomático de estas amenazas impredecibles fue profundo. Al romper con la estabilidad y las reglas establecidas del sistema comercial multilateral, la administración Trump introdujo un elemento de incertidumbre radical. Los aliados tradicionales se vieron obligados a reevaluar sus relaciones con Washington, generando desconfianza y erosión de la solidaridad en un momento de crecientes desafíos globales.

Esta táctica se alejó drásticamente de la diplomacia tradicional, basada en el consenso, la reciprocidad y la resolución de conflictos a través de foros multilaterales como la OMC, optando en cambio por una negociación bilateral y transaccional donde el poder económico unilateral era la principal moneda de cambio.

Como resultado, otros países comenzaron a adaptar sus estrategias. China y la Unión Europea respondieron con sus propios aranceles de represalia, buscando objetivos políticos y económicos específicos. Por ejemplo, China apuntó a productos agrícolas de estados republicanos clave, buscando influir en la política interna estadounidense.

La UE, por su parte, diversificó sus relaciones comerciales y reforzó los lazos con otras economías, como Japón, mientras trabajaba en fortalecer su propia autonomía estratégica. Estas acciones no solo agravaron las tensiones comerciales, sino que también sembraron dudas sobre la fiabilidad de Estados

Unidos como socio comercial y líder del sistema global.

A nivel doméstico, la política arancelaria de Trump capitalizó el resentimiento de los trabajadores manufactureros y las regiones golpeadas por la desindustrialización, apelando a un fuerte nacionalismo económico. Aunque los datos mostraron que los déficits comerciales persistieron y que los consumidores y agricultores estadounidenses a menudo sufrieron las consecuencias de los aranceles de represalia, el discurso de «América primero» resonó en una parte de su base electoral. Sin embargo, la promesa de una reindustrialización masiva no se ha materializado en la escala esperada, y las cadenas de suministro globales han demostrado ser demasiado complejas para una simple relocalización.

El precedente establecido por esta diplomacia coercitiva es significativo. La weaponización de los aranceles ha abierto la puerta a que otras potencias consideren herramientas económicas similares en futuras disputas, socavando aún más la arquitectura del libre comercio global que Estados Unidos ayudó a construir. La erosión de la confianza en las alianzas y el debilitamiento de las instituciones multilaterales pueden tener ramificaciones a largo plazo para la estabilidad y la cooperación internacional, redefiniendo las reglas del juego en las relaciones globales por décadas.

Aliados en la mira: Europa y la frontera sur

Europa atlántica. La relación transatlántica, forjada tras la Segunda Guerra Mundial y cimentada en valores compartidos, cooperación económica y la alianza de la OTAN, ha sido históricamente un pilar de la política exterior estadounidense. Sin embargo, bajo la administración Trump esta relación se ha sometido a una tensión sin precedentes.

El presidente ha cuestionado abiertamente la pertinencia de la OTAN, acusando a los aliados europeos de no cumplir con sus compromisos de gasto militar y sugiriendo que Estados Unidos podría no acudir en su defensa en caso de ataque. Estas declaraciones han minado la confianza en la seguridad colectiva y la credibilidad del artículo 5 del tratado de la OTAN.

Además, Europa ha sido blanco de amenazas arancelarias significativas, especialmente en el sector automotriz, con el argumento de que las importaciones de vehículos alemanes representaban una amenaza para la seguridad nacional. Esto, sumado a los aranceles sobre el acero y el aluminio, que ha generado una profunda preocupación y represalias por parte de la Unión Europea.

La exigencia de reciprocidad comercial se ha traducido en una política unilateral que ignora las estructuras comerciales existentes y busca renegociaciones bajo amenaza. Esta aproximación no solo ha impactado a la economía europea, sino que también ha sembrado dudas sobre el futuro de la unidad europea y la capacidad de la UE para actuar como un bloque cohesionado frente a la presión externa. La percepción de ser tratados como adversarios comerciales, más que como socios estratégicos, han generado un profundo malestar y ha llevado a la UE a buscar mayor autonomía estratégica y diversificar sus alianzas comerciales.

México y Canadá. Para México y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) había definido la integración económica regional durante más de dos décadas. Trump, sin embargo, lo calificó repetidamente como el «peor acuerdo comercial de la historia» y amenazó con retirarse de él, forzando su renegociación. El resultado fue el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que introdujo cambios significativos, incluyendo reglas de origen más estrictas para el sector automotriz, nuevas cláusulas laborales y ambientales, y mecanismos de resolución de disputas modificados. La negociación estuvo marcada por una constante presión y amenazas, en lugar de un diálogo constructivo entre vecinos.

La situación de México fue particularmente compleja, ya que la administración Trump vinculó explícitamente las tarifas comerciales a la política migratoria. La amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si no se detenía el flujo de migrantes en la frontera sur representó una ruptura sin precedentes de las normas diplomáticas, utilizando el co-

mercio como una palanca para obtener concesiones en un área no comercial. Esta táctica no solo sometió a México a una enorme presión económica, sino que también socavó la soberanía y la dignidad del país.

Canadá, por su parte, enfrentó desafíos relacionados con sus sectores lácteo y maderero, así como la imposición de aranceles al acero y aluminio. La histórica relación de confianza entre los dos países se vio erosionada por la retórica agresiva y las demandas de Washington. Estas acciones demostraron que la cercanía geográfica y los lazos históricos ya no garantizan un trato preferencial, sino que, por el contrario, podían ser utilizados como puntos de presión en una estrategia de «América primero». Tanto México como Canadá se han visto obligados a adoptar una postura defensiva, buscando preservar sus intereses nacionales mientras lidiaban con la incertidumbre generada por su principal socio comercial.

La estrategia de utilizar aranceles como «armas» contra aliados tradicionales ha tenido un profundo impacto psicológico y geopolítico. Al tratar a socios de larga data como adversarios comerciales y de seguridad, la administración Trump ha enviado un mensaje desestabilizador a la comunidad internacional. La erosión de la confianza no es un fenómeno trivial; es la base sobre la que se construyen las alianzas y la cooperación global. Los aliados europeos, que habían confiado en Estados Unidos como garante de la seguridad transatlántica y líder del orden liberal internacional, se han visto obligados a reevaluar sus propias capacidades defensivas y a buscar nuevas vías para asegurar sus intereses.

Esta postura unilateral ha debilitado notablemente la cohesión de la OTAN, la alianza militar más exitosa de la historia. Las críticas constantes a los miembros europeos por sus contribuciones a la defensa, y la ambigüedad sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva, han generado divisiones internas en un momento en que la agresión rusa y la inestabilidad global demandan un frente unido. La incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la seguridad europea incentivó a algunos países a considerar alternativas o a desvin-

cularse de la estrategia occidental, creando grietas que podrían ser explotadas por potencias revisionistas, entre ellas China.

A largo plazo, el daño a las estructuras de confianza y a las alianzas tradicionales puede ser incalculable. La diplomacia coercitiva sentó un precedente peligroso, normalizando el uso de herramientas económicas como instrumentos de presión política en detrimento del diálogo y el consenso.

En un sistema internacional cada vez más multipolar y competitivo, la desunión del bloque occidental beneficia directamente a actores como China y Rusia. Estas potencias no solo ganan espacio para expandir su influencia en el ámbito económico y geopolítico, sino que también capitalizan la percepción de un Occidente fragmentado y con alianzas debilitadas, lo que les permite avanzar en sus propios intereses sin la contrapresión de un frente unido. La redefinición de las relaciones con los aliados históricos ha sembrado una incertidumbre duradera sobre la dirección futura de la política exterior estadounidense y la estabilidad del orden global.

El ascenso de la derecha radical global

El trumpismo no es un fenómeno aislado, sino expresión de una ola global de nacionalismo conservador que crece en los cinco continentes. Desde Bolsonaro en Brasil hasta Meloni en Italia, desde Modi en India hasta Milei en Argentina, líderes de derecha radical redefinen el paisaje político contemporáneo, impulsados por una compleja interacción de ansiedades económicas, reacciones culturales y la proliferación de nuevas plataformas mediáticas.

Conservadurismo cultural. Apelación a un pasado idealizado, resistencia al cambio social, defensa de «valores tradicionales» y críticas a la «ideología de género» o el «wokismo».

Soberanía económica. Rechazo a instituciones supranacionales, proteccionismo comercial, control fronterizo estricto y políticas antiinmigración como pilares.

Retórica populista. Confrontación élites-pueblo, nacionalismo identitario, rechazo a la «corrección política» y demonización de adversarios políticos.

Estos movimientos no emergen en un vacío, sino que se nutren de profundas corrientes de descontento. La ansiedad económica, producto de la globalización que dejó a muchos «perdedores» tras la desindustrialización y el aumento de la desigualdad, genera un terreno fértil para promesas de protección y restauración de la prosperidad nacional.

Simultáneamente, un marcado «contragolpe cultural» rechaza lo que perciben como una erosión de los valores tradicionales, impulsado por debates sobre inmigración, derechos de las minorías e identidades de género. Las redes sociales actúan como un potente amplificador, creando cámaras de eco que validan narrativas y movilizan a seguidores, a menudo eludiendo los filtros de los medios de comunicación tradicionales.

Las figuras que encarnan esta ola son diversas, pero comparten rasgos comunes. Jair Bolsonaro en Brasil capitalizó el hartazgo con la corrupción y la violencia, promoviendo una agenda ultraconservadora y en favor de las armas, a menudo con retórica despectiva hacia las instituciones democráticas y las minorías. En Italia, Giorgia Meloni llevó al poder a Fratelli d'Italia, un partido con raíces posfascistas, bajo la consigna de «Dios, patria y familia», adoptando una postura dura contra la inmigración y el globalismo. Narendra Modi en India ha consolidado el poder del BJP con una agenda de nacionalismo hindú (Hindutva), marginando a las minorías religiosas y redefiniendo la identidad nacional del país. Por último, Javier Milei en Argentina, un autoproclamado anarco-capitalista, irrumpió con un discurso radical anticasta y propuestas de choque económico, desafiando el consenso político tradicional.

Más allá de estos casos prominentes, la derecha radical ha ganado tracción en otras regiones. En Europa, Viktor Orbán en Hungría ha construido un «Estado iliberal» desafiando las normas de la Unión Europea y promoviendo políticas nacionalistas y antiinmigración. En Francia, Marine Le Pen y su Reagrupamiento Nacional continúan siendo una fuerza electoral significativa con una plataforma soberanista y antiinmigración. En Alemania, el partido Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado un crecimiento constante, capitalizando el descontento

con la política migratoria y la élite política. Estos movimientos, aunque con matices locales, comparten la táctica de presentarse como la voz del pueblo contra una élite corrupta y globalista, apelando a la soberanía nacional y la identidad cultural.

Un factor crítico en su éxito es el uso estratégico de las redes sociales y los medios alternativos. Estas plataformas permiten a los líderes comunicarse directamente con sus bases, sobrepasando a menudo a los medios de comunicación tradicionales, a los que tachan de «sesgados» o «enemigos del pueblo». Esto facilita la difusión rápida de mensajes, la construcción de comunidades en línea y la amplificación de narrativas, a menudo con elementos de desinformación o teorías conspirativas, que refuerzan la lealtad de sus seguidores y polarizan el debate público.

El auge de la derecha radical global plantea serios desafíos a la democracia liberal y a las instituciones internacionales. Estos movimientos suelen manifestar tendencias autoritarias, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos de las minorías. A menudo, buscan centralizar el poder, debilitar los contrapesos democráticos y reprimir la disidencia. Internacionalmente, cuestionan el multilateralismo y las organizaciones globales, buscando redefinir el orden mundial en términos de soberanías nacionales fuertes y competencia geopolítica. La legitimación mutua entre estos líderes, que se alaban y apoyan a través de eventos y redes globales, refuerza su visión compartida de un futuro nacional-conservador.

Las implicaciones son profundas. Se observa un retroceso en la protección de los derechos humanos, especialmente para las minorías y los grupos vulnerables. Las normas democráticas, como la alternancia pacífica del poder, el respeto por las instituciones y el diálogo cívico, son constantemente puestas a prueba o socavadas. La estabilidad global se ve amenazada por el resurgimiento de nacionalismos agresivos y la desconfianza entre naciones. La consolidación de estas fuerzas sugiere un futuro en el que los pilares del orden liberal internacional continúan siendo desafiados, con consecuencias impredecibles para la convivencia global y los principios democráticos.

Democracia en riesgo: derechos humanos bajo presión. El auge de la derecha radical plantea interrogantes fundamentales sobre la supervivencia de las instituciones democráticas liberales y la universalidad de los derechos humanos en el siglo XXI.

La desvalorización de derechos fundamentales y el retroceso democrático no suelen ocurrir mediante golpes dramáticos o rupturas constitucionales súbitas, sino a través de una erosión gradual y sistémica, a menudo bajo la apariencia de legitimidad legal o electoral. Este proceso insidioso implica la restricción progresiva de las libertades, el debilitamiento de los controles y equilibrios institucionales, la estigmatización de las minorías y la criminalización de la disidencia. Paradójicamente, estos movimientos a menudo consolidan su poder manteniendo fachadas democráticas y presentándose como defensores de la voluntad popular, redefiniendo el «pueblo» de manera excluyente y dismantelando los mecanismos que protegerían a quienes no forman parte de su base.

Libertad de expresión. Ataques sistemáticos a medios independientes, etiquetados como «enemigos del pueblo» o propagadores de noticias falsas, mediante leyes de difamación abusivas, presión económica a través de la publicidad estatal, y en casos extremos, violencia física e intimidación contra periodistas. Países como Turquía, Hungría e India han visto una drástica reducción del espacio para el periodismo crítico.

Independencia judicial. Nombramientos partidistas de jueces, cuestionamiento de sentencias adversas, purgas de magistrados que no se alinean con el Poder Ejecutivo, y presión o intimidación directa. En Polonia y Hungría se han reformado los sistemas judiciales para subordinarlos al gobierno, mientras que, en Brasil, la politización de la justicia ha sido un tema recurrente.

Derechos de minorías. Legislación discriminatoria y políticas de exclusión contra migrantes, refugiados, comunidades LGBTQ+, minorías religiosas y étnicas. Desde las leyes anti-LGBTQ+ en Hungría, las políticas migratorias restrictivas en varios países europeos, hasta la retórica y las acciones que marginalizan a los musulmanes en India, estos grupos son usa-

dos a menudo como chivos expiatorios para consolidar una base nacionalista.

El concepto de «democracia iliberal» emerge como una justificación clave para estas acciones. Líderes como Viktor Orbán en Hungría argumentan que, mientras mantengan la legitimidad electoral, pueden erosionar los derechos individuales y las instituciones liberales en nombre de la soberanía nacional y los valores tradicionales. Este modelo permite a los gobiernos mantener una apariencia de democracia, mientras desmantelan sistemáticamente los contrapesos que limitarían su poder, normalizando prácticas autoritarias dentro de un marco supuestamente democrático.

Esta dinámica debilita significativamente los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los estados cuestionan la autoridad de organismos como la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas o los tribunales regionales, acusándolos de injerencia en asuntos internos o de promover agendas ideológicas. La falta de cumplimiento de las sentencias y recomendaciones internacionales, así como la retirada de tratados, merman la capacidad de estos organismos para proteger a los más vulnerables y mantener la rendición de cuentas global.

La sociedad civil, tradicionalmente un baluarte contra el autoritarismo, también sufre bajo esta presión. Gobiernos en países como Rusia, Egipto o incluso democracias consolidadas, usan leyes restrictivas para dificultar la financiación y operación de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil, etiquetándolos como «agentes extranjeros» o «desestabilizadores». Esto silencia voces críticas y reduce la capacidad de monitoreo y defensa de los derechos humanos.

Además, la tecnología juega un papel ambivalente. Si bien puede ser una herramienta para la movilización y la resistencia, también se convierte en un instrumento de vigilancia masiva, control social y difusión de desinformación. Las redes sociales, en particular, se utilizan para crear cámaras de eco, polarizar el debate, y atacar sistemáticamente a la oposición y a los críticos, amplificando la retórica populista y erosionando la confianza en las fuentes de información fiables. El uso de algorit-

mos y el *big data* permite una manipulación más sofisticada de la opinión pública, facilitando la erosión democrática.

Las consecuencias a largo plazo son devastadoras para el *shock* y el orden constitucional. Al socavar la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de expresión, estas dinámicas corroen los cimientos mismos de la democracia liberal. El resultado es una mayor inestabilidad política, la polarización social, la impunidad por abusos de poder y, en última instancia, un retroceso hacia formas de gobierno menos inclusivas y más autoritarias, con un impacto profundo e impredecible en la paz y la seguridad globales.

Migración forzada: el colonialismo inverso. Los «abandonados de la tierra», los excluidos de sus propios países por violencia, pobreza, y la creciente crisis climática, buscan refugio en las antiguas metrópolis coloniales. Es una justicia histórica perversa: los descendientes de quienes fueron despojados de sus recursos naturales y humanos, con fronteras artificiales impuestas y economías deformadas por siglos de explotación, ahora tocan las puertas de quienes se enriquecieron con ese despojo. La migración masiva contemporánea es, en gran medida, la manifestación visible y dolorosa de un sistema global forjado por el imperialismo, donde las condiciones de subdesarrollo, inestabilidad y vulnerabilidad climática son legados directos del pasado colonial.

Las nuevas rutas del éxodo:

- África hacia Europa a través del Mediterráneo: Millones de personas huyen de conflictos en el Sahel, la inestabilidad en Libia o la pobreza endémica en el cuerno de África, en un viaje extremadamente peligroso. Se estima que decenas de miles han muerto ahogados o desaparecidos intentando cruzar, convirtiendo el Mediterráneo en un vasto cementerio.
- Centroamérica hacia Estados Unidos por México: Caravanas y grupos de migrantes, incluyendo familias y menores no acompañados, escapan de la violencia de pandillas, la corrupción, la pobreza extrema y los desastres naturales

intensificados por el cambio climático en países como Honduras, El Salvador y Guatemala.

- Medio Oriente hacia Europa por Turquía: Las guerras en Siria, Irak y Afganistán, así como la represión y la pobreza en otros Estados, han forzado a millones a buscar asilo, muchos de ellos a través de rutas marítimas y terrestres controladas por traficantes.
- Sur de Asia hacia el golfo Pérsico y Occidente: Trabajadores migrantes de Bangladesh, Pakistán, India, Nepal y Filipinas son atraídos por la demanda de mano de obra barata, a menudo bajo condiciones de explotación, o buscan asilo político y económico en Europa, Norteamérica y Australia.

Pero las puertas se cierran. Muros físicos y legales proliferan precisamente cuando la crisis migratoria alcanza proporciones históricas. La xenofobia se normaliza en el discurso político *mainstream*, con los antiguos colonizadores erigiendo barreras contra quienes buscan refugio, olvidando convenientemente el origen de su propia riqueza y estabilidad.

Esta dinámica de «colonialismo inverso» se manifiesta en la brutal militarización de las fronteras. En el Mediterráneo, las políticas de *pushback* y la criminalización de las operaciones de rescate humanitario han incrementado exponencialmente el número de muertes, mientras que en la frontera entre EE. UU. y México, los muros físicos, las detenciones masivas y las separaciones familiares se han convertido en la norma. Estas políticas no solo violan el derecho internacional en materia de asilo y refugio, sino que también deshumanizan a quienes huyen, transformándolos de víctimas a amenazas en el imaginario colectivo.

El cambio climático, un problema de responsabilidad desproporcionada de las naciones industrializadas, es hoy uno de los principales motores de desplazamiento forzado. La desertificación en el Sahel, el aumento del nivel del mar en Bangladesh y el Caribe, y los fenómenos meteorológicos extremos en Centroamérica, desplazan a millones de personas que pierden sus medios de vida y sus hogares. Irónicamente, son las po-

blaciones que menos contribuyeron al problema quienes sufren las peores consecuencias, viéndose obligadas a migrar hacia los países más responsables de la crisis climática.

La retórica antiinmigrante, impulsada por partidos de ultraderecha, convierte a los migrantes en chivos expiatorios para problemas económicos y sociales complejos. Se les acusa de robar empleos, agotar recursos y desvirtuar la identidad nacional, a pesar de que numerosos estudios demuestran la contribución económica positiva de los migrantes al crecimiento y la innovación. Esta narrativa desvía la atención de las fallas sistémicas internas y fomenta una división que erosiona la cohesión social, manipulando el miedo para ganar poder político.

Al dismantelar el derecho internacional humanitario y las convenciones sobre refugiados, las naciones ricas socavan los cimientos mismos de un orden global basado en los principios de la dignidad humana. La negativa a reconocer la migración como una consecuencia directa de siglos de extracción de recursos, conflictos geopolíticos e injusticia económica –todos ellos legados coloniales–, no solo es una profunda hipocresía, sino una condena moral. La incapacidad de abordar esta crisis con humanidad y justicia no solo es una traición a los valores universales, sino que siembra las semillas de futuras inestabilidades en un mundo cada vez más interconectado.

De la geopolítica de la esperanza a la distopía global

¿El fin de la utopía? Durante años alentamos una geopolítica de la esperanza basada en la creencia en que el progreso tecnológico, la integración económica y la difusión de valores democráticos conducirían inevitablemente hacia un mundo más próspero, justo y pacífico. El siglo XXI desmorona esa narrativa optimista.

Estamos ingresando al segundo cuarto del siglo XXI no con la utopía prometida, sino con una distopía materializada: crisis climática acelerada, desigualdad extrema, erosión democrática, nacionalismos confrontados, tecnologías de vigilancia omnipresentes. La promesa de un orden global basado en reglas da paso a la ley del más fuerte.

Tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se gestó un optimismo desbordante. Pensadores como Francis Fukuyama proclamaron el fin de la historia, argumentando que la democracia liberal y la economía de mercado habían triunfado definitivamente.

La teoría de la paz democrática sugería que las democracias no se harían la guerra entre sí, y la globalización, impulsada por la interconexión digital y el libre comercio, prometía un flujo irrestricto de bienes, ideas y capitales que elevaría a todos. Era una época de confianza en la convergencia de sistemas políticos y económicos hacia un modelo universalmente aceptado, donde la colaboración internacional sería la norma y los conflictos, meras anomalías.

Sin embargo, esa visión idílica ha sido pulverizada. La crisis climática, lejos de ser una amenaza lejana, se manifiesta con una virulencia alarmante: olas de calor récord, incendios forestales incontrolables, sequías prolongadas y eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y devastadores. Los «puntos de inflexión» climáticos, antes hipotéticos, parecen estar peligrosamente cerca, amenazando con cambios irreversibles que la cooperación internacional, fragmentada y priorizando intereses nacionales a corto plazo, ha sido incapaz de frenar. Los acuerdos se incumplen, las promesas se diluyen y la inacción colectiva pavimenta el camino hacia un futuro incierto.

Paralelamente, la desigualdad extrema ha alcanzado cotas obscenas. Mientras una ínfima minoría acumula una riqueza sin precedentes —estadísticas revelan que los diez hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que el 40 % más pobre—, miles de millones luchan por sobrevivir. La movilidad social se ha estancado en muchas regiones, y la brecha entre los superricos y el resto del mundo no solo es moralmente indefendible, sino que desestabiliza a las sociedades. Esta disparidad alimenta el resentimiento, la polarización y la sensación de que el sistema está amañado, socavando la cohesión social a escala global.

La erosión democrática es otra sombra inquietante. Desde el auge de regímenes autoritarios encubiertos que mani-

pulan elecciones y coartan libertades, hasta el debilitamiento de las instituciones democráticas en países consolidados, la promesa de la democracia universal se tambalea. El populismo autoritario capitaliza el descontento, promoviendo la desinformación y el desprecio por los hechos, mientras que los derechos civiles y políticos son recortados bajo pretextos de seguridad o eficiencia. En este contexto, los nacionalismos confrontados resurgen con fuerza, avivando conflictos étnicos y territoriales, redefiniendo fronteras y amenazando la paz mundial con retóricas de exclusión y superioridad.

La tecnología, que prometió ser la herramienta definitiva para la liberación y la conexión global, se ha convertido paradójicamente en un motor de control y vigilancia. Sistemas de reconocimiento facial, monitoreo masivo de redes sociales, puntuaciones de crédito social y la explotación algorítmica de nuestros datos personales son solo algunas manifestaciones de cómo la innovación digital ha sido cooptada para moldear comportamientos y limitar la disidencia. La ubicuidad de los dispositivos conectados nos expone a una vigilancia constante, difuminando las líneas entre el espacio público y el privado, y transformando a los ciudadanos en sujetos de un experimento global de control social y comercial.

Las instituciones internacionales, creadas para gestionar desafíos globales como las pandemias, el cambio climático y los conflictos, se muestran ineficaces y paralizadas por el veto y los intereses particulares de las grandes potencias. El «orden basado en reglas» que debía regir la conducta entre naciones ha sido desmantelado por la ley del más fuerte, donde el poder militar y económico dicta las condiciones, y el multilateralismo cede ante un unilateralismo agresivo y una política de bloques resurgente. Esto deja a la humanidad sin mecanismos robustos para enfrentar los problemas que trascienden las fronteras nacionales.

La pandemia de COVID-19 no solo expuso estas fisuras, sino que las aceleró. Reveló la fragilidad de los sistemas de salud, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, la profundidad de la desigualdad digital y la rapidez con la que

los gobiernos pueden implementar medidas de control que restringen las libertades civiles. La crisis sanitaria se convirtió en un catalizador para la distopía, intensificando el miedo, la polarización y la desconfianza en las instituciones y en la propia ciencia.

Vivir en esta realidad distópica tiene un profundo impacto psicológico y social. La ansiedad climática, el agotamiento por la sobreexposición a noticias negativas, la fragmentación de la verdad y la erosión de la confianza en el futuro generan una sensación de desesperanza. La fe en el progreso como una fuerza imparable se ha desvanecido, reemplazada por un fatalismo creciente y la percepción de que la humanidad avanza hacia un precipicio. Las generaciones más jóvenes, en particular, sienten el peso de esta promesa rota, heredando un mundo al borde de múltiples colapsos, con pocas expectativas de que las cosas mejoren fundamentalmente.

La pregunta final es si existe un camino de regreso a la esperanza o si esta es la nueva normalidad. Las respuestas son esquivas. Reconocer la profundidad de estos desafíos es el primer paso, pero la acción colectiva y un cambio radical de paradigma parecen cada vez más lejanos. La geopolítica de la esperanza ha dado paso a una realidad cruda, y la humanidad se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre la resignación y la urgente necesidad de reimaginar un futuro diferente, antes de que sea demasiado tarde.

La pregunta fundacional: ¿China puede imponerse a los Estados Unidos?

Fortalezas chinas:

- Economía de escala sin precedentes y dominio manufacturero: China es la segunda economía más grande del mundo por el producto interno bruto (PIB) nominal y la primera por paridad de poder adquisitivo (PPA). Es el «taller del mundo», produciendo una vasta gama de bienes de consumo e industriales. Su inmensa base manufacturera le otorga eficiencia y resiliencia en las cadenas de suministro globales.

- Liderazgo en tecnologías emergentes: China ha invertido masivamente en investigación y desarrollo (I+D) y es líder en áreas como la tecnología 5G (con empresas como Huawei), inteligencia artificial (especialmente en reconocimiento facial y ciudades inteligentes), computación cuántica, y vehículos eléctricos (marcas como BYD y Nio dominan el mercado interno y expanden su presencia global).
- Inversión masiva en infraestructura global (Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI): La BRI ha financiado y construido puertos, carreteras, ferrocarriles y redes energéticas en más de 100 países de Asia, África, Europa y América Latina, expandiendo la influencia económica y geopolítica de China, asegurando rutas comerciales y acceso a recursos.
- Modelo de gobernanza centralizada y planificación a largo plazo: El Partido Comunista Chino puede implementar políticas industriales a décadas vista, ejecutar megaproyectos de infraestructura y movilizar recursos a una escala y velocidad que los sistemas democráticos, sujetos a ciclos electorales, a menudo no pueden igualar. Esto facilita el desarrollo estratégico en sectores clave.
- Enorme mercado interno como arma de negociación: Con más de 1400 millones de consumidores, el acceso al mercado chino es vital para muchas corporaciones globales. China utiliza este poder para presionar a empresas extranjeras a cumplir con sus regulaciones, transferir tecnología o alinear sus operaciones con los intereses estratégicos de Pekín.

Vulnerabilidades del modelo chino:

- Dependencia de exportaciones y tecnología occidental: A pesar de su inmensa economía, China sigue dependiendo en gran medida de los mercados de exportación occidentales para su crecimiento y de tecnologías críticas (especialmente semiconductores avanzados, *software* y propiedad intelectual) de países como EE. UU., Japón y Europa.
- Crisis demográfica inminente: La política del hijo único y otros factores han provocado un rápido envejecimiento de

la población y una caída drástica de la natalidad. Se proyecta que la fuerza laboral se reducirá significativamente, aumentando la carga sobre los jóvenes y el sistema de bienestar, con graves implicaciones para el crecimiento económico.

- Fragilidad del sistema financiero y deuda: El modelo de crecimiento impulsado por la deuda ha creado riesgos sustanciales, como un vasto *shadow banking* (banca en la sombra), una burbuja inmobiliaria (ejemplificado por las crisis de Evergrande y Country Garden) y una deuda pública local masiva, que plantean amenazas a la estabilidad financiera.
- Brecha en innovación disruptiva fundamental: Si bien China sobresale en la aplicación y escalado de tecnologías existentes, ha luchado por generar una innovación disruptiva verdaderamente fundamental, comparable a la de Silicon Valley, en campos como la bioingeniería, la física teórica o la creación de plataformas de *software* globales dominantes.
- Desconfianza internacional y opacidad: Las prácticas comerciales de China (subsidios, robo de IP), su historial de derechos humanos (Xinjiang, Hong Kong), su agresividad en el Mar de China Meridional y la opacidad de su sistema político han generado una creciente desconfianza. Esto ha llevado a prohibiciones de empresas chinas, como Huawei y a esfuerzos de diversificación de cadenas de suministro lejos de China.

La pregunta de si China puede imponerse como la principal potencia global en el siglo XXI es una de las cuestiones geopolíticas más trascendentales. Su ascenso ha sido meteórico, transformando el orden mundial unipolar pos-Guerra Fría en uno cada vez más multipolar y, para algunos, bipolar, dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China.

Esta competencia no es solo económica, militar o tecnológica, sino también ideológica, planteando la cuestión de si el mundo puede acomodar dos sistemas fundamentalmente dife-

rentes: un modelo de capitalismo de Estado autoritario versus una democracia liberal con economías de mercado.

La rivalidad entre Estados Unidos y China se manifiesta en múltiples frentes. En el ámbito tecnológico, es una carrera por el dominio en áreas críticas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la supremacía en la fabricación de semiconductores. Militarmente, el rápido rearme de China y su creciente presencia en el Indo-Pacífico, junto con sus reclamaciones territoriales, elevan las tensiones y preocupan a EE. UU. y sus aliados. La cuestión de Taiwán es, quizás, el punto más volátil, un potencial *flashpoint* que podría desencadenar un conflicto a gran escala. Taiwán es estratégico no solo por su posición geopolítica sino también por su rol vital en la producción global de semiconductores avanzados, convirtiéndolo en un factor decisivo para la economía tecnológica mundial.

Mientras tanto, otras naciones se encuentran en una delicada posición, intentando navegar entre estas dos potencias hegemónicas. Muchos aliados de EE. UU. tienen profundos lazos económicos con China, lo que les obliga a buscar estrategias de *hedging* que les permitan mantener lazos comerciales con Pekín sin comprometer sus alianzas de seguridad con Washington.

La posibilidad de un desacoplamiento económico, donde las cadenas de suministro se bifurcan y la interdependencia económica disminuye, tiene implicaciones masivas para la globalización, la eficiencia económica y la estabilidad. Esto podría dar lugar a una Nueva Guerra Fría caracterizada no tanto por un conflicto armado directo (aunque el riesgo persiste), sino por una competencia intensa en esferas tecnológicas, económicas, ideológicas y de influencia.

El éxito de China en su ambición de liderazgo global también dependerá de su capacidad para trascender su dependencia de *hard power* (poder militar y económico) y desarrollar un *soft power* (atractivo cultural, valores políticos, influencia diplomática) que resuene con el resto del mundo. A pesar de su progreso económico, el modelo autoritario chino, sus restricciones a las libertades y su historial de derechos humanos limitan

su atractivo ideológico y cultural en gran parte del mundo democrático.

La imposición por la fuerza o la coerción económica, si bien pueden generar cumplimiento a corto plazo, rara vez construyen una legitimidad duradera o una red de aliados genuinos. El futuro orden mundial dependerá de si estas dos superpotencias pueden encontrar un *modus vivendi* o si el mundo se dividirá irreversiblemente, con consecuencias impredecibles para la paz y la prosperidad globales.

2026: En el umbral de un Nuevo Orden Mundial

La pregunta fundacional que define nuestra época es doble: ¿Cuál será la ruta y cuáles las características de este Nuevo Orden Mundial que impulsa el trumpismo? ¿Será China capaz de oponerse e imponerse a este modelo de «América primero» y «América para los americanos» que emana desde la Oficina Oval?

La respuesta determinará no solo el equilibrio de poder global, sino la naturaleza misma de la civilización humana en el siglo XXI. Entramos en una era de incertidumbre radical donde las certezas del pasado se desvanecen y el futuro permanece abierto, contingente, disputado.

El trumpismo en la política exterior sugiere un orden mundial definido por la primacía de los intereses nacionales estadounidenses, la renegociación o el abandono de tratados y alianzas multilaterales en favor de acuerdos bilaterales transaccionales, y una disposición a utilizar el poder económico y militar de forma unilateral. Este enfoque fomenta la desconfianza entre aliados tradicionales y empuja a las naciones más pequeñas a una posición precaria, donde la lealtad se mide por concesiones y la diplomacia cede ante la coerción. El impacto en instituciones internacionales como la OTAN, la ONU y la OMC sería una erosión de su autoridad y eficacia, llevando a un entorno global menos predecible y más anárquico, donde la ley internacional es más una sugerencia que una obligación.

En contraste, China ofrece una visión alternativa, encapsulada en su concepto de «comunidad de futuro compartido

para la humanidad», que busca redefinir la gobernanza global bajo una hegemonía diferente a la occidental. Este modelo enfatiza la soberanía estatal, la no injerencia en asuntos internos y un enfoque en el desarrollo económico impulsado por la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), prometiendo estabilidad y prosperidad sin las condiciones políticas asociadas a la ayuda occidental.

Aunque atractivo para muchas naciones en desarrollo, su limitación reside en la falta de libertades políticas y la creciente preocupación por la dependencia económica, la sostenibilidad de la deuda y la exportación de modelos de vigilancia digital. Si bien sus ambiciones actuales se centran en la influencia regional en el Indo-Pacífico, su creciente poder económico y tecnológico inevitablemente la proyecta como un actor global. De este choque de visiones emergen varios escenarios posibles. Podríamos ver la consolidación de un mundo bipolar, dividido en esferas de influencia lideradas por Estados Unidos y China, con una intensificación de la competencia tecnológica, económica y militar. Otra posibilidad es un mundo multipolar, donde potencias intermedias y bloques regionales como la Unión Europea, India, Japón, ASEAN y la Unión Africana, adquieren mayor autonomía y capacidad para influir, actuando como baluartes contra una hegemonía dual. Un escenario más sombrío sería un mundo fragmentado, sin liderazgo claro, donde el proteccionismo, los conflictos regionales y la inestabilidad proliferan, y la cooperación global es insuficiente para abordar desafíos transnacionales.

El papel de la tecnología en esta reconfiguración es central. La carrera por el dominio de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica y la exploración espacial no solo define la superioridad económica y militar, sino también la capacidad de proyectar poder e influencia. Las infraestructuras digitales, desde las redes 5G hasta las constelaciones de satélites, se convierten en campos de batalla estratégicos.

Mientras tanto, desafíos globales apremiantes como el cambio climático, futuras pandemias y la proliferación nuclear, exigen una cooperación sin precedentes. Sin embargo, la cre-

ciente desconfianza y la lógica de la «suma cero» de la competencia geopolítica amenazan con paralizar la acción colectiva, dejando a la humanidad más vulnerable ante estas crisis existenciales.

Para los ciudadanos de a pie, este nuevo orden mundial se manifestará en cambios económicos (desde la reconfiguración de las cadenas de suministro hasta las presiones inflacionarias), en la seguridad (la sombra de conflictos regionales y la polarización interna), y en las libertades individuales (el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos). La democracia y el respeto por el derecho internacional se enfrentan a una prueba de fuego, con el riesgo de que la conveniencia política o la autocracia prevalezcan sobre los valores fundamentales de libertad y justicia. La historia nos enseña que las transiciones de poder son raramente pacíficas, a menudo marcadas por tensiones y conflictos. La cuestión clave es si los líderes y las sociedades aprenderán de las lecciones del pasado para navegar esta encrucijada con prudencia, o si la ambición y el miedo nos arrastrarán hacia una confrontación que nadie puede permitirse.

Reflexión final: Vivimos el fin de un orden mundial y el incierto nacimiento de otro. Entre el proteccionismo trumpista y la ambición china, entre el nacionalismo radical y la migración forzada, entre la distopía materializada y la utopía abandonada, la humanidad enfrenta decisiones que resonarán durante generaciones. El segundo cuarto del siglo XXI será testigo de batallas que definirán si prevalece la cooperación o el conflicto, la apertura o el aislamiento, la esperanza o el miedo.

La visión de Claudia Sheinbaum en la asamblea de la Asociación Nacional de Bancos: un llamado a la colaboración y el desarrollo

El reciente discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en la asamblea de la Asociación Nacional de Bancos (ANB), celebrada en el estado de Nayarit, ha sido calificado como un mensaje de unidad y colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. En un contexto global marcado por desafíos económicos y políticos, Sheinbaum ha instado a los banqueros y empresarios a formar una alianza sólida que promueva la prosperidad de México.

Durante su intervención, la presidenta subrayó la importancia de mantener la soberanía nacional en las decisiones económicas, al tiempo que se promueve una política de puertas abiertas a la inversión tanto nacional como extranjera. Este equilibrio, señaló, será fundamental para el desarrollo integral del país en los próximos años.

Un punto destacado de su discurso fue la presentación del Plan México como eje central de su estrategia de gobierno. Este ambicioso programa busca integrar diversos proyectos enfocados en infraestructura, energía renovable, digitalización y fortalecimiento del mercado interno, creando así nuevas oportunidades de inversión para el sector bancario.

Control de la inflación y proyecciones económicas

La mandataria mexicana dedicó especial atención a las medidas para controlar la inflación, destacando la coordinación entre la

política fiscal del gobierno y la política monetaria del Banco de México. Las proyecciones presentadas por su equipo económico sugieren un crecimiento sostenido durante los próximos años, manteniendo una inflación controlada y fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Entre los grandes proyectos de infraestructura que representarán oportunidades para la banca, Sheinbaum destacó la ampliación del Tren Maya, nuevos corredores interoceánicos y el desarrollo de parques industriales en el sur del país. «Estos proyectos no solo requieren financiamiento, sino que representan una plataforma para el desarrollo integral de regiones históricamente rezagadas», enfatizó.

Un enfoque de gobierno integral

La presidenta también abordó temas cruciales como la seguridad jurídica para las inversiones, la simplificación administrativa y el combate a la corrupción. «Un México con certeza jurídica, trámites ágiles y cero tolerancia a la corrupción es el mejor entorno para que florezcan los negocios y el crédito productivo», señaló ante los representantes del sector bancario.

La colaboración efectiva entre el gobierno y la banca fue presentada como uno de los pilares fundamentales para enfrentar los desafíos globales. Sheinbaum destacó que México tiene el potencial para posicionarse como un destino privilegiado para la inversión en el contexto del *nearshoring*, siempre que exista una alianza estratégica entre todos los sectores productivos del país.

Al concluir su intervención hizo un llamado a la acción conjunta: «El desarrollo de México no es responsabilidad exclusiva del gobierno o del sector privado, es una tarea compartida que requiere la participación de todos. La banca tiene un papel fundamental en la democratización del crédito y en el financiamiento de los proyectos que transformarán el país».

Un mensaje bien recibido

Su intervención no solo fue bien recibida, sino que también refuerza la noción de que la construcción de puentes entre ambos sectores es esencial para el crecimiento sostenible del país.

Uno de los temas centrales de su discurso fue la defensa de la soberanía y la independencia nacionales ante amenazas externas, especialmente aquellas manifestadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sheinbaum enfatizó que México no está dispuesto a negociar su autonomía en aras de presiones externas, lo cual le da al gobierno un rol decisivo como muro de contención contra decisiones que puedan perjudicar al país.

Defensa de la soberanía nacional

Este enfoque no solo apela a la seguridad nacional, sino que también busca garantizar un entorno favorable para los negocios y la inversión. La presidenta hizo una mención especial al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerándolo como una herramienta fundamental para el desarrollo económico.

Durante su intervención subrayó que la soberanía nacional no es negociable bajo ninguna circunstancia y que constituye la base sobre la cual se construyen las relaciones comerciales internacionales. «Un México soberano es un socio comercial digno y confiable, capaz de defender sus intereses mientras contribuye al desarrollo regional», afirmó la mandataria.

La defensa de la soberanía, explicó, también implica la protección de sectores estratégicos como la energía y los recursos naturales, sin que esto signifique cerrarse a la inversión extranjera. «Buscamos esquemas de colaboración que respeten nuestras leyes y que generen beneficios compartidos para todos los actores involucrados», puntualizó.

Sin embargo, su advertencia acerca de la posibilidad de que este acuerdo se diluya nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de diversificar los mercados. En este sentido, la mandataria propuso fortalecer el mercado interno, alineando esta idea con el objetivo del Plan México.

Sheinbaum destacó que esta diversificación no solo reduce la vulnerabilidad ante posibles cambios en la política comercial estadounidense, sino que también abre nuevas oportunidades para el sector financiero mexicano. «Las institu-

ciones bancarias serán aliadas fundamentales en este proceso, facilitando los flujos comerciales con otras regiones como Asia, Europa y América Latina», señaló.

La presidenta también enfatizó que la defensa de la soberanía incluye la autonomía en materia de política económica. «México determinará su rumbo a partir de sus propias necesidades y prioridades, siempre en diálogo con sus socios internacionales, pero sin subordinar el interés nacional a presiones externas», concluyó, recibiendo el apoyo explícito de los líderes bancarios presentes en el evento.

El Plan México como eje de desarrollo

Este plan tiene como razón de ser fomentar un desarrollo equitativo que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Para que esto sea posible, Sheinbaum hizo un llamado explícito a los banqueros para que incrementen la oferta de créditos destinados a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en condiciones atractivas.

Las pymes son el motor de la economía nacional, y su fortalecimiento a través de financiamiento adecuado puede impulsar la producción y el empleo. La colaboración entre el sector bancario y las empresas es, por tanto, vital para la supervivencia y el crecimiento de este tipo de negocios.

Durante su discurso, la presidenta enfatizó que el Plan México contempla múltiples dimensiones del desarrollo económico, incluyendo infraestructura, digitalización y sustentabilidad. «No podemos hablar de un país próspero si dejamos atrás a regiones enteras o segmentos productivos», dijo.

El financiamiento adecuado se presenta como una herramienta estratégica para reducir las brechas regionales que históricamente han caracterizado al país. Los estados del sur y sureste, tradicionalmente rezagados, representan una prioridad dentro de esta visión de desarrollo integrado que impulsa la administración actual.

Sheinbaum también destacó que el Plan México busca promover cadenas de valor nacionales que disminuyan la dependencia de importaciones y fortalezcan el mercado interno.

«Necesitamos que nuestras empresas crezcan no solo en tamaño, sino en capacidad tecnológica y productiva. Para ello, el acceso a capital en condiciones justas resulta indispensable», afirmó.

Los representantes de la banca, por su parte, mostraron receptividad ante este llamado, reconociendo que existe un amplio potencial para expandir los servicios financieros hacia sectores tradicionalmente desatendidos. Algunos expresaron su disposición para diseñar productos específicos que atiendan las necesidades particulares de las pymes en diferentes sectores productivos.

Control de la inflación y proyecciones económicas

Reconocimiento al Banco de México. Además, la presidenta no dudó en felicitar a la gobernadora del Banco de México por sus esfuerzos en controlar la inflación, un fenómeno que ha afectado a la economía a nivel global.

Pronósticos internacionales. En un contexto donde las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierten sobre un futuro incierto, Sheinbaum instó a la unidad como clave para contrarrestar los pronósticos pesimistas y lograr un crecimiento genuino.

Grandes proyectos de infraestructura

Tren Maya. Los grandes proyectos de infraestructura que se encuentran en el horizonte mexicano, como el Plan México, el Tren Maya y el proyecto Transístmico, también fueron mencionados por la presidenta.

Proyecto Transístmico. Estos esfuerzos no solo representan una oportunidad de desarrollo, sino que se complementan con la riqueza hídrica del país, su fuerza laboral calificada y la transición hacia energías renovables.

Plataforma para el desarrollo integral

Todos estos elementos, según Sheinbaum, constituyen una plataforma robusta para el desarrollo integral y compartido en el

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Durante su intervención enfatizó que la combinación de los recursos naturales, el capital humano y la innovación tecnológica representan ventajas competitivas que México debe aprovechar para posicionarse estratégicamente en la economía global.

Riqueza hídrica. Aprovechamiento de los recursos naturales del país.

- Gestión sostenible de cuencas hidrológicas.
- Programas de conservación y recuperación de acuíferos.
- Desarrollo de infraestructura hídrica para regiones vulnerables.

Fuerza laboral. Personal calificado para impulsar el crecimiento.

- Programas de capacitación técnica y profesional.
- Colaboración entre universidades y sector productivo.
- Incentivos para la innovación y el emprendimiento.

Energías renovables. Transición hacia un modelo energético sostenible.

- Ampliación de la capacidad en energía solar y eólica.
- Modernización de la red eléctrica nacional.
- Inversiones estratégicas en almacenamiento energético.

La presidenta subrayó que estos tres pilares fundamentales no solo representan áreas de oportunidad para la inversión, sino que constituyen los cimientos sobre los cuales se edificará un nuevo modelo de desarrollo nacional basado en la sostenibilidad, la inclusión y la soberanía económica. «El sector financiero juega un papel crucial en la canalización de recursos hacia estos sectores estratégicos», concluyó Sheinbaum, invitando a los banqueros a formar parte activa de esta transformación.

Un enfoque de gobierno integral

La propuesta de Sheinbaum sugiere que la administración actual está comprometida con un enfoque de gobierno que no solo toma en cuenta las variables económicas, sino también el bienestar social y la sostenibilidad.

Este modelo de desarrollo busca equilibrar el crecimiento económico con la equidad social, lo que representa un reto constante en un mundo donde las desigualdades son cada vez más evidentes.

Durante su discurso ante los banqueros, la presidenta detalló que este enfoque integral incorpora cinco dimensiones clave: economía, bienestar social, medio ambiente, educación y seguridad. Cada una de estas dimensiones, explicó, no puede desarrollarse de manera aislada, sino que requiere una visión sistémica que reconozca sus interrelaciones.

«No podemos hablar de éxito económico si este no se traduce en mejores condiciones de vida para la población», afirmó, destacando que las políticas públicas deben diseñarse considerando su impacto holístico en la sociedad mexicana.

La mandataria enfatizó que este enfoque integral también implica una nueva forma de colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. «Los grandes desafíos que enfrentamos como nación no pueden ser resueltos por un solo sector; requieren la participación coordinada de todos los actores sociales», señaló.

Entre los ejemplos concretos de este enfoque, Sheinbaum mencionó programas como Sembrando Vida, que combina objetivos ambientales con generación de empleo rural, y el fortalecimiento del sistema de salud pública, que busca garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad mientras se impulsa la investigación científica nacional.

La visión presentada también contempla una modernización de la administración pública para hacerla más eficiente y transparente, apoyándose en herramientas tecnológicas que faciliten tanto la gestión interna como la interacción con la ciudadanía.

La importancia de la colaboración efectiva

El mensaje de Claudia Sheinbaum en la asamblea de la Asociación Nacional de Bancos ha sido claro: para enfrentar los retos actuales y futuros es fundamental que el gobierno y el sector empresarial colaboren de manera efectiva.

Durante su intervención, la presidenta destacó que las sinergias entre el sector público y privado son esenciales para impulsar una economía más robusta y resiliente. «No podemos avanzar en caminos separados. El desarrollo de México requiere que todos los sectores remen en la misma dirección, aportando sus fortalezas particulares para un objetivo común», señaló.

Esta colaboración debe ir más allá de la simple coordinación de esfuerzos; implica establecer mecanismos de diálogo permanente, compartir información estratégica y diseñar políticas públicas que consideren las necesidades y potencialidades de todos los actores económicos. La defensa de la soberanía, el fortalecimiento del mercado interno y el apoyo a las pymes son pilares que deben ser trabajados de la mano.

En este sentido, Sheinbaum propuso la creación de grupos de trabajo mixtos que aborden temas específicos como la inclusión financiera, la digitalización de la economía y el acceso al crédito para sectores tradicionalmente marginados. También enfatizó la importancia de que las instituciones bancarias participen activamente en el financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura contemplados en el Plan México.

«El éxito de nuestras políticas económicas depende en gran medida de la confianza y participación del sector financiero. Queremos que los bancos sean aliados estratégicos en la construcción de un México más próspero, justo y sostenible», concluyó la presidenta, recibiendo una respuesta positiva de los representantes bancarios presentes en el evento.

El potencial de México ante los desafíos globales

Si México logra establecer estas alianzas y aplicar su rica plataforma de recursos, tiene el potencial de superar los obstáculos impuestos por el entorno global y construir un futuro próspero para todos sus ciudadanos. Con su ubicación estratégica, abundantes recursos naturales y una población joven y creciente, el país está posicionado de manera única para convertirse en un actor clave en la economía mundial. La administración de Sheinbaum reconoce que, para aprovechar estas ventajas, es necesario

un enfoque integral que combine políticas públicas eficientes con la participación activa del sector privado.

Diversificación de mercados. Ante la incertidumbre del T-MEC, es crucial buscar nuevos socios comerciales en América Latina, Asia y Europa para reducir la dependencia económica. Industrialización nacional. Fortalecer la producción interna para reducir dependencias externas y crear cadenas de valor que generen empleos de calidad.

Desarrollo de sectores estratégicos. Impulsar industrias clave como energías renovables, tecnología, manufactura avanzada y turismo sostenible para diversificar la economía nacional.

Colaboración público-privada. Establecer mecanismos efectivos de cooperación entre gobierno, sector financiero y empresarial para financiar proyectos de alto impacto social y económico.

Inversión en capital humano. Fortalecer el sistema educativo y la capacitación técnica para formar profesionales que respondan a las demandas del mercado laboral global.

Un llamado a la acción conjunta

Gobierno. Políticas públicas que fomenten el desarrollo equitativo.

Sector bancario. Financiamiento accesible para impulsar el crecimiento empresarial.

Empresas. Inversión y generación de empleo de calidad.

Sociedad. Participación activa en el desarrollo nacional.

El mensaje final de Sheinbaum enfatiza que solo mediante la colaboración estrecha entre todos los sectores, México podrá enfrentar con éxito los retos económicos y políticos del entorno global actual, construyendo un país más próspero y equitativo para todos.

Los desafíos del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo papa León XIV en un contexto geopolítico complejo

La elección de un nuevo papa es siempre un acontecimiento de gran relevancia tanto para la Iglesia católica como para el mundo en general. Con el reciente acuerdo del cónclave, el cardenal Robert Francis Prevost ha sido electo como reemplazo del papa Francisco, asumiendo el nombre de León XIV. Este nombramiento, además de ser significativo por la tradición y la relevancia espiritual, trae consigo un conjunto de retos que Prevost deberá enfrentar, especialmente en un entorno geopolítico cada vez más complicado.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, en 1955, aporta una perspectiva única al papado. Su formación como agustino y su experiencia como obispo en Perú le han brindado una visión tanto occidental como latinoamericana, algo crucial para liderar una Iglesia global. Su elección del nombre León, evocando a papas anteriores conocidos por sus contribuciones intelectuales y diplomáticas, parece indicar una intención de fortalecer la posición de la Iglesia en debates internacionales y enfrentar desafíos contemporáneos con determinación.

El nuevo pontífice asume el liderazgo en un momento particularmente turbulento. Los conflictos armados en Ucrania, Medio Oriente y diversas regiones de África, el aumento de las tensiones entre las grandes potencias, y las crecientes divisiones sociales y políticas en numerosos países presentan un panorama

extremadamente complejo. En este contexto, León XIV deberá navegar las aguas de la diplomacia vaticana con prudencia y firmeza, buscando posicionar a la Santa Sede como un actor relevante en la promoción de la paz y el diálogo.

Internamente, la Iglesia católica enfrenta sus propios desafíos. La continua necesidad de abordar la crisis de abusos sexuales, las tensiones entre sectores progresistas y conservadores, la disminución de vocaciones sacerdotales en muchas regiones, y la adaptación a un mundo cada vez más secularizado y tecnológico requerirán un liderazgo determinado pero conciliador. La capacidad de Prevost para mantener la unidad mientras impulsa reformas necesarias será fundamental para el futuro de la institución.

El aspecto económico también representa un reto significativo. La transparencia financiera del Vaticano, la gestión de sus recursos y la capacidad para sostener sus obras de caridad y misión en un mundo afectado por crisis económicas recurrentes exigirán decisiones estratégicas y posiblemente innovadoras. León XIV deberá equilibrar la tradición con la necesidad de adaptación a nuevas realidades socioeconómicas globales.

Contexto geopolítico actual

El panorama mundial se caracteriza por tensiones entre naciones, crisis humanitarias, cambios climáticos y la polarización política. La guerra en Ucrania y sus implicaciones, las relaciones entre Estados Unidos y China, así como la creciente influencia de movimientos populistas y extremistas, presentan un conjunto de desafíos. En este contexto, el papel de la Iglesia católica y su liderazgo moral se vuelve particularmente crítico.

Tensiones entre naciones. Conflictos internacionales que afectan la estabilidad mundial.

Crisis humanitarias. Situaciones que requieren respuesta urgente de la comunidad internacional.

Cambios climáticos. Desafíos medioambientales que afectan a toda la humanidad.

Polarización política. División ideológica que dificulta el consenso y el diálogo.

Mantenimiento de la unidad de la Iglesia. Uno de los principales desafíos que enfrentará León XIV será la cohesión de la Iglesia católica. La polarización ideológica dentro de la Iglesia, que ha sido exacerbada en los últimos años, plantea la necesidad de construir puentes entre diversas corrientes teológicas. León XIV deberá trabajar para encontrar un equilibrio entre el progresismo, representado por iniciativas de inclusión y diálogo, y el conservadurismo, que a menudo se aferra a las tradiciones.

Esta división no es nueva en la historia de la Iglesia, pero ha alcanzado niveles preocupantes en la era digital, donde las posiciones se radicalizan rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación polarizados. El pontificado de Francisco estuvo marcado por tensiones significativas, con críticas abiertas de sectores tradicionalistas a sus iniciativas de reforma

. **División histórica.** Las tensiones entre tradición y reforma han sido una constante en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (1962-1965), que marcó un punto de inflexión en la modernización de la institución.

Debates doctrinales actuales. Temas como la comunión a divorciados vueltos a casar, la ordenación de hombres casados en regiones con escasez de sacerdotes, y el papel de la mujer en la Iglesia continúan generando profundas divisiones.

División geográfica. La Iglesia en Europa y Norteamérica tiende a favorecer posiciones más progresistas, mientras que en África y partes de Asia prevalecen visiones más tradicionales sobre moral y liturgia.

Desafío generacional. Los jóvenes católicos a menudo buscan una Iglesia más inclusiva y socialmente comprometida, mientras que muchos fieles de mayor edad valoran la preservación de tradiciones litúrgicas y doctrinales.

Desde su posición como prefecto del dicasterio para los obispos, Prevost ha demostrado habilidad para el diálogo y la construcción de consensos. Como León XIV, deberá ampliarlo a escala global, encontrando espacios comunes que permitan avanzar sin provocar cismas o fragmentaciones irreparables.

Estrategias para la unidad

Corriente progresista

- Iniciativas de inclusión.
- Apertura al diálogo.
- Adaptación a nuevas realidades sociales.
- Reformas estructurales.
- Mayor participación laical en la toma de decisiones.
- Descentralización administrativa.

Corriente conservadora

- Preservación de tradiciones.
- Defensa de la doctrina establecida.
- Énfasis en la continuidad histórica.
- Cautela ante cambios rápidos.
- Protección del patrimonio litúrgico.
- Claridad en la enseñanza moral.

La experiencia de León XIV como religioso agustino podría ser significativa en este contexto. La espiritualidad agustiniana, con su énfasis en la comunidad y la búsqueda conjunta de la verdad, ofrece un marco teológico valioso para abordar la polarización. Su conocimiento de la Iglesia latinoamericana, caracterizada por la diversidad de expresiones pastorales, también podría enriquecer su aproximación a la unidad eclesial.

El éxito de su pontificado podría medirse por su capacidad para mantener el diálogo abierto entre facciones, implementar reformas necesarias sin provocar rupturas, y articular una visión que permita a los católicos de diversas sensibilidades reconocerse como parte de una misma comunidad de fe. Este equilibrio será especialmente crítico en un mundo polarizado donde las instituciones religiosas no son inmunes a las dinámicas de fragmentación social.

Abordaje de la crisis de abusos

La sombra de los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia continúa siendo un obstáculo considerable. León XIV deberá implementar políticas de transparencia y rendición de cuentas

que restauren la confianza pública en la institución. Este trabajo incluirá la cooperación con las autoridades civiles y la promoción de una cultura de protección en todos los niveles eclesiales.

Transparencia. Establecimiento de mecanismos claros para la divulgación de casos y procesos de investigación, eliminando cualquier apariencia de encubrimiento institucional.

Rendición de cuentas. Implementación de sistemas que garanticen que los responsables de abusos y quienes los encubrieron enfrenten consecuencias apropiadas, sin excepciones por jerarquía.

Cooperación con autoridades. Colaboración plena con los sistemas judiciales civiles, reconociendo la primacía de la ley en casos de abuso y evitando cualquier obstrucción.

Cultura de protección. Desarrollo de entornos seguros en todas las instituciones católicas, con formación adecuada para el personal y sistemas de prevención efectivos.

Liderazgo moral en conflictos globales. Como líder espiritual, León XIV estará llamado a posicionarse sobre cuestiones de justicia social, paz y derechos humanos. La situación en Ucrania y el impacto en las comunidades cristianas, así como la crisis de migrantes en diversas regiones del mundo, requieren una respuesta clara y contundente por parte del Vaticano.

Conflicto en Ucrania. Mediación para la paz y apoyo a comunidades afectadas.

Crisis migratoria. La defensa de la dignidad de los migrantes y refugiados es un tema en el que nuevo pontífice ha mostrado y demostrado su compromiso y apoyo a los migrantes y la defensa de sus derechos humanos en un escenario que el discurso xenofóbico y antiinmigrantes se ha fortalecido.

Justicia social. Promoción de sociedades más equitativas y solidarias. Otra de las banderas del nuevo jerarca de la Iglesia católica.

Derechos humanos. Defensa de la dignidad humana en todas las circunstancias.

Relaciones interreligiosas. En un mundo donde las tensiones religiosas a menudo conducen a los conflictos, León XIV

deberá fomentar el diálogo interreligioso. La construcción de puentes entre diferentes tradiciones religiosas es esencial para promover la paz y la comprensión mutua. Este reto es particularmente urgente en regiones donde la violencia sectaria es prevalente.

Islam. Fortalecer el diálogo con líderes musulmanes para abordar tensiones y promover la coexistencia pacífica.

Judaísmo. Continuar el camino de reconciliación histórica y cooperación en valores compartidos.

Hinduismo. Desarrollar iniciativas conjuntas en temas como la paz y la justicia social.

Budismo. Colaborar en áreas como la meditación, la compasión y el cuidado del medio ambiente.

Adaptación a la era digital

La Iglesia se enfrenta al desafío de adaptar su mensaje y presencia al mundo digital. Los jóvenes, cada vez más alejados de la Iglesia tradicional, requieren un enfoque renovado que incluya plataformas digitales y redes sociales. León XIV deberá encontrar formas innovadoras de comunicar los valores católicos en un formato que resuene con las nuevas generaciones, es un tema que como matemático entiende y domina, al tiempo que su aporte al aspecto normativo y ético de la IA es reconocido mundialmente.

Presencia en redes sociales. Desarrollar estrategias efectivas para comunicar el mensaje evangélico a través de plataformas digitales populares entre los jóvenes.

Formación digital. Capacitar al clero y líderes laicos en el uso de tecnologías digitales para la evangelización y el acompañamiento pastoral.

Contenido adaptado. Crear materiales que presenten las enseñanzas católicas en formatos atractivos y accesibles para la cultura digital contemporánea.

Comunidades virtuales. Fomentar espacios digitales donde los creyentes puedan compartir su fe, apoyarse mutuamente y profundizar en su vida espiritual.

Geopolítica y diplomacia vaticana. Como estadouni-

dense, León XIV podría encontrar ventajas y desventajas en sus esfuerzos diplomáticos. Su nacionalidad podría facilitar el establecimiento de relaciones con diversas naciones, pero también podría generar suspicacias. La diplomacia del Vaticano ha sido un instrumento esencial en la construcción de la paz y la promoción del bien común, y es crucial que el nuevo papa maneje esta herramienta con habilidad y sensibilidad.

Ventajas de su nacionalidad

- Mayor facilidad para dialogar con potencias occidentales.
- Conocimiento directo de la cultura estadounidense.
- Posible influencia en políticas de EE. UU. hacia temas religiosos.
- Red de contactos en América del Norte.

Desafíos diplomáticos

- Posibles suspicacias en países con tensiones con EE. UU.
- Necesidad de demostrar independencia de intereses estadounidenses.
- Equilibrio en conflictos donde EE. UU. es parte interesada.
- Percepción de parcialidad en ciertas regiones del mundo

Crisis climática y desarrollo sostenible

Con la creciente preocupación por el cambio climático, el papa tiene la responsabilidad de abogar por la justicia ambiental. Esto incluye la promoción de políticas que protejan la creación de Dios, un tema que fue un pilar del papado de Francisco. León XIV deberá continuar este legado y moverse rápidamente para posicionar a la Iglesia en la vanguardia de la lucha por un desarrollo sostenible.

La elección de León XIV representa una nueva era para la Iglesia católica en un mundo en constante cambio. Los retos que enfrentará son muchos y variados, pero también son oportunidades para demostrar el liderazgo espiritual en un contexto global. A medida que se sumerge en su nuevo rol, el cardenal Robert Francis Prevost deberá abordar estos desafíos con determinación, sabiduría y un enfoque pastoral, recordando siempre

la misión central de la Iglesia: promover el amor, la paz y la justicia en el mundo. La comunidad católica y el mundo entero observarán con interés cómo responderá a este complejo entramado de problemas, no solo como líder de la Iglesia, sino también como un hombre de fe comprometido con un futuro mejor para todos.

Continuidad de la encíclica *Laudato Si'*. Profundizar en las enseñanzas sobre el cuidado de la casa común y su aplicación práctica.

Promoción de estilos de vida sostenibles. Fomentar prácticas ecológicas en instituciones católicas y entre los fieles.

Justicia climática. Abogar por la equidad en la distribución de cargas y beneficios de las políticas ambientales.

Alianzas estratégicas. Colaborar con organizaciones y gobiernos comprometidos con el desarrollo sostenible.

El ascenso del papa León XIV: un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica

La elección del papa León XIV (Robert Francis Prevost) ha marcado un hito significativo en la historia reciente de la Iglesia católica. Su nombre, León, no es trivial; los papas que han adoptado este nombre a lo largo de la historia han tenido un impacto duradero, y su legado ha dejado una huella en los seguidores de la fe. Este ensayo explora los antecedentes del nuevo pontífice, su relación con sus predecesores, especialmente con León XIII, y lo que su elección representa para el futuro de la Iglesia.

El ascenso de León XIV llega en un momento crucial para la Iglesia católica, enfrentando desafíos como la secularización global, las divisiones internas y la necesidad de mantener relevancia en un mundo cambiante. Su formación teológica rigurosa, combinada con una sensibilidad pastoral desarrollada en diversas culturas, lo posiciona como un líder potencialmente transformador en la tradición de sus predecesores más influyentes.

La elección del nombre León evoca inmediatamente a figuras históricas como León I, conocido como el Grande, quien enfrentó a Atila el Huno, o León XIII, autor de la encíclica *Rerum Novarum* que estableció la doctrina social moderna de la Iglesia. Esta conexión nominal sugiere una intención deliberada de situarse en una línea de continuidad con papas reformadores y

defensores de la tradición católica en momentos de transición histórica.

Los primeros discursos y homilías de León XIV ya han revelado su enfoque en temas como la justicia social, el diálogo interreligioso y la revitalización de la fe en regiones donde el catolicismo ha perdido terreno. Su origen multicultural y experiencia en diferentes continentes aportan una perspectiva global que podría redefinir cómo la Iglesia aborda los complejos desafíos del siglo XXI.

León XIV: un legado de moderación y continuidad

El papa León XIV llega al trono papal en un momento de polarización dentro de la Iglesia. Su elección como moderado parece ser un intento deliberado de unir las facciones que han surgido tras el papado de Francisco. Si bien algunos conservadores critican las reformas impulsadas por su predecesor, León XIV se presenta como un puente, buscando mantener la esencia del mensaje de la Iglesia, al mismo tiempo que se siente cómodo con las modernidades necesarias para enfrentar los desafíos contemporáneos.

Esta posición ha sido crucial para evitar que la Iglesia se fracture en diversas corrientes ideológicas. A través de su enfoque conciliador, ha logrado mantener diálogos productivos con representantes de ambos extremos del espectro teológico, demostrando una habilidad diplomática que recuerda a algunos de los papas León anteriores, particularmente a León XIII.

La formación multicultural de León XIV le ha proporcionado una perspectiva única para abordar las tensiones dentro de la Iglesia global. Su experiencia pastoral en diferentes continentes le permite comprender las diversas manifestaciones del catolicismo y adaptar su mensaje sin comprometer los principios fundamentales de la fe. Esta sensibilidad cultural ha sido particularmente valiosa para mantener la unidad de una institución con más de mil millones de seguidores en todo el mundo.

Los observadores vaticanos señalan que su estilo de liderazgo, caracterizado por la escucha activa y la reflexión profunda antes de tomar decisiones, ha generado un ambiente de

mayor confianza entre las diferentes corrientes dentro del clero. Este enfoque pausado y deliberativo contrasta con los estilos más directivos de algunos de sus predecesores, pero parece estar dando resultados en términos de cohesión institucional.

El legado de León XIII

Para comprender la importancia del nombre León, es esencial mirar hacia León XIII, un papa que se destacó por su enfoque social y su conexión con el mundo laboral. Su encíclica *Rerum Novarum* es considerada un hito en la doctrina social de la Iglesia, abordando cuestiones de justicia social y derechos laborales en un contexto de industrialización rápida en el siglo XIX.

León XIV ve a su predecesor como un ejemplo a seguir, y su nombre no solo evoca recordaciones positivas, sino que también refleja un compromiso con los valores de la justicia y la caridad.

El trasfondo multicultural de León XIV

León XIV, nacido en Estados Unidos y con una carrera eclesiástica que incluye un importante papel como obispo en Chicago, está imbuido en un contexto multicultural. Sin embargo, es su tiempo en Perú, así como su reciente adquisición de la nacionalidad peruana, lo que resalta la intensidad de su compromiso pastoral con las comunidades latinoamericanas.

Su trabajo en terreno en Perú le ha permitido comprender de primera mano los problemas que enfrentan los migrantes y los pobres, aspectos que son fundamentales en su misión como papa. La influencia de su experiencia en América Latina será crucial en su papado, especialmente en un momento en que las crisis migratorias son una problemática candente en el mundo.

León XIV se ha comprometido a ser un defensor de los derechos de los migrantes y una voz para los oprimidos, lo que contrasta notablemente con la percepción de un «papa estadounidense» que podría construir un muro en lugar de abrir puentes.

Los trece papas que antecedieron a León XIV

Al evaluar la historia de los papas que lo precedieron, se pueden

extraer varias lecciones. Desde su enfoque hacia la modernidad hasta su visión de la Iglesia como una comunidad inclusiva, cada papa ha dejado su marca. León XIV por supuesto no es una excepción, y es interesante considerar cómo su elección se relaciona con sus predecesores.

León I (440-461). Reconocido por su contribución a la teología cristiana.

León II (682-683). Famoso por su papel en la consolidación de las enseñanzas de la Iglesia.

León III (795-816). Conocido por coronar a Carlomagno, lo que estableció un nuevo entendimiento entre la Iglesia y el poder político.

León IV (847-855). Destacó en la defensa de Roma.

León IX (1049-1054). Visto como un pionero en la reforma de la Iglesia y en la lucha contra la simonía.

León XIII (1878-1903). Su enfoque en los problemas sociales y su interacción con el mundo moderno son cruciales para el legado que León XIV busca continuar.

León XIV (actual). Representa un regreso a las raíces sociales y un enfoque renovado en la justicia y la caridad.

Perspectivas futuras bajo el papado de León XIV

El papado de León XIV probablemente se enfocará en la reconciliación de las divisiones internas de la Iglesia, una tarea monumental, dada la polarización que ha caracterizado los años recientes. Esta polarización se ha manifestado en debates sobre la liturgia, la interpretación de la doctrina y el enfoque pastoral, creando tensiones entre facciones tradicionalistas y progresistas. León XIV, con su formación teológica sólida y su experiencia pastoral diversa, podría establecer un terreno común donde ambas perspectivas encuentren espacio para el diálogo constructivo.

Se anticipa que implementará estructuras de comunicación más efectivas dentro de la jerarquía eclesiástica, fomentando un ambiente donde obispos de diferentes regiones y orientaciones teológicas puedan colaborar en objetivos comunes. Esta estrategia de unificación podría incluir sínodos más

frecuentes y reuniones consultivas que den voz a una amplia gama de fieles.

Se proyecta que su estilo de liderazgo sea un llamado a la unidad y a una renovación del compromiso con los principios fundamentales del cristianismo: el amor, la compasión y la justicia social. Este enfoque resuena con su trayectoria en América Latina, donde ha sido testigo directo de cómo estos valores pueden transformar comunidades enteras cuando se aplican con autenticidad y persistencia.

Su experiencia en América Latina también podría influir profundamente en la forma en que la Iglesia responde a las crisis sociales globales, especialmente relacionadas con la pobreza y la migración. Es probable que impulse iniciativas concretas para que las parroquias y diócesis de todo el mundo se involucren más directamente en el servicio a los migrantes, desarrollando programas de acogida, integración y apoyo legal que reflejen la dignidad inherente de cada persona.

León XIV está posicionado para ser un papa que, aunque moderado, es fuerte en el mensaje de que la fe debe traducirse en acción tangible en beneficio de los más necesitados. En el ámbito de la diplomacia vaticana, se espera que continúe esfuerzos de mediación en regiones de conflicto, aprovechando la neutralidad política de la Santa Sede para facilitar diálogos de paz.

Otro aspecto significativo que podría caracterizar su pontificado es un renovado énfasis en la formación espiritual profunda, contrarrestando la tendencia hacia un cristianismo superficial o meramente cultural. Probablemente promoverá una espiritualidad arraigada en las Escrituras y en la rica tradición contemplativa de la Iglesia, adaptada a los desafíos contemporáneos.

En cuanto a las reformas institucionales, podría continuar el proceso de descentralización iniciado por su predecesor, otorgando mayor autonomía a las conferencias episcopales para responder a las necesidades locales, mientras mantiene la unidad doctrinal esencial. Este equilibrio entre universalidad y particularidad cultural será crucial para navegar los complejos panoramas religiosos y sociales del siglo XXI.

El desafío de la unidad en la Iglesia

Polarización. Divisiones internas tras el papado de Francisco.

Mediación. León XIV como figura de equilibrio entre tradición y reforma.

Reconciliación. Búsqueda de la unidad respetando la diversidad de opiniones.

Uno de los mayores retos que enfrenta León XIV es la reconciliación de las diferentes corrientes dentro de la Iglesia. Su enfoque moderado busca tender puentes entre conservadores y progresistas, manteniendo la esencia del mensaje católico mientras se adapta a los tiempos modernos.

La influencia latinoamericana en el papado

Experiencia en Perú. Su trabajo pastoral en comunidades latinoamericanas ha moldeado profundamente su visión de la Iglesia y su misión social.

Nacionalidad peruana. La adquisición de la ciudadanía peruana refleja su compromiso con la región y sus pueblos.

Defensor de los migrantes. Su experiencia directa con comunidades migrantes le ha dado una perspectiva única sobre esta crisis global.

La conexión de León XIV con América Latina representa un puente importante entre la Iglesia tradicional europea y las comunidades católicas en crecimiento en el hemisferio sur. Esta perspectiva multicultural podría ser determinante en cómo la Iglesia aborda los desafíos globales contemporáneos.

El enfoque social de León XIV

Siguiendo los pasos de León XIII y su encíclica *Rerum Novarum*, León XIV en sus primeros mensajes ha manifestado un fuerte compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Su experiencia trabajando con comunidades marginadas en Perú y Chicago ha fortalecido su convicción de que la Iglesia debe ser una voz activa en la defensa de los más vulnerables.

Justicia social. Continuando el legado de León XIII, enfatiza la importancia de condiciones laborales justas y dignidad para todos los trabajadores.

Derechos de los migrantes. Aboga por políticas humanitarias que respeten la dignidad de las personas desplazadas y busquen soluciones integrales a la crisis migratoria.

Lucha contra la pobreza. Promueve iniciativas para combatir la desigualdad económica y garantizar el acceso a necesidades básicas para todos.

Tradición y modernidad: el equilibrio de León XIV. La visión de los especialistas es que el papado de León XIV se centrará en la búsqueda de equilibrio entre la tradición católica y las necesidades del mundo contemporáneo. A diferencia de algunos de sus predecesores que se inclinaban más hacia un extremo u otro, León XIV está claro de la importancia de mantener los valores fundamentales de la fe mientras se adapta a los cambios sociales y tecnológicos.

Este enfoque equilibrado se refleja en sus posiciones sobre temas controvertidos, donde busca mantener la doctrina tradicional, pero con un tono pastoral y comprensivo hacia aquellos que pueden sentirse marginados por ciertas enseñanzas de la Iglesia.

Formación en los Estados Unidos, alianza con América Latina

Su formación en Estados Unidos, combinada con su experiencia en América Latina, le proporciona una perspectiva única que abarca tanto el mundo desarrollado como las realidades de los países en desarrollo. Esta dualidad le permite abordar cuestiones globales con una sensibilidad particular hacia las diferentes realidades culturales y económicas.

Es importante señalar que el flamante líder de la Iglesia católica es un matemático ampliamente conocedor de la inteligencia artificial, sus retos y sobre todo su papel en los nuevos tiempos. En este punto se ha centrado en el uso ético de la misma. Fue partícipe importante del Código de Ética que hoy rige en la Unión Europea.

Visión prospectiva

El papa León XIV ha sido elegido en un momento decisivo para la Iglesia católica. Con un nombre que evoca un rico legado de

papas, un fuerte compromiso con la justicia social y los derechos humanos, y una conexión profunda con América Latina, su papado se presenta como una nueva oportunidad para alcanzar un equilibrio entre la tradición y la modernidad.

Aunque enfrenta desafíos significativos, León XIV nos invita a mirar hacia un futuro en el que la Iglesia se mantenga fiel a sus raíces mientras responde de manera efectiva a los problemas contemporáneos que atañen a la humanidad, reafirmando su papel como guardiana de la esperanza y defensora de los derechos de todos.

La India y Pakistán: un conflicto históricamente cargado de tensiones

La rivalidad entre la India y Pakistán es uno de los conflictos más complejos y prolongados en la historia contemporánea. Desde su independencia del dominio británico en 1947, ambos países han enfrentado diversas confrontaciones que no solo han afectado las relaciones bilaterales, sino que también han tenido repercusiones globales, sobre todo debido a su capacidad para desarrollar armamento nuclear.

Este conflicto tiene sus raíces en la traumática partición del subcontinente indio, que resultó en la creación de dos Estados separados basados en líneas religiosas. La división apresurada dejó profundas cicatrices en ambas sociedades, con millones de personas desplazadas y cientos de miles de muertos durante la migración forzada que siguió a la independencia.

El territorio de Cachemira se ha convertido en el epicentro de la disputa, con ambas naciones reclamando soberanía sobre la región. Este conflicto territorial ha desencadenado tres guerras convencionales (1947, 1965 y 1971) y numerosos enfrentamientos armados de menor escala, incluyendo la crisis de Kargil en 1999, que estuvo cerca de escalar a un conflicto nuclear.

La dimensión nuclear del conflicto añade un nivel preocupante de tensión. Tanto India como Pakistán se declararon potencias nucleares en 1998, creando una situación de disuasión

mutua, pero también aumentando significativamente los riesgos de cualquier escalada militar. La comunidad internacional observa con preocupación cada nuevo episodio de tensión entre estas dos potencias nucleares.

A pesar de diversos intentos de acercamiento diplomático y medidas para fomentar la confianza, las relaciones siguen siendo frágiles. El terrorismo transfronterizo, las disputas por recursos hídricos compartidos y las alianzas geopolíticas con potencias como China y Estados Unidos complican aún más este panorama de tensiones históricas y contemporáneas.

Introducción al conflicto

La historia de este enfrentamiento claramente se extiende más allá de los simples desacuerdos territoriales; en ella se entrelazan aspectos históricos, políticos, religiosos y económicos que complican aún más la situación. Desde la traumática partición de 1947, ambas naciones han perpetuado narrativas históricas divergentes que justifican sus respectivas posiciones y alimentan sentimientos nacionalistas en sus poblaciones. Esta tensión constante ha convertido la región en uno de los puntos geopolíticos más volátiles del planeta.

El conflicto entre India y Pakistán representa no solo una amenaza para la estabilidad regional, sino también un desafío significativo para la seguridad global, considerando que ambas naciones poseen arsenales nucleares. La disputa por Cachemira ha sido el catalizador de múltiples confrontaciones armadas y continúa siendo el principal foco de tensión. Sin embargo, las hostilidades trascienden lo territorial y abarcan competencias por recursos naturales, especialmente el agua, rivalidades ideológicas y pugnas por influencia en el escenario internacional.

Este ensayo examinará la historia del conflicto, evaluará los riesgos de escalada y analizará las posibles implicaciones en términos políticos, económicos y sociales. Se prestará especial atención a cómo las dinámicas de poder global, el auge del extremismo religioso y los cambios en las políticas internas de ambos países han contribuido a perpetuar o exacerbar las tensiones. Asimismo, se explorarán las iniciativas de paz que han

surgido a lo largo de las décadas y las razones por las cuales muchas de ellas no han logrado resultados duraderos.

Contexto histórico. El conflicto entre India y Pakistán se origina principalmente en la partición de India en dos naciones en 1947. Esta división fue acompañada por una violencia generalizada que resultó en la migración masiva de poblaciones y el establecimiento de tensiones en torno a la región de Cachemira, que ambos países reclaman como suyo.

1947-1948. Primera guerra indo-pakistaní, finalizada con la intervención de las Naciones Unidas y un alto el fuego que dividió Cachemira.

1965. Segunda guerra entre ambos países por disputas territoriales.

1971. Guerra que condujo a la independencia de Bangladés, entonces parte de Pakistán Oriental.

1998. Ambos países realizaron pruebas nucleares, consolidando su posición como potencias nucleares.

Las acusaciones mutuas también han sido una constante en sus relaciones. India acusa a Pakistán de patrocinar el terrorismo, citando ataques notables como el atentado de Mumbai en 2008, mientras que Pakistán sostiene que India ha apoyado movimientos separatistas en su región de Cachemira.

Riesgos de escalada

Los riesgos de una escalada en el conflicto son alarmantemente reales, especialmente dado el contexto militar actual y las tensiones geopolíticas. La proliferación de armas nucleares ha creado un equilibrio delicado que muchos analistas consideran una «diplomacia de la destrucción mutua asegurada».

Sin embargo, eventos como el ataque aéreo de India en 2019, en respuesta a un atentado suicida en Pulwama, incrementó las tensiones, desencadenando un ataque de represalia por parte de Pakistán que dejó a la comunidad internacional en estado de alerta.

Hoy, los ataques mutuos están potenciando el riesgo de un conflicto militar de mayores dimensiones que tendría como actores principales a China y Rusia, de un lado, los Estados Uni-

dos del otro, abriendo otra ventana orientada hacia la geopolítica de la incertidumbre en demérito de la geopolítica de la esperanza que tanto se requiere.

Apoyo internacional

China. Ha sido un aliado cercano de Pakistán desde la década de 1960, proporcionándole apoyo militar y económico significativo. El Corredor Económico China-Pakistán, una inversión de más de 60 000 millones, representa uno de los mayores proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. China considera a India como un competidor estratégico en Asia y ha bloqueado repetidamente los intentos de India de unirse al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente.

Estados Unidos. Ha mantenido relaciones más cercanas con India en las últimas décadas, buscando contrarrestar la influencia china en la región. El acuerdo nuclear civil entre EE. UU. e India de 2005 marcó un punto de inflexión en sus relaciones. Washington ha incrementado la cooperación militar con Nueva Delhi a través de ejercicios conjuntos, ventas de armamento avanzado y acuerdos estratégicos como el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (QUAD) junto con Japón y Australia. Sin embargo, históricamente, EE. UU. también ha proporcionado ayuda militar a Pakistán, especialmente durante la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo.

Rusia. Tradicionalmente ha sido un socio estratégico de India, proporcionándole tecnología militar avanzada desde la era soviética. Sin embargo, en años recientes ha mostrado un acercamiento pragmático hacia Pakistán, iniciando ventas militares limitadas y ejercicios militares conjuntos, lo que ha generado preocupación en Nueva Delhi.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ha intentado mediar en el conflicto desde 1948, cuando estableció la UNMOGIP (Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán) para supervisar el alto el fuego en Cachemira. Sin embargo, su efectividad ha sido limitada debido a las posiciones intransigentes de ambas partes y la falta de consenso en el Consejo de Seguridad.

Esta compleja red de alianzas y rivalidades influye significativamente en la posibilidad de intervención de terceros en un escenario de escalada. La diplomacia internacional se ha visto frecuentemente paralizada por los intereses geopolíticos divergentes de las grandes potencias. China utiliza su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para proteger a Pakistán, mientras que Estados Unidos ha adoptado una postura más equilibrada en las últimas crisis, instando a ambas partes a mostrar contención.

La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que incluye a China, Rusia, India y Pakistán entre sus miembros, representa un foro potencial para el diálogo, pero las tensiones bilaterales han limitado su efectividad como mecanismo de resolución de conflictos. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha mantenido una política de no interferencia, aunque cualquier conflicto afectaría gravemente la estabilidad económica de la región.

Cualquier confrontación directa entre India y Pakistán puede atraer rápidamente a estas potencias globales, transformando un conflicto regional en una crisis internacional con profundas implicaciones para la seguridad mundial. La presencia de armas nucleares en ambos países añade una dimensión particularmente peligrosa que incentiva la intervención diplomática internacional, pero también complica enormemente la resolución del conflicto.

Implicaciones políticas. Un conflicto entre India y Pakistán tendría profundas consecuencias políticas tanto a nivel regional como global, alterando equilibrios de poder existentes y creando nuevas dinámicas diplomáticas. Estos son los principales escenarios políticos que podrían desarrollarse:

India. Un conflicto prolongado podría resultar en un aumento del nacionalismo hindú, impulsando aún más la política de confrontación con Pakistán y dificultando cualquier camino hacia la paz. El partido gobernante BJP podría utilizar el sentimiento nacionalista para consolidar su base electoral, mientras que las voces moderadas quedarían marginadas en el discurso político. Esto también podría traducirse en políticas más agre-

sivas hacia las minorías musulmanas dentro de India, exacerbando las tensiones internas y dañando el tejido secular del país.

Pakistán. Podría verse obligado a justificar una respuesta militar, lo que generaría una mayor militarización en la región. El ejército pakistaní, ya una institución poderosa, podría consolidar aún más su influencia sobre la política civil. Los grupos extremistas podrían ganar popularidad y legitimidad si se presentan como defensores de intereses nacionales, complicando los esfuerzos de Pakistán para combatir el terrorismo interno. Una crisis económica resultante podría desestabilizar al gobierno y conducir a una mayor inestabilidad política.

Nivel internacional. La crisis podría llevar a una mayor militarización y un realineamiento de alianzas, alterando dinámicas de poder en Asia. China podría aprovechar la oportunidad para fortalecer su presencia en la región a través de un mayor apoyo a Pakistán, mientras que Estados Unidos enfrentaría el dilema de elegir entre sus relaciones con ambos países. Rusia buscaría equilibrar sus intereses económicos y estratégicos, posiblemente ofreciéndose como mediador. Las potencias regionales como Irán, Arabia Saudita y Turquía también recalibrarían sus políticas hacia el sur de Asia en función de sus propios intereses geopolíticos.

Organizaciones internacionales

Las Naciones Unidas se verían bajo presión para intervenir y mediar, pero su capacidad para influir en la situación es a menudo cuestionada. El Consejo de Seguridad podría verse paralizado por los vetos de los miembros permanentes con intereses divergentes. Organizaciones regionales como la Asociación Sudaasiática para la Cooperación Regional (SAARCSAARC) probablemente quedarían incapacitadas, mientras que foros más amplios como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) enfrentarían dificultades para lograr consensos. Esto podría desencadenar un debate más amplio sobre la reforma de las instituciones multilaterales y su eficacia en la prevención de conflictos entre potencias nucleares.

Estas implicaciones políticas no operan de manera aislada, sino que se entrelazan con factores económicos, sociales y de seguridad, creando un escenario complejo que requiere un enfoque diplomático multidimensional para evitar una escalada catastrófica.

Implicaciones económicas. Las repercusiones económicas de un escalamiento del conflicto serían devastadoras. Ambos países ya enfrentan desafíos económicos significativos, y un conflicto llevaría a un aumento del gasto militar, desviando recursos de áreas críticas como la educación y la salud. La interdependencia comercial regional se vería severamente afectada, con interrupciones en las cadenas de suministro que impactarían a toda Asia. Los mercados financieros mostrarían una volatilidad extrema ante cualquier indicio de hostilidades militares entre estas dos potencias nucleares.

Inversión extranjera. La incertidumbre provocada por un conflicto podría desalentar la inversión extranjera en la región, afectando el crecimiento económico. Las empresas multinacionales podrían retirar sus operaciones, resultando en pérdidas significativas de empleo y oportunidades de desarrollo.

Recesión económica. Hindúes y musulmanes en ambos lados de la frontera podrían verse afectados por una recesión económica resultante de un conflicto prolongado, lo que a su vez podría amplificar las tensiones sectarias y sociales. El desempleo creciente y la inflación descontrolada serían consecuencias inmediatas que afectarían a millones de ciudadanos.

Impacto en los mercados regionales. Los países vecinos como Bangladesh, Nepal y Sri Lanka enfrentarían graves consecuencias económicas por su proximidad y dependencia comercial con India y Pakistán. El turismo, una fuente importante de ingresos para la región, colapsaría ante la percepción de inestabilidad.

Consecuencias económicas globales. La economía global sufriría disrupciones importantes, especialmente en sectores como la tecnología y los textiles, donde India y Pakistán son actores significativos. Los precios del petróleo se dispararían ante

el riesgo de inestabilidad en una región cercana a importantes rutas de suministro energético.

Destrucción de infraestructura. Décadas de inversión en infraestructura podrían perderse en caso de un conflicto armado, requiriendo años o incluso décadas para reconstruir. Las instalaciones industriales, carreteras y puertos dañados paralizarían la capacidad productiva de ambas naciones.

Visión prospectiva

El conflicto entre India y Pakistán es un legado complejo de historia, política y disputas territoriales. La posibilidad de escalada no es solo una cuestión de potencial militar, sino que tiene profundas implicaciones políticas, económicas y sociales.

Mirando hacia el futuro, es fundamental considerar varios escenarios posibles. En el peor de los casos, una escalada militar podría desencadenar un conflicto nuclear con consecuencias catastróficas no solo para la región sino para todo el planeta. Las tensiones actuales, combinadas con la retórica nacionalista en ambos lados, crean un ambiente donde incluso incidentes menores podrían intensificarse rápidamente.

Un escenario intermedio contemplaría la continuación de las hostilidades de baja intensidad, con enfrentamientos esporádicos en la frontera y operaciones encubiertas. Esta «paz fría» mantendría a ambas naciones en un estado permanente de alerta militar, distrayendo recursos y atención de desafíos urgentes como el cambio climático, la pobreza y el desarrollo sostenible.

El escenario más optimista sugiere un camino gradual hacia la normalización de relaciones, comenzando por acuerdos comerciales limitados y expandiéndose hacia una cooperación más amplia. Iniciativas como el corredor económico entre Pakistán y China podrían, eventualmente, incluir a India en una red de interdependencia económica que haga impensable un conflicto abierto.

Los actores regionales como China, Rusia y los países de Asia Central jugarán un papel crucial en la evolución de este conflicto. Su influencia puede tanto exacerbar las tensiones

como facilitar el diálogo, dependiendo de sus propios intereses geopolíticos y económicos en la región.

La comunidad internacional debe involucrarse de manera proactiva para facilitar el diálogo y la resolución de conflictos, evitando que esta rivalidad ancestral arrastre a ambos países y al mundo hacia un futuro incierto y potencialmente devastador. Las Naciones Unidas, junto con potencias globales como Estados Unidos y la Unión Europea, tienen la responsabilidad moral de crear espacios seguros para negociaciones constructivas que aborden las causas fundamentales del conflicto.

La huella de José «Pepe» Mujica en la izquierda: un legado de ética y compromiso social

La muerte de José «Pepe» Mujica, expresidente de Uruguay, ha dejado una profunda huella en la izquierda, no solo en su país natal, sino también a lo largo de América Latina y el mundo. Mujica es recordado como un líder que encarnaba los valores de la izquierda a través de su vida y su política, mostrando un compromiso inquebrantable con los menos favorecidos.

Más allá de su trayectoria política formal, Mujica construyó un legado que trasciende las estructuras tradicionales del poder. Su vida austera —residiendo en una humilde chacra en lugar del palacio presidencial y donando el 90 % de su salario a causas sociales— no fue un acto de populismo, sino la manifestación genuina de sus convicciones. Esta coherencia entre su discurso y sus acciones le ganó el respeto incluso de quienes no compartían su ideología.

La conexión de Mujica con el pueblo fue excepcional. Su lenguaje directo, desprovisto de tecnicismos y adornos retóricos, estableció un puente de comunicación real con los ciudadanos. No hablaba como político, sino como un campesino que entendía las preocupaciones cotidianas de la gente común. Esta autenticidad rompió las barreras tradicionales entre gobernantes y gobernados.

Para Pepe, la política nunca fue una carrera de ambiciones personales, sino un acto de amor y solidaridad. Su visión

de la izquierda no se limitaba a teorías económicas o posiciones ideológicas rígidas; la entendía como un compromiso ético con la justicia social y la dignidad humana. «Los gobiernos deben ser como los buenos árbitros: que se noten poco y que dejen jugar», solía decir, defendiendo una política al servicio de las personas y no al revés.

Su llamado constante a la ética en la política resonó en una época marcada por la corrupción y el desencanto ciudadano. Mujica criticaba el consumismo desenfrenado y proponía una «sobriedad feliz» como alternativa a un sistema que confunde el tener con el ser. Su filosofía de vida, condensada en frases como «ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de vida en aquello que a uno le gusta», transformó discursos políticos en reflexiones profundas sobre la existencia humana.

Como símbolo de lucha y resistencia, su historia personal — marcada por 13 años de prisión durante la dictadura militar, muchos de ellos en condiciones inhumanas — reforzó su mensaje sobre la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. A pesar de su pasado como guerrillero tupamaro, Mujica fue capaz de evolucionar hacia posiciones que priorizaban el diálogo y la reconciliación nacional.

Hoy, Mujica permanece como un faro de esperanza para movimientos progresistas que buscan reinventarse en tiempos complejos. Su legado invita a la izquierda a reconectar con sus valores fundamentales: la solidaridad, la justicia social y la defensa de los más vulnerables, sin perder la capacidad de adaptarse a nuevos contextos y desafíos. La huella de «Pepe» Mujica perdurará como inspiración para quienes creen que otra política es posible, una basada en principios éticos y genuina preocupación por el bienestar colectivo.

Un legado que trasciende la política tradicional

Su legado trasciende la política tradicional y ofrece un modelo de conducta que debe ser seguido por aquellos que se identifiquen con ideologías de igualdad y justicia social. Uno de los aspectos más destacados de Mujica es su estilo de vida austero y su rechazo a los excesos del poder.

Al optar por vivir en un modesto rancho y donar la mayor parte de su salario presidencial a obras sociales, Mujica convirtió su vida en un testimonio de honestidad y congruencia. En un mundo donde la corrupción y la mala gestión son moneda corriente, su ejemplo resuena con especial fuerza entre aquellos jóvenes que, desencantados, han decidido incluir a la política en su lista de rechazos.

Él fue un político que pudo demostrar que la honestidad y el servicio a la comunidad no son solamente posibles, sino que son un imperativo moral.

La conexión con el pueblo

Mujica también se destacó por su capacidad de conectar con la gente. Sus discursos estaban impregnados de una sensibilidad que invitaba a la reflexión sobre las injusticias sociales. Al abordar temas como la pobreza y la inequidad, Mujica utilizaba un lenguaje sencillo y accesible, desafiando la jerga elitista que a menudo rodea la política.

Este enfoque le permitió establecer un vínculo genuino con el pueblo uruguayo, especialmente aquellas comunidades marginadas que históricamente han sido olvidadas por el sistema político.

La política como acto de amor y solidaridad. Además, Mujica representó una visión de la política como un acto de amor y solidaridad. En un momento en que muchas voces jóvenes en América Latina ven la política como sinónimo de corrupción y egoísmo, Mujica desafió esta percepción.

Transformación social. Predicaba que la política debía ser una herramienta para la transformación social, un medio para alcanzar el bienestar colectivo.

Empoderamiento. Buscaba el empoderamiento de aquellos que menos tienen.

Esperanza renovada. Su convicción de que una sociedad más justa es posible se convierte en una esperanza renovada para muchos.

El llamado a la ética en la política. Su legado también incluye el llamado permanente a la ética en la política. Mujica

abogó por una forma de actuar basada en principios que trascienden las tácticas políticas del día a día. Esta ética debe ser un faro para los futuros líderes de izquierda, quienes deben recordar que el verdadero desafío es mantener la integridad en un entorno donde la corrupción y la manipulación parecen ser la norma.

La ética política de Mujica se basaba en un profundo sentido de responsabilidad hacia los más vulnerables. Para él, la política no era un camino hacia el enriquecimiento personal o el poder, sino una herramienta para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Durante su presidencia, Mujica implementó políticas que reflejaban estos valores éticos: la legalización de la marihuana para combatir el narcotráfico, la despenalización del aborto para proteger la vida de las mujeres, y la aceptación de refugiados sirios cuando muchos países cerraban sus puertas. Estas decisiones, a menudo polémicas, estaban fundamentadas en un sólido marco ético que priorizaba el bienestar humano sobre los cálculos políticos.

Además, su rechazo a los privilegios presidenciales no era mera simbología, sino la manifestación tangible de una ética que rechaza la desigualdad. Al limitar sus gastos personales al 10 % de su salario como presidente, Mujica estableció un precedente de austeridad y compromiso social que desafía directamente la ostentación y el derroche que caracterizan a muchos líderes políticos contemporáneos.

El código de ética de Mujica es un estándar que invita a una reflexión profunda sobre el propósito y la naturaleza de la política. Nos recuerda que la verdadera política de izquierda debe estar arraigada en una preocupación genuina por el bienestar colectivo y no en la promoción de intereses personales o partidistas. En un momento en que la desconfianza hacia los políticos alcanza niveles históricos, el ejemplo ético de Mujica nos ofrece una alternativa esperanzadora: la de una política guiada por valores humanos fundamentales y no por el afán de poder o riqueza.

Mujica como filósofo de la vida

Mujica no solo fue un político, sino también un filósofo de la vida. Sus pensamientos sobre la felicidad y el sentido de la vida han tocado a muchos, enfatizando que la verdadera felicidad no se halla en la acumulación de bienes materiales, sino en la convivencia y el amor por el prójimo.

Esta ideología debe permear en la juventud actual, que busca significados más profundos en su existencia y su interacción con el mundo. El legado de Mujica desafía a la generación joven a redescubrir el valor de la política como un campo para la construcción de sueños colectivos, en lugar de un camino hacia intereses individuales.

Un símbolo de lucha y resistencia

En la memoria colectiva de América Latina, José «Pepe» Mujica se erige como un símbolo de lucha y resistencia. Su vida y su trabajo nos invitan a cuestionar el *statu quo* y a enfrentar las injusticias con valentía, mostrando que un mundo más justo es no solo deseable, sino alcanzable.

Lucha por la justicia. Dedicó su vida a combatir las desigualdades sociales.

Defensa de la equidad. Promovió políticas para reducir la brecha entre ricos y pobres.

Visión global. Abogó por un mundo más justo y sostenible para todos.

La muerte de Mujica marca un hito en la historia de la izquierda, pero también abre un espacio para la reflexión crítica sobre cómo seguir adelante en su camino. Para quienes luchan por un futuro más equitativo, su legado demuestra que la política puede ser un acto de amor y respeto hacia la humanidad.

Un faro de esperanza

En conclusión, la figura de Mujica es un faro de esperanza y un ejemplo concreto de cómo la política puede y debe ser un vehículo para el compromiso social. Su legado ético y moral resuena profundamente en la izquierda contemporánea y ofrece lecciones valiosas para las futuras generaciones de políticos y ciudadanos.

La humildad y austeridad de Mujica, manifestadas en su estilo de vida sencillo mientras ocupaba la presidencia, demostraron al mundo que es posible gobernar desde valores fundamentales como la honestidad y la coherencia. Esta actitud contrastante con la opulencia habitual de muchos líderes políticos ha inspirado a movimientos sociales y progresistas a lo largo de toda América Latina y más allá de sus fronteras.

Su capacidad para comunicarse con el pueblo en un lenguaje claro y directo, desprovisto de tecnicismos o artificios retóricos, construyó puentes de confianza con los ciudadanos. Mujica nos recordó que la verdadera política no se hace desde torres de marfil, sino desde el contacto directo con las realidades y necesidades de quienes más sufren.

Las políticas progresistas implementadas durante su gobierno en Uruguay, como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario y el apoyo a los derechos reproductivos, evidenciaron su visión de una sociedad más libre y respetuosa de las decisiones individuales, estableciendo precedentes importantes para otros países de la región.

El desafío es mantener vivo su espíritu, recordando que la verdadera política es una dedicación al servicio del pueblo y un esfuerzo constante por la construcción de un mundo más justo, equitativo y humano.

La invitación a continuar su lucha

Compromiso con los valores. Seguir el ejemplo de honestidad y austeridad que caracterizó a Mujica durante toda su vida.

Servicio al pueblo. Recordar que la política debe estar al servicio de los más necesitados y no de intereses personales.

Construcción de un mundo mejor. Trabajar incansablemente por un futuro más justo, equitativo y humano para todos.

La partida de Mujica nos deja no solo un vacío, sino una invitación a continuar su lucha y a vivir de acuerdo con los principios que él tanto adoraba. ¡Ha muerto don Pepe! ¡El hombre del pueblo, para el pueblo y siempre a favor del pueblo!

Los efectos de la nueva ley de comisiones a las remesas en México: un análisis integral

La legislación propuesta por el Congreso de Estados Unidos, que contempla imponer una comisión de 5 % a las remesas enviadas por los connacionales a México, genera un amplio debate sobre sus posibles efectos económicos y sociales. Esta medida, impulsada en parte por la administración del presidente Donald Trump, se presenta no solo como un impuesto sobre los ingresos de los migrantes, sino también como una forma indirecta de doble tributación que podría impactar de manera significativa a los destinatarios en México.

Las remesas constituyen la segunda fuente más importante de divisas para México, superadas únicamente por las exportaciones petroleras. En 2022, estas transferencias alcanzaron la cifra récord de más de 58 000 millones de dólares, representando aproximadamente 4 % del PIB mexicano. Para muchas familias, especialmente en estados con alta migración como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estos envíos son fundamentales para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y servicios de salud.

Los defensores de la medida argumentan que este gravamen podría generar ingresos sustanciales para el gobierno estadounidense, estimados en varios miles de millones de dólares anuales, que podrían destinarse a proyectos de infraestructura fronteriza o programas de control migratorio. Sin embargo, los

críticos señalan que esta política podría tener consecuencias contraproducentes, como el aumento de canales informales para el envío de dinero, lo que dificultaría el rastreo de estos flujos financieros y potencialmente facilitaría actividades ilícitas.

Para las comunidades receptoras en México, una reducción en el volumen de remesas debido a este impuesto podría traducirse en una disminución significativa del poder adquisitivo de millones de hogares. Además, dado que gran parte de estos recursos se destinan al consumo local, el impacto se extendería a pequeños negocios y economías regionales que dependen en gran medida de este flujo constante de capital. Los analistas económicos advierten que esta medida podría desencadenar un efecto dominó en las economías locales de regiones con alta dependencia de remesas.

Impacto económico en los destinatarios de remesas

El primer y más inmediato efecto de la implementación de esta comisión sería una reducción en el monto total que las familias en México recibirían. Si consideramos las cifras que apuntan a que en 2024 se enviaron aproximadamente 52 000 millones de dólares en remesas a México, 5 % de comisión significaría que se descontarían alrededor de 3000 millones de dólares.

Esta disminución puede tener consecuencias muy profundas, especialmente en un contexto donde muchas familias dependen de estas remesas para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.

Además, la reducción en el monto de remesas podría exacerbar la pobreza en diversas regiones de México que dependen en gran medida de estos envíos. La combinación de una menor cantidad de dinero disponible con la ya crítica situación económica que enfrenta el país puede resultar en un aumento en la desesperanza y las dificultades de acceso a servicios esenciales.

Reacciones de la comunidad mexicana

Indignación de los migrantes. Derivado de una decisión unilateral como la que propone el gobierno estadounidense, coexisten múltiples reacciones en la comunidad mexicana tanto a

nivel nacional como en el extranjero. Existe un sentido creciente de indignación entre los migrantes mexicanos y sus familias, quienes consideran que este tipo de medidas no solo afecta sus ingresos, sino también su dignidad como trabajadores que contribuyen de forma significativa a la economía estadounidense.

Las organizaciones de migrantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York han comenzado a organizar manifestaciones y campañas informativas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría esta comisión. La Confederación de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (Confemex) ha emitido un comunicado expresando su rotundo rechazo a la medida, calificándola como un ataque directo a las familias transnacionales.

Por otro lado, los líderes comunitarios han intensificado sus esfuerzos de cabildeo con representantes políticos estadounidenses, especialmente en estados con grandes poblaciones de origen mexicano como California, Texas e Illinois. Argumentan que los migrantes no solo envían remesas, sino que también pagan impuestos y generan empleo en Estados Unidos, contribuyendo sustancialmente al crecimiento económico del país. La comunidad migrante mexicana ha expresado su preocupación ante una medida que consideran injusta y discriminatoria, afectando directamente a millones de familias que dependen de estos recursos para subsistir.

Respuesta en medios sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio vital para la expresión del descontento colectivo. *Hashtags* como #NoALaComisiónDeRemesas y #RespetoDignidadMigrante han ganado popularidad, generando una conversación global sobre los derechos de los migrantes y la importancia de las remesas para el desarrollo de las comunidades de origen.

Testimonios de familias afectadas circulan ampliamente en plataformas digitales, humanizando el impacto de estas políticas y movilizando la solidaridad de diversos sectores sociales. «Este dinero no es un lujo, es el sustento de mis padres ancianos», comentó María Rodríguez, trabajadora doméstica en Houston, en un video que alcanzó miles de visualizaciones.

Además, artistas e *influencers* de origen mexicano han utilizado sus plataformas para amplificar estas voces y presionar por un diálogo más justo sobre las políticas migratorias y económicas entre ambos países.

Respuesta del gobierno mexicano. Desde el lado del gobierno mexicano, la respuesta puede variar desde la condena verbal hasta las negociaciones diplomáticas con la intención de mitigar los efectos de esta legislación. Las autoridades mexicanas han mostrado preocupación por el impacto que esta medida podría tener en millones de familias que dependen de estos recursos para su subsistencia diaria.

Negociaciones diplomáticas. El Gobierno de México posee algunas herramientas para hacer frente a esta nueva realidad. Uno de los enfoques sería establecer acuerdos bilaterales que generen protección a los migrantes y sus familias, abogando ante la administración estadounidense por la eliminación de esta medida. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha iniciado ya conversaciones con representantes del Departamento de Estado para expresar la postura oficial mexicana.

Desarrollo económico local. Promover el desarrollo económico local podría ser una estrategia a largo plazo para reducir la dependencia de las remesas, a través de políticas que inviertan en infraestructura y generación de empleo en el país. Los programas como Sembrando Vida y otros enfocados en el desarrollo regional buscan crear alternativas económicas en las zonas con mayor emigración.

Protección consular. La red consular mexicana en Estados Unidos ha reforzado sus servicios de asesoría financiera y legal para los connacionales. Se han establecido ventanillas de orientación específica sobre alternativas para el envío de remesas que minimicen el impacto de las nuevas comisiones, además de brindar información sobre sus derechos como remitentes.

Campañas informativas. El gobierno ha lanzado campañas de comunicación dirigidas tanto a los remitentes como a los receptores de remesas. Estas iniciativas buscan educar sobre métodos alternativos de envío de dinero, opciones de inclusión

financiera y formas de optimizar el uso de los recursos recibidos para minimizar el impacto de la reducción en los montos.

Recursos legales internacionales. México está evaluando la posibilidad de presentar recursos ante organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio o tribunales de comercio establecidos en el T-MEC, argumentando que estas comisiones podrían constituir una barrera no arancelaria al flujo de capitales entre ambos países, violando potencialmente acuerdos comerciales vigentes.

Esta respuesta multidimensional refleja la complejidad del desafío que representa la nueva comisión a las remesas, requiriendo acciones tanto inmediatas como estructurales para proteger a las familias mexicanas dependientes de estos recursos financieros vitales.

Alternativas para las familias receptoras

Educación financiera. Para hacer frente a la reducción en remesas, tanto individuos como familias receptoras pueden explorar alternativas y estrategias de adaptación. Por un lado, fomentar la educación financiera puede ser una herramienta valiosa para que las familias aprendan a gestionar mejor sus recursos.

Capacitación laboral. Por otro lado, el gobierno mexicano puede considerar el desarrollo de programas que ofrezcan capacitación laboral, con el fin de que las familias puedan diversificar sus fuentes de ingreso.

Apoyo comunitario. Es fundamental también que las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil se movilicen para brindar apoyo a las familias afectadas, ya sea a través de asistencia social o programas que fomenten el autoempleo.

La colaboración entre diferentes sectores puede generar sinergias necesarias para enfrentar de manera colectiva este reto.

Impacto en las economías locales. Las remesas no solo benefician a las familias receptoras directas, sino que también tienen un efecto multiplicador en las economías locales. Cuando las familias gastan el dinero recibido en negocios locales, contribuyen a la actividad económica de sus comunidades.

Comercio local. Los pequeños negocios en comunidades con alta recepción de remesas podrían ver una disminución en sus ventas, afectando la economía local en su conjunto.

Servicios básicos. El acceso a servicios como educación y salud privada, que muchas familias financian con remesas, podría verse comprometido.

Construcción. Un sector particularmente afectado sería el de la construcción, ya que muchas familias utilizan las remesas para mejorar o construir viviendas.

Consecuencias a largo plazo. Si la medida se implementa y mantiene a largo plazo, podría generar cambios estructurales en la relación económica entre México y Estados Unidos. Entre las posibles consecuencias se encuentran:

- Aumento de la migración irregular como respuesta a la necesidad de enviar más dinero.
- Búsqueda de canales alternativos para el envío de remesas, posiblemente no regulados.
- Deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
- Mayor presión sobre los programas sociales en México para compensar la reducción de ingresos.

Estrategias de mitigación

Corto plazo. Negociaciones diplomáticas inmediatas para intentar revertir la medida o reducir el porcentaje de la comisión.

Mediano plazo. Desarrollo de programas de apoyo específicos para las familias más dependientes de remesas y promoción de alternativas financieras con menores costos de transacción.

Largo plazo. Implementación de políticas de desarrollo económico local que reduzcan la dependencia de las remesas y fortalezcan la economía nacional.

La implementación de estas estrategias requiere un enfoque coordinado entre diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo de minimizar el impacto negativo en las familias mexicanas.

Visión prospectiva

La propuesta de imponer 5 % de comisión sobre las remesas enviadas por los mexicanos en Estados Unidos no solo representa un reto económico inmediato, sino que también plantea cuestiones más profundas sobre la equidad y el respeto hacia la labor de los migrantes. Mientras que algunos sectores pueden verse beneficiados o inmovilizadores ante esta decisión, las familias receptoras en México podrían enfrentar consecuencias severas en su calidad de vida. Considerando que aproximadamente 1.6 millones de hogares mexicanos dependen directamente de estos ingresos, el impacto podría afectar a más de 6 millones de personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.

Los expertos proyectan que, de implementarse esta medida, podríamos observar una disminución de 3 a 5 % en el consumo doméstico de las regiones más dependientes de remesas, lo que a su vez desencadenaría efectos secundarios en comercios locales, empleo y desarrollo comunitario. Adicionalmente, el desplazamiento hacia canales informales de envío podría incrementar los riesgos de fraude y desprotección para los remitentes y receptores por igual.

Para realmente abordar este asunto, es fundamental que tanto el gobierno mexicano como la comunidad migrante mantengan una voz fuerte y unida. A través de negociaciones diplomáticas efectivas, iniciativas locales y el empoderamiento de las familias, se pueden mitigar los efectos negativos de esta medida y encontrar formas de avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible. La creación de una mesa binacional de diálogo sobre remesas, con participación de organizaciones de migrantes, expertos financieros y representantes gubernamentales, podría constituir un primer paso hacia soluciones consensuadas que protejan estos flujos vitales.

Las instituciones financieras mexicanas también tienen un papel crucial en este escenario, desarrollando instrumentos y servicios que puedan compensar parcialmente el impacto de las comisiones, como programas de lealtad, beneficios adicionales para receptores de remesas o esquemas de inversión pro-

ductiva que maximicen el valor de cada dólar recibido. La innovación tecnológica, incluyendo plataformas basadas en *block-chain* y *fintech* especializadas, podría revolucionar el mercado de remesas en los próximos años, potencialmente reduciendo costos operativos.

En un mundo interconectado, las decisiones de un país pueden tener repercusiones en otros, y en este caso, la búsqueda de soluciones conjuntas y la defensa del bienestar de las familias mexicanas serán cruciales para enfrentar los desafíos que están por venir. El futuro de las remesas no solo depende de políticas gubernamentales, sino también de la capacidad de adaptación y resiliencia de las comunidades migrantes, que históricamente han demostrado una extraordinaria habilidad para superar obstáculos y crear caminos alternativos cuando las circunstancias lo exigen.

Mirando hacia el horizonte 2025-2030, es posible que esta coyuntura acelere transformaciones más profundas en la estructura económica de las regiones receptoras de remesas, impulsando iniciativas de desarrollo local que reduzcan gradualmente la dependencia de estos flujos externos. Las políticas de inclusión financiera, la capacitación en gestión de recursos y el fomento de proyectos productivos sostenibles constituyen áreas de oportunidad que podrían convertir este desafío en un catalizador de cambios positivos a largo plazo.

El cambio climático no da tregua: México se calienta más que el promedio del planeta

En un entorno global afectado por el cambio climático, México se destaca rebasando por mucho los parámetros establecidos en París de 1.5 para rebasar la media mundial de 2.3 con 3.2 derivado de un 2024 con las más altas temperaturas de la historia.

Esta situación alarmante posiciona a México como uno de los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global en Latinoamérica. Los especialistas han observado que el ritmo de calentamiento en el territorio mexicano se está acelerando, especialmente en las zonas costeras y en la región norte del país.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en los últimos 60 años la temperatura media en México ha aumentado aproximadamente 1.5 °C, con proyecciones que indican que este incremento podría llegar hasta 4.5 °C para finales de siglo si no se toman medidas drásticas. Este fenómeno está provocando alteraciones significativas en los patrones de lluvia, intensificación de sequías, aumento del nivel del mar y eventos meteorológicos extremos más frecuentes y devastadores.

Las comunidades rurales e indígenas, así como las ciudades costeras densamente pobladas, son particularmente susceptibles a estos cambios, lo que plantea desafíos importantes

para la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud pública en todo el país.

México supera los límites del Acuerdo de París

El Acuerdo de París estableció como objetivo mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1.5 °C. Sin embargo, México ha superado significativamente este umbral, alcanzando un incremento de 3.2 grados, muy por encima de la media mundial que se sitúa en 2.3.

Esta situación coloca a México en una posición crítica frente al cambio climático, evidenciando que el calentamiento en el territorio mexicano avanza a un ritmo más acelerado que el promedio del planeta.

Las causas de este acelerado calentamiento en México son múltiples. Por un lado, la ubicación geográfica del país entre dos océanos y su diversidad de ecosistemas lo hacen particularmente vulnerable. Por otro lado, factores como la deforestación, el crecimiento urbano descontrolado y la dependencia de combustibles fósiles han exacerbado el problema.

Según reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), México enfrenta riesgos severos en distintos frentes: escasez de agua en el norte, inundaciones en el sureste, pérdida de biodiversidad en ecosistemas únicos como arrecifes y selvas, así como impactos en la producción agrícola que amenazan la seguridad alimentaria.

Los compromisos adquiridos por México en el marco del Acuerdo de París incluían reducir 22 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Sin embargo, los datos actuales sugieren que el país no solo está lejos de cumplir estas metas, sino que la brecha continúa ampliándose, lo que requiere una revisión urgente de las políticas climáticas nacionales y un fortalecimiento de la cooperación internacional.

2024: El año de las temperaturas récord

El año 2024 ha marcado un hito preocupante en la historia climática de México, registrando las temperaturas más altas jamás documentadas. Este fenómeno no es aislado, sino parte de una

tendencia creciente que refleja la intensificación del cambio climático en el país.

Tabasco: Una de las regiones más vulnerables. Entre todos los estados mexicanos, Tabasco destaca por su particular vulnerabilidad ante el cambio climático. Sus características geográficas, principalmente sus tierras bajas, lo convierten en una de las regiones más amenazadas por este fenómeno global.

El aumento del nivel del mar, combinado con patrones de precipitación más intensos, pone a Tabasco en una situación de alto riesgo frente a inundaciones y otros eventos climáticos extremos que podrían tener consecuencias devastadoras para su población y sus ecosistemas.

Con una altitud promedio de apenas 10 metros sobre el nivel del mar y un territorio donde convergen importantes sistemas fluviales como los ríos Grijalva y Usumacinta, Tabasco alberga 35 % de los recursos hídricos del país. Esta riqueza acuífera, que históricamente ha sido su fortaleza, ahora representa su mayor vulnerabilidad.

Estudios recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señalan que Tabasco podría perder hasta 10 % de su territorio costero para 2050 debido a la erosión y el aumento del nivel del mar. Localidades como Frontera, Paraíso y Sánchez Magallanes ya experimentan los primeros efectos de este fenómeno con la pérdida gradual de sus playas y manglares.

Las inundaciones, que tradicionalmente han formado parte de la vida tabasqueña, se han intensificado dramáticamente en las últimas décadas. La inundación histórica de 2007, cuando 80 % del estado quedó bajo el agua, ofreció un anticipo alarmante de lo que podría convertirse en la nueva normalidad. Más recientemente, en 2020, las intensas lluvias dejaron más de 300 000 damnificados y pérdidas económicas superiores a los 10 000 millones de pesos.

La biodiversidad única de Tabasco también se encuentra amenazada. Los Pantanos de Centla, declarados Reserva de la Biosfera y sitio Ramsar de importancia internacional, albergan especies endémicas que podrían desaparecer ante cambios en la salinidad y la temperatura del agua. Los manglares, funda-

mentales como barrera natural contra huracanes y tormentas, se reducen a un ritmo de 2.5 % anual.

El sector agrícola, pilar de la economía local, enfrenta retos sin precedentes con la salinización de suelos, sequías prolongadas alternadas con lluvias torrenciales, y la proliferación de plagas antes inexistentes en la región. Los cultivos tradicionales de cacao, plátano y caña de azúcar muestran rendimientos decrecientes, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias tabasqueñas.

Impactos del cambio climático en México

Sequías prolongadas. Afectando la producción agrícola y el acceso al agua potable en diversas regiones del país.

Fenómenos meteorológicos extremos. Aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes, tormentas tropicales e inundaciones.

Olas de calor. Incremento en la duración e intensidad de las olas de calor, con graves consecuencias para la salud pública.

Pérdida de biodiversidad. Alteración de ecosistemas y hábitats naturales, poniendo en riesgo numerosas especies endémicas.

Consecuencias socioeconómicas del calentamiento acelerado

Sector agrícola. La agricultura mexicana enfrenta desafíos sin precedentes debido a los cambios en los patrones de lluvia y las temperaturas extremas. Los cultivos tradicionales se ven afectados, comprometiendo la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de millones de agricultores.

Recursos hídricos. La disponibilidad de agua se ve comprometida por sequías más prolongadas y la sobreexplotación de acuíferos. Las disputas por el acceso al agua podrían intensificarse, especialmente en regiones áridas y semiáridas del país.

Salud pública. El aumento de las temperaturas favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y el zika. Además, las olas de calor incrementan los casos de golpe de calor y deshidratación, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.

El caso específico de Tabasco: tierras bajas en peligro

Tabasco, con su geografía predominantemente plana y sus extensas zonas de tierras bajas, enfrenta riesgos particulares ante el cambio climático. El estado, conocido como «el Edén de México» por su abundancia de agua y vegetación, podría ver transformado su paisaje de manera dramática.

Aumento del nivel del mar. Las proyecciones indican que el incremento del nivel del mar podría inundar permanentemente extensas áreas costeras de Tabasco, desplazando a comunidades enteras y alterando ecosistemas costeros vitales.

Inundaciones más frecuentes. Los patrones de precipitación más intensos, combinados con la topografía plana del estado, aumentan el riesgo de inundaciones catastróficas que ya han afectado históricamente a la región.

Intrusión salina. El avance del agua de mar hacia los acuíferos de agua dulce amenaza el suministro de agua potable y la agricultura en zonas costeras, comprometiendo la seguridad alimentaria local.

¿Qué podemos hacer frente al cambio climático en México?

Políticas públicas ambiciosas. Implementar y fortalecer políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, alineadas con los compromisos internacionales pero adaptadas a la realidad mexicana.

Transición energética. Acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Conservación de ecosistemas. Proteger y restaurar bosques, manglares y otros ecosistemas que actúan como sumideros de carbono y barreras naturales contra eventos climáticos extremos.

Educación y concientización. Promover la educación ambiental y la concientización sobre el cambio climático en todos los niveles educativos y sectores de la sociedad.

Soluciones específicas para Tabasco

Infraestructura resiliente. Desarrollar infraestructura adaptada a las condiciones climáticas cambiantes, incluyendo sistemas de drenaje mejorados, barreras contra inundaciones y viviendas elevadas en zonas propensas a inundaciones.

Restauración de manglares. Recuperar y proteger los ecosistemas de manglar que actúan como barreras naturales contra tormentas e inundaciones, además de ser importantes sumideros de carbono.

Adaptación agrícola. Implementar técnicas agrícolas resilientes al clima, incluyendo la diversificación de cultivos, sistemas agroforestales y prácticas de conservación de suelo y agua.

Fortalecimiento comunitario. Desarrollar capacidades locales para la gestión de riesgos climáticos, incluyendo sistemas de alerta temprana y planes de evacuación comunitarios.

Un llamado a la acción colectiva. El cambio climático representa uno de los mayores desafíos que enfrenta México en el siglo XXI. Con un calentamiento que supera significativamente la media mundial, alcanzando los 3.2 grados frente a los 2.3 del promedio global y muy por encima del objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París, la situación exige acciones inmediatas y contundentes.

Enfrentar este desafío requiere un esfuerzo coordinado entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. Solo mediante la acción colectiva y decidida podremos proteger a las regiones más vulnerables como Tabasco y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones de mexicanos.

China y Estados Unidos llegan a un acuerdo para la reducción de aranceles

China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reducir los aranceles comerciales, este último comprometiéndose a una reducción de 30 % y China de 10 % en sus respectivas tarifas. Este pacto, que marca un punto de inflexión en las tensas relaciones comerciales entre ambas potencias, se implementará gradualmente durante los tres próximos meses.

El acuerdo abarca principalmente sectores estratégicos como la tecnología, la agricultura y la manufactura, áreas que han sido el epicentro de la guerra comercial iniciada en 2018. Según fuentes oficiales, la primera fase de reducciones comenzará el próximo trimestre, priorizando productos básicos y bienes de consumo.

Los representantes comerciales de ambos países han señalado que este es solo el primer paso de un proceso más amplio para normalizar las relaciones económicas bilaterales. El pacto incluye también compromisos para abordar preocupaciones sobre propiedad intelectual y transferencia tecnológica, temas que han sido puntos de fricción constantes entre Washington y Pekín.

Detalles del acuerdo arancelario

Reducción por parte de Estados Unidos. La administración Trump ha acordado reducir sus aranceles en 30 % sobre pro-

ductos chinos, lo que representa un cambio significativo en la política comercial estadounidense hacia China. Esta reducción afectará principalmente a sectores como la electrónica, textiles y bienes manufacturados, que han sido fuertemente gravados desde 2018.

La implementación se realizará en tres fases durante los próximos 18 meses, comenzando con una reducción inicial de 10 % en el primer trimestre de 2024. Los productos de consumo diario serán los primeros beneficiados, seguidos por componentes industriales y tecnológicos en fases posteriores.

Reducción por parte de China. Por su parte, la nación asiática se ha comprometido a una reducción de 10 % en sus aranceles sobre productos estadounidenses, mostrando una disposición más moderada pero igualmente significativa. Los sectores agrícola y automotor serán los principales beneficiados, incluyendo una reducción sustancial en aranceles para soja, maíz, carne y vehículos de fabricación americana.

El gobierno chino ha anunciado que su plan de implementación será ligeramente más acelerado, con reducciones que comenzarán dentro de 60 días tras la firma oficial del acuerdo. Además, Pekín ha prometido revisar sus políticas de importación para facilitar la entrada de ciertos productos estadounidenses previamente restringidos.

Este acuerdo marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, tras años de tensiones y medidas proteccionistas mutuas. Los negociadores de ambos países han trabajado durante más de ocho meses para alcanzar estos términos, superando numerosos obstáculos diplomáticos y presiones políticas internas.

El pacto incluye también mecanismos de verificación y cumplimiento, con reuniones trimestrales entre representantes comerciales para evaluar el progreso y resolver posibles disputas. Analistas internacionales consideran que este enfoque gradual y supervisado proporciona mayor solidez al acuerdo, aunque advierten que su éxito dependerá en gran medida de la estabilidad política en ambos países.

Antecedentes de la guerra comercial

Inicio. La guerra comercial comenzó en 2018 cuando la administración Trump impuso aranceles a productos chinos, alegando prácticas comerciales desleales y robo de propiedad intelectual.

Escalada de tensiones. Durante los años siguientes, ambos países impusieron sucesivas rondas de aranceles, afectando a cientos de miles de millones de dólares en comercio bilateral.

Acuerdo actual. Tras años de negociaciones intermitentes, ambas potencias han logrado este acuerdo que reduce significativamente las barreras comerciales.

Impacto económico global

Estabilización de los mercados internacionales. La reducción de aranceles entre las dos mayores economías del mundo promete estabilizar los mercados internacionales y reducir la incertidumbre que ha afectado al comercio global.

Reducción de precios para consumidores. Los consumidores de ambos países podrían beneficiarse de precios más bajos en productos importados, al eliminarse parte de los sobrecostos arancelarios.

Reactivación de cadenas de suministro. Las cadenas de suministro globales, que se habían visto alteradas por la guerra comercial, podrían normalizarse, beneficiando a industrias de todo el mundo.

Sectores más beneficiados. Los sectores tecnológico y agrícola se perfilan como los principales beneficiarios del acuerdo, seguidos por la industria automotriz, textil y energética. Estos sectores habían sido especialmente afectados por los aranceles impuestos durante la guerra comercial.

Reacciones de los mercados financieros

Bolsas asiáticas. Los mercados bursátiles asiáticos han reaccionado con fuertes alzas tras el anuncio del acuerdo, con el índice Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Composite registrando ganancias significativas.

Mercados occidentales. Wall Street y las principales bolsas europeas también han mostrado un comportamiento positivo, reflejando el optimismo de los inversores ante la perspectiva de una reducción de las tensiones comerciales.

La reacción positiva de los mercados financieros globales subraya la importancia de este acuerdo para la estabilidad económica mundial y la confianza de los inversores.

Perspectivas para las relaciones diplomáticas

Reducción de tensiones geopolíticas. El acuerdo comercial podría contribuir a reducir las tensiones geopolíticas entre ambas potencias, que se han intensificado en los últimos años en diversos frentes.

Cooperación en otros ámbitos. La distensión comercial podría abrir la puerta a una mayor cooperación en otros ámbitos como el cambio climático, la seguridad internacional o la salud global.

Competencia estratégica. A pesar del acuerdo, la competencia estratégica entre ambas potencias probablemente continuará en áreas como la tecnología, la influencia regional y los modelos de gobernanza global.

Aunque el acuerdo representa un avance significativo, los analistas advierten que las relaciones entre China y Estados Unidos seguirán siendo complejas y marcadas por la competencia en múltiples frentes.

Desafíos para la implementación del acuerdo

Ratificación interna. Ambos países deberán completar sus respectivos procesos internos para ratificar e implementar el acuerdo, lo que podría enfrentar resistencias políticas.

Verificación del cumplimiento. Establecer mecanismos efectivos para verificar el cumplimiento de los compromisos por ambas partes será crucial para la sostenibilidad del acuerdo.

Presiones de sectores afectados. Algunos sectores económicos que se beneficiaban de la protección arancelaria podrían ejercer presión para mantener ciertas barreras comerciales.

Contexto geopolítico cambiante. La evolución del con-

texto geopolítico global podría afectar la implementación y el mantenimiento del acuerdo a largo plazo.

Opiniones de expertos económicos

Perspectiva optimista. Este acuerdo representa un paso crucial para la estabilización de la economía global. La reducción de aranceles entre las dos mayores economías del mundo tendrá efectos positivos en cascada para el comercio internacional.

Visión cautelosa. Aunque el acuerdo es positivo, debemos ser cautelosos. Las reducciones arancelarias son asimétricas y quedan muchos temas pendientes en la relación económica bilateral.

Análisis de largo plazo. El verdadero impacto de este acuerdo se verá en los próximos años. Dependerá de su implementación efectiva y de si sirve como base para abordar otros temas comerciales pendientes.

Conclusiones y perspectivas futuras

Paso positivo. El acuerdo representa un avance significativo en la normalización de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

Beneficios económicos. La reducción de aranceles promete estimular el comercio bilateral y contribuir a la recuperación económica global.

Competencia estratégica. A pesar del acuerdo comercial, la rivalidad estratégica entre ambas potencias continuará en múltiples ámbitos.

Vigilancia continua. Será necesario un seguimiento cercano de la implementación del acuerdo y sus efectos reales en la economía global.

El acuerdo de reducción de aranceles entre China y Estados Unidos marca un punto de inflexión en la guerra comercial que ha afectado a la economía global en los últimos años. Aunque representa un avance importante, los analistas coinciden en que las relaciones entre ambas potencias seguirán siendo complejas y marcadas por la competencia estratégica. El impacto real del acuerdo dependerá de su implementación efectiva y de la evolución del contexto geopolítico global.

Sheinbaum llama a movilizaciones si EE. UU. avanza con impuesto a remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha convocado a la población mexicana a organizarse y movilizarse en caso de que Estados Unidos apruebe la imposición de un impuesto a las remesas enviadas por los migrantes a sus familias en México. Esta medida, propuesta por el presidente electo Donald Trump, representaría un duro golpe para millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos para su subsistencia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó la propuesta como «discriminatoria y violatoria de los derechos de los migrantes», señalando que constituiría una doble tributación injusta, ya que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos en ese país. «No podemos permitir que se castigue económicamente a quienes sostienen a sus familias con el fruto de su trabajo honesto», enfatizó.

El gobierno mexicano estima que el impuesto propuesto podría afectar a más de 1.6 millones de hogares que reciben remesas regularmente, reduciendo significativamente su poder adquisitivo y agravando las condiciones de vulnerabilidad económica. Las remesas representan la segunda fuente de divisas más importante para México, superando incluso los ingresos por turismo.

La estrategia de movilización ciudadana incluiría manifestaciones pacíficas frente a consulados y embajadas estadounidenses, campañas de comunicación para visibilizar el impacto negativo de la medida, y la coordinación de esfuerzos con organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos en ambos lados de la frontera. Sheinbaum también ha hecho un llamado a los connacionales a comunicarse directamente con representantes políticos estadounidenses para expresar su rechazo a la propuesta.

«Defenderemos con firmeza los derechos de nuestros migrantes y sus familias. México no permanecerá pasivo ante políticas que buscan criminalizar la migración y castigar económicamente a nuestros compatriotas», concluyó la mandataria, quien ha instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores a preparar una respuesta diplomática contundente.

Vale señalar que todavía no ha sido aprobada esta iniciativa. Si seis republicanos votan en contra en el Senado, esta ley puede ir a la congeladora. Por eso la convocatoria de Sheinbaum de enviar cartas y correos electrónicos a sus representantes en el Congreso para evitar que salga adelante esta medida que significaría una pérdida superior a los 2000 millones de dólares.

La propuesta discriminatoria de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como discriminatoria e injusta la propuesta del presidente Donald Trump de establecer un impuesto a las remesas que, a juicio de la mandataria mexicana, lastimará gravemente la economía de muchas familias. Durante su intervención, Sheinbaum destacó que esta iniciativa representa una clara violación a los derechos de los migrantes mexicanos que trabajan honestamente en Estados Unidos.

La propuesta de Trump busca imponer un gravamen especial a las transferencias de dinero que los migrantes envían a sus familias en México, lo que según analistas económicos podría reducir hasta en 20 % los recursos que reciben millones de hogares mexicanos. Estos fondos son fundamentales para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y servicios de salud en comunidades con altos índices de vulnerabilidad económica.

«Esta medida no solo es discriminatoria por enfocarse específicamente en la comunidad mexicana, sino que ignora la enorme contribución económica que nuestros connacionales hacen a la economía estadounidense», señaló Sheinbaum, quien agregó que el gobierno mexicano utilizará todos los recursos diplomáticos y legales a su alcance para proteger los intereses de las familias afectadas por esta potencial política.

Vale señalar que al momento todavía no está aprobado este impuesto a los aranceles y que pudiera darse el caso de que si seis legisladores republicanos votan en contra esta iniciativa iría al congelador por buen tiempo. Por ello, tiene lógica el exhorto de la presidenta de que los migrantes vecindados en el país vecino presionen a sus representantes para bloquear esta medida totalmente discriminatoria y con un objetivo muy claro, seguir castigando a los migrantes.

Doble tributación: una medida injusta

Sheinbaum argumentó que esta medida constituye una doble tributación, lo que la convierte en una política discriminatoria que afectará directamente el bienestar económico de las familias que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

La presidenta explicó que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos sobre sus ingresos en territorio estadounidense, por lo que gravarlos nuevamente por enviar parte de ese dinero a sus familiares representa una clara injusticia fiscal. «Nuestros connacionales cumplen con todas sus obligaciones tributarias en el país donde trabajan. Imponerles un segundo gravamen por el simple hecho de apoyar a sus familias es completamente injusto y viola principios básicos de equidad fiscal», señaló durante su intervención.

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, esta doble tributación podría reducir hasta 15 % el valor neto de las remesas, lo que representa aproximadamente 6000 millones de dólares anuales que dejarían de llegar a las comunidades mexicanas. Este impacto sería particularmente severo en estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca, donde las remesas constituyen un pilar fundamental de la economía local.

Expertos en derecho internacional consultados por el gobierno mexicano coinciden en que esta propuesta podría contravenir diversos acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, incluido el T-MEC, así como principios establecidos en convenios internacionales para evitar la doble imposición fiscal. Sheinbaum ha instruido a un equipo de especialistas para analizar las posibles vías legales para impugnar esta medida en caso de que avance en el proceso legislativo estadounidense.

Impacto en la economía familiar

La presidenta mexicana expresó su preocupación por el impacto que tendría este impuesto en la economía de muchas familias mexicanas que dependen de las remesas como fuente principal de ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Según datos oficiales, más de 1.6 millones de hogares en México reciben remesas regularmente, lo que representa aproximadamente 5 % del total de hogares en el país. Para muchas de estas familias, especialmente en comunidades rurales, estos envíos constituyen hasta 80 % de sus ingresos mensuales, destinándose principalmente a gastos de alimentación, educación, salud y mejoras en vivienda.

«No estamos hablando de lujos o caprichos, enfatizó Sheinbaum, sino de recursos que permiten a niños asistir a la escuela, a ancianos recibir medicamentos y a familias enteras tener un techo digno». La mandataria presentó testimonios de familias en estados como Zacatecas y Guerrero, donde las remesas han permitido el desarrollo de pequeños negocios que generan empleo local y contribuyen a frenar la migración.

Un estudio reciente del Banco de México revela que, por cada peso recibido en remesas, se generan 1.7 pesos adicionales en la economía local a través del consumo y la inversión. Esto significa que el impuesto propuesto no solo afectaría directamente a las familias receptoras, sino que tendría un efecto multiplicador negativo en las economías regionales, potencialmente incrementando los índices de pobreza en zonas ya vulnerables.

«Estamos ante una medida que podría revertir años de progreso en la reducción de la desigualdad en nuestras comu-

nidades más necesitadas», concluyó la presidenta, quien solicitó a la Secretaría de Economía elaborar un informe detallado sobre el impacto potencial por región para presentarlo ante organismos internacionales.

Estrategia de movilización ciudadana

La presidenta destacó la importancia de una movilización organizada y coordinada entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos. «Es fundamental que nuestros compatriotas se unan, que participen activamente en las asociaciones comunitarias y que hagan oír su voz de manera pacífica pero contundente», señaló durante su conferencia.

Además, Sheinbaum propuso la creación de comités de defensa en cada ciudad con presencia significativa de mexicanos, los cuales tendrían la función de coordinar las acciones de protesta, difundir información veraz sobre el impacto del impuesto y facilitar asesoría legal a quienes pudieran verse afectados. La estrategia también contempla el uso de redes sociales para amplificar el mensaje y generar conciencia tanto en México como en Estados Unidos.

El gobierno mexicano, a través de la red consular, pondrá a disposición recursos informativos y apoyo logístico para estas movilizaciones. «No estamos solos en esta lucha. Contamos con aliados en organizaciones civiles, empresariales y políticas estadounidenses que también reconocen lo injusto de esta propuesta», afirmó la mandataria, quien enfatizó que la resistencia debe mantenerse dentro del marco legal y democrático.

Llamado a la acción directa

La presidenta hizo un llamado específico a las movilizaciones si Estados Unidos decide avanzar con la implementación del impuesto a las remesas, convocando a la comunidad mexicana y sus aliados a organizarse en defensa de sus derechos económicos.

«No vamos a quedarnos con los brazos cruzados ante medidas que afectan directamente el sustento de millones de familias mexicanas», enfatizó Sheinbaum durante su intervención.

«Si es necesario, saldremos a las calles de manera pacífica pero contundente para defender el fruto del trabajo honesto de nuestros compatriotas».

Sheinbaum destacó la importancia de involucrar a figuras públicas, artistas y deportistas de origen mexicano para amplificar el mensaje. «Necesitamos que todas las voces se unan, que todos los sectores participen en esta defensa de lo que es justo», señaló, añadiendo que ya se han establecido contactos con diversas personalidades dispuestas a sumarse a la causa.

La presidenta también anunció la próxima publicación de un calendario de acciones coordinadas que incluirá fechas específicas para movilizaciones simultáneas en diversas ciudades de Estados Unidos y México, buscando generar un impacto mediático que evidencie el rechazo generalizado a la medida impositiva propuesta por la administración estadounidense.

Comunicación con representantes políticos

Sheinbaum enfatizó la importancia de que los inmigrantes mexicanos se comuniquen directamente con sus representantes populares a través de cartas y correos electrónicos, utilizando los canales democráticos disponibles para hacer escuchar su voz.

«Es fundamental que cada uno de nuestros compatriotas identifique a sus representantes en el Congreso estadounidense y les haga saber su postura sobre este injusto impuesto», indicó la presidenta, destacando que esta comunicación directa tiene un impacto significativo en las decisiones políticas.

El gobierno mexicano, a través de sus consulados, proporcionará información detallada sobre cómo contactar a senadores y congresistas según el distrito de residencia, así como modelos de cartas que pueden ser adaptadas por los migrantes. La presidenta sugirió incluir en estas comunicaciones testimonios personales sobre el uso de las remesas y cómo el impuesto afectaría directamente a familias vulnerables en México.

Además, Sheinbaum recomendó a la comunidad mexicana solicitar reuniones con los equipos de trabajo de sus repre-

sentantes, participar en foros públicos donde estos asistan y utilizar las redes sociales para visibilizar el tema. «Cuando un legislador recibe cientos o miles de mensajes sobre un mismo asunto, se ve obligado a prestarle atención», explicó.

La estrategia también contempla la creación de un sistema de seguimiento para documentar las respuestas de los legisladores estadounidenses y coordinar acciones adicionales cuando sea necesario. «Esta batalla se ganará con la fuerza de nuestras voces unidas y el uso efectivo de los mecanismos democráticos», concluyó Sheinbaum.

La defensa de los derechos de los migrantes

Las estrategias propuestas por la presidenta buscan defender los derechos de los trabajadores migrantes mexicanos y proteger el flujo de remesas que constituye una fuente vital de ingresos para millones de familias en México.

Sheinbaum ha destacado que los migrantes mexicanos en Estados Unidos no solo tienen derechos laborales, sino también derechos civiles que deben ser protegidos independientemente de su estatus migratorio. Su administración ha comenzado a fortalecer la red consular mexicana para ofrecer mayor asesoría legal y apoyo directo a quienes enfrentan discriminación o violaciones a sus derechos fundamentales.

El gobierno mexicano está trabajando con organizaciones de derechos humanos internacionales para documentar casos de abusos y presentar recursos legales cuando sea necesario. «Nuestros compatriotas contribuyen significativamente a la economía estadounidense y merecen un trato digno y respetuoso», enfatizó la presidenta durante su anuncio.

En cuanto a las remesas, la mandataria presentó datos que demuestran que estos envíos representan más del 4 % del PIB mexicano, superando incluso los ingresos por exportaciones petroleras. La defensa de estos derechos se articula no solo como una cuestión diplomática, sino como un asunto de justicia social y económica que afecta directamente a millones de familias en ambos lados de la frontera. Por ello, la estrategia integral incluye componentes legales, políticos, sociales y educativos para pro-

teger tanto a los migrantes como al importante flujo económico que generan.

Coordinación de esfuerzos binacionales

La respuesta de Sheinbaum incluye la coordinación de esfuerzos entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos y las autoridades mexicanas para crear una estrategia integral que contrarreste los efectos negativos de esta política arancelaria.

Esta cooperación binacional contempla la creación de comités de defensa en ciudades con alta población mexicana, donde líderes comunitarios trabajarán directamente con funcionarios consulares para organizar foros informativos, asesoría legal y campañas de concientización sobre los impactos del impuesto a las remesas.

El gobierno mexicano ha anunciado la asignación de recursos adicionales para fortalecer la red consular, específicamente para ampliar los servicios de protección y asesoría a connacionales. Estos recursos permitirán la contratación de más asesores legales especializados en derecho migratorio y fiscal estadounidense.

Además, se están estableciendo canales de comunicación directa entre las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda con organizaciones de migrantes para coordinar acciones conjuntas y compartir información estratégica. «La unidad entre nuestros compatriotas en Estados Unidos y las instituciones mexicanas será nuestra mayor fortaleza», señaló Sheinbaum durante una videoconferencia con líderes comunitarios de Los Ángeles, Chicago y Houston.

Esta estrategia también contempla la participación activa de académicos y especialistas en comercio internacional de ambos países, quienes están desarrollando estudios técnicos que demuestran el impacto negativo que tendría esta medida para ambas economías, proporcionando argumentos sólidos para la defensa legal y diplomática.

Resistencia organizada contra políticas discriminatorias

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció un marco de resis-

tencia organizada contra lo que considera políticas discriminatorias, llamando a la movilización ciudadana y al uso de los mecanismos democráticos para revertir el impuesto a los aranceles propuesto por Donald Trump.

Esta resistencia incluye la formación de comités de defensa en las comunidades mexicanas más afectadas por estas medidas, tanto en Estados Unidos como en México. Sheinbaum ha instado a organizaciones civiles, académicos y líderes comunitarios a unirse en un frente común para documentar el impacto negativo de estos aranceles y presentar argumentos sólidos ante organismos internacionales.

El plan de resistencia contempla también campañas informativas en medios de comunicación y redes sociales para concientizar sobre las consecuencias económicas y sociales de estas políticas. «No permitiremos que nuestros compatriotas sean utilizados como moneda de cambio en juegos políticos», enfatizó la mandataria.

Adicionalmente, se han establecido mesas de trabajo con representantes del sector empresarial mexicano-estadounidense, quienes han manifestado su preocupación por el deterioro en las relaciones comerciales que estas medidas podrían provocar. La resistencia organizada busca no solo proteger las remesas, sino también defender la dignidad y el aporte económico de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Asociación de Bancos de México: «El impuesto a las remesas es discriminatorio»

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, en la misma línea de la presidenta Claudia Sheinbaum, calificó de discriminatorio el impuesto de 3.5 % que busca aplicar el gobierno del presidente Donald Trump a todas las remesas enviadas al extranjero, «una medida más contra los migrantes y que además debe calificarse de una doble tributación». México recibe más de 60 000 millones de dólares, lo que significa que EE. UU. se quedará con más de 2000 millones de dólares que en nada ayudarían a sanar la muy enferma economía de esa nación.

Impacto económico del impuesto a las remesas. El impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos representa un golpe significativo para la economía mexicana. Con más de 60 000 millones de dólares recibidos anualmente en remesas, esta medida permitirá que el gobierno estadounidense recaude más de 2000 millones de dólares a costa de los migrantes mexicanos.

Estos 2000 millones de dólares que se quedarán en Estados Unidos en nada ayudarán a sanar la muy enferma economía estadounidense, según señala el presidente de la Asociación de Bancos de México.

Doble tributación: un problema grave

Romano ha calificado esta medida como un caso claro de doble tributación. Los migrantes mexicanos ya pagan impuestos sobre sus ingresos en Estados Unidos, y ahora se les impondrá un gravamen adicional de 3.5 % sobre el dinero que envían a sus familias.

Esta situación representa una carga fiscal injusta para millones de trabajadores mexicanos que, en muchos casos, laboran en condiciones precarias y con salarios bajos. Según estudios recientes, los migrantes mexicanos contribuyen anualmente con más de 8000 millones de dólares en impuestos federales y estatales en Estados Unidos, demostrando su aporte significativo a la economía estadounidense.

Estos incluyen impuestos sobre la renta, seguridad social y Medicare, contribuyendo significativamente a los sistemas de recaudación estadounidenses a pesar de no recibir todos los beneficios asociados a estos pagos.

Impuesto adicional de 3.5 %. El nuevo gravamen se aplicará específicamente a las remesas enviadas al extranjero.

Para una familia que envía regularmente 500 dólares mensuales, este impuesto representará una pérdida de 17.50 dólares por envío, sumando 210 dólares anuales que dejarán de llegar a familias mexicanas que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas.

Impacto en las familias. Las familias receptoras en México recibirán menos dinero debido a este nuevo impuesto. En estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero, donde las remesas representan hasta 10 % del PIB local, esta reducción afectará directamente el consumo, la educación y la salud de miles de familias que utilizan estos recursos como principal fuente de ingresos.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de migrantes han señalado que esta práctica de doble tributación podría incluso violar acuerdos comerciales existentes entre México y Estados Unidos, como el T-MEC, que establece principios para evitar la doble imposición fiscal en transacciones transfronterizas.

Carácter discriminatorio de la medida

Para Emilio Romano, esta medida tiene un claro carácter discriminatorio, ya que está dirigida específicamente contra los migrantes. El impuesto afecta desproporcionadamente a las comunidades migrantes que envían dinero a sus países de origen, siendo los mexicanos uno de los grupos más numerosos.

El presidente de la Asociación de Bancos de México ha enfatizado que esta política forma parte de una serie de medidas hostiles implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump contra la comunidad migrante, especialmente la mexicana.

Impacto en la economía mexicana. Las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas. Con más de 60 000 millones de dólares recibidos anualmente, estos fondos contribuyen significativamente a la economía local y nacional, ayudando a reducir la pobreza y promoviendo el desarrollo en comunidades que dependen en gran medida de estos recursos.

En 2023, México se consolidó como el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, solo superado por India. Estos flujos monetarios representan aproximadamente 4 % del PIB nacional, superando incluso los ingresos generados por la exportación de petróleo y el turismo en muchos periodos.

La distribución regional de estos recursos es particularmente notable: estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca reciben los mayores volúmenes, con algunas comunidades rurales donde las remesas constituyen hasta 20 % de la economía local. Este flujo constante de recursos ha permitido mejorar significativamente las condiciones de vida en zonas tradicionalmente marginadas.

Multiplicador económico. El efecto multiplicador de las remesas en la economía mexicana es considerable. Por cada peso recibido en remesas, se genera una actividad económica adicional estimada en 3 pesos a través del consumo, inversiones y el desarrollo de pequeños negocios. Este dinero circula rápidamente en las economías locales, beneficiando a comercios, servicios y generando empleo indirecto.

Estudios del Banco de México han documentado que las familias receptoras de remesas tienen mayor acceso a servicios financieros, mejores indicadores de salud y mayores tasas de escolaridad, especialmente entre niños y jóvenes. Esto representa una inversión directa en capital humano que tiene efectos positivos a largo plazo para el desarrollo nacional.

El impuesto a las remesas amenaza con desestabilizar este frágil ecosistema económico, reduciendo el poder adquisitivo de las familias receptoras y potencialmente disminuyendo el flujo total de remesas si los migrantes buscan canales informales para evitar el gravamen, lo que también podría incrementar los riesgos asociados con transacciones no reguladas.

Postura de la Asociación de Bancos de México

La Asociación de Bancos de México, bajo el liderazgo de Emilio Romano, ha expresado su firme oposición a esta medida impositiva. Romano ha calificado el impuesto como «discriminatorio» y ha señalado que representa una forma de doble tributación para los migrantes mexicanos.

La asociación está analizando el impacto económico detallado que tendrá esta medida tanto para los remitentes como para los receptores de las remesas, y está considerando posibles acciones para mitigar sus efectos negativos.

Emilio Romano ha manifestado que esta medida afectará negativamente a millones de familias mexicanas que dependen de las remesas para cubrir sus necesidades básicas, y ha instado al gobierno mexicano a tomar una postura firme en defensa de los intereses de sus ciudadanos.

Consecuencias para las familias receptoras

Reducción del poder adquisitivo. Las familias recibirán menos dinero debido al impuesto, lo que disminuirá su capacidad para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios.

Impacto en la educación. Muchas familias utilizan las remesas para financiar la educación de sus hijos, por lo que esta reducción podría afectar las oportunidades educativas de miles de jóvenes mexicanos.

Efectos en la salud. El acceso a servicios médicos y medicamentos también podría verse comprometido, especialmente para aquellas familias que dependen exclusivamente de las remesas para cubrir gastos de salud.

Llamado a la acción y posibles respuestas

Romano ha señalado la urgencia de establecer un frente común entre instituciones públicas y privadas para enfrentar esta medida que considera injusta y perjudicial. Entre las posibles respuestas que se están considerando se encuentran:

- Negociaciones bilaterales para revisar esta medida impositiva, aprovechando los canales diplomáticos existentes y los acuerdos comerciales como el T-MEC.
- Exploración de mecanismos alternativos para el envío de remesas que minimicen el impacto del impuesto, incluyendo nuevas tecnologías financieras y acuerdos específicos con instituciones bancarias estadounidenses.
- Implementación de programas de apoyo para las familias más afectadas por esta medida, con énfasis en comunidades rurales donde las remesas representan el sustento principal.
- Posible presentación de recursos legales ante organismos

internacionales argumentando el carácter discriminatorio de la medida, incluyendo la Organización Mundial del Comercio y tribunales internacionales.

- Desarrollo de campañas informativas dirigidas a los migrantes sobre opciones financieras que podrían ayudar a mitigar el impacto del impuesto.
- Establecimiento de mesas de diálogo permanentes con autoridades estadounidenses para buscar excepciones o modificaciones a la medida.

Expertos en derecho internacional han señalado que existen precedentes para impugnar medidas impositivas que pueden considerarse discriminatorias contra grupos específicos, lo que podría abrir una vía legal para cuestionar este impuesto.

Las apuestas fallidas de Trump

Prospectiva», basada en el análisis del economista Gerardo Esquivel (*El País*, 25 de mayo 2025) sobre las medidas económicas del presidente Donald Trump y su transición hacia la moderación tras los efectos negativos en la economía estadounidense, ofrece a nuestros lectores un panorama de lo que dentro y fuera de los Estados Unidos están significando las decisiones del mandatario de esa nación, afianzado en una doctrina sustentada en el nacionalismo y el proteccionismo mercantil que evidencia el fin de un modelo liberal que por décadas abanderó ese país.

Las políticas proteccionistas implementadas por la administración Trump, particularmente los aranceles impuestos a productos chinos y de otros países, son presentadas como una estrategia para fortalecer la manufactura estadounidense y reducir el déficit comercial. Sin embargo, como señala Esquivel, estas medidas no lograron los resultados prometidos.

Los aranceles elevaron los costos para empresas y consumidores estadounidenses, provocaron represalias comerciales de socios importantes, y generaron incertidumbre en los mercados financieros. Adicionalmente, el impacto en el sector agrícola fue especialmente severo, con los agricultores estadounidenses enfrentando una caída en las exportaciones y una reducción significativa en sus ingresos.

Ante el deterioro económico y la presión de diversos sectores productivos, la administración Trump se vio obligada a moderar su postura, negociando acuerdos comerciales más equilibrados y ofreciendo subsidios para compensar las pérdidas de sectores afectados, evidenciando los límites prácticos de las políticas comerciales agresivas en una economía globalizada.

El contexto de los aranceles de Trump

En 130 días, Donald Trump ha impuesto una serie de aranceles como parte de su estrategia comercial, prometiendo que estas medidas fortalecerían la economía estadounidense y protegerían los empleos domésticos. Sin embargo, el análisis de Gerardo Esquivel revela que estas políticas han tenido consecuencias imprevistas que han llevado a una reconsideración de su aplicación.

Los aranceles impuestos por Trump comenzaron en 2018 con gravámenes de 25 % sobre el acero y 10 % sobre el aluminio, afectando a socios comerciales como Canadá, México y la Unión Europea. Posteriormente, se extendieron a productos chinos por valor de más de 360 000 millones, en lo que se convirtió en una de las mayores guerras comerciales de la historia reciente. Trump justificó estas medidas bajo el argumento de «seguridad nacional» y como respuesta al supuesto «abuso comercial» por parte de China y otros países.

Esquivel señala que estas decisiones, actualizadas, no surgieron en el vacío, sino que responden a promesas electorales específicas dirigidas a estados industriales del llamado «cinturón del óxido», donde la pérdida de empleos manufactureros había generado un profundo descontento. La retórica de Trump sobre «América primero» y la revitalización industrial encontró eco en estos votantes, aunque los economistas advertían sobre los riesgos de adoptar políticas proteccionistas en una economía globalizada.

Es importante destacar que, contrario a la narrativa oficial, el déficit comercial de Estados Unidos aumentó durante la primera administración Trump, alcanzando 916 000 millones en 2020, el nivel más alto desde 2008. Esta contradicción entre los

objetivos declarados y los resultados obtenidos constituye, según Esquivel, uno de los elementos centrales para entender por qué eventualmente se produjo un giro hacia posiciones más moderadas en la política comercial estadounidense.

Los efectos negativos en la economía estadounidense

Las medidas arancelarias implementadas por Trump han generado efectos adversos significativos en la economía de los Estados Unidos. Estos impactos negativos han sido tan pronunciados que han forzado una transición hacia políticas más moderadas, alejándose de la retórica comercial agresiva que caracterizó los primeros años de su administración.

Según el análisis de Esquivel, los aranceles están provocando un aumento de costos para las empresas manufactureras estadounidenses que dependían de insumos importados. Este incremento en los costos de producción redujo la competitividad de las compañías americanas en los mercados globales, contrario a lo que la administración Trump había prometido. Las cadenas de suministro internacionales, construidas durante décadas de globalización, sufrieron disrupciones significativas que resultaron en ineficiencias y pérdidas económicas estimadas en billones de dólares.

Los agricultores estadounidenses serán particularmente afectados por las represalias comerciales de China y otros socios. Las exportaciones agrícolas suelen caer drásticamente cuando estos países imponen aranceles a productos como la soja, el maíz y la carne de cerdo, obligando al gobierno a implementar programas de ayuda de emergencia valorados en más de 28 000 millones para compensar las pérdidas del sector agrícola.

El mercado laboral también experimenta consecuencias negativas. Estudios económicos citados por Esquivel demuestran que, contrario a la retórica oficial, por cada empleo creado en los sectores protegidos por aranceles, se pierden aproximadamente tres empleos en industrias que utilizaban esos materiales como insumos. El costo estimado por cada puesto de trabajo «salvado» en la industria del acero superó el millón de dólares, una cifra económicamente insostenible según los expertos.

Adicionalmente, los consumidores estadounidenses enfrentan precios más altos en numerosos productos de consumo diario. Contrario a la afirmación de Trump de que China pagaría los aranceles, los estudios económicos confirmaron que entre 80 y 100 % del costo de estos impuestos tendrá que ser absorbido por compradores e importadores estadounidenses, trasladándose eventualmente a los precios finales y contribuyendo a presiones inflacionarias que comenzaron a manifestarse incluso antes de la pandemia de COVID-19.

La transición hacia la moderación

Esquivel documenta cómo las políticas de Trump han evolucionado hacia una postura más moderada, reconociendo implícitamente que las medidas iniciales no produjeron los resultados esperados. Esta moderación representa un cambio significativo en el enfoque económico de la administración, alejándose de las posturas más confrontadoras del pasado.

La evolución comenzó a evidenciarse cuando la Casa Blanca empezó a negociar excepciones a los aranceles para ciertos países aliados como Canadá y México, especialmente tras la firma del acuerdo T-MEC que reemplazó al NAFTA. Según Esquivel, estos ajustes no fueron presentados como rectificaciones, sino como «victorias estratégicas» que permitían mantener la narrativa proteccionista mientras se aliviaban las presiones económicas internas.

Los datos analizados por el economista muestran que, para finales de 2019, aproximadamente 30 % de las medidas arancelarias más severas habían sido modificadas o suavizadas a través de exenciones, periodos de gracia extendidos o negociaciones bilaterales. Esta flexibilización coincidió con la creciente presión de grupos empresariales estadounidenses que reportaban dificultades operativas y pérdidas financieras directamente atribuibles a la guerra comercial.

Particularmente notable fue el cambio en la retórica oficial hacia China. Aunque públicamente se mantuvo un discurso de firmeza, las negociaciones que llevaron al Acuerdo Fase Uno en enero de 2020 revelaron una disposición pragmática para en-

contrar compromisos, alejándose del enfoque de confrontación total que caracterizó los primeros años. Esquivel señala que este viraje respondió también a consideraciones electorales, buscando evitar que los efectos negativos de la guerra comercial impactaran las perspectivas de reelección.

¿Moderación permanente o pausa temporal?

La pregunta central que plantea Esquivel es si esta moderación en las políticas arancelarias representa un cambio permanente en la estrategia económica de Trump o simplemente una pausa temporal antes de retomar medidas más agresivas. Esta incertidumbre tiene implicaciones importantes para los mercados internacionales y las relaciones comerciales globales.

Impacto en las relaciones comerciales internacionales.

Las políticas arancelarias de Trump han afectado profundamente las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios internacionales, como muestra el análisis de Esquivel.

Tensiones comerciales globales. Las medidas arancelarias generaron conflictos significativos con socios comerciales clave, especialmente China, alterando las cadenas de suministro globales.

Consecuencias económicas. Sectores como la agricultura sufrieron represalias comerciales, dañando tanto la economía doméstica como la posición estadounidense en mercados internacionales.

Hacia la moderación. La eventual moderación en las políticas, según Esquivel, refleja un reconocimiento de los efectos negativos y la necesidad de recalibrar las relaciones comerciales globales.

Consecuencias para los consumidores estadounidenses. Uno de los efectos más directos de los aranceles ha sido el aumento de precios para los consumidores estadounidenses. Esquivel señala que estas medidas, diseñadas para proteger la industria doméstica, han resultado en costos más altos para las familias americanas, contribuyendo a la presión inflacionaria y reduciendo el poder adquisitivo.

El análisis económico de Gerardo Esquivel

Gerardo Esquivel presenta un análisis detallado que demuestra cómo las apuestas económicas de Trump han fallado en cumplir sus objetivos declarados. Su evaluación proporciona evidencia empírica de que las políticas arancelarias han sido contraproducentes, llevando a la administración a reconsiderar su enfoque comercial.

En su estudio, Esquivel destaca tres factores clave que evidencian el fracaso de la estrategia comercial trumpista. Primero, los datos revelan que el déficit comercial con China, lejos de reducirse como se prometió, aumentó significativamente durante los primeros tres años de la administración. Segundo, la imposición de aranceles no logró revitalizar el sector manufacturero estadounidense, y, por el contrario, provocó un estancamiento en la creación de empleos industriales desde 2019. Tercero, el costo de estas medidas fue absorbido principalmente por los importadores y consumidores estadounidenses, no por los exportadores extranjeros como se había argumentado.

El economista subraya que las estadísticas económicas muestran un impacto negativo en el PIB estadounidense estimado entre 0.3 y 0.7 % anual durante el periodo más intenso de la guerra comercial. Los sectores agrícolas, particularmente los productores de soja y maíz, sufrieron graves pérdidas debido a las represalias de China, obligando al gobierno a implementar programas de subsidios de emergencia que costaron miles de millones a los contribuyentes. Estos resultados, según Esquivel, confirman las advertencias que numerosos economistas habían formulado desde el inicio de estas políticas comerciales agresivas.

Además, el análisis señala que la erosión de la confianza empresarial y la incertidumbre generada por los constantes cambios en la política comercial resultaron en una reducción significativa de la inversión de capital en sectores clave de la economía. Esquivel concluye que la eventual moderación en la retórica y las políticas comerciales de la administración Trump hacia finales de su mandato representa un reconocimiento tácito del fracaso de su estrategia inicial, aunque este cambio nunca fue admitido públicamente por razones políticas.

Lecciones aprendidas y perspectivas futuras

El análisis de Esquivel ofrece importantes lecciones sobre los riesgos de implementar políticas comerciales proteccionistas sin considerar completamente sus consecuencias económicas. La experiencia de Trump ilustra cómo las medidas que parecen beneficiosas en teoría pueden tener efectos adversos significativos en la práctica económica real.

Entre las principales lecciones destaca la comprensión de que, en una economía globalizada, las acciones unilaterales tienden a provocar respuestas igualmente perjudiciales de los socios comerciales. Las represalias de China demostraron que incluso una economía tan poderosa como la estadounidense no puede imponerse sin sufrir consecuencias. Además, el estudio revela que la disrupción de las cadenas de suministro globales genera costos ocultos para las empresas nacionales que dependen de insumos importados.

Desde una perspectiva futura, Esquivel sugiere que cualquier administración debería considerar enfoques más multilaterales para abordar las preocupaciones comerciales legítimas. La formación de coaliciones con aliados que comparten intereses similares podría resultar más efectiva que las confrontaciones directas. También recomienda implementar políticas graduales con evaluaciones constantes de impacto, lo que permitiría ajustes antes de que los daños económicos se vuelvan severos.

El economista también enfatiza la importancia de desarrollar programas de apoyo más efectivos para los sectores y trabajadores realmente afectados por la competencia internacional desleal, en lugar de implementar medidas arancelarias generales que terminan perjudicando a toda la economía. Según sus proyecciones, las políticas que fomentan la innovación, la educación y la recalificación laboral tendrían un impacto más positivo en la competitividad económica estadounidense que las barreras comerciales.

Finalmente, Esquivel advierte que ignorar estas lecciones podría repetir ciclos de políticas económicas contraproducentes en el futuro. Su análisis sugiere que la transparencia

sobre los verdaderos costos y beneficios de las políticas comerciales es esencial para tomar decisiones informadas que realmente beneficien a la economía nacional en su conjunto.

Conclusiones del análisis de Gerardo Esquivel

Esquivel concluye que las apuestas fallidas de Trump en materia de aranceles han demostrado la importancia de basar las políticas económicas en evidencia empírica sólida. La transición hacia la moderación, aunque tardía, sugiere un reconocimiento de que las medidas iniciales fueron erróneas. La pregunta sobre si esta moderación será permanente o temporal permanece abierta, con implicaciones significativas para el futuro de la política comercial estadounidense.

En su análisis final, Esquivel destaca cómo estas políticas arancelarias constituyeron un experimento económico de gran escala con resultados predominantemente negativos. Los datos recopilados durante este periodo muestran un deterioro en múltiples indicadores económicos: desde la ralentización del crecimiento manufacturero hasta el incremento en los precios para los consumidores estadounidenses. Particularmente preocupante fue el impacto en los agricultores americanos, quienes sufrieron pérdidas significativas debido a las represalias comerciales de China y otros socios comerciales.

El economista también señala las contradicciones inherentes en la narrativa que acompañó estas políticas. Mientras se promovían como medidas para «proteger» la economía nacional, simultáneamente se generaban disrupciones en las cadenas de suministro que resultaron perjudiciales para numerosas industrias estadounidenses. Este contraste entre la retórica y los resultados tangibles subraya la necesidad de un enfoque más sofisticado hacia los desafíos del comercio internacional.

Mirando hacia el futuro, Esquivel sugiere que cualquier retorno a políticas proteccionistas similares podría generar efectos aún más adversos, ya que los socios comerciales ahora están mejor preparados para implementar contramedidas. Su análisis propone que un enfoque más constructivo debería centrarse en reformas estructurales internas, inversión en innovación, y co-

laboración internacional para abordar prácticas comerciales desleales. Finalmente, recomienda una mayor transparencia en la comunicación de los costos reales de las políticas comerciales, permitiendo así un debate público más informado sobre estas cuestiones económicas fundamentales.

Trump versus Harvard

La administración del presidente Donald Trump ha sido objeto de intensos debates debido a sus políticas de inmigración y su enfoque hacia las universidades, especialmente aquellas con una larga tradición de inclusión y diversidad, como la Universidad de Harvard. Las recientes acciones del presidente, que incluyen la anulación de programas de intercambio y la posible revocación de estatus legal para estudiantes internacionales, no solo han generado preocupación en el ámbito académico, sino que también ofrecen una ventana a la ideología ultranacionalista que caracteriza su gobierno. «Prospectiva» examina las implicaciones de estas acciones en un contexto más amplio, poniendo énfasis en la xenofobia y el nacionalismo que han sido rasgos distintivos de su administración.

El conflicto entre la administración Trump y Harvard se intensificó cuando el presidente firmó una orden ejecutiva que limita severamente los visados para estudiantes extranjeros, afectando a más de 7000 alumnos internacionales solo en esta institución. La Universidad de Harvard, junto con otras instituciones de élite como el MIT y Stanford, ha respondido con demandas legales, argumentando que estas políticas no solo perjudican a los estudiantes, sino que debilitan la posición de Estados Unidos como líder global en educación superior e investigación científica.

Las medidas específicas contra Harvard incluyen la in-

vestigación sobre sus programas de diversidad, cuestionamientos sobre sus fuentes de financiamiento internacional y amenazas de reducción de fondos federales para investigación. Expertos en políticas educativas señalan que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca consolidar una visión de América centrada en valores tradicionalistas y excluyentes, rechazando el multiculturalismo que instituciones como Harvard han promovido durante décadas.

El Departamento de Estado, bajo la dirección de Trump, también ha cancelado acuerdos de cooperación académica con países considerados adversarios, afectando programas de intercambio con China, Irán y varios países latinoamericanos. Estas decisiones han sido criticadas no solo por su impacto en la comunidad académica internacional, sino también por sus potenciales efectos negativos en la diplomacia cultural y científica estadounidense, áreas donde históricamente el país ha ejercido un liderazgo considerable.

Los defensores de estas políticas argumentan que buscan proteger la seguridad nacional y los intereses económicos estadounidenses. Sin embargo, análisis económicos recientes estiman que la reducción de estudiantes internacionales podría costar a la economía estadounidense más de 41 000 millones anuales y la pérdida de aproximadamente 450 000 empleos directos e indirectos en el sector educativo y servicios relacionados.

El contexto de la política educativa de Trump

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha promovido una agenda que prioriza la «América primero», con un enfoque particular en la reducción de la inmigración y la defensa de lo que él considera valores estadounidenses tradicionales. La educación superior, que históricamente ha sido un espacio de intercambio cultural y académico, se ha visto amenazada por un clima de desconfianza hacia los estudiantes internacionales.

La declaración del presidente, donde acusa a Harvard de promover el antisemitismo y el comunismo, refleja una tendencia más amplia hacia la criminalización de la diversidad en las instituciones académicas.

La amenaza a la comunidad académica internacional

Con 27.2 % de su población estudiantil compuesta por extranjeros, Harvard representa una comunidad vibrante y multicultural. La decisión de Trump de amenazar con cancelar el estatus legal de estos estudiantes no solo afecta a la universidad, sino que también envía un mensaje de advertencia a otras instituciones.

Los educadores y alumnos externos, que participan en un intercambio de conocimiento esencial para el avance académico, también se encuentran en la mira de una administración que busca simplificar y nacionalizar el sistema educativo.

La reacción judicial y el camino a seguir

Orden judicial de California. Un juzgado de California ha emitido una orden para prohibir la cancelación del estatus legal de los estudiantes internacionales.

Resistencia a las políticas excluyentes. Este acto judicial subraya la resistencia que existe frente a políticas que pueden ser consideradas como violaciones de los derechos fundamentales y los principios de inclusión.

Desafío continuo. La clarificación de los límites de la autoridad federal en temas de educación continúa siendo un desafío, especialmente con la posibilidad de que estas medidas sean replicadas en otras universidades, como Columbia.

Xenofobia y nacionalismo: un análisis crítico

Las acciones del presidente Trump encajan dentro de un marco ideológico más extenso caracterizado por la xenofobia y el nacionalismo extremo. La acusación de antisemitismo y la llamada a modificar las prácticas de admisión otorgan un trasfondo ideológico que busca dividir en lugar de unir.

El intento de promover una visión monolítica de lo que significa ser estadounidense contradice la esencia misma de la diversidad que ha hecho a Estados Unidos un país líder en educación y cultura.

Consecuencias a largo plazo para el sistema educativo

Deterioro del clima académico. Las implicaciones de las políticas de Trump podrían tener efectos duraderos en la comunidad académica. Si otras universidades comienzan a seguir su ejemplo, el clima de seguridad y bienvenida para estudiantes internacionales podría deteriorarse gravemente.

Impacto en la reputación institucional. Esto no solo afectaría la reputación de las instituciones educativas, sino que también podría obstaculizar la innovación y el desarrollo intelectual, elementos clave para la competitividad de Estados Unidos en el ámbito global.

El valor de la diversidad en la educación superior

La diversidad en las aulas universitarias no es simplemente una cuestión de inclusión social, sino un componente fundamental para la calidad educativa. Los estudiantes internacionales aportan perspectivas únicas, enriquecen el debate académico y preparan a todos los alumnos para un mundo globalizado.

Las políticas que amenazan esta diversidad no solo perjudican a los estudiantes extranjeros, sino que empobrecen la experiencia educativa de todos los estudiantes estadounidenses, limitando su exposición a diferentes culturas y formas de pensamiento.

El impacto económico de las políticas restrictivas

Más allá del aspecto educativo, las políticas restrictivas hacia estudiantes internacionales tienen un impacto económico significativo. Los estudiantes extranjeros contribuyen sustancialmente a la economía estadounidense a través de matrículas, alojamiento y otros gastos.

Según diversos estudios económicos, la presencia de estudiantes internacionales genera miles de empleos y aporta miles de millones de dólares anualmente a la economía estadounidense. Las políticas que reducen esta población estudiantil podrían tener consecuencias económicas negativas para las comunidades universitarias y más allá.

La respuesta de la comunidad académica

Movilización estudiantil. Los estudiantes organizan protestas y campañas de concienciación.

Declaraciones institucionales. Las universidades emiten comunicados defendiendo a sus estudiantes internacionales.

Alianzas estratégicas. Formación de coaliciones entre instituciones educativas para presentar un frente unido.

Acciones legales. Presentación de demandas y recursos legales contra las políticas restrictivas.

La comunidad académica no ha permanecido pasiva ante estas amenazas. Desde rectores hasta asociaciones estudiantiles, se ha generado un movimiento de resistencia que busca proteger los valores fundamentales de la educación superior.

El Tribunal de Comercio de Estados Unidos declara ilegales los aranceles de Trump, un juez los activa. La decisión en manos de la Suprema Corte

El Tribunal de Comercio de los Estados Unidos echó atrás los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a México, Canadá y China por haber rebasado sus facultades constitucionales. Horas después, un juez revirtió el resolutive del Tribunal. Será la Suprema Corte la que oirá a las partes. Vale recordar que el fallo, emitido tras meses de deliberaciones, establece un precedente significativo en la política comercial estadounidense y cuestiona el alcance del Poder Ejecutivo en materia arancelaria. Los jueces determinaron por unanimidad que la administración Trump excedió su autoridad al implementar estas medidas sin la aprobación explícita del Congreso, contraviniendo así el equilibrio de poderes establecido en la Constitución.

Las consecuencias económicas de esta decisión son profundas, ya que los aranceles habían generado represalias comerciales de los países afectados y alterado significativamente las cadenas de suministro globales. Analistas económicos estiman que la revocación de estos aranceles podría aliviar las tensiones comerciales y potencialmente reducir los precios para los consumidores estadounidenses en sectores clave como la automoción, agricultura y tecnología.

Representantes de México, Canadá y China han expresado su satisfacción con el fallo, mientras que la administración

Trump ha anunciado su intención de apelar la decisión ante instancias superiores. El caso ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial en política comercial y podría influir en futuras negociaciones comerciales internacionales.

La decisión del Tribunal de Comercio

El Tribunal de Comercio de Estados Unidos ha tomado una decisión histórica al declarar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Esta resolución judicial representa un punto de inflexión en las políticas comerciales estadounidenses y establece un precedente importante para futuras decisiones arancelarias.

La corte determinó que el presidente Trump rebasó sus facultades constitucionales al implementar estas medidas comerciales sin la debida autorización del Congreso. En su argumentación, los magistrados subrayaron que la Constitución otorga al Poder Legislativo, no al Ejecutivo, la autoridad primaria para regular el comercio internacional y establecer impuestos y aranceles.

El fallo fue aprobado por unanimidad, con los nueve jueces coincidiendo en que existió una clara extralimitación de poderes. La sentencia, de más de 120 páginas, detalla exhaustivamente los precedentes legales y las bases constitucionales que sustentan esta decisión.

Entre los aspectos más destacados de la resolución se encuentra el análisis detallado de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, estatutos que la administración Trump había citado como justificación legal para la imposición de los aranceles. Según el tribunal, estas disposiciones fueron interpretadas de manera excesivamente amplia, distorsionando su propósito original.

Los expertos legales consideran que esta decisión podría tener implicaciones duraderas en la separación de poderes dentro del gobierno estadounidense, especialmente en lo referente a la política comercial internacional. Además, establece nuevos límites a la capacidad del Ejecutivo para implementar medidas comerciales unilaterales sin un proceso legislativo adecuado.

Los aranceles impuestos en 2025. Los aranceles que han sido declarados ilegales fueron impuestos específicamente en el año 2025 y afectaron directamente a tres países clave en el comercio internacional con Estados Unidos: México, Canadá y China.

Estas medidas arancelarias representaban una continuación de las políticas comerciales proteccionistas que habían caracterizado la administración Trump, pero en esta ocasión, el tribunal determinó que excedían los límites legales del Poder Ejecutivo.

Países afectados por la medida. Los aranceles impuestos por la administración Trump tuvieron un impacto significativo en varios países con los que Estados Unidos mantiene importantes relaciones comerciales. A continuación, se detalla cómo estas medidas, ahora declaradas ilegales, afectaron a tres de los principales socios comerciales de EE. UU.

México. Uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, especialmente después del USMCA (T-MEC), se vio afectado por estos aranceles que ahora han sido declarados ilegales. Los sectores más perjudicados fueron la industria automotriz, agrícola y manufacturera, con aranceles que oscilaban entre el 15 y el 25 %. Las exportaciones mexicanas hacia EE. UU. experimentaron una caída de 18 % durante los primeros seis meses tras la imposición de estas medidas.

El gobierno mexicano respondió con aranceles de represalia sobre productos estadounidenses como el maíz, la carne de cerdo y diversos productos lácteos, generando tensiones diplomáticas que amenazaron la estabilidad del T-MEC recién negociado.

Canadá. El vecino del norte, tradicionalmente uno de los aliados comerciales más importantes de Estados Unidos, también fue objeto de estas medidas arancelarias controvertidas. Los aranceles afectaron principalmente a la industria del aluminio y acero canadiense, con tasas de 10 y 25 % respectivamente. También se impusieron gravámenes a la madera, productos lácteos y energéticos, sectores clave de la economía canadiense.

La respuesta de Canadá incluyó la imposición de aranceles equivalentes a más de 16 000 millones de dólares en pro-

ductos estadounidenses. Además, el gobierno canadiense presentó múltiples demandas ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que estas medidas violaban los acuerdos comerciales existentes entre ambos países.

China. La potencia asiática, frecuentemente en el centro de disputas comerciales con Estados Unidos, fue igualmente afectada por los aranceles ahora declarados ilegales. China recibió el impacto más severo, con aranceles que abarcaron más de 360 000 millones de dólares en productos, incluyendo electrónicos, maquinaria, textiles y productos químicos. Algunos sectores enfrentaron tasas arancelarias de hasta 30 %, lo que provocó disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales.

El gobierno chino respondió con contramedidas sobre productos estadounidenses valorados en 110 000 millones de dólares, principalmente en el sector agrícola y automotriz. Este intercambio de medidas punitivas desencadenó lo que muchos analistas denominaron como la mayor guerra comercial de la historia económica moderna.

Estos tres países representan aproximadamente 45 % del comercio exterior de Estados Unidos, por lo que el impacto de estos aranceles, ahora declarados ilegales, tuvo ramificaciones significativas no solo para estas economías, sino también para los consumidores y empresas estadounidenses que enfrentaron precios más altos y disrupciones en sus cadenas de suministro.

Exceso de facultades presidenciales. El tribunal determinó que el presidente Trump rebasó sus facultades constitucionales al imponer estos aranceles. Esta decisión subraya la importancia de los controles y equilibrios en el sistema de gobierno estadounidense.

La separación de poderes es un principio fundamental de la democracia estadounidense, y esta resolución judicial reafirma que ni siquiera el presidente puede actuar más allá de los límites establecidos por la Constitución y las leyes del Congreso.

Implicaciones legales de la decisión

Precedente judicial. Esta decisión establece un precedente im-

portante para futuras disputas sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia comercial.

Revisión de políticas. Otras medidas arancelarias similares podrían ser objeto de revisión judicial bajo los mismos criterios legales.

Fortalecimiento institucional. La decisión refuerza el papel del Poder Judicial como contrapeso al Ejecutivo en el sistema democrático estadounidense.

Impacto en las relaciones comerciales. La declaración de ilegalidad de estos aranceles tendrá un impacto significativo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países afectados. México, Canadá y China podrán ahora comerciar con Estados Unidos sin las restricciones arancelarias que habían sido impuestas ilegalmente.

Esta decisión judicial, de prosperar, podría llevar a una normalización de las relaciones comerciales y a una reducción de las tensiones que habían surgido como resultado de estas medidas proteccionistas.

Reacciones internacionales. La decisión del Tribunal de Comercio de Estados Unidos ha sido recibida con beneplácito por parte de los países afectados. México, Canadá y China habían expresado previamente su preocupación por estos aranceles y habían cuestionado su legalidad.

Esta resolución judicial valida las objeciones que estos países habían planteado y refuerza la importancia del Estado de derecho en las relaciones comerciales internacionales.

Visión prospectiva

Esta decisión marca un momento crucial en la evolución de las políticas comerciales estadounidenses. La declaración de ilegalidad de los aranceles impuestos por Trump por haber rebasado sus facultades constitucionales establece límites claros al Poder Ejecutivo y podría representar un cambio significativo en el enfoque de la política comercial del país en los próximos años.

El precedente establecido por esta resolución judicial influirá en futuras decisiones comerciales y reforzará la importancia de actuar dentro del marco legal establecido. Los futuros presidentes

deberán considerar cuidadosamente los límites de su autoridad al implementar medidas comerciales unilaterales, lo que podría conducir a un enfoque más deliberativo y basado en el consenso.

Las relaciones comerciales internacionales se beneficiarán de esta reafirmación del Estado de derecho y de los principios democráticos que rigen el sistema estadounidense. Es probable que veamos un periodo de recalibración en las negociaciones comerciales, con un mayor énfasis en acuerdos multilaterales y en la cooperación internacional.

A largo plazo, esta decisión podría contribuir a un sistema comercial global más estable y predecible. Los mercados financieros y las cadenas de suministro internacionales, que habían sido afectados por la incertidumbre generada por los aranceles, podrían experimentar una mayor estabilidad. Las empresas tanto estadounidenses como extranjeras tendrán mayor confianza para realizar inversiones a largo plazo sin el temor a cambios arancelarios repentinos e imprevisibles.

Sin embargo, los desafíos comerciales fundamentales entre estas naciones persistirán y requerirán soluciones diplomáticas y económicas que respeten tanto la soberanía nacional como los principios del comercio justo y el derecho internacional.

Trump ordena a sus embajadas suspender las entrevistas a aspirantes a estudiar en Estados Unidos

La guerra entre el presidente Donald Trump y la universidad de Harvard ha escalado y el gobierno de los Estados Unidos ha instruido a todas sus embajadas suspender toda solicitud o entrevista de extranjeros que pretendan estudiar en Estados Unidos y ordena revisar sus redes sociales.

Esta decisión sin precedentes afecta a miles de estudiantes internacionales que habían planeado comenzar o continuar sus estudios en instituciones estadounidenses. Las embajadas y consulados de EE. UU. en todo el mundo han recibido instrucciones directas de detener inmediatamente el procesamiento de visas estudiantiles hasta nuevo aviso.

El conflicto se intensificó después de que Trump acusara a Harvard y otras universidades de élite de promover ideologías antiamericanas y de no proteger adecuadamente los intereses nacionales en sus políticas de admisión internacional. La administración ha señalado que implementará un nuevo protocolo de verificación que incluirá un exhaustivo análisis de las publicaciones en redes sociales, afiliaciones políticas y actividades extracurriculares de los solicitantes.

Expertos en educación internacional advierten que esta medida podría tener consecuencias devastadoras para el sistema universitario estadounidense, que recibe anualmente más de un millón de estudiantes extranjeros que contribuyen con

aproximadamente 45 000 millones de dólares a la economía del país. Muchas universidades dependen significativamente de la matrícula de estudiantes internacionales para mantener sus operaciones y programas de investigación.

Escalada del conflicto entre Trump y Harvard

La tensión entre la administración Trump y la prestigiosa universidad de Harvard ha alcanzado un punto crítico. Este enfrentamiento ha derivado en medidas drásticas que afectan directamente al sistema educativo estadounidense y a los estudiantes internacionales que aspiran a estudiar en el país.

El origen de esta disputa se remonta a desacuerdos fundamentales sobre políticas de diversidad e inclusión implementadas por Harvard. El presidente Trump ha criticado repetidamente a la institución, acusándola de promover lo que él denomina «valores antiamericanos» y de aplicar estándares que, según su administración, discriminan a ciertos grupos de estudiantes nacionales mientras favorecen a extranjeros.

Por su parte, Harvard ha defendido firmemente su autonomía académica y sus políticas de admisión, argumentando que la diversidad del cuerpo estudiantil es esencial para una educación de calidad en el mundo globalizado actual. La universidad ha emitido comunicados rechazando las acusaciones presidenciales y advirtiéndole sobre las consecuencias negativas que las nuevas restricciones tendrán para la posición de liderazgo de Estados Unidos en educación superior.

Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno federal y las instituciones académicas de élite del país, que frecuentemente han sido críticas con las políticas migratorias y educativas de la administración Trump. Analistas políticos señalan que esta confrontación podría tener implicaciones de largo alcance para la reputación internacional del sistema universitario estadounidense y su capacidad para atraer talento global.

Suspensión de entrevistas en embajadas

El gobierno estadounidense ha dado instrucciones específicas a

todas sus embajadas para que suspendan inmediatamente todas las solicitudes y entrevistas de extranjeros que pretendan estudiar en Estados Unidos. Esta medida representa un cambio radical en la política de visas estudiantiles.

Revisión de redes sociales para aspirantes. Además de la suspensión de entrevistas, la administración ha ordenado una revisión exhaustiva de las redes sociales de los aspirantes. Esta revisión podría implicar cambios significativos en los criterios de admisión y evaluación.

Según fuentes oficiales, el Departamento de Estado implementará un sistema automatizado para analizar las publicaciones, comentarios y conexiones en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn de todos los solicitantes de visas estudiantiles. El objetivo declarado es identificar posibles «amenazas a la seguridad nacional» o «valores incompatibles con los intereses estadounidenses».

Los funcionarios consulares recibirán capacitación especial para interpretar la actividad en redes sociales y determinar si el contenido publicado por los aspirantes representa motivo de preocupación. Algunos de los criterios de evaluación incluirán la revisión de opiniones políticas expresadas públicamente, asociaciones con organizaciones consideradas problemáticas y cualquier declaración que pueda interpretarse como contraria a los intereses de Estados Unidos.

Esta medida ha generado preocupación entre expertos en privacidad y derechos civiles, quienes advierten sobre los riesgos de malinterpretar contenido publicado en diferentes contextos culturales. Además, señalan que muchos estudiantes internacionales provienen de países donde la libertad de expresión está limitada, lo que podría haberlos llevado a autocensurarse en sus redes sociales, distorsionando así su perfil digital real.

Los aspirantes deberán proporcionar información detallada sobre todas sus cuentas en redes sociales durante los últimos cinco años, incluyendo pseudónimos utilizados y grupos a los que pertenecen. El no revelar alguna cuenta podría consi-

derarse como falsificación de información y resultar en la denegación automática de la visa e incluso en prohibiciones futuras de entrada al país.

Impacto en el sistema educativo internacional. Las medidas adoptadas por la administración Trump tendrán un impacto directo en miles de estudiantes internacionales que habían planeado continuar sus estudios en universidades estadounidenses. Esta decisión afecta especialmente a aquellos que ya habían iniciado procesos de solicitud.

Según datos del Instituto de Educación Internacional, más de un millón de estudiantes extranjeros contribuyen anualmente con cerca de 45 000 millones de dólares a la economía estadounidense. Las regiones más afectadas serán Asia (particularmente China e India), Latinoamérica y Oriente Medio, desde donde proviene la mayoría de solicitantes internacionales.

Las universidades estadounidenses también enfrentarán serias consecuencias financieras y académicas. Muchos programas de postgrado e investigación dependen significativamente del talento internacional, especialmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), donde los estudiantes extranjeros representan más del 50 % de las matrículas en algunas instituciones.

A largo plazo, esta política podría provocar un redireccionamiento del flujo de talento global hacia otros países como Canadá, Australia y Reino Unido, que están implementando políticas más favorables para atraer estudiantes internacionales. Expertos en educación internacional advierten que Estados Unidos podría perder su posición dominante como destino educativo preferido, algo que ha mantenido durante décadas.

Adicionalmente, existe preocupación sobre el impacto en la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos en los campus universitarios americanos, aspectos considerados fundamentales para la formación integral en un mundo globalizado. Numerosos rectores de universidades han expresado que esta medida contradice los valores fundamentales de la educación superior: la colaboración internacional y el libre intercambio de ideas.

Consecuencias para las universidades. Las instituciones educativas estadounidenses, incluyendo Harvard y otras universidades de prestigio, se enfrentan ahora a la incertidumbre sobre el futuro de sus programas internacionales. La suspensión de entrevistas podría reducir significativamente el número de estudiantes extranjeros.

Esta situación presenta múltiples desafíos financieros para las universidades americanas. Los estudiantes internacionales generalmente pagan matrículas completas sin acceso a ayudas federales, representando una importante fuente de ingresos. Harvard, el MIT, Stanford y otras instituciones de élite podrían perder millones de dólares en ingresos anuales, obligándolas a reconsiderar sus presupuestos operativos y programas de becas.

Desde la perspectiva académica, la diversidad internacional ha sido siempre un componente fundamental en la experiencia educativa estadounidense. La reducción de estudiantes extranjeros empobrecería el intercambio cultural y de ideas en los campus, limitando la exposición de los estudiantes locales a diferentes perspectivas globales, algo considerado esencial en la formación de líderes en un mundo interconectado.

En el ámbito de la investigación, muchos departamentos científicos y tecnológicos dependen sustancialmente del talento internacional. Programas de posgrado en física, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación podrían enfrentar vacantes significativas, comprometiendo proyectos de investigación en curso y futuras innovaciones. Algunas estimaciones sugieren que más de 60 % de los estudiantes de doctorado en ciencias e ingeniería en ciertas universidades provienen del extranjero.

La reputación global de las universidades estadounidenses también está en juego. Instituciones que han construido su prestigio en parte sobre su capacidad para atraer a los mejores talentos mundiales podrían ver disminuido su estatus internacional. Universidades competidoras en Europa, Canadá, Australia y Asia ya están implementando estrategias para captar a estos estudiantes, ofreciendo procesos de admisión más accesibles y entornos percibidos como más acogedores.

Frente a esta situación, varias asociaciones universitarias han comenzado a coordinar respuestas legales y diplomáticas. La Asociación Americana de Universidades (AAU) y el Consejo Americano de Educación (ACE) han emitido declaraciones conjuntas criticando estas medidas y advirtiendo sobre sus consecuencias a largo plazo para la competitividad educativa y económica de Estados Unidos en el escenario global.

Reacciones del sector académico. El sector académico ha expresado su preocupación por estas medidas, argumentando que podrían dañar la reputación de Estados Unidos como destino educativo preferido a nivel mundial. Las universidades temen una reducción en la diversidad estudiantil y en los ingresos por matrículas internacionales.

Procedimientos consulares afectados. Los procedimientos consulares habituales para la obtención de visas estudiantiles han quedado completamente paralizados. Miles de solicitudes pendientes se encuentran ahora en un limbo administrativo, sin fecha clara para su reanudación o resolución.

Esta suspensión afecta principalmente al proceso de entrevista personal, un requisito indispensable para la mayoría de los solicitantes de visas F-1 y J-1, categorías destinadas a estudiantes internacionales y participantes en programas de intercambio académico. Las embajadas y consulados estadounidenses en más de 170 países han recibido instrucciones de cancelar todas las entrevistas programadas y no agendar nuevas citas hasta nuevo aviso.

Según datos del Departamento de Estado, más de 350 000 estudiantes internacionales solicitan visas estudiantiles cada año, con una concentración particular en países como China, India, Corea del Sur y Arabia Saudita. La medida ha generado especial preocupación entre los aspirantes que ya habían recibido cartas de aceptación de universidades y pagado matrículas, muchos de los cuales enfrentan ahora la pérdida de su inversión y la posibilidad de tener que aplazar sus estudios por un año o más.

Los funcionarios consulares también se encuentran en una posición compleja, habiendo recibido directrices contradic-

torias y sin claridad sobre cómo proceder con casos especiales o excepciones humanitarias. La Oficina de Asuntos Consulares ha establecido un grupo de trabajo de emergencia para evaluar la situación, pero hasta el momento no ha ofrecido alternativas viables para los miles de estudiantes afectados.

Visión prospectiva

La duración de estas medidas y sus implicaciones a largo plazo para la política educativa estadounidense permanecen inciertos.

Analistas del sector educativo proyectan que, si estas restricciones se mantienen por más de un semestre académico, podrían provocar una reconfiguración significativa del panorama universitario global. Universidades en Canadá, Australia y Reino Unido ya están desarrollando estrategias para atraer a los estudiantes que originalmente planeaban estudiar en Estados Unidos.

Las instituciones académicas estadounidenses, por su parte, están considerando implementar programas híbridos y campus satélite en otros países para mantener su matrícula internacional mientras se resuelve esta situación. Algunas universidades han comenzado a presionar al gobierno mediante grupos de cabildeo, argumentando que estas medidas podrían costar al país más de 50 000 millones de dólares anuales en ingresos directos e indirectos.

En el plano diplomático, varios países han expresado su intención de aplicar medidas recíprocas, limitando las oportunidades educativas para ciudadanos estadounidenses en sus territorios. Esta escalada podría tener consecuencias más allá del ámbito académico, afectando relaciones comerciales y diplomáticas más amplias.

Existe también preocupación sobre el impacto a largo plazo en la investigación científica y la innovación, dado que muchos programas de posgrado y laboratorios dependen significativamente de talentos internacionales. Sectores como la tecnología, la medicina y la ingeniería podrían verse particularmente afectados si estas restricciones se prolongan.

Impacto de las microcredenciales en la formación de competencias suaves en el marco del Plan México

El contexto actual exige una formación académica que va más allá de los conocimientos técnicos, incorporando habilidades fundamentales conocidas como competencias suaves. Estas habilidades, que incluyen el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la multiculturalidad y las competencias digitales, son esenciales para la adaptación y éxito en entornos laborales cada vez más complejos.

El Plan México, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, abre un camino para la implementación de microcredenciales a través de instituciones de educación superior, promoviendo una educación que realmente responda a las necesidades del mercado laboral y a los desafíos sociales contemporáneos. Además, la inteligencia artificial (IA) puede jugar un papel crucial en este proceso, facilitando la enseñanza y el desarrollo de estas competencias.

Las microcredenciales como herramienta educativa

Las microcredenciales representan una nueva modalidad de aprendizaje que ofrece certificaciones por la adquisición de habilidades específicas. Permiten a los estudiantes y profesionales la posibilidad de actualizar sus conocimientos y competencias en un formato flexible y accesible. Este enfoque se alinea con las necesidades del mercado laboral que requieren una capacitación adaptativa y continua.

En el contexto del Plan México, las microcredenciales

emergen como una solución estratégica para cerrar la brecha entre la educación tradicional y las demandas laborales actuales. Estas certificaciones de corta duración permiten validar competencias adquiridas tanto en entornos formales como informales, democratizando el acceso a las oportunidades educativas y profesionales.

Las instituciones de educación superior mexicanas pueden implementar programas de microcredenciales que respondan directamente a sectores prioritarios como tecnología, manufactura avanzada, energías renovables y servicios especializados. Esto genera un ecosistema educativo más dinámico y conectado con las necesidades reales de la sociedad y la economía.

Una característica fundamental de las microcredenciales es su capacidad para integrarse en marcos de cualificaciones más amplios. Los estudiantes pueden acumular estas certificaciones modulares y, eventualmente, convalidarlas por títulos o grados académicos completos, construyendo así trayectorias educativas personalizadas y progresivas.

Además, las microcredenciales facilitan la colaboración entre instituciones educativas y empleadores, permitiendo el diseño conjunto de programas formativos que respondan a necesidades específicas del mercado laboral. Esta sinergia garantiza la relevancia y aplicabilidad inmediata de los conocimientos adquiridos, aumentando significativamente el valor de estas certificaciones para quienes las obtienen.

Flexibilidad y adaptación en el aprendizaje

Las microcredenciales ofrecen una educación más adaptable a las demandas cambiantes del mercado. Se pueden diseñar programas que respondan a las emergencias requeridas en los sectores productivos. Esta flexibilidad permite a los estudiantes personalizar su trayectoria educativa, seleccionando específicamente aquellas competencias que necesitan desarrollar según sus metas profesionales o las tendencias de su industria. A diferencia de los programas tradicionales con currículos rígidos, las microcredenciales facilitan un aprendizaje modular que puede ajustarse constantemente.

En el contexto mexicano, donde diversos sectores económicos evolucionan a ritmos diferentes, esta adaptabilidad resulta especialmente valiosa. Las instituciones educativas pueden actualizar rápidamente su oferta formativa sin necesidad de reformular programas completos, respondiendo así a nichos emergentes o tecnologías disruptivas en tiempo real.

La flexibilidad educativa permite una respuesta inmediata a las necesidades del mercado laboral mexicano. Además, este modelo facilita la integración de metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos o la formación dual, donde la teoría y la práctica se entrelazan naturalmente. Los estudiantes pueden adquirir microcredenciales mientras participan en experiencias laborales reales, potenciando así la aplicabilidad inmediata de los conocimientos.

La adaptabilidad de este sistema también beneficia a profesionales en activo que buscan recualificarse o especializarse. La posibilidad de cursar programas cortos e intensivos, compatibles con sus responsabilidades laborales, elimina barreras tradicionalmente asociadas con la formación continua y promueve el aprendizaje a lo largo de la vida como una constante en la trayectoria profesional.

Reconocimiento de habilidades

Las microcredenciales ayudan a validar oficialmente las habilidades blandas que son frecuentemente subestimadas en ambientes académicos. Esto es crucial para los empleadores que buscan apartarse de los currículos tradicionales hacia una valoración de competencias específicas.

En el contexto del Plan México, este reconocimiento formal de habilidades adquiere mayor relevancia, ya que permite visibilizar capacidades que tradicionalmente han quedado fuera de los sistemas de evaluación convencionales. Las microcredenciales ofrecen un mecanismo transparente y estandarizado para certificar competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos o la inteligencia emocional.

Además, este sistema de acreditación facilita la movilidad laboral entre diferentes sectores e industrias. Un profesional

puede demostrar sus capacidades específicas mediante estas certificaciones, independientemente de su formación académica tradicional, lo que democratiza el acceso a oportunidades laborales y promueve una mayor equidad en los procesos de selección.

El reconocimiento a través de microcredenciales también beneficia a poblaciones históricamente subrepresentadas en la educación superior formal. Personas autodidactas, profesionales con experiencia práctica, pero sin títulos universitarios, o individuos de comunidades rurales pueden ahora validar sus conocimientos y habilidades de manera oficial, superando barreras tradicionales del sistema educativo.

Las microcredenciales transforman la evaluación educativa al centrarse en lo que una persona realmente sabe hacer, no solo en dónde o cómo lo aprendió. Este enfoque orientado a resultados está generando un cambio paradigmático en cómo se conceptualiza la educación y la formación profesional en México. Las instituciones educativas están comenzando a colaborar con el sector empresarial para diseñar microcredenciales que respondan directamente a las necesidades del mercado laboral actual, creando así un círculo virtuoso de retroalimentación entre formación y empleabilidad.

Formación en competencias suaves fundamentales

Pensamiento crítico. La capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones informadas es una competencia esencial que puede ser desarrollada a través de programas de microcredenciales. Estas pueden incluir cursos en razonamiento lógico, resolución de problemas y ética profesional.

Trabajo en equipo. La colaboración es un componente clave en cualquier profesión. Las microcredenciales pueden incluir talleres y actividades prácticas que fomenten la interacción y el trabajo conjunto entre los estudiantes, simulando entornos laborales reales.

Multiculturalidad y competencias digitales

Multiculturalidad. En un mundo globalizado, la sensibilidad cultural es vital. Los programas de microcredenciales pueden

ofrecer formación en diversidad e inclusión, equipando a los estudiantes con las herramientas necesarias para trabajar en equipos multiculturales y gestionar la diversidad en el lugar de trabajo.

Competencias digitales. La digitalización es otra área crucial donde las microcredenciales pueden desempeñar un papel clave. Los cursos pueden enfocarse en herramientas digitales, el uso responsable de la tecnología y la seguridad cibernética, preparando a los estudiantes para un mundo laboral cada vez más orientado a la tecnología.

Rol de la inteligencia artificial en la formación de valores y compromiso social. La inteligencia artificial no solo transforma las industrias, también tiene un potencial significativo en el ámbito educativo. Integrada en el proceso de formación, puede mejorar el desarrollo de competencias suaves y fomentar valores.

En el contexto del Plan México, la IA se posiciona como una herramienta fundamental para la formación ética y ciudadana. Los sistemas inteligentes pueden presentar escenarios complejos y dilemas morales que estimulen el pensamiento crítico y la toma de decisiones basadas en valores, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos sociales reales.

La implementación de asistentes virtuales basados en IA permite crear espacios de diálogo y reflexión sobre temas como la responsabilidad social, la sostenibilidad y la justicia. Estos sistemas pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante ofreciendo ejemplos y casos de estudio relevantes a sus contextos específicos.

Además, la inteligencia artificial facilita la conexión entre estudiantes de diversas regiones del país, promoviendo proyectos colaborativos orientados al bien común. Esta interacción mediada por tecnología fomenta la empatía, el respeto a la diversidad y el compromiso con causas sociales, elementos esenciales para la formación integral ciudadana.

Las plataformas educativas potenciadas con IA también pueden monitorear el progreso de los estudiantes en aspectos relacionados con competencias socioemocionales, ofreciendo re-

troalimentación personalizada y sugerencias para fortalecer áreas como la comunicación asertiva, la negociación y la resolución de conflictos.

Personalización del aprendizaje con IA

La IA permite crear experiencias de aprendizaje personalizadas, adaptando los contenidos a las necesidades y ritmos de cada estudiante. Esto puede facilitar una formación más efectiva en competencias específicas, permitiendo a cada individuo avanzar según su propio potencial.

Los algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones de comportamiento, preferencias y resultados de evaluaciones para generar rutas de aprendizaje optimizadas. Mediante este análisis continuo, los sistemas pueden identificar áreas donde el estudiante requiere mayor apoyo o desafíos adicionales, ajustando la dificultad y formato de los materiales educativos en tiempo real.

En el contexto de las microcredenciales, esta personalización adquiere especial relevancia, ya que permite enfocarse en el desarrollo preciso de competencias suaves como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo o el liderazgo. Los estudiantes pueden recibir retroalimentación inmediata sobre su desempeño en estos aspectos, con sugerencias concretas para mejorar.

Las plataformas educativas basadas en IA también facilitan la conexión entre estilos de aprendizaje y materiales didácticos. Algunos estudiantes aprenden mejor mediante recursos visuales, mientras otros prefieren contenidos auditivos o experiencias prácticas. La tecnología inteligente identifica estas preferencias y presenta la información en los formatos más efectivos para cada individuo.

Adicionalmente, estos sistemas pueden predecir posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje antes de que ocurran, implementando intervenciones preventivas que mantengan la motivación y el compromiso del estudiante. Esta capacidad predictiva resulta fundamental para reducir tasas de abandono y garantizar la culminación exitosa de los programas formativos.

Simulaciones y evaluación continua

Simulaciones y juegos de rol. A través de la IA es posible crear entornos virtuales que simulen situaciones reales donde los estudiantes pueden practicar habilidades como la negociación, la toma de decisiones en equipo y la empatía. Estas simulaciones ayudan a consolidar el aprendizaje en un ambiente controlado y seguro.

Evaluación continua. La IA puede facilitar una evaluación más dinámica y continua de las competencias adquiridas, ofreciendo retroalimentación inmediata que impulsa el aprendizaje. Esto permite a los estudiantes identificar áreas de mejora y a las instituciones ajustar sus programas según los resultados.

Fomento de la conciencia social. La IA puede ser utilizada para crear contenidos que sensibilicen a los estudiantes sobre problemas sociales, promoviendo un compromiso ético y social. A través de proyectos y actividades que involucren a la comunidad, los estudiantes pueden aplicar sus habilidades en situaciones reales, fomentando un aprendizaje significativo y un compromiso social profundo.

Visión prospectiva

Las microcredenciales ofrecidas por las instituciones de educación superior en el marco del Plan México representan una oportunidad única para desarrollar las competencias suaves necesarias en el entorno laboral actual. Combinadas con la inteligencia artificial, estas iniciativas no solo pueden mejorar la capacidad de respuesta del sistema educativo, sino también contribuir a una formación más integral y socialmente comprometida. Al enfocarse en habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la multiculturalidad y las competencias digitales, la educación superior puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y preparada para los desafíos del futuro. Es imperativo que las instituciones adopten este modelo innovador y se comprometan con la calidad y relevancia de la formación que ofrecen a sus estudiantes.

La geopolítica de la esperanza: un compromiso con el humanismo y la educación inclusiva

En esta «Prospectiva» compartimos la ponencia presentada a nombre de la Universidad Olmeca en el IV Seminario Internacional de la Cultura de la Paz, de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE), realizado en Salamanca, España, el 5 de junio de 2025, evento en el que la Universidad Olmeca recibió el Premio Sapientae Educación para la Paz.

La geopolítica de la esperanza se presenta como una herramienta fundamental para quienes creemos en el humanismo, en el respeto irrestricto a la libertad de expresión y en la defensa de los derechos humanos. En un mundo donde la inequidad y la falta de acceso a recursos básicos son una realidad, es esencial proponer modelos que promuevan una educación inclusiva, garantizando que cada niño y joven tenga la oportunidad de acceder a un futuro más prometedor.

Este enfoque trasciende las fronteras tradicionales de la política internacional para centrarse en el desarrollo humano como eje central de las relaciones entre las naciones. Reconoce que la verdadera fortaleza de un país no radica únicamente en su poder económico o militar, sino en su capacidad para cultivar el potencial humano de todos sus ciudadanos a través de sistemas educativos equitativos y de calidad.

La educación, desde esta perspectiva, se convierte en un acto político de resistencia contra las desigualdades estructurales. Cuando formamos a estudiantes con pensamiento crítico,

empatía y compromiso social, estamos sembrando las semillas para transformaciones profundas en nuestras sociedades. Es la educación humanista la que permite cuestionar paradigmas, desafiar injusticias y proponer alternativas más inclusivas.

En contextos de adversidad, donde las brechas sociales se profundizan y los conflictos parecen multiplicarse, necesitamos más que nunca una geopolítica que ponga en el centro la esperanza como motor de cambio. Esto implica reconocer la interdependencia global y la responsabilidad compartida en la construcción de un mundo más justo, donde el acceso al conocimiento no sea un privilegio sino un derecho efectivo para todos.

Responsabilidad de las universidades

Como miembros de la ODAEE y de la Red Internacional de Universidades por la Calidad y la Sostenibilidad, en la Universidad Olmeca tenemos la responsabilidad de ser defensores activos de estos principios. La educación es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, la actual brecha digital amenaza con desdibujar estas oportunidades.

Esta responsabilidad se extiende más allá de las aulas tradicionales. Como instituciones de educación superior, debemos ser catalizadores de cambio, promoviendo políticas que garanticen la igualdad de acceso a recursos educativos de calidad independientemente del contexto socioeconómico. Nuestro compromiso debe materializarse en programas concretos que faciliten el acceso a la educación para comunidades marginadas y grupos vulnerables.

La brecha digital representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para la educación inclusiva. No se trata únicamente de proporcionar dispositivos o conexión a internet, sino de desarrollar las competencias digitales necesarias para que estudiantes y docentes puedan aprovechar plenamente estas herramientas. Esta brecha se manifiesta en múltiples dimensiones: acceso a infraestructura tecnológica, habilidades digitales, disponibilidad de contenidos relevantes en diversos idiomas y contextos culturales.

Por ende, la integración de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, debe ser manejada con un enfoque que priorice el acceso y la inclusión. Las universidades debemos liderar la reflexión ética sobre estos avances tecnológicos, cuestionando cómo pueden ampliar oportunidades sin perpetuar las desigualdades existentes. Esto implica desarrollar marcos pedagógicos innovadores que incorporen estas tecnologías no como un fin en sí mismo, sino como herramientas al servicio de un aprendizaje más personalizado, colaborativo y significativo para todos los estudiantes.

Nuestra misión como instituciones académicas incluye también la formación de ciudadanos digitales responsables, capaces de navegar críticamente en un mundo cada vez más mediado por algoritmos y sistemas automatizados. Esto requiere un enfoque interdisciplinario que conecte las humanidades con los avances tecnológicos, promoviendo un diálogo constante entre tradición e innovación.

El modelo de canasta digital de la Unesco

La Unesco ha propuesto un modelo de canasta digital que puede servir como un paso importante hacia la democratización del acceso a la innovación digital. Este modelo busca garantizar que los recursos tecnológicos estén disponibles para todos, sin distinción alguna, abordando de manera integral las diversas dimensiones de la brecha digital que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo.

La canasta digital comprende cinco componentes esenciales: dispositivos (computadoras, tabletas), conectividad (acceso a internet de calidad), plataformas educativas adaptables, contenidos digitales relevantes y competencias digitales tanto para docentes como para estudiantes. Este enfoque holístico reconoce que el simple acceso a dispositivos es insuficiente sin la formación adecuada para su uso pedagógico efectivo.

Al redefinir cómo las instituciones educativas utilizan la tecnología, se abre la puerta a un aprendizaje más inclusivo, adaptado a las necesidades de cada estudiante. El modelo plantea la importancia de considerar los contextos locales, respe-

tando la diversidad lingüística y cultural, así como la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas apropiadas para comunidades con recursos limitados.

Para las universidades, implementar este modelo significa no solo adquirir infraestructura tecnológica, sino también desarrollar estrategias integrales que incluyan la formación docente, la adaptación curricular y la creación de ecosistemas digitales que fomenten la colaboración y el aprendizaje significativo. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de liderar este cambio paradigmático, creando modelos escalables que puedan ser adaptados a diversos contextos educativos.

El modelo de canasta digital representa una oportunidad para reimaginar la educación superior, trascendiendo las limitaciones geográficas y económicas tradicionales. Promueve la creación de redes de conocimiento compartido y plataformas colaborativas que permiten que estudiantes de diferentes contextos puedan beneficiarse de recursos educativos de alta calidad.

La implementación exitosa de este modelo requiere un compromiso político y financiero a largo plazo, así como alianzas estratégicas entre gobiernos, instituciones educativas, sector privado y sociedad civil. Las universidades pueden desempeñar un rol catalizador, generando investigación aplicada sobre el impacto de estas tecnologías y formando a los futuros líderes que impulsarán la transformación digital inclusiva en sus comunidades.

Más allá del acceso tecnológico

Aun así, el simple acceso a la tecnología no es suficiente. Debemos fomentar un enfoque integral que promueva la alfabetización digital y el uso ético de estas herramientas. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear espacios donde la tecnología sea una herramienta para la emancipación intelectual, no simplemente un fin en sí mismo. Este enfoque requiere repensar los modelos pedagógicos tradicionales y adaptarlos a un mundo donde la información fluye cons-

tanamente y las competencias digitales son tan fundamentales como la lectoescritura.

Educación crítica. La educación no solo debe enfocarse en cómo utilizar la tecnología, sino en cómo esta puede ser un motor de cambio social y un promotor de los derechos humanos. Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de evaluar críticamente la información digital, comprender los sesgos algorítmicos y reconocer las implicaciones éticas de las tecnologías emergentes en diferentes contextos socioculturales.

Formación integral. Esto implica la formación de individuos críticos y comprometidos, capaces de entender y cuestionar el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Un enfoque integral considera también el bienestar emocional y la salud mental en entornos digitales, proporcionando herramientas para mantener relaciones saludables con la tecnología y fomentar hábitos digitales que apoyen el desarrollo personal pleno.

Inclusión y accesibilidad. Las soluciones tecnológicas deben diseñarse considerando la diversidad de capacidades, contextos socioeconómicos y culturales. La verdadera democratización del conocimiento requiere no solo dispositivos asequibles, sino interfaces adaptables, contenidos multiculturales y herramientas que permitan a todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, participar plenamente en el ecosistema educativo digital.

Ética digital. Es fundamental desarrollar marcos éticos robustos que guíen el desarrollo, implementación y uso de tecnologías educativas. Las universidades deben liderar discusiones sobre privacidad de datos, consentimiento informado, propiedad intelectual y los dilemas morales que surgen con la automatización y la inteligencia artificial en contextos educativos y sociales más amplios.

Sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad y la sostenibilidad son conceptos que deben guiar nuestras propuestas educativas. Fomentar un emprendimiento social que esté alineado con la economía circular es esencial para asegurar un desarrollo sostenible. Este enfoque requiere una transforma-

ción profunda en cómo entendemos la relación entre la educación, la economía y el medio ambiente.

Las empresas emergentes pueden jugar un papel crucial en este aspecto, ya que con un enfoque innovador pueden solucionar problemas sociales mientras se comprometen con prácticas económicas responsables. Su agilidad y capacidad de adaptación las convierten en laboratorios ideales para nuevos modelos de negocio que integran los principios de sostenibilidad desde su concepción.

Para lograr una verdadera educación sostenible, las instituciones educativas deben incorporar estos principios no solo en sus currículos, sino también en sus operaciones diarias. Esto incluye la gestión responsable de recursos, la reducción de la huella de carbono y la implementación de prácticas que respeten los ecosistemas locales y globales.

La formación en sostenibilidad debe ser transversal, abarcando todas las disciplinas y niveles educativos. Los estudiantes necesitan desarrollar competencias específicas que les permitan contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde sus respectivos campos profesionales. Esto implica fomentar el pensamiento sistémico, la capacidad de colaboración interdisciplinaria y una ética de responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Además, las alianzas entre instituciones educativas, empresas sostenibles y organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para crear ecosistemas de aprendizaje que promuevan la innovación sostenible. Estas colaboraciones permiten que los estudiantes se enfrenten a desafíos reales y desarrollen soluciones prácticas que combinen viabilidad económica con impacto social y ambiental positivo.

El papel de las universidades como centros de innovación

Las universidades, como centros de innovación y pensamiento crítico, debemos liderar la formación de nuevas generaciones de emprendedores que comprendan la importancia de construir modelos de negocio no solo rentables, sino también sostenibles y éticos.

En este contexto, es fundamental que las instituciones de educación superior redefinan sus programas académicos para integrar metodologías de aprendizaje basadas en retos reales, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de soluciones innovadoras para problemas complejos. Los laboratorios de innovación, incubadoras y aceleradoras universitarias se convierten en espacios esenciales donde teoría y práctica se entrelazan para generar propuestas disruptivas.

La transferencia de conocimiento entre la academia y el sector productivo debe fortalecerse mediante alianzas estratégicas que permitan la aplicación de la investigación científica en contextos reales. Las universidades tenemos la responsabilidad de crear ecosistemas de innovación donde estudiantes, docentes, investigadores y actores externos colaboren en la generación de conocimientos que respondan a las necesidades sociales y económicas actuales.

Además, debemos fomentar una cultura de innovación responsable que integre consideraciones éticas, sociales y ambientales en todo el proceso creativo. Esto implica formar profesionales con una visión holística, capaces de anticipar el impacto de sus innovaciones y de priorizar aquellas que contribuyen al bien común y al desarrollo sostenible.

Respeto a la diversidad cultural

Además, es imperativo considerar las diferencias culturales, económicas y sociales que afectan a las comunidades a nivel global. La geopolítica de la esperanza no debe ser una solución impuesta desde una perspectiva occidental, sino que debe reconocer y valorar la diversidad de experiencias y contextos. Esto incluye la participación activa de las comunidades en el diseño y la implementación de políticas y prácticas educativas que les afecten directamente.

El reconocimiento de la diversidad cultural va más allá de la simple tolerancia; implica la integración genuina de diferentes cosmovisiones, saberes ancestrales y formas de aprendizaje en los sistemas educativos. Las universidades tenemos la responsabilidad de crear espacios donde el conocimiento indí-

gena y tradicional sea valorado con la misma importancia que el conocimiento académico occidental.

En este sentido, promover el multilingüismo y la preservación de lenguas originarias resulta fundamental para mantener vivo el patrimonio cultural inmaterial. La Unesco ha señalado repetidamente que cuando una lengua desaparece, no solo se pierde un sistema de comunicación, sino toda una forma de entender y relacionarse con el mundo.

Las políticas educativas inclusivas deben contemplar adaptaciones curriculares que reflejen la realidad multicultural de nuestras sociedades. Esto significa incorporar materiales didácticos que representen diversas perspectivas históricas, filosóficas y científicas, evitando las visiones eurocéntricas que han predominado en la educación formal.

Asimismo, es necesario formar docentes con competencias interculturales, capaces de mediar entre diferentes realidades culturales y de crear ambientes de aprendizaje donde todos los estudiantes se sientan representados y valorados. La formación en diversidad cultural debe ser transversal en todos los programas educativos, especialmente en aquellos destinados a futuros profesores.

La experiencia demuestra que cuando los sistemas educativos respetan y promueven activamente la diversidad cultural, no solo se benefician las comunidades minoritarias, sino que toda la sociedad se enriquece con perspectivas más amplias y soluciones más creativas a los problemas globales. Este enfoque contribuye significativamente a la construcción de sociedades más equitativas, pacíficas y sostenibles.

Colaboración internacional para el avance

Organismos internacionales. Colaboración con entidades globales.

Gobiernos. Políticas públicas de acceso.

Universidades. Centros de conocimiento.

Comunidades locales. Participación activa.

Para avanzar hacia una geopolítica de la esperanza, es fundamental colaborar con organismos internacionales, gobier-

nos, universidades y comunidades locales. Esta colaboración debe centrarse en el diseño de políticas que aseguren un acceso equitativo a la educación y a las tecnologías emergentes, así como en la creación de redes de apoyo entre instituciones educativas y emprendedores que busquen generar un impacto social positivo.

La cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas pueden proporcionar una base sólida para la creación de entornos educativos inclusivos y sustentables.

Redes de apoyo y cooperación. La cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas pueden proporcionar una base sólida para la creación de entornos educativos inclusivos y sustentables. Estas redes de apoyo son fundamentales para compartir conocimientos y recursos que permitan a las instituciones educativas implementar modelos más equitativos y accesibles.

Intercambio de buenas prácticas. Compartir experiencias exitosas entre instituciones de diferentes regiones para adaptar y mejorar modelos educativos.

Recursos compartidos. Desarrollo de plataformas y herramientas educativas de acceso abierto que puedan ser utilizadas por comunidades con menos recursos.

Formación continua. Programas de capacitación para educadores que les permitan actualizar sus conocimientos y metodologías.

Compromiso con el futuro. La geopolítica de la esperanza implica un compromiso con el humanismo, la educación inclusiva y la defensa de los derechos humanos. Al integrar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en nuestros modelos educativos, debemos garantizar que estas herramientas sean accesibles para todos, fomentando una alfabetización que respete la diversidad y promueva la justicia social.

Además, apoyar iniciativas que propicien un emprendimiento sostenible y alineado con la economía circular es fundamental para contribuir a un futuro más equitativo. La educación debe ser el vehículo que genere oportunidades y esperanza, construyendo un camino hacia un mundo más justo y solidario.

Responsabilidad intergeneracional

Este compromiso con el futuro conlleva una responsabilidad intergeneracional, donde las decisiones que tomamos hoy determinarán las oportunidades de las generaciones venideras. Las instituciones educativas tienen la obligación moral de formar ciudadanos conscientes de su impacto en el entorno y capacitados para proponer soluciones innovadoras a los desafíos globales.

Alfabetización para el futuro. Desarrollar competencias para el siglo XXI va más allá de la alfabetización digital básica. Implica fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación efectiva en contextos multiculturales. Estas habilidades permitirán a los estudiantes adaptarse a un mundo en constante cambio y contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible.

Ecosistemas de innovación social. Las universidades deben transformarse en verdaderos ecosistemas de innovación social, donde se generen sinergias entre la academia, el sector privado y las comunidades. Estos espacios de cocreación permiten desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades locales mientras se mantiene una visión global, fomentando proyectos que combinen la viabilidad económica con el impacto social positivo.

Ética y gobernanza tecnológica. En un mundo cada vez más mediado por la tecnología, es fundamental establecer marcos éticos y de gobernanza que aseguren que el desarrollo tecnológico esté al servicio del bien común. Esto implica promover debates inclusivos sobre el impacto de las tecnologías emergentes y establecer mecanismos de regulación que protejan los derechos fundamentales mientras se fomenta la innovación responsable.

En definitiva, nuestro compromiso con el futuro debe materializarse en acciones concretas que trasciendan los discursos y se conviertan en transformaciones reales. Solo así podremos construir una geopolítica de la esperanza que responda a los anhelos de justicia, equidad y dignidad de todas las personas, sin importar su origen, condición socioeconómica o ubicación geográfica.

Universidad Olmeca: compromiso permanente con la educación sostenible y transformadora

La Universidad Olmeca ha trazado una misión y visión profundamente arraigadas en la necesidad urgente de formar individuos integralmente, priorizando el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. En un mundo donde los desafíos ecológicos son cada vez más evidentes, esta institución se posiciona como un bastión del conocimiento que promueve no solo la educación, sino una forma de vida que respete y proteja al planeta.

Desde su fundación ha comprendido que la educación superior debe trascender la mera transmisión de conocimientos académicos. Por ello, ha implementado un modelo educativo que integra la sostenibilidad en cada aspecto del proceso formativo, desde el diseño curricular hasta las prácticas cotidianas en sus instalaciones. Los estudiantes no solo aprenden teorías sobre sostenibilidad, sino que viven experiencias significativas que fortalecen su compromiso con el medio ambiente.

Este enfoque transformador se manifiesta en proyectos de investigación orientados a solucionar problemáticas ambientales locales y globales, programas de extensión que vinculan a la comunidad universitaria con su entorno social, y políticas institucionales que reducen la huella ecológica del campus. La Universidad Olmeca entiende que la verdadera transformación comienza desde adentro, modelando las prácticas que aspira a ver en la sociedad.

En la actualidad, la institución ha forjado alianzas estratégicas con organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, amplificando así su impacto y creando redes de colaboración que trascienden fronteras. Sus egresados se distinguen por un pensamiento crítico y una sensibilidad especial hacia los temas ambientales, convirtiéndose en agentes de cambio en sus respectivos campos profesionales y comunidades.

Modelo educativo sostenible

Esta perspectiva se enmarca dentro de un modelo educativo que promueve la economía circular y el emprendimiento social, conceptos vitales para enfrentar los desafíos contemporáneos. La esencia de la Universidad Olmeca radica en su enfoque hacia una educación 6.0, un modelo que no solo busca transmitir conocimiento, sino también fomentar valores de responsabilidad social y compromiso con el entorno.

En un contexto donde la economía social cobra relevancia, se reconoce que el crecimiento económico no puede ser dissociado del bienestar social y ambiental. La Universidad Olmeca, mediante su currículum, se propone capacitar a sus educandos para que sean agentes de cambio, capaces de innovar y desarrollar soluciones que integren estos aspectos vitales.

El modelo educativo sostenible de la Universidad Olmeca se distingue por incorporar metodologías activas y participativas, donde los estudiantes no son meros receptores de información, sino protagonistas de su propio aprendizaje. A través de proyectos interdisciplinarios, los alumnos abordan problemáticas reales relacionadas con la sostenibilidad, aplicando conocimientos teóricos en contextos prácticos que demandan creatividad y pensamiento crítico.

La institución ha rediseñado sus espacios físicos y virtuales para reflejar los principios de sostenibilidad que predica. Desde jardines verticales hasta sistemas de captación de agua pluvial, el campus universitario funciona como un laboratorio vivo donde la comunidad educativa experimenta de primera mano las prácticas sostenibles que se estudian en las aulas. Esta

congruencia entre discurso y acción refuerza el mensaje institucional y proporciona experiencias significativas que complementan la formación académica.

Además, la Universidad Olmeca ha establecido alianzas estratégicas con empresas comprometidas con la responsabilidad social corporativa, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. Estas colaboraciones enriquecen la experiencia educativa mediante prácticas profesionales, proyectos colaborativos y programas de voluntariado que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales mientras desarrollan una comprensión profunda de los retos globales en materia de sostenibilidad.

La evaluación en este modelo educativo trasciende los métodos tradicionales, priorizando el impacto real de los proyectos estudiantiles en términos de sostenibilidad y beneficio social. Se valora no solo la adquisición de conocimientos técnicos, sino también el desarrollo de habilidades blandas como la empatía, la colaboración y el liderazgo ético, fundamentales para impulsar transformaciones significativas en la sociedad contemporánea.

Impulso a las energías limpias

Uno de los pilares fundamentales de la educación que oferta la Universidad Olmeca es el impulso a las energías limpias a través del uso de energías renovables. Este enfoque no solo establece a la universidad como un líder regional en temas de sostenibilidad, sino que también responde a la creciente necesidad de encontrar alternativas viables a los modelos de producción y consumo insostenibles.

La Universidad Olmeca ha implementado programas académicos especializados que forman profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar sistemas de energía limpia. Estos programas integran conocimientos teóricos con experiencias prácticas, permitiendo a los estudiantes trabajar en proyectos reales como la instalación de paneles solares en comunidades rurales o el desarrollo de tecnologías eólicas adaptadas a las condiciones locales.

Además, la institución ha establecido un centro de investigación dedicado exclusivamente al estudio y desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles. Este centro sirve como incubadora para ideas innovadoras y como plataforma para la colaboración entre académicos, estudiantes y empresas del sector energético, fomentando así la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de las investigaciones realizadas.

Crear conciencia sobre estos temas es esencial para combatir los efectos adversos del cambio climático, cuyas repercusiones son palpables en todos los ámbitos, desde el medio ambiente hasta la economía y la movilidad humana.

El campus universitario mismo funciona como un laboratorio vivo de sostenibilidad energética, con instalaciones que aprovechan la energía solar, eólica e incluso la biomasa para cubrir parte significativa de sus necesidades energéticas. Estos sistemas no solo reducen la huella de carbono de la institución, sino que también sirven como herramientas didácticas para que los estudiantes comprendan de manera tangible los principios y aplicaciones de las energías renovables.

La Universidad Olmeca organiza regularmente seminarios, talleres y conferencias abiertas a la comunidad sobre temas relacionados con la transición energética y la importancia de adoptar fuentes de energía limpia. Estas actividades de extensión refuerzan el compromiso institucional con la divulgación del conocimiento y la sensibilización pública sobre la urgencia de transformar nuestros modelos energéticos para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Impacto del cambio climático

El cambio climático ha desencadenado una serie de fenómenos que han impactado de forma significativa la seguridad y bienestar de las poblaciones. Eventos climáticos extremos y desastres naturales han llevado a muchas personas a verse obligadas a migrar, enfrentando la adversidad y dejando atrás lo que alguna vez fue su hogar.

Esta movilidad forzada, a la que se suman factores económicos y sociales, pone en jaque la preservación de derechos

humanos fundamentales. La Universidad Olmeca, consciente de esta realidad, se compromete a abordar estos desafíos en sus planes de estudio, formando profesionales que reconozcan la interconexión de estos aspectos y trabajen por un futuro más justo y sostenible.

Geopolítica de la esperanza

En un mundo caracterizado por tensiones globales crecientes y desafíos sin precedentes, la Universidad Olmeca propone un nuevo enfoque para enfrentar los retos contemporáneos a través de una visión transformadora.

Situación actual. La situación actual del mundo, caracterizada por una geopolítica de la incertidumbre, demanda urgentemente acciones basadas en la geopolítica de la esperanza. Los conflictos internacionales, la crisis climática y las desigualdades económicas han creado un panorama global complejo que requiere nuevas formas de pensamiento y acción.

Esta realidad nos impulsa a replantear el papel de las instituciones educativas como agentes de cambio positivo, capaces de brindar no solo conocimientos, sino también herramientas para la transformación social.

Enfoque proactivo. Como miembro activo de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE), la Universidad Olmeca adopta un enfoque proactivo y ético en su oferta educativa. Este compromiso se traduce en programas académicos que integran perspectivas multidisciplinarias para abordar los desafíos globales desde una visión holística y constructiva.

Nuestros estudiantes son formados para convertirse en líderes que no solo identifican problemas, sino que proponen e implementan soluciones innovadoras basadas en principios éticos sólidos y una comprensión profunda de las dinámicas geopolíticas contemporáneas.

Temas cruciales. Se abordan temas cruciales como los derechos humanos, la equidad y la inclusión, promoviendo un ambiente donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y contribuir a la sociedad. Estos temas no son tratados

de forma aislada, sino como componentes interrelacionados de una educación integral.

A través de metodologías participativas, casos de estudio y proyectos de investigación aplicada, nuestros estudiantes desarrollan una comprensión crítica de estos temas y su impacto en diferentes contextos culturales y geográficos.

Alianzas estratégicas. La Universidad Olmeca ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, gobiernos locales y entidades del sector privado para amplificar su impacto positivo. Estas colaboraciones permiten a nuestros estudiantes y docentes participar en iniciativas globales que promueven la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social.

A través de estas redes de cooperación, facilitamos intercambios académicos, proyectos de investigación conjunta y programas de movilidad que enriquecen la experiencia educativa y fortalecen nuestra contribución a la construcción de un mundo más equitativo y pacífico.

Formación de líderes transformadores. Nuestra institución se compromete a formar líderes capaces de navegar en un mundo complejo con integridad, visión y determinación. El programa de liderazgo transformador de la Universidad Olmeca prepara a los estudiantes para identificar oportunidades donde otros ven obstáculos, y para construir puentes donde existen divisiones.

Esta formación integral combina conocimientos técnicos específicos con habilidades blandas como la comunicación intercultural, la resolución de conflictos y el pensamiento sistémico, creando profesionales preparados para liderar procesos de cambio positivo en sus comunidades y más allá.

La geopolítica de la esperanza representa no solo un marco teórico, sino una invitación a la acción concreta para construir un futuro más justo, sostenible y pacífico desde las aulas universitarias hacia la sociedad global.

Ética y valores en el centro educativo. La ética y los valores se convierten así en el centro del proceso educativo. Es imperativo que los futuros líderes y emprendedores comprendan la responsabilidad que tienen no solo hacia el medio ambiente,

sino también hacia las comunidades a las que pertenecen. En la Universidad Olmeca creemos firmemente que la educación debe trascender la mera transmisión de conocimientos técnicos para abarcar la formación de seres humanos íntegros, capaces de tomar decisiones basadas en principios éticos sólidos y valores universales.

Formación integral. Una educación que prioriza estos valores no solo contribuye a la formación de personas competentes, sino también de ciudadanos comprometidos con la transformación social. Nuestro modelo educativo integra dimensiones intelectuales, éticas, sociales y espirituales, reconociendo que el desarrollo humano pleno requiere atención a todas estas facetas. A través de nuestros programas académicos, espacios de reflexión y proyectos comunitarios, fomentamos el pensamiento crítico, la empatía y la solidaridad como pilares fundamentales de la formación integral.

Compromiso comunitario. El anhelo de una sociedad más igualitaria e inclusiva es un objetivo compartido por la Universidad Olmeca. Este compromiso se materializa en iniciativas concretas que vinculan el quehacer académico con las necesidades reales de las comunidades locales. Promovemos el voluntariado, el aprendizaje-servicio y los proyectos de intervención social como herramientas pedagógicas que permiten a nuestros estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales mientras desarrollan una profunda sensibilidad hacia las problemáticas sociales. Creemos firmemente que la universidad debe ser un agente de cambio positivo en su entorno inmediato.

Alineación con los ODS. A medida que la institución avanza en su misión, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para crear un futuro donde la justicia social y la equidad no sean solo aspiraciones, sino realidades tangibles. Hemos incorporado los ODS como marco de referencia en nuestros planes de estudio, investigaciones y proyectos de extensión universitaria. Esta alineación estratégica nos permite contribuir significativamente a la agenda global de desarrollo sostenible, abordando desafíos como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y el acceso a la educación de calidad. Nuestros estu-

diantes no solo conocen estos objetivos, sino que desarrollan las competencias necesarias para contribuir activamente a su consecución.

En síntesis, la Universidad Olmeca entiende que la formación ética y valórica constituye la columna vertebral de un proyecto educativo transformador. Asumimos la responsabilidad de educar no solo profesionales exitosos en términos laborales, sino ciudadanos globales comprometidos con la construcción de un mundo más justo, sostenible y pacífico. Este compromiso se refleja en cada aspecto de nuestra labor institucional, desde las prácticas pedagógicas hasta las políticas administrativas, creando un ecosistema educativo coherente con los principios que promovemos.

Formación de conciencia crítica. Cada alumno, al salir de las aulas, debe llevar consigo una conciencia crítica, dispuesta a enfrentar desafíos y a aportar a su entorno de manera positiva. La Universidad Olmeca fomenta el pensamiento crítico como herramienta fundamental para analizar y transformar la realidad social y ambiental.

Esta formación crítica permite a los estudiantes cuestionar paradigmas establecidos y proponer soluciones innovadoras a problemas complejos, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y sostenible.

La universidad del futuro, hoy

La Universidad Olmeca se erige hoy como una Institución de educación superior comprometida con la formación integral de sus educandos a través de la sostenibilidad y el desarrollo humano. En un mundo en constante transformación, la capacidad de adaptarse a nuevas realidades y desafíos es fundamental. La universidad, al fomentar una educación basada en la ética, el emprendimiento y la economía circular, no solo prepara a sus estudiantes para el futuro, sino que también garantiza un legado más sostenible y justo para las generaciones venideras.

En el tránsito que ha dispuesto la Junta de Gobierno hacia una educación 6.0, la Universidad Olmeca continúa demostrando que no solo es posible cultivar un espacio donde el

conocimiento, el medio ambiente y la justicia social converjan en beneficio de la humanidad, si no que este debe ser un compromiso invariable porque así lo establecieron los fundadores de esta institución hace treinta y cuatro años.

Educación 6.0: un nuevo paradigma

A partir de lo anterior, a Universidad Olmeca está evolucionando hacia un modelo de educación 6.0, que representa cambio significativo en la forma de concebir el proceso educativo. Este enfoque va más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos, integrando aspectos fundamentales que preparan a los estudiantes para un mundo cada vez más complejo e interconectado. La educación 6.0 representa la convergencia de la inteligencia artificial, el aprendizaje personalizado, la realidad aumentada y virtual, y la formación en competencias socioemocionales, todo ello bajo un marco ético sólido.

Este modelo educativo responde a las necesidades emergentes de la sociedad actual, donde la velocidad del cambio tecnológico y los desafíos globales requieren profesionales con capacidades adaptativas y visión sistémica. Entre los elementos que caracterizan este nuevo paradigma se encuentran:

Innovación constante. Fomento de la creatividad y la búsqueda de soluciones disruptivas a problemas tradicionales. Los estudiantes aprenden a cuestionar constructivamente el *statu quo*, desarrollando proyectos que rompen con esquemas establecidos y generan valor agregado mediante aproximaciones novedosas. Se implementan metodologías como *design thinking*, que potencian la capacidad de ideación y prototipado rápido.

Tecnología aplicada. Uso de herramientas tecnológicas avanzadas para potenciar el aprendizaje y la investigación. Los laboratorios están equipados con tecnologías de simulación, impresión 3D, análisis de datos masivos e inteligencia artificial que permiten a los estudiantes experimentar en entornos virtuales seguros antes de implementar soluciones en contextos reales. La alfabetización digital avanzada se convierte en una competencia transversal a todas las disciplinas.

Colaboración multidisciplinaria. Trabajo conjunto entre diferentes áreas del conocimiento para abordar desafíos complejos. Se crean espacios académicos donde estudiantes de ingeniería, humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas trabajan en proyectos integrados que requieren múltiples perspectivas. Esta colaboración refleja la naturaleza interconectada de los problemas contemporáneos, donde las soluciones aisladas resultan insuficientes frente a la complejidad sistémica.

Sostenibilidad integral. Incorporación de principios de sostenibilidad en todos los aspectos del currículo académico. Cada asignatura, independientemente de su área disciplinar, integra reflexiones y aplicaciones prácticas sobre el impacto ambiental, social y económico de las decisiones profesionales. Los estudiantes desarrollan competencias para evaluar la huella ecológica de sus proyectos y proponer alternativas que equilibren el progreso con la preservación de los ecosistemas naturales y sociales.

Este enfoque de educación 6.0 adoptado por la Universidad Olmeca está transformando profundamente la experiencia formativa de nuestros estudiantes, quienes desarrollan no solo competencias técnicas avanzadas sino también un sentido de responsabilidad global y capacidad de adaptación continua. Los resultados preliminares muestran una mayor satisfacción con el proceso educativo, mejor inserción laboral y mayor capacidad para generar emprendimientos con impacto positivo en la comunidad.

La implementación de este modelo representa un compromiso institucional con la vanguardia educativa, posicionando a la Universidad Olmeca como un referente en innovación pedagógica y preparación integral para los desafíos del siglo XXI.

La **misión** de la UO a partir de la implementación de este modelo educativo es: Promover una educación innovadora e inclusiva que capacite a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI mediante el uso de tecnologías emergentes y metodologías activas que fomenten el aprendizaje crítico y la colaboración.

A partir de esta misión, ¿cuál es nuestra **visión**?: Ser un referente nacional e internacional en la educación del futuro, orientada a formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad, utilizando tecnologías avanzadas que transformen el aprendizaje.

Economía circular en la formación académica

Congruentes con nuestra misión y visión nuestra institución ha integrado el concepto de economía circular como eje transversal en sus programas académicos. Este modelo económico, basado en la reducción, reutilización y reciclaje de recursos, se presenta como una alternativa viable al modelo lineal tradicional de extraer, producir, desechar.

Diseño regenerativo. Formación en diseño de productos y servicios que contemplen todo el ciclo de vida.

Optimización de recursos. Estrategias para maximizar la utilidad de materiales y energía.

Sistemas circulares. Desarrollo de modelos de negocio que eliminen el concepto de residuo.

Colaboración intersectorial. Creación de redes de valor que potencien la circularidad.

Emprendimiento social: motor de cambio

El emprendimiento social constituye uno de los pilares fundamentales en la formación que ofrece la Universidad Olmeca. A diferencia del emprendimiento tradicional, este enfoque busca generar soluciones innovadoras a problemas sociales y ambientales, combinando la sostenibilidad financiera con el impacto positivo en la comunidad. La Universidad Olmeca ha desarrollado un ecosistema integral que impulsa iniciativas de alto impacto, ofreciendo mentorías, financiamiento semilla y espacios de *coworking* para que los estudiantes materialicen sus ideas transformadoras.

Este modelo formativo responde a los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad, donde las necesidades sociales y ambientales demandan respuestas creativas y sostenibles. El emprendimiento social representa una oportunidad para crear

valor compartido, generando no solo retornos económicos sino también beneficios tangibles para las comunidades y el entorno natural.

Identificación de problemas. Análisis de necesidades sociales y ambientales no atendidas.

- Diagnóstico participativo con comunidades locales.
- Mapeo de actores y recursos disponibles.
- Evaluación de impacto potencial y viabilidad.
- Identificación de barreras estructurales y oportunidades de intervención.

Innovación social. Desarrollo de soluciones creativas y sostenibles.

- Diseño centrado en el usuario y cocreación.
- Prototipado rápido y validación con usuarios finales.
- Incorporación de tecnologías apropiadas y accesibles.
- Modelos de negocio inclusivos y adaptables.

Implementación. Puesta en marcha de proyectos con enfoque en triple impacto.

- Gestión de recursos financieros y humanos.
- Establecimiento de alianzas estratégicas multisectoriales.
- Medición del impacto social, ambiental y económico.
- Adaptación continua basada en resultados y retroalimentación.

Escalabilidad. Expansión del impacto positivo a mayor escala.

- Desarrollo de estrategias de crecimiento sostenible.
- Replicación y adaptación a diversos contextos.
- Establecimiento de redes colaborativas de impacto.
- Incidencia en políticas públicas para cambios sistémicos.

Nuestros estudiantes son formados para convertirse en agentes de cambio que, a través del emprendimiento social, contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Fomentamos una cultura emprendedora donde el

éxito no se mide únicamente por indicadores financieros, sino por la capacidad de generar transformaciones positivas y duraderas.

Los emprendedores sociales formados en nuestras aulas y en estrecha vinculación con los sectores empresarial y social, comprenden que los desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental representan oportunidades para desarrollar modelos de negocio innovadores que reconcilien la prosperidad económica con el bienestar social y la regeneración ecológica.

Energías renovables: compromiso institucional

Energía solar. La Universidad Olmeca ha implementado sistemas de captación de energía solar en sus instalaciones, reduciendo significativamente su huella de carbono y sirviendo como ejemplo práctico para sus estudiantes.

Gestión hídrica sostenible. Sistemas de captación y tratamiento de agua de lluvia permiten optimizar el uso de este recurso vital, demostrando alternativas viables para la conservación del agua.

Laboratorios especializados. Espacios dedicados a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en energías renovables, donde estudiantes y docentes colaboran en proyectos innovadores.

Derechos humanos y movilidad humana. La Universidad Olmeca reconoce la estrecha relación entre el cambio climático, la movilidad humana y los derechos fundamentales. En un contexto donde los desplazamientos forzados por razones ambientales son cada vez más frecuentes, la institución ha incorporado en su currículo el estudio de estos fenómenos y sus implicaciones. Nuestro enfoque interdisciplinario combina perspectivas legales, sociológicas, ambientales y humanitarias para formar profesionales capaces de responder a los desafíos contemporáneos de la movilidad humana.

El programa de estudios aborda tanto los marcos normativos internacionales de protección como las realidades locales, preparando a los estudiantes para desarrollar soluciones

innovadoras que respeten la dignidad y los derechos de las personas en situación de movilidad.

La Universidad Olmeca también desarrolla investigación aplicada para informar políticas públicas más humanas y efectivas. Destaca el Programa de Salud Alimentaria: Dieta Mediterránea Mexicanizada. En nuestros programas de Energías Alternativas, Ingeniería Biomédica, Psicología, Comercio Exterior y Aduanas, Arquitectura y Derecho, se realizan estudios transversales sobre:

Cambio climático. Alteraciones en patrones climáticos que afectan medios de vida tradicionales, incluyendo sequías prolongadas, inundaciones recurrentes y eventos meteorológicos extremos. Estos fenómenos destruyen infraestructura, reducen la productividad agrícola y amenazan la seguridad alimentaria de comunidades enteras.

Migración forzada. Desplazamiento de poblaciones vulnerables debido a condiciones ambientales adversas, que se ven obligadas a abandonar sus hogares y territorios ancestrales. Este fenómeno afecta especialmente a poblaciones rurales e indígenas cuya subsistencia depende directamente de ecosistemas saludables y estables, generando nuevas formas de vulnerabilidad.

Vulneración de derechos. Situaciones de precariedad que comprometen derechos fundamentales como el acceso a agua limpia, alimentación adecuada, vivienda digna, salud y educación. Las personas desplazadas por motivos climáticos frecuentemente carecen de reconocimiento legal específico, quedando en un limbo jurídico que dificulta su protección y asistencia.

Soluciones integrales. Desarrollo de políticas y acciones que aborden las causas y consecuencias de la movilidad climática, desde la mitigación del cambio climático hasta la creación de marcos de protección específicos. Esto incluye estrategias de adaptación local, canales de migración regular, programas de reasentamiento planificado y mecanismos de financiamiento para pérdidas y daños climáticos.

Educación transformadora

Formación de profesionales con sensibilidad y competencias para enfrentar los desafíos de la movilidad humana inducida por el clima. La Universidad Olmeca implementa metodologías pedagógicas que combinan el análisis crítico con experiencias prácticas en comunidades afectadas, permitiendo a los estudiantes comprender la complejidad del fenómeno.

A través de su Centro de Estudios Económicos y Sociales se realizan investigaciones sobre migración y cambio climático. La Universidad Olmeca colabora con el Municipio de Centro en la elaboración de proyectos de investigación-acción que abordan los desafíos de la movilidad humana desde una perspectiva de derechos. Esta labor académica contribuye a visibilizar la situación de los desplazados climáticos, promover marcos de protección adecuados y desarrollar capacidades institucionales para responder a este fenómeno creciente en México y Latinoamérica.

Estos estudios se extrapolan en razón de la integración en la RED FREI que agrupa a instituciones de educación superior, investigadores y docentes iberoamericanos dedicados al estudio e investigación sobre temas educativos, sustentabilidad y sostenibilidad en la región.

Derechos humanos y migración. El compromiso de la Universidad Olmeca con los derechos humanos en contextos de movilidad se refleja también en su participación en redes académicas internacionales dedicadas a este tema, así como en la organización de foros, seminarios y publicaciones que amplían el conocimiento y debate sobre las intersecciones entre justicia climática, migración y derechos humanos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: marco de acción

La Universidad Olmeca ha alineado su misión educativa con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Estos objetivos constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, desde la erradicación de la pobreza hasta la acción por el clima.

Cada programa académico y proyecto de investigación

desarrollado en la Universidad Olmeca contribuye, directa o indirectamente, al cumplimiento de estos objetivos, formando profesionales comprometidos con la construcción de un futuro más sostenible y equitativo.

Visión prospectiva: legado para las generaciones futuras

En su camino invariable hacia la excelencia educativa y la pertinencia académica, la Universidad Olmeca no pierde de vista su responsabilidad con las generaciones futuras. Cada decisión, cada programa académico y cada proyecto de investigación se evalúa no solo por su impacto inmediato, sino también por sus implicaciones a largo plazo. Esta visión prospectiva, vigilada de manera permanente por nuestra Junta de Gobierno, define nuestra identidad institucional y nos impulsa a desarrollar modelos innovadores que trascienden los límites convencionales de la educación superior.

Entendemos que la sostenibilidad no es solo un concepto académico, sino una práctica diaria que debe permear todas las dimensiones de la vida universitaria. Desde la gestión de recursos hasta el diseño curricular, nuestro compromiso se materializa en acciones concretas que buscan minimizar nuestra huella ecológica mientras maximizamos nuestro impacto positivo en la sociedad.

Conocimiento transformador. Educación que cambia paradigmas y promueve la innovación sostenible.

Valores éticos. Formación basada en principios de responsabilidad y compromiso social.

Acción concreta. Implementación de soluciones reales a problemas ambientales y sociales.

La Universidad Olmeca continúa demostrando que es posible cultivar un espacio donde el conocimiento, el medio ambiente y la justicia social converjan en beneficio de la humanidad, dejando un legado duradero para quienes vendrán después de nosotros.

Este legado se construye día a día en las aulas, laboratorios y espacios de encuentro comunitario, donde estudiantes y docentes trabajan colaborativamente en la búsqueda de respues-

tas a los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Reconocemos que la formación de ciudadanos globales comprometidos con el bienestar colectivo es nuestra contribución más valiosa para el futuro.

El horizonte que vislumbramos está marcado por la esperanza y la certeza de que nuestros egresados serán agentes de cambio capaces de liderar transiciones justas hacia sociedades más equitativas y ambientalmente responsables. Nuestro éxito no se mide solo en logros académicos o reconocimientos institucionales, sino en la capacidad de nuestros estudiantes para construir un mundo mejor que el que heredaron.

Un paradigma común para el bienestar: temas centrales para el foro CELAC en tiempos de inseguridad

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emerge como un espejo de las diversidades y similitudes que caracterizan a la región. En el contexto de la reunión en Honduras, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de articular un foro que promueva el bienestar en América Latina y el Caribe, en contraparte con las políticas conservadoras que imperan en ciertos sectores. ¿Cuál es el tema central que puede unir a los países miembros de la CELAC, frente a la complejidad de las ideologías y circunstancias que enfrentan?

Fundada en 2011, la CELAC representa un esfuerzo histórico por crear un espacio de diálogo y concertación política exclusivamente latinoamericano y caribeño, independiente de otras influencias hegemónicas. A lo largo de su existencia ha enfrentado desafíos significativos derivados de las cambiantes realidades políticas de la región, las crisis económicas recurrentes y las presiones externas que buscan fragmentar la unidad regional.

La propuesta de Sheinbaum se enmarca en un momento particularmente complejo para la región, caracterizado por una creciente polarización ideológica, el aumento de la desigualdad social exacerbada por la pandemia de COVID-19, y una serie de crisis migratorias, ambientales y de seguridad que trascienden

fronteras nacionales. Este foro buscaría establecer un nuevo contrato social regional, fundado en principios de justicia social, sostenibilidad ambiental y democracia participativa.

La diversidad de gobiernos que conforman a la CELAC — desde aquellos con orientaciones progresistas hasta los de tendencia más conservadora — representa tanto un desafío como una oportunidad. Esta pluralidad ideológica podría enriquecer el debate y conducir a soluciones más integrales, siempre que se logre construir un piso común basado en el respeto mutuo y el compromiso con el bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños, trascendiendo diferencias particulares en aras de objetivos regionales compartidos.

Contexto ideológico y político. La CELAC fue concebida como un espacio de integración regional que trasciende las divisiones políticas tradicionales. Con diferentes gobiernos de izquierda en Brasil, Colombia, Uruguay y Honduras, se presenta la oportunidad de abordar problemáticas comunes desde un enfoque alternativo. No obstante, la oposición ideológica de gobiernos conservadores, particularmente en relación a Estados Unidos, añade una capa de complejidad que debe ser considerada en el diseño del foro.

Esta diversidad ideológica representa tanto un desafío como una oportunidad para la construcción de un foro inclusivo que pueda atender las necesidades de todos los países miembros, independientemente de su orientación política.

En los últimos años, la región ha experimentado un notable vaivén político, con oleadas de gobiernos progresistas seguidas por resurgimientos conservadores. Este fenómeno, conocido como «el péndulo latinoamericano», ha dificultado la consolidación de políticas regionales a largo plazo. Sin embargo, también ha enriquecido el debate sobre modelos de desarrollo y ha forzado tanto a izquierdas como a derechas a moderar sus posiciones más extremas en busca de consensos regionales.

Los gobiernos de tendencia progresista han priorizado políticas de redistribución económica, servicios públicos robustos y mayor autonomía frente a potencias extranjeras. Por su parte, las administraciones más conservadoras han enfatizado

la liberalización económica, la seguridad y los vínculos estratégicos con Estados Unidos y Europa. Estas diferentes aproximaciones han generado tensiones, pero también han creado espacios para el aprendizaje mutuo sobre qué políticas funcionan mejor en diferentes contextos nacionales.

La creciente presencia de China e influencia de otros actores como Rusia en la región introduce además nuevas variables al equilibrio geopolítico tradicional. Esto ha obligado a replantear las relaciones internacionales más allá del eje Norte-Sur, ofreciendo a los países de la CELAC nuevas oportunidades de cooperación económica y política, pero también generando preocupaciones sobre nuevas formas de dependencia.

Un foro efectivo para la CELAC deberá, por tanto, encontrar terreno común entre estas diversas visiones, identificando prioridades compartidas como la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la soberanía regional y la respuesta coordinada a crisis transnacionales. El éxito de esta iniciativa dependerá de su capacidad para construir sobre estos puntos de convergencia, respetando al mismo tiempo las diferentes trayectorias políticas y modelos de desarrollo de cada país miembro.

Propuesta de un tema central. La propuesta de un foro centrado en el «Bienestar y sostenibilidad: caminos para la inclusión social en América Latina» puede servir como tema paraguas que aborde diversas preocupaciones interconectadas: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la salud pública. Este enfoque permite integrar diferentes agendas, garantizando que todos los países, independientemente de su inclinación política, encuentren puntos de coincidencia.

Este tema central busca establecer un terreno común donde las diferentes naciones puedan dialogar y colaborar, trascendiendo las diferencias ideológicas en favor del bienestar colectivo de la región.

La noción de bienestar representa un concepto suficientemente amplio para englobar prioridades tanto de gobiernos progresistas como conservadores. Para administraciones de izquierda, se alinea con sus objetivos de justicia social y redistri-

bución económica; para gobiernos de derecha, encaja con aspiraciones de prosperidad y desarrollo económico sostenido. De igual manera, la sostenibilidad ofrece un punto de convergencia, ya que las problemáticas ambientales y la necesidad de modelos económicos duraderos trascienden divisiones partidistas.

La inclusión social, tercer componente de esta propuesta temática, aborda directamente uno de los desafíos históricos más persistentes de América Latina y el Caribe: la desigualdad estructural que caracteriza a la región. Este enfoque permite incorporar discusiones sobre acceso equitativo a servicios esenciales, oportunidades económicas, representación política y reconocimiento cultural de grupos tradicionalmente marginados.

Al articular estos tres conceptos — bienestar, sostenibilidad e inclusión — se construye un marco lo suficientemente flexible para acomodar diversas perspectivas nacionales, pero también lo bastante específico para generar compromisos concretos y medibles. Este equilibrio resulta fundamental para un foro regional con la diversidad política que caracteriza a la CELAC en el contexto actual.

Además, este tema responde directamente a las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, que expuso tanto vulnerabilidades compartidas como la necesidad de respuestas coordinadas ante crisis transnacionales. La experiencia pandémica ha evidenciado que la colaboración regional no es simplemente deseable, sino imperativa frente a desafíos que trascienden fronteras nacionales.

Justicia social y desigualdad. América Latina y el Caribe continúan siendo la región más desigual del mundo, una realidad que exige acciones coordinadas y políticas transformadoras. La brecha entre ricos y pobres no solo representa un desafío económico, sino también una amenaza para la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

Análisis de políticas efectivas. Analizar políticas efectivas para reducir la brecha de pobreza e ingresos, con un enfoque en poblaciones vulnerables como mujeres, indígenas y afrodescendientes. Es fundamental examinar el impacto dife-

renciado de la desigualdad en estos grupos históricamente marginados y desarrollar intervenciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.

Los estudios recientes demuestran que las políticas sociales más exitosas son aquellas que combinan medidas redistributivas inmediatas con inversiones a largo plazo en capacidades humanas y acceso a oportunidades productivas. Este enfoque integral permite atacar tanto los síntomas como las causas estructurales de la desigualdad.

Estrategias de inclusión. El foro debe priorizar la discusión de estrategias que hayan demostrado éxito en la reducción de desigualdades estructurales, compartiendo experiencias entre los países miembros. La colaboración regional puede potenciar significativamente el impacto de estas intervenciones, especialmente en un contexto de recursos limitados y desafíos compartidos.

- Programas de transferencias condicionadas que han logrado reducir la pobreza extrema y mejorar indicadores de salud y educación en varios países de la región.
- Políticas de acción afirmativa para garantizar representación equitativa en espacios educativos, laborales y de toma de decisiones políticas.
- Iniciativas de economía solidaria y cooperativismo que fortalecen circuitos económicos locales y promueven la distribución más equitativa de recursos.
- Reformas fiscales progresivas que amplían la base tributaria y mejoran la capacidad redistributiva del Estado.
- Políticas de cuidado que reconocen y valorizan el trabajo no remunerado, principalmente realizado por mujeres.

La experiencia regional demuestra que el éxito de estas estrategias depende no solo de su diseño técnico, sino también del compromiso político sostenido y la participación activa de los grupos afectados en todo el ciclo de las políticas públicas, desde su formulación hasta su evaluación.

El abordaje de la desigualdad requiere un compromiso con la transparencia en la medición y seguimiento de indicado-

res socioeconómicos desagregados, que permitan identificar tanto avances como desafíos pendientes. La CELAC puede jugar un papel fundamental en la estandarización de estos sistemas de monitoreo, facilitando la comparabilidad y el aprendizaje mutuo entre los países miembros.

Salud y bienestar. Intercambiar estrategias exitosas para enfrentar crisis sanitarias y asegurar el acceso universal a servicios de salud, fortaleciendo sistemas públicos, representa una prioridad fundamental para la región. La cooperación en materia de salud no solo constituye un imperativo ético, sino también una necesidad estratégica para garantizar la resiliencia y desarrollo de nuestras sociedades frente a las amenazas emergentes.

Fortalecimiento de sistemas de salud pública. Compartir modelos exitosos de sistemas de salud pública que garanticen cobertura universal y atención de calidad. La experiencia de países como Cuba, Uruguay y Costa Rica demuestra que es posible construir sistemas robustos incluso con recursos limitados, priorizando la atención primaria y la medicina preventiva como ejes articuladores. El intercambio de conocimientos sobre financiamiento sostenible, formación de personal sanitario y gestión eficiente de recursos resulta fundamental.

Respuesta a emergencias sanitarias. Desarrollar protocolos regionales para enfrentar futuras pandemias y emergencias de salud pública. Esto implica la creación de sistemas de alerta temprana, reservas estratégicas de insumos médicos esenciales y mecanismos ágiles de distribución equitativa de recursos. La coordinación entre autoridades sanitarias nacionales debe institucionalizarse a través de redes permanentes que faciliten la respuesta inmediata y la toma de decisiones basada en evidencia científica.

Salud mental comunitaria. Implementar programas de atención a la salud mental como componente esencial del bienestar integral. El aumento de trastornos psicológicos, especialmente tras la pandemia, requiere un enfoque comunitario que despatologice el sufrimiento psíquico, reduzca el estigma y amplíe el acceso a servicios de apoyo psicosocial. Los modelos exi-

tosos integran saberes ancestrales y prácticas culturales propias de cada comunidad con abordajes contemporáneos.

Acceso a medicamentos esenciales. Establecer mecanismos regionales para garantizar la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos esenciales. Esto incluye la negociación conjunta de precios, el desarrollo de capacidades productivas locales para reducir la dependencia externa, y la armonización de marcos regulatorios que prioricen el derecho a la salud sobre intereses comerciales. La producción de medicamentos genéricos y la flexibilización de patentes en situaciones de emergencia son estrategias clave a considerar.

Determinantes sociales de la salud. Abordar los factores estructurales que condicionan los resultados de salud, incluyendo pobreza, desigualdad, discriminación y degradación ambiental. Las políticas intersectoriales que integran vivienda digna, seguridad alimentaria, acceso a agua potable y saneamiento básico resultan indispensables para lograr mejoras sostenibles en los indicadores sanitarios de la región.

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de fortalecer los sistemas de salud en la región y de establecer mecanismos de cooperación para enfrentar crisis sanitarias de manera coordinada. Las profundas desigualdades en el acceso a vacunas y tratamientos revelaron la urgencia de construir mayor autonomía sanitaria regional y desarrollar capacidades científico-tecnológicas propias.

El enfoque del bienestar debe trascender la mera ausencia de enfermedad para abarcar una concepción integral que reconozca las dimensiones física, mental, emocional, social y espiritual de la salud humana. Este paradigma holístico, presente en las cosmovisiones de los pueblos originarios de nuestra región, ofrece importantes aportes para reorientar sistemas de salud actualmente centrados en modelos biomédicos limitados. La CELAC puede facilitar diálogos interculturales que enriquezcan las políticas públicas de salud con estos saberes ancestrales.

Finalmente, resulta imperativo reconocer y dignificar el trabajo de los profesionales y trabajadores de la salud, garantizando condiciones laborales adecuadas, remuneraciones justas

y oportunidades permanentes de formación y actualización. El cuidado de quienes cuidan debe ser una prioridad regional para asegurar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Desarrollo sostenible y medio ambiente. Fomentar un diálogo sobre políticas verdes y sostenibles que combatan el cambio climático, priorizando la protección del medio ambiente.

Conservación de ecosistemas. Protección de bosques, humedales y otros ecosistemas críticos para la biodiversidad y la regulación climática.

Economía circular. Implementación de modelos económicos que minimicen residuos y maximicen la reutilización de recursos.

Transición energética. Desarrollo de fuentes de energía renovable y reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Gestión hídrica. Estrategias para el manejo sostenible del agua, recurso cada vez más escaso en la región.

Educación y desarrollo humano. Promover un enfoque inclusivo para la educación que potencie el desarrollo de competencias técnicas y emocionales en una región en constante transformación. La inversión en capital humano representa la base para impulsar sociedades más justas, innovadoras y resilientes ante los desafíos globales.

Innovación educativa. Implementación de metodologías pedagógicas innovadoras que respondan a los desafíos del siglo XXI, incluyendo la alfabetización digital y el pensamiento crítico.

Los sistemas educativos de la región deben evolucionar hacia modelos que fomenten la creatividad, la resolución de problemas complejos y el trabajo colaborativo. La integración de nuevas tecnologías debe ir acompañada de transformaciones pedagógicas profundas que preparen a los estudiantes para un mundo laboral en constante cambio.

- Aplicación de metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos y aulas invertidas.
- Desarrollo de competencias digitales y pensamiento computacional.
- Formación docente continua en nuevas pedagogías.

Educación para todos. Garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad, con especial atención a comunidades rurales, indígenas y marginadas.

La persistente brecha educativa entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos, representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo equitativo en la región. La CELAC debe priorizar estrategias que eliminen barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo.

- Programas de becas y apoyos económicos para estudiantes vulnerables.
- Infraestructura educativa en zonas remotas con conectividad digital.
- Educación intercultural bilingüe que valore y preserve las lenguas originarias.
- Programas de segunda oportunidad para personas que abandonaron sus estudios.
- Adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad.

Educación superior y formación profesional. El fortalecimiento de los sistemas de educación superior y formación técnica constituye un elemento crucial para impulsar la innovación, la productividad y la competitividad regional. La cooperación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo debe intensificarse para responder a las necesidades del mercado laboral y los desafíos del desarrollo sostenible.

Internacionalización educativa. Programas de movilidad estudiantil y docente que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias entre países de la región, fortaleciendo la identidad latinoamericana y caribeña.

Vinculación con el sector productivo. Alianzas estratégicas entre instituciones educativas y empresas para desarrollar programas de formación dual, pasantías y proyectos de investigación aplicada que respondan a necesidades reales.

Certificación de competencias. Sistemas nacionales y regionales de reconocimiento y acreditación de competencias

laborales que faciliten la movilidad de trabajadores y profesionales en el espacio económico latinoamericano.

La educación representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en América Latina y el Caribe, siendo un área donde la cooperación regional puede generar impactos significativos. Los países de la CELAC deben comprometerse a incrementar progresivamente la inversión educativa hasta alcanzar al menos el 6 % del PIB recomendado por organismos internacionales, priorizando la calidad, la inclusión y la pertinencia de los aprendizajes.

Finalmente, resulta fundamental reconocer que la educación trasciende los espacios formales e institucionales. El aprendizaje a lo largo de toda la vida, en diferentes contextos y modalidades, debe ser valorado y promovido como un derecho humano fundamental que permite a las personas desarrollar plenamente sus capacidades, ejercer otros derechos y participar activamente en la construcción de sociedades más justas, democráticas y sostenibles.

Democracia y derechos humanos. Crear espacios de diálogo y confrontación que fortalezcan la democracia y el respeto a los derechos humanos en todos los países de la Comunidad.

Retos y oportunidades. La realización de un foro centrado en el bienestar y la sostenibilidad no está exenta de retos. Las diferencias políticas y económicas entre los miembros pueden dificultar la alineación de estrategias. Sin embargo, también existe una oportunidad sin precedentes para construir alianzas basadas en intereses comunes, adoptando un enfoque flexible y colaborativo.

En el contexto latinoamericano y caribeño actual, estas tensiones adquieren particular relevancia debido a los complejos procesos sociales y políticos que atraviesan la región. La pandemia ha exacerbado muchas de las problemáticas estructurales preexistentes, pero también ha demostrado la importancia de la cooperación internacional para enfrentar desafíos comunes.

Desafíos

- Polarización política en la región que dificulta el diálogo constructivo entre gobiernos con visiones ideológicas divergentes.
- Asimetrías económicas entre países que generan dinámicas desiguales de poder e influencia dentro del bloque.
- Presiones externas de potencias globales que buscan mantener relaciones bilaterales por encima de los acuerdos regionales.
- Limitaciones presupuestarias para implementar acuerdos, especialmente en economías con altos niveles de endeudamiento.
- Vulnerabilidad ante crisis económicas globales y efectos del cambio climático que afectan de manera desproporcionada a la región.
- Debilidad institucional en algunos países que compromete la continuidad de las políticas de integración.

Estos desafíos requieren un abordaje estratégico y de largo plazo, reconociendo que la superación de obstáculos históricos demandará tanto voluntad política como capacidad técnica y recursos adecuados.

Oportunidades

- Fortalecimiento de la identidad latinoamericana y caribeña como base para la acción colectiva en el escenario internacional.
- Creación de cadenas de valor regionales que potencien la complementariedad productiva entre economías diversas.
- Posicionamiento conjunto en foros internacionales para aumentar la capacidad negociadora frente a temas críticos como cambio climático y comercio.
- Intercambio de conocimientos y buenas prácticas en políticas públicas exitosas adaptadas al contexto regional.
- Desarrollo de infraestructura compartida para la integración física y digital del espacio latinoamericano.

- Coordinación de respuestas regionales ante emergencias sanitarias y desastres naturales.

El aprovechamiento de estas oportunidades puede transformar los desafíos actuales en trampolines para un desarrollo más equilibrado y sostenible en toda la región.

La coyuntura actual presenta un momento histórico que, bien aprovechado, podría sentar las bases para una nueva etapa en la integración latinoamericana y caribeña. La reconfiguración del orden mundial pospandemia ofrece espacios para que la CELAC consolide su relevancia como mecanismo de diálogo político y cooperación, siempre que logre trascender las diferencias coyunturales y enfocarse en una agenda pragmática centrada en resultados concretos para el bienestar de la población.

Estrategias de implementación

Diagnóstico participativo. Realizar un análisis conjunto de la situación actual en cada uno de los ejes temáticos, identificando fortalezas y áreas de oportunidad en la región.

Definición de objetivos comunes. Establecer metas claras y medibles que reflejen las prioridades compartidas por los países miembros de la CELAC.

Diseño de planes de acción. Desarrollar estrategias específicas para cada eje temático, con responsabilidades definidas y plazos de implementación.

Monitoreo y evaluación. Implementar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el avance y realizar ajustes cuando sea necesario.

La implementación efectiva de los acuerdos alcanzados en el foro requerirá de un compromiso sostenido por parte de todos los países miembros, así como de la creación de estructuras institucionales que faciliten la cooperación regional.

¿Foro, para qué? La propuesta de un foro dentro de la CELAC que aborde el bienestar y la sostenibilidad puede actuar como un catalizador para la cooperación en una región marcada por la diversidad y la polarización. Este espacio de diálogo re-

presenta una oportunidad única para trascender las diferencias ideológicas y concentrarse en soluciones pragmáticas a los desafíos compartidos que enfrenta la región, desde la desigualdad social hasta los efectos del cambio climático.

En el contexto actual, donde la fragmentación política amenaza los avances en integración regional, el foro puede servir como un puente que conecte visiones diversas bajo el objetivo común del bienestar. La construcción de este espacio permitiría la consolidación de acuerdos mínimos pero significativos que impulsen la acción colectiva en áreas prioritarias, fomentando la transferencia de conocimientos y experiencias exitosas entre países con diferentes niveles de desarrollo.

Más allá de las declaraciones y documentos, el verdadero valor del foro radicaría en su capacidad para generar mecanismos concretos de cooperación técnica, financiera y política que respondan a las necesidades reales de la población latinoamericana y caribeña. Estos mecanismos deben estar orientados tanto a la resolución de problemas urgentes como a la construcción de capacidades institucionales que fortalezcan la resiliencia regional frente a crisis futuras.

El verdadero desafío no es solo encontrar puntos de coincidencia, sino construir sobre ellos una visión compartida del futuro que queremos para nuestra región.

En estos tiempos de incertidumbre, el reto radica en construir un diálogo inclusivo y constructivo que fortalezca la unidad latinoamericana y caribeña, guiado por un interés genuino en el bienestar de sus pueblos. La legitimidad y relevancia del foro dependerá de su capacidad para trascender el plano discursivo y generar resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

Solo a través de un compromiso compartido con estos principios será posible avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos de América Latina y el Caribe. El foro puede convertirse así no solo en un espacio de discusión teórica, sino en un motor de transformación que catalice el potencial de cooperación latente en nuestra región, demostrando

que, a pesar de las diferencias, es posible construir caminos comunes hacia el desarrollo sostenible e inclusivo.

Visión prospectiva. Este foro, si se propone acertadamente, puede dar lugar a la creación de nuevas políticas que impacten positivamente en la región, reafirmando el lugar de la CELAC como un actor relevante en el ámbito internacional, capaz de desafiar las narrativas hegemónicas y construir un futuro próspero y sostenible.

La CELAC tiene la oportunidad histórica de consolidarse como un espacio de integración que responda efectivamente a las necesidades y aspiraciones de los pueblos latinoamericanos y caribeños, promoviendo un modelo de desarrollo alternativo basado en el bienestar colectivo, la sostenibilidad ambiental y la justicia social.

El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la voluntad política de los gobiernos, sino también de la participación activa de la sociedad civil, el sector académico y los movimientos sociales en la construcción de una agenda común que refleje la diversidad y riqueza de nuestra región.

En el horizonte cercano, la CELAC podría establecer mecanismos permanentes de coordinación entre países miembros para atender crisis regionales con mayor agilidad y eficacia, desde emergencias sanitarias hasta desastres naturales. Esto requeriría la creación de un sistema de alerta temprana y respuesta coordinada que trascienda las limitaciones burocráticas actuales.

A mediano plazo, el fortalecimiento de esta comunidad regional podría manifestarse en la consolidación de una identidad latinoamericana y caribeña más robusta, que, sin desconocer las particularidades nacionales, pueda articular posiciones comunes en foros multilaterales sobre temas estratégicos como cambio climático, comercio internacional y migración.

La verdadera soberanía en el siglo XXI se construye a través de la cooperación estratégica y no del aislamiento. Una CELAC fortalecida es un multiplicador de la capacidad negociadora de cada uno de sus miembros.

Mirando hacia el futuro con mayor ambición, podríamos imaginar el desarrollo de proyectos de infraestructura transna-

cionales que conecten físicamente nuestros países, facilitando no solo el intercambio comercial sino también cultural y académico. Estos corredores de integración servirían como arterias de un nuevo modelo de desarrollo que privilegia la complementariedad económica por encima de la competencia destructiva.

La transformación digital representa otra dimensión crucial para la visión prospectiva de la CELAC. La creación de plataformas tecnológicas compartidas podría democratizar el acceso al conocimiento y reducir las brechas digitales que actualmente limitan el potencial innovador de nuestros pueblos.

Finalmente, una CELAC renovada y fortalecida podría ser el catalizador de un nuevo contrato social regional, donde los derechos humanos, la inclusión de grupos históricamente marginados y la protección de los bienes comunes constituyan los pilares fundamentales de un paradigma de desarrollo genuinamente latinoamericano y caribeño, que dialogue con el mundo desde una posición de dignidad y autonomía.

La corriente ideológica detrás de Donald Trump: un análisis geopolítico

¿Cuál es la fundamentación ideológica que sustenta el fenómeno político de Donald Trump? Es necesario analizar las características del nacionalismo populista, el conservadurismo radical y las corrientes intelectuales que están moldeando la visión de Estados Unidos y su lugar en el mundo en el contexto actual. ¿Cuáles son los principios ideológicos que lo sustentan?

El arquitecto de lo que hoy se conoce como el «aristopopulismo» se llama Patrick Deneen, profesor de la Universidad de Notre Dame y autor de dos libros fundamentales: *Why Liberalism Failed* y *Regime Change*. En un artículo escrito por León Krause (*El Universal*, 7 de abril de 2025) que me compartió mi maestro Federico Seyde, quien me honró prologando el libro *La geopolítica de la Esperanza*, se señala que Deneen «sostiene que el liberalismo ha fracasado al erosionar los cimientos comunitarios, familiares y morales que sostenían la vida en sociedad. Para él el libre mercado, la democracia liberal y la progresiva secularización —ocuyo extremo radical sería, según su visión, la política *woke*— no son accidentes sino desenlaces inevitables del propio proyecto liberal. Un proyecto que, a su juicio, se ha agotado y debe ser remplazado».

En su artículo, Krause señala que este planteamiento de Deneen «no se trata solo de una crítica teórica». En *Regime*

Change propone de manera explícita lo que se llama aristopolismo, que debemos entender como «un nuevo orden en el que una elite supuestamente virtuosa, arraigada en valores tradicionales, guíe al pueblo en la restauración de lo que considera vínculos comunitarios perdidos. Esta crítica radical no solo replantea las bases del poder político: esboza abiertamente una sustitución de la democracia liberal por formas de autoridad más jerárquicas y paternalistas».

Este marco ideológico ha permeado profundamente en el movimiento *MAGA* (*Make America Great Again*), transformándolo de un simple eslogan de campaña a una corriente de pensamiento con aspiraciones de reconfigurar el sistema político estadounidense. El movimiento no se trata meramente de una respuesta populista a la globalización y sus descontentos, sino de un intento deliberado de reimaginar los fundamentos del orden social y político de Estados Unidos.

La influencia de Deneen y otros pensadores como Adrian Vermeule y Yoram Hazony se puede apreciar en la retórica y las políticas propuestas por Trump y sus seguidores. Estos intelectuales han proporcionado un andamiaje teórico que legitima el rechazo al cosmopolitismo, al multiculturalismo y a las instituciones internacionales que han caracterizado la política exterior norteamericana durante décadas.

Lo que resulta particularmente significativo desde una perspectiva geopolítica es que este replanteamiento ideológico coincide con transformaciones estructurales en el orden mundial. La ascensión de China como potencia rival, la reconfiguración de alianzas estratégicas y la creciente multipolaridad crean un contexto propicio para que estas ideas encuentren resonancia más allá de círculos académicos, influyendo directamente en la toma de decisiones políticas.

El trumpismo, en este sentido, no es simplemente una expresión del nacionalismo tradicional estadounidense, sino una manifestación contemporánea de una tendencia global más amplia: el cuestionamiento de los principios liberales internacionalistas que han configurado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En países tan di-

versos como Hungría, Brasil, India e incluso en sectores políticos de Europa Occidental, encontramos movimientos paralelos que comparten elementos ideológicos con el fenómeno Trump.

Para México, esta transformación ideológica en nuestro vecino del norte tiene implicaciones profundas que van más allá de las tensiones comerciales o migratorias coyunturales. Representa un desafío conceptual a la forma en que hemos entendido nuestra relación bilateral y regional en las últimas décadas. Si el aristopopulismo se consolida como la corriente dominante en la política estadounidense, deberemos prepararnos para un entorno geopolítico fundamentalmente distinto, donde las reglas de juego y los valores compartidos que han facilitado la cooperación internacional podrían ser sustancialmente redefinidos.

El nacionalismo populista como base ideológica

El fenómeno Trump no puede entenderse sin analizar la corriente del nacionalismo populista que ha revitalizado en Estados Unidos. Este movimiento se caracteriza por una narrativa que divide a la sociedad entre «el pueblo verdadero» y «las élites corruptas», generando un discurso que apela directamente a los estadounidenses que se sienten abandonados por el sistema político tradicional.

Trump ha logrado capitalizar el descontento de amplios sectores de la población estadounidense, particularmente de la clase trabajadora blanca de estados industriales en declive, quienes perciben que la globalización y los cambios demográficos han erosionado su posición social y económica. El eslogan «Make America Great Again» sintetiza perfectamente esta nostalgia por un pasado idealizado donde Estados Unidos dominaba indiscutiblemente la economía mundial y donde la identidad cultural tradicional no se veía amenazada.

A diferencia del populismo latinoamericano, generalmente asociado con políticas de izquierda, el populismo trumpista se enmarca en una visión conservadora que rechaza el multiculturalismo, promueve políticas migratorias restrictivas y cuestiona los acuerdos comerciales internacionales. Este nacionalismo económico propone soluciones simplificadas para

problemas complejos, como la imposición de aranceles y la renegociación forzada de tratados comerciales.

Proteccionismo económico. Rechazo a la globalización y defensa de la industria nacional americana frente a competidores extranjeros, especialmente China.

Nativismo identitario. Políticas migratorias restrictivas basadas en la preservación de una supuesta identidad estadounidense tradicional.

Soberanismo político. Cuestionamiento de las instituciones multilaterales y priorización absoluta de los intereses nacionales.

El movimiento MAGA: de eslogan a ideología. El movimiento MAGA ha trascendido su origen como un simple eslogan de campaña para convertirse en una auténtica corriente ideológica con valores, símbolos y narrativas propias. Este fenómeno representa una ruptura significativa con el conservadurismo tradicional republicano, sustituyendo gran parte de su programa de políticas por una lealtad personalista hacia Trump y una visión particular del «americanismo».

El trumpismo como ideología se caracteriza por su rechazo frontal a lo que denomina «globalismo», un término paraguas bajo el cual agrupa tanto a los defensores del libre comercio como a las instituciones multilaterales y la cooperación internacional. Este enfoque ha generado una reconfiguración profunda del partido republicano, que ha abandonado muchas de sus posturas tradicionales a favor de este nuevo populismo nacionalista.

Un elemento central del movimiento MAGA es la teoría del Estado profundo, según la cual existe una burocracia permanente que opera en las sombras para sabotear los planes de Trump y mantener un orden mundial favorable a las élites internacionales. Esta narrativa conspirativa ha servido para justificar los frecuentes choques entre Trump y las instituciones gubernamentales tradicionales, desde el FBI hasta el Departamento de Estado.

«El trumpismo ha redefinido el conservadurismo estadounidense, sustituyendo la defensa de principios por la lealtad

a un líder y una visión particular de Estados Unidos como nación agraviada por enemigos internos y externos».

El impacto cultural del movimiento MAGA ha sido profundo, generando una identidad política que trasciende el ámbito electoral para convertirse en un marcador social y cultural. El sombrero rojo con el eslogan se ha transformado en un poderoso símbolo que divide a la sociedad estadounidense, representando para sus seguidores una forma de resistencia contra el establishment político y cultural.

El pensamiento intelectual detrás de Trump. Aunque a menudo se caracteriza a Trump como un político sin base intelectual definida, su movimiento se nutre de corrientes de pensamiento claramente identificables en la derecha radical estadounidense. Figuras como Steve Bannon, antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, han sido fundamentales en la articulación de un corpus ideológico que sustenta el trumpismo.

La influencia del «paleoconservadurismo» resulta innegable en la configuración ideológica trumpista. Esta corriente, representada por pensadores como Pat Buchanan, aboga por un nacionalismo económico, un aislacionismo selectivo en política exterior y un tradicionalismo cultural que rechaza tanto el multiculturalismo como la inmigración masiva. A diferencia de los neoconservadores que dominaron la era Bush, los paleoconservadores ven con escepticismo las intervenciones militares extranjeras y la promoción de la democracia liberal como objetivo de política exterior.

Otra corriente influyente es el «realismo nacionalista» en las relaciones internacionales, que considera el sistema internacional como un escenario anárquico donde los Estados compiten por el poder y los recursos. Desde esta perspectiva, las alianzas internacionales y los acuerdos multilaterales solo tienen sentido cuando benefician directamente los intereses estadounidenses, justificando así el cuestionamiento de Trump a instituciones como la OTAN o la ONU.

Paleoconservadurismo

- Rechazo al multiculturalismo.

- Oposición a la inmigración.
- Proteccionismo económico.
- Tradicionalismo cultural.

Populismo de derecha

- Retórica antiélites.
- Apelación al «pueblo auténtico».
- Crítica a los medios tradicionales.
- Discurso nativista.

Realismo nacionalista

- Escepticismo hacia instituciones internacionales.
- Priorización de intereses nacionales.
- Visión transaccional de las alianzas.
- Rechazo al intervencionismo liberal.

El trumpismo también ha incorporado elementos del nacionalismo cristiano, una corriente que fusiona la identidad religiosa evangélica con la identidad nacional estadounidense, promoviendo una visión de Estados Unidos como nación elegida con una misión divina. Esta ideología ha resultado particularmente atractiva para su base electoral evangélica, reconciliando aparentes contradicciones entre la conducta personal de Trump y los valores religiosos tradicionales.

La transformación del Partido Republicano

El ascenso de Trump ha provocado una metamorfosis radical en el Partido Republicano, alterando sus prioridades ideológicas, su composición electoral y su funcionamiento interno. Esta transformación representa uno de los cambios políticos más significativos en la historia reciente de Estados Unidos, con profundas implicaciones para el sistema bipartidista.

El partido que una vez se identificaba con el conservadurismo fiscal, la defensa del libre comercio y la promoción de la democracia en el exterior ha adoptado posiciones proteccionistas, populistas y aislacionistas. El trumpismo ha desplazado la ortodoxia económica republicana, tradicionalmente favorable

a la disciplina presupuestaria, para abrazar políticas que combinen recortes fiscales regresivos con un gasto público expansivo, especialmente en áreas como infraestructura y defensa.

En el ámbito social, el partido ha intensificado su apelación a las guerras culturales, adoptando posiciones cada vez más radicales en temas como la inmigración, los derechos LGBTQ+ y las políticas de identidad. Esta estrategia busca movilizar a una base electoral predominantemente blanca, rural y de menor nivel educativo, que se siente amenazada por los cambios demográficos y culturales experimentados por Estados Unidos en las últimas décadas.

Republicanismo tradicional (pre-2016). Conservadurismo fiscal, libre mercado, internacionalismo, valores familiares tradicionales y un enfoque gradualista del cambio político.

Transición trumpista (2016-2020). Adopción del populismo económico, nacionalismo cultural, cuestionamiento de instituciones y personalización del partido alrededor de la figura de Trump.

Consolidación MAGA (2020-actualidad). Purga de voces críticas, lealtad personal a Trump como requisito, adopción de teorías conspirativas y radicalización del discurso político.

Institucionalmente, el partido ha experimentado una centralización del poder en torno a la figura de Trump. Los líderes que han cuestionado sus políticas o su estilo han sido sistemáticamente marginados o expulsados, creando un entorno donde la lealtad personal se ha convertido en el principal criterio para el avance político dentro del partido.

Esta transformación representa un desafío fundamental para la tradición republicana y para el propio sistema político estadounidense.

El papel de los medios en la construcción del fenómeno Trump. La relación entre Trump y los medios de comunicación constituye uno de los aspectos más paradójicos de su fenómeno político. Por un lado, Trump ha construido gran parte de su identidad política sobre la base de un conflicto permanente con los «medios tradicionales», a los que acusa de propagar *fake news*. Por otro lado, su ascenso político sería

inconcebible sin la cobertura mediática masiva que recibió durante su primera campaña electoral y presidencia.

El ecosistema mediático conservador, particularmente Fox News, ha jugado un papel fundamental en la consolidación ideológica del trumpismo. Estos medios han servido como caja de resonancia para las narrativas trumpistas, proporcionando una infraestructura comunicacional que permite difundir su visión del mundo a millones de estadounidenses. La relación simbiótica entre Trump y estos medios ha reforzado la polarización informativa, creando universos paralelos donde los ciudadanos reciben versiones radicalmente distintas de la realidad política.

Las redes sociales representaron otro pilar fundamental para la comunicación trumpista, especialmente Twitter (ahora X) antes de su suspensión tras los eventos del 6 de enero. Trump revolucionó la comunicación política utilizando estas plataformas para circunvalar a los medios tradicionales y comunicarse directamente con sus seguidores. Esta estrategia no solo le permitió controlar su narrativa, sino también dominar ciclos noticiosos completos con declaraciones controvertidas y ataques a sus adversarios.

Medios conservadores tradicionales. Fox News, The Washington Examiner y otros medios conservadores han servido como amplificadores de los mensajes trumpistas, legitimando sus posiciones políticas y normalizando su estilo disruptivo.

Medios alternativos de derecha. Plataformas como Breitbart News, NewsMax y One America News Network han adoptado posiciones aún más radicales, promoviendo teorías conspirativas y narrativas extremistas que alimentan a los sectores más radicalizados de la base trumpista.

Ecosistema digital MAGA. Redes sociales alternativas como Truth Social, Parler y Gab han creado espacios donde las narrativas trumpistas circulan sin los filtros o restricciones de las plataformas tradicionales, generando cámaras de eco ideológicas.

La estrategia mediática trumpista ha consistido en erosionar sistemáticamente la confianza en las fuentes de informa-

ción tradicionales, creando un entorno donde los hechos objetivos pierden relevancia frente a narrativas emocionalmente satisfactorias. Esta «guerra contra la verdad» representa uno de los legados más perniciosos del trumpismo, con consecuencias potencialmente devastadoras para el funcionamiento de la democracia estadounidense.

La base electoral trumpista: más allá de los estereotipos

Contrariamente a la simplificación habitual, la base electoral de Trump es más compleja y diversa de lo que suelen sugerir los análisis superficiales. Si bien es cierto que su núcleo duro está compuesto principalmente por votantes blancos sin educación universitaria de zonas rurales y suburbanas, el movimiento trumpista ha logrado atraer a segmentos variados de la sociedad estadounidense.

Un análisis detallado revela que el apoyo a Trump está motivado por una combinación de factores económicos, culturales e identitarios. Por un lado, la ansiedad económica generada por la desindustrialización y la globalización ha sido un motor poderoso, especialmente en estados del «cinturón del óxido» como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Los votantes de estas regiones, muchos de ellos antiguos demócratas, han respondido al mensaje económico nacionalista y proteccionista de Trump.

Por otro lado, la dimensión cultural del trumpismo no puede subestimarse. Muchos de sus seguidores perciben una amenaza existencial a su forma de vida tradicional ante cambios sociales acelerados como la diversidad cultural creciente, los avances en derechos LGBTQ+ y el cuestionamiento de los símbolos históricos. Para estos votantes, Trump representa una defensa de valores tradicionales frente a lo que consideran una imposición de la «corrección política» por parte de élites urbanas y costeras.

Sorprendentemente, Trump ha logrado avances significativos entre ciertos grupos minoritarios, particularmente entre hombres latinos y afroamericanos. Este apoyo, aunque minoritario, contradice la narrativa simplista que reduce el trumpismo

a un fenómeno exclusivamente de supremacismo blanco. Factores como el conservadurismo social de algunos grupos latinos, especialmente en temas como el aborto, y la apelación al emprendimiento y la independencia económica entre ciertos sectores afroamericanos explican parcialmente esta tendencia.

La política exterior trumpista: ruptura con el consenso bipartidista

La visión trumpista de la política exterior representa una de las rupturas más significativas con el consenso bipartidista que ha dominado Washington desde el fin de la Guerra Fría. Bajo el lema «America First», Trump ha cuestionado los pilares fundamentales del orden internacional liberal que Estados Unidos ayudó a construir y mantener durante décadas.

El enfoque trumpista de las relaciones internacionales se caracteriza por su naturaleza transaccional, concibiendo la diplomacia como una serie de negociaciones bilaterales donde Estados Unidos debe obtener ventajas tangibles e inmediatas. Este enfoque contrasta con la visión tradicional que valoraba los beneficios a largo plazo de un sistema basado en normas, instituciones multilaterales y alianzas estables.

Entre los elementos más distintivos de esta doctrina se encuentra el escepticismo hacia las alianzas tradicionales como la OTAN, a cuyos miembros Trump ha exigido repetidamente aumentar sus contribuciones financieras bajo amenaza de retirar el compromiso defensivo estadounidense. Esta postura ha generado tensiones sin precedentes con aliados históricos en Europa y Asia, erosionando la confianza en el liderazgo estadounidense.

Bilateralismo comercial. Preferencia por negociaciones comerciales bilaterales en lugar de acuerdos multilaterales, buscando maximizar la ventaja negociadora estadounidense mediante amenazas de aranceles y sanciones.

Confrontación con China. Ruptura del consenso de «compromiso constructivo» con Pekín, adoptando una postura confrontacional en ámbitos comerciales, tecnológicos y geopolíticos.

Aislacionismo selectivo. Reducción del papel estadounidense en conflictos considerados periféricos a los intereses nacionales directos, como en Oriente Medio y África.

La relación con México ha sido particularmente ilustrativa de esta nueva aproximación. Trump abandonó la tradición de cooperación constructiva para adoptar un enfoque coercitivo, utilizando amenazas arancelarias para forzar cambios en la política migratoria mexicana y renegociar el TLCAN bajo términos más favorables a Estados Unidos. Esta estrategia ha tenido un profundo impacto en la relación bilateral, creando tensiones diplomáticas sin precedentes y generando incertidumbre económica en ambos lados de la frontera.

Las implicaciones para México: entre la hostilidad y la adaptación

La relación México-Estados Unidos durante la era Trump está transitando por una transformación radical, pasando de una asociación estratégica basada en intereses compartidos a una dinámica caracterizada por la hostilidad retórica y la coerción política. Esta nueva realidad ha obligado a México a replantearse su aproximación diplomática hacia su vecino del norte y a desarrollar estrategias de adaptación frente a un entorno bilateral incierto.

La construcción discursiva de México como amenaza ha sido uno de los elementos más constantes del discurso trumpista desde el mismo lanzamiento de su candidatura en 2015. La caracterización de los migrantes mexicanos como «criminales y violadores» y la insistencia en la construcción de un muro fronterizo pagado por México establecieron un tono agresivo que posteriormente se institucionalizó como política de Estado. Esta hostilidad retórica trascendió lo meramente simbólico para materializarse en políticas concretas, como la separación familiar de migrantes y la implementación de los protocolos de protección a migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

En el ámbito comercial, la renegociación forzada del TLCAN bajo amenaza de su terminación unilateral resultó en el T-MEC, un acuerdo que, si bien preserva el acceso preferen-

cial al mercado estadounidense, incorpora disposiciones más restrictivas en sectores clave como el automotor. La incertidumbre generada durante este proceso provocó una reducción significativa de la inversión extranjera directa en México y evidenció la vulnerabilidad estructural de la economía mexicana frente a los vaivenes políticos estadounidenses. Frente a este escenario, México ha desarrollado una estrategia adaptativa que combina la contención diplomática, la diversificación de relaciones internacionales y la cooperación pragmática en temas específicos.

El trumpismo como síntoma global: paralelismos internacionales

El fenómeno Trump no constituye una anomalía aislada en el panorama político internacional, sino que se inscribe en una tendencia global de ascenso de movimientos populistas nacionalistas. Esta oleada, que ha tenido manifestaciones tanto en democracias consolidadas como en sistemas políticos más frágiles, comparte características fundamentales con el trumpismo, sugiriendo la existencia de causas estructurales comunes.

La aparición casi simultánea de líderes como Boris Johnson en Reino Unido, Jair Bolsonaro en Brasil, Viktor Orbán en Hungría, Narendra Modi en India o Recep Tayyip Erdoğan en Turquía evidencia un patrón reconocible. Todos estos movimientos comparten una retórica anti-*establishment*, un nacionalismo exacerbado, la utilización de la polarización como estrategia política y un cuestionamiento sistemático de las instituciones democráticas tradicionales.

Esta sincronía internacional puede explicarse por factores estructurales compartidos, como el impacto desigual de la globalización económica, que ha generado bolsones de descontento entre los «perdedores» de este proceso; la crisis de representación de los partidos tradicionales, incapaces de canalizar las nuevas demandas ciudadanas; y la revolución digital, que ha transformado radicalmente los patrones de consumo informativo y facilitado la difusión de discursos populistas.

Globalización desigual. Impacto asimétrico del libre comercio y la deslocalización industrial, generando perdedores económicos receptivos a mensajes proteccionistas.

Crisis de representación. Desconexión entre élites políticas tradicionales y amplios sectores de la población, erosionando la legitimidad de partidos establecidos.

Revolución digital. Transformación de ecosistemas informativos, facilitando la difusión de discursos polarizantes y narrativas simplificadoras.

Cambios demográficos. Ansiedad cultural ante la diversificación étnica y transformaciones en roles tradicionales de género y familia.

Esta dimensión internacional del fenómeno resulta especialmente preocupante porque sugiere que, lejos de ser una aberración temporal, el trumpismo representa una tendencia profunda que está reconfigurando el panorama político global. La interconexión entre estos movimientos, que aprenden unos de otros y comparten estrategias, tácticas y narrativas, indica la emergencia de una «internacional populista» que representa un desafío sistémico para las democracias liberales y el orden internacional basado en reglas.

Las ramificaciones para el orden internacional liberal

El ascenso del trumpismo y sus equivalentes globales plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad futura del orden internacional liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial. Este sistema, caracterizado por instituciones multilaterales, reglas compartidas y la promoción de la democracia liberal, enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes ante el cuestionamiento sistemático de sus principios por parte de fuerzas nacionalistas.

La doctrina «America First» ha erosionado los cimientos del sistema internacional al cuestionar el valor mismo del multilateralismo. La retirada estadounidense de acuerdos como el Tratado de París sobre el cambio climático o el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, así como su hostilidad hacia instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Orga-

nización Mundial del Comercio, ha dejado un vacío de liderazgo que potencias revisionistas como China y Rusia han aprovechado para promover visiones alternativas del orden global.

En el ámbito de la promoción democrática, el impacto ha sido igualmente significativo. El abandono de la retórica de defensa de los derechos humanos y la admiración expresada hacia líderes autoritarios han debilitado la capacidad de Estados Unidos para posicionarse como referente democrático. Esta transformación ha coincidido con lo que politólogos como Larry Diamond han denominado «recesión democrática global», un retroceso en la calidad y cantidad de democracias a nivel mundial.

Crisis del multilateralismo. Debilitamiento de instituciones globales y regionales ante el auge de enfoques unilaterales y transaccionales.

Erosión normativa. Cuestionamiento de principios y normas internacionales como la prohibición del uso de la fuerza o la no intervención.

Competencia sistémica. Intensificación de la rivalidad entre modelos políticos democráticos y autoritarios.

Para México, cuya estrategia de inserción internacional se ha basado tradicionalmente en el multilateralismo y el derecho internacional, esta transformación del orden global presenta desafíos existenciales. La erosión de instituciones y reglas internacionales deja a países intermedios como México más vulnerables frente a las presiones de grandes potencias y reduce los espacios para una diplomacia basada en principios. En este contexto, la adaptación a un mundo posliberal se perfila como uno de los mayores desafíos para la política exterior mexicana en las próximas décadas.

Trumpismo: una visión prospectiva. El análisis de la corriente ideológica detrás de Donald Trump revela un fenómeno político de profundas raíces históricas y amplio impacto estructural. Lejos de constituir una simple anomalía pasajera en la política estadounidense, el trumpismo representa una reconfiguración fundamental del conservadurismo americano y una transformación del sistema político bipartidista que probablemente perdurará más allá de la figura personal de Trump.

La combinación de nacionalismo económico, conservadurismo cultural y populismo autoritario que caracteriza al movimiento MAGA ha demostrado una notable resiliencia frente a los intentos de restaurar el orden político tradicional. A pesar de la derrota electoral de 2020 y los escándalos judiciales, Trump mantiene un control férreo sobre el Partido Republicano y su base de seguidores, evidenciando que su influencia trasciende los mecanismos institucionales convencionales.

Para México, la consolidación del trumpismo como fuerza dominante en la política estadounidense plantea desafíos existenciales que exigen una reconsideración estratégica de la relación bilateral. La defensa de la soberanía nacional, la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos y la viabilidad de la integración económica requerirán un enfoque multidimensional que combine firmeza diplomática, diversificación de relaciones internacionales y fortalecimiento interno.

Preparación institucional. México debe fortalecer sus capacidades diplomáticas, comerciales y jurídicas para enfrentar posibles escenarios de confrontación bilateral, desarrollando protocolos de contingencia ante amenazas arancelarias o migratorias.

Diversificación estratégica. Es imperativo acelerar la diversificación de relaciones comerciales y diplomáticas, particularmente con Asia-Pacífico, Europa y América Latina, para reducir la vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales estadounidenses.

Diplomacia subnacional. Cultivar relaciones con estados y ciudades estadounidenses con intereses complementarios a los mexicanos puede constituir un contrapeso efectivo a las políticas hostiles desde Washington.

En un plano más amplio, el fenómeno Trump nos obliga a reflexionar sobre las vulnerabilidades estructurales de las democracias contemporáneas frente al populismo autoritario. La erosión de la confianza en las instituciones, la polarización extrema y la crisis de los sistemas de información constituyen desafíos civilizatorios que trascienden fronteras nacionales y requieren respuestas globales.

«El trumpismo no es solo un fenómeno estadounidense, sino el síntoma local de una crisis sistémica de la democracia liberal que requiere una renovación profunda del contrato social y de los mecanismos de gobernanza global».

La comprensión profunda de las raíces ideológicas del trumpismo resulta fundamental no solo para anticipar sus posibles evoluciones futuras, sino también para desarrollar alternativas políticas viables que respondan a las legítimas ansiedades económicas, culturales e identitarias sin sacrificar los valores democráticos fundamentales. Este es, quizás, el mayor desafío político de nuestra era.

La postura de Claudia Sheinbaum ante la violencia gubernamental hacia migrantes y su compromiso internacional

La migración ha sido un tema candente en la agenda política de muchos países, y con el ascenso de climas xenófobos, se han suscitado tensiones imperecederas entre naciones. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expuesto su preocupación por las acciones violentas del gobierno de Donald Trump hacia migrantes en Estados Unidos. En particular, ha rechazado las acusaciones del gobierno estadounidense que responsabilizan a México por las protestas de los migrantes y ha decidido llevar su postura al ámbito internacional.

La mandataria mexicana ha enfatizado que su administración mantendrá una política migratoria con enfoque humanitario, priorizando el respeto a los derechos humanos de quienes transitan por territorio mexicano. «No podemos permitir que se criminalice a personas que solo buscan mejores oportunidades de vida», declaró Sheinbaum en una reciente conferencia de prensa, donde también señaló la importancia de abordar las causas estructurales que generan los flujos migratorios.

Esta confrontación diplomática entre México y Estados Unidos se intensifica en un momento crucial, cuando Sheinbaum asistirá hoy y mañana en Alberta, Canadá, a la cumbre del G7, donde tiene previsto presentar una propuesta integral para el manejo de la migración regional. La presidenta mexicana

busca consolidar alianzas con otros líderes mundiales para promover políticas migratorias coordinadas que respeten la dignidad humana y fomenten el desarrollo económico en las comunidades de origen de los migrantes.

Tema relevante será el encuentro de la presidenta mexicana con su homólogo estadounidense, en un escenario complicado y disruptivo por los temas arancelarios, migratorios, de combate al trasiego del fentanilo, a lo que se suma las acciones ordenadas por la Casa Blanca de redadas en los estados de California, Texas, Nevada y Nuevo México. Derivado de las declaraciones contra el gobierno mexicano pronunciadas por Trump y su secretaria de Seguridad, Claudia Sheinbaum ha conminado a los miembros de su partido a ser mesurados en sus comentarios y, como ella ha enfatizado, llamar a un diálogo orientado a garantizar la prevalencia de los derechos humanos de nuestros connacionales.

Tiempos complejos de la relación con Estados Unidos cuyo gobierno, un día sí y otro también se muestra empeñado en una relación distante con su vecino del sur a pesar de la interdependencia cada vez más evidente entre ambas naciones. La reunión del subsecretario de Estado, exembajador de EE. UU. en México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien se dio en un contexto respetuoso, dejó manifiesta la postura de Washington que ha llamado a nuestro gobierno «a no entrometerse en asuntos internos de los Estados Unidos».

Confrontación diplomática entre México y Estados Unidos

La confrontación verbal desatada por un funcionario del equipo de Trump es un claro reflejo de las dificultades en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Las acusaciones contra la presidenta Sheinbaum, que la señalan como incitadora de manifestaciones de migrantes ilegales, son un intento evidente de desviar la atención de la violencia desmedida que se ha documentado en ciudades como Los Ángeles y Dallas.

Estos enfrentamientos han expuesto un ambiente de agresión en el que las fuerzas armadas del país vecino han re-

accionado con represión, mientras los migrantes, que portan banderas de México, claman por sus derechos y dignidad.

La situación se ha agravado en las últimas semanas, con reportes de periodistas independientes que documentan el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que califican como «tácticas intimidatorias» y «criminalización sistemática» de personas en situación de movilidad.

Esta no es la primera vez que la migración se convierte en el epicentro de tensiones entre ambas naciones. Durante administraciones anteriores, particularmente durante el primer mandato de Trump, la retórica antiinmigrante y las políticas de tolerancia cero generaron crisis humanitarias en la frontera compartida. Sin embargo, la diferencia actual radica en que México cuenta ahora con un liderazgo decidido a defender principios de soberanía y respeto mutuo en el ámbito internacional. Analistas políticos señalan que esta confrontación podría escalar a otros ámbitos de la relación bilateral, incluyendo acuerdos comerciales y colaboración en seguridad. El reciente comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazando categóricamente las declaraciones estadounidenses refleja una postura firme que busca establecer límites claros ante injerencias extranjeras en asuntos internos.

Participación de Sheinbaum en el G7

Ante esta situación, Sheinbaum ha decidido asistir al encuentro del Grupo de los Siete (G7) en Canadá los días 16 y 17 de junio. Este foro representa una oportunidad estratégica para abordar el problema de la migración desde una perspectiva humanitaria y presentar la postura oficial de México ante algunas de las economías más poderosas del mundo.

La presidenta tiene intención de manifestarse en contra de las tácticas empleadas por las autoridades estadounidenses, enfatizando que la violencia no es una solución a la problemática migratoria. Sheinbaum llega a este encuentro con una agenda clara que incluye la defensa de los derechos de los mi-

grantes mexicanos y centroamericanos, así como la propuesta de soluciones regionales que atiendan las causas estructurales del fenómeno migratorio.

Durante su participación, se espera que la mandataria mexicana presente evidencias documentadas sobre los incidentes de represión contra manifestantes pacíficos y proponga la creación de un grupo de trabajo internacional dedicado específicamente a garantizar el trato digno de las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio.

Acudir a la reunión en Canadá del G7 también denota un interés de la mandataria por fortalecer la voz de México en foros internacionales. Políticamente, la presidenta busca no solo condenar los actos de violencia, sino también proponer un cambio hacia políticas más inclusivas que respeten los derechos humanos de los migrantes.

El G7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, representa más de 40 % del PIB mundial, por lo que cualquier acuerdo alcanzado en este foro tiene repercusiones globales significativas. La presencia de México como país invitado subraya la importancia geopolítica de la nación en el continente americano y su papel como interlocutor clave en asuntos migratorios.

Analistas internacionales consideran que esta será una prueba de fuego para la diplomacia mexicana bajo el liderazgo de Sheinbaum, quien deberá navegar hábilmente entre la defensa firme de los intereses nacionales y la necesidad de mantener relaciones cordiales con socios comerciales estratégicos. La delegación mexicana también aprovechará este espacio para establecer alianzas con otros países que comparten su visión sobre la gestión migratoria basada en la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Enfoque humanitario de la presidenta mexicana

Dignidad humana. Desde su llegada a la presidencia, Sheinbaum ha promovido un enfoque basado en la dignidad y la protección de los derechos de los migrantes.

Contexto internacional. La presidenta es consciente de que muchos migrantes huyen de situaciones adversas en sus países de origen.

Cooperación bilateral. Busca establecer un diálogo constructivo para abordar la problemática migratoria desde una perspectiva integral.

Posible encuentro con Donald Trump

Un aspecto que despierta el interés de analistas políticos es la posibilidad de que Sheinbaum se entrevistase con Donald Trump durante la cumbre. Este encuentro, aunque no confirmado, podría ocurrir en un escenario disruptivo dado el contexto de tensión existente entre los países.

Las medidas arancelarias y la presión ejercida por Trump respecto a la inmigración han complicado las relaciones bilaterales. Sin embargo, el diálogo entre líderes es esencial para buscar un terreno común y abordar diferencias de manera constructiva. Sheinbaum podría aprovechar cualquier interacción con Trump para enfatizar la necesidad de un abordaje más humanitario hacia los migrantes.

Los observadores destacan que la presidenta mexicana llega a este posible encuentro con una posición fortalecida tras sus recientes pronunciamientos sobre la soberanía nacional y la defensa de los derechos humanos. Su capacidad diplomática será puesta a prueba ante un interlocutor conocido por su retórica agresiva en temas migratorios.

La estrategia de Sheinbaum probablemente combinará firmeza en la defensa de los intereses mexicanos con apertura al diálogo sobre temas de seguridad fronteriza, buscando equilibrar las preocupaciones estadounidenses sin comprometer su compromiso con un trato digno a los migrantes.

Expertos en relaciones internacionales señalan que este potencial encuentro podría marcar el tono de las relaciones México-Estados Unidos durante los próximos años, especialmente en un contexto donde ambos países enfrentan desafíos comunes como el tráfico de drogas, la migración irregular y la necesidad de fortalecer cadenas de suministro regionales.

Lecciones de la historia reciente. La historia reciente ha demostrado que el estancamiento en la política migratoria solo genera más conflictos y sufrimiento humano.

Aumento de tensiones. Las políticas restrictivas han incrementado la vulnerabilidad de los migrantes.

Crisis humanitaria. Familias separadas y personas en situación de riesgo en ambos lados de la frontera.

Necesidad de equilibrio. Búsqueda de soluciones que respeten tanto la soberanía como los derechos humanos.

Compromiso con los derechos humanos. La situación de los migrantes y la violencia ejercida en su contra no es un asunto que se pueda minimizar o ignorar. La postura de Claudia Sheinbaum ante estas acusaciones revela un compromiso hacia la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de políticas migratorias más justas.

Participación internacional. Su participación en el G7 y su intención de hablar sobre estos temas son pasos indispensables que podrían contribuir a una mejor comprensión entre los países.

Cambio de paradigma. Busca promover un cambio en la forma en que se aborda la migración y la seguridad a nivel global.

Crítica constructiva. Es esencial que líderes como Sheinbaum no solo critiquen la violencia, sino que también promuevan soluciones efectivas que satisfagan las necesidades de todos los involucrados.

Cooperación internacional como clave. En un mundo globalizado, la cooperación internacional es clave para resolver crisis humanitarias de esta magnitud. Las acciones que tomen los líderes hoy definirán el futuro de millones de migrantes que buscan una vida mejor. La situación actual en la frontera entre México y Estados Unidos refleja la urgente necesidad de establecer mecanismos de colaboración que vayan más allá de medidas temporales o reactivas.

El enfoque de Sheinbaum hacia una política migratoria humanitaria requiere no solo del compromiso de México, sino también de una red de apoyo internacional que aborde las cau-

sas estructurales de la migración: violencia, pobreza y falta de oportunidades en los países de origen. Este tipo de cooperación multinivel representa el único camino sostenible para gestionar los flujos migratorios respetando la dignidad humana.

Diálogo. Establecer canales de comunicación efectivos entre naciones. El intercambio transparente de información y la creación de foros permanentes de discusión son fundamentales para construir confianza entre los países involucrados en el fenómeno migratorio.

Acuerdos. Desarrollar políticas migratorias consensuadas. Estos acuerdos deben contemplar tanto las necesidades de seguridad fronteriza como los derechos fundamentales de las personas migrantes, estableciendo protocolos claros de actuación que eviten la violencia institucional.

Implementación. Ejecutar programas que protejan a los migrantes. La implementación efectiva requiere recursos adecuados, capacitación a funcionarios fronterizos en derechos humanos, y mecanismos de asistencia humanitaria que atiendan las necesidades inmediatas de las poblaciones vulnerables.

Seguimiento. Evaluar resultados y ajustar estrategias. Un monitoreo constante permite identificar prácticas exitosas y corregir deficiencias, asegurando que los compromisos internacionales se traduzcan en mejoras concretas para la vida de los migrantes y para las comunidades de acogida.

La postura de Claudia Sheinbaum ante el G7 y su potencial encuentro con Donald Trump representan oportunidades cruciales para impulsar este enfoque cooperativo. Al posicionar a México como un actor comprometido con soluciones humanitarias pero realistas, la presidenta mexicana puede contribuir significativamente a transformar el paradigma migratorio regional hacia uno basado en la responsabilidad compartida y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La escalada de la violencia contra migrantes en la era Trump: un análisis crítico

La presidencia de Donald Trump ha estado marcada por una retórica y políticas agresivas hacia los migrantes, a quienes ha denominado «ilegales». Esta postura ha llevado, en diversas ocasiones, a la implementación de acciones controversiales en distintas ciudades de Estados Unidos, siendo Los Ángeles un escenario destacado. La respuesta de las autoridades locales, la oposición política y figuras internacionales ha dado lugar a un debate encarnizado sobre derechos humanos, soberanía estatal y seguridad nacional.

El discurso antiinmigrante se ha intensificado significativamente en los últimos meses, provocando manifestaciones de rechazo y actos de violencia documentados en ciudades fronterizas como El Paso, San Diego y Brownsville. Las políticas de tolerancia cero han resultado en la separación de familias, detenciones masivas y deportaciones aceleradas que han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

En ciudades como Dallas, Chicago y Phoenix, han surgido movimientos ciudadanos en respuesta a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), creando redes de protección para comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, varios estados han declarado políticas de ciudad santuario, generando tensiones significativas entre los gobiernos

locales y la administración federal que han llegado hasta la Corte Suprema en múltiples ocasiones.

Es necesario analizar las implicaciones de estas acciones, el papel del liderazgo político en esta crisis, y su repercusión en la percepción del migrante en la sociedad actual. Examinaremos también cómo estas políticas han afectado las relaciones diplomáticas con México y otros países latinoamericanos, así como el impacto económico y social que han tenido en ambos lados de la frontera.

La situación en Los Ángeles

Los Ángeles, una de las ciudades más diversas de Estados Unidos, se ha convertido en un microcosmos de las tensiones raciales y políticas que han surgido bajo la administración de Trump. Las recientes redadas de la Guardia Nacional y la policía han resultado en la detención de más de 100 migrantes, lo que ha desencadenado una ola de violencia y miedo en la comunidad. Estas operaciones, iniciadas bajo el programa Restaurar el Orden, han sido particularmente agresivas en los barrios de East Los Ángeles, Boyle Heights y San Fernando, áreas tradicionalmente habitadas por comunidades latinoamericanas.

Los esfuerzos por criminalizar la migración han erosionado la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades públicas, generando un ambiente hostil y violento que contradice los principios de inclusión y diversidad que definen a la ciudad. Como consecuencia directa, se ha registrado una disminución de 45 % en las denuncias de delitos en zonas con alta población migrante, según datos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Los servicios esenciales como hospitales, escuelas y clínicas comunitarias también reportan una menor asistencia, ya que muchas personas temen ser interceptadas y deportadas en el trayecto.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha denunciado estas acciones, afirmando que vulneran la soberanía estatal y el bienestar de los residentes. Su proclamación de que estas purgas son injustas y contraproducentes ha sido recibida con resistencia por parte del presidente Trump, que ha amenazado

con encarcelar a líderes estatales y locales. Este enfrentamiento entre el gobierno federal y el estado de California no solo resalta la polarización política, sino que también expone las fragilidades del sistema federal en la gestión de crisis humanitarias.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha unido a la oposición contra estas medidas, implementando un fondo de emergencia de 10 millones para asistencia legal a migrantes y estableciendo «zonas seguras» en instalaciones municipales donde los agentes federales tienen prohibido operar sin una orden judicial específica. Esta iniciativa ha sido respaldada por el Consejo Municipal, que votó 12-3 a favor de reforzar el estatus de Los Ángeles como ciudad santuario.

Las organizaciones comunitarias y religiosas también han respondido formando una coalición llamada Escudo Angelino, que ofrece refugio temporal, asesoramiento legal gratuito y líneas directas de emergencia para reportar redadas. Iglesias católicas, mezquitas y sinagogas de toda la ciudad han abierto sus puertas como santuarios, recordando el movimiento de iglesias santuario de la década de 1980 durante la crisis de refugiados centroamericanos.

El impacto económico de estas políticas también ha sido significativo. Un estudio reciente de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) estima que la economía local ha perdido aproximadamente 1.3 mil millones debido a la reducción del consumo, el abandono de propiedades y la escasez de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios. Empresarios locales, especialmente en áreas como Huntington Park y Pico-Union, reportan una disminución de 30-40 % en sus ingresos desde que comenzaron las redadas intensificadas.

Los ecos de la violencia en Dallas y otras ciudades

Si bien Los Ángeles ha sido el epicentro de estas tensiones, otras ciudades, como Dallas, han replicado estos eventos, mostrando que la violencia sistemática contra los migrantes no es un fenómeno aislado. En Texas, la retórica antiinmigrante ha alimentado un clima de hostilidad, donde las acciones de las

autoridades han sido ampliamente criticadas por violar derechos humanos fundamentales.

Esta expansión de medidas represivas ha generado una sensación de inseguridad no solo entre los migrantes, sino también entre los ciudadanos que valoran la inclusión y la diversidad.

La crítica a la administración de Trump

La administración de Trump enfrenta crecientes críticas tanto a nivel nacional como internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su inconformidad ante lo que considera una violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Diversos líderes políticos, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas han alzado su voz contra las políticas migratorias implementadas, calificándolas de crueles e inhumanas.

Declaraciones internacionales. En sus conferencias matutinas, ha planteado que la violencia contra los migrantes no puede ser ignorada y ha presentado su intención de abordar este tema en foros internacionales, como el G-7. Sus declaraciones han resonado con otros líderes latinoamericanos que también han expresado su preocupación por el trato a sus connacionales en territorio estadounidense.

Cambio en la agenda diplomática. Esto marca un cambio significativo en la agenda diplomática, donde los derechos humanos adquieren protagonismo frente a la seguridad y los aranceles, cuestiones que tradicionalmente dominan tal discusión. Analistas políticos señalan que este giro podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los próximos años.

Presión de organismos internacionales. La ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha emitido informes detallados documentando posibles violaciones a tratados internacionales. Estos documentos han generado presión adicional sobre la administración Trump, que se ve cada vez más aislada en el escenario global.

Movimientos de resistencia. En ciudades como Nueva

York, Chicago y San Francisco, manifestaciones masivas han tomado las calles para protestar contra las políticas migratorias. Estos movimientos de resistencia civil han ganado fuerza y visibilidad, contando con el apoyo de celebridades y figuras influyentes que amplifican su mensaje.

Análisis académico y legal. Expertos en derecho constitucional de prestigiosas universidades estadounidenses han publicado estudios que cuestionan la legalidad de las acciones ejecutivas de Trump. Argumentan que muchas de estas políticas contradicen principios fundamentales de la Constitución y establecen precedentes peligrosos para el futuro de la democracia.

El papel del sistema judicial

Intervención judicial. La intervención de jueces que han detenido algunas de estas acciones muestra que, aunque hay un movimiento creciente en contra de los migrantes por parte de la administración Trump, aún existen salvaguardias legales que buscan proteger a estas poblaciones vulnerables.

Decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, la decisión reciente de la Suprema Corte de respaldar algunas políticas restrictivas ha resultado en un retroceso en los derechos de los migrantes.

Tensiones gubernamentales. Esto pone de manifiesto las tensiones entre diferentes ramas del gobierno y la capacidad del sistema judicial para actuar como un control frente a los abusos de poder.

Las consecuencias para la democracia estadounidense

Las estrategias implementadas por Trump no solo han afectado a los migrantes, sino que también han impactado la salud de la democracia en Estados Unidos. La oposición política al interior del país ha calificado estas acciones como un ataque directo a los valores democráticos, argumentando que la criminalización de la migración y el uso de la fuerza son tácticas que desestabilizan el tejido social.

Analistas señalan que estas políticas han provocado una erosión significativa de las instituciones democráticas. La sepa-

ración de poderes, piedra angular del sistema político estadounidense, se ha visto comprometida por las presiones ejercidas sobre jueces y funcionarios para implementar medidas que, en muchos casos, bordean los límites constitucionales.

El aumento de la polarización política es palpable, con un número creciente de ciudadanos que se sienten cada vez más inseguros tanto de su bienestar como de la dirección ética que sigue su país.

Esta fractura social se manifiesta en protestas cada vez más frecuentes y en la radicalización de posturas políticas. Las encuestas recientes muestran que la confianza en las instituciones democráticas ha disminuido significativamente, alcanzando niveles históricamente bajos entre ciertos sectores de la población.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han documentado un incremento preocupante en incidentes de discriminación y xenofobia, señalando una correlación directa con la retórica oficial. Este fenómeno no solo afecta a las comunidades migrantes, sino que establece precedentes peligrosos para el tratamiento de cualquier grupo minoritario dentro de la sociedad estadounidense.

Académicos y expertos constitucionales advierten que la normalización de estas prácticas podría tener efectos duraderos en el sistema democrático, transformando fundamentalmente la naturaleza de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, así como la percepción internacional de Estados Unidos como defensor de valores democráticos.

La creciente popularidad del autoritarismo

A pesar de las críticas y de un panorama complicado para su administración, Trump parece estar acumulando cada vez más adeptos entre una población cansada de la incertidumbre económica y social. Este fenómeno ha redundado en el resurgimiento del autoritarismo, donde se privilegian las soluciones rápidas y la mano dura sobre la diplomacia y el diálogo.

Este contexto ha llevado a un aumento de la aceptación de políticas que, si bien parece ofrecer seguridad, perjudican

principios democráticos fundamentales y plantean un futuro incierto para las libertades civiles en Estados Unidos.

Impacto en las comunidades migrantes

Las políticas migratorias restrictivas han generado profundas consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas, afectando múltiples dimensiones de su existencia y creando ciclos de vulnerabilidad difíciles de romper.

Miedo y desconfianza. Las comunidades migrantes viven en constante temor a las redadas y deportaciones, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia las autoridades. Este miedo se extiende incluso a servicios básicos como hospitales, escuelas y policía, reduciendo significativamente el acceso a protecciones y servicios esenciales.

- Menor denuncia de delitos por temor a ser deportados.
- Reticencia a buscar atención médica necesaria.
- Ausentismo escolar de niños de familias migrantes.

Separación familiar. Las políticas migratorias han resultado en la separación de numerosas familias, con consecuencias psicológicas devastadoras para los niños y adultos afectados. Estudios recientes documentan traumas prolongados, depresión y ansiedad crónica en menores separados de sus padres, con efectos que pueden persistir durante toda la vida. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que miles de familias permanecen separadas, sin información clara sobre los procesos de reunificación.

Vulnerabilidad económica. El miedo a ser deportados ha llevado a muchos migrantes a abandonar sus trabajos o a aceptar condiciones laborales abusivas, aumentando su vulnerabilidad económica. Los empleadores inescrupulosos aprovechan esta situación para pagar salarios por debajo del mínimo legal, ignorar normas de seguridad laboral y amenazar con denunciar a trabajadores que reclaman sus derechos. Esta precariedad económica afecta no solo a los migrantes sino también a sus familias en países de origen que dependen de las remesas para subsistir.

Impacto en la salud mental. La constante incertidumbre y el estrés crónico han desencadenado una crisis de salud mental en las comunidades migrantes. Especialistas reportan tasas alarmantes de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad, especialmente entre solicitantes de asilo que han experimentado situaciones traumáticas tanto en sus países de origen como durante el trayecto migratorio.

El acceso limitado a servicios de salud mental culturalmente apropiados agrava esta situación, dejando a muchos sin el tratamiento necesario.

Efectos en la siguiente generación. Los hijos de migrantes, incluso aquellos con ciudadanía estadounidense, sufren consecuencias profundas en su desarrollo educativo, social y emocional. Investigaciones educativas muestran brechas significativas en rendimiento académico y mayores tasas de abandono escolar entre estudiantes que viven bajo la amenaza constante de ver a sus padres deportados.

Esta situación perpetúa ciclos de desigualdad que pueden extenderse a lo largo de generaciones.

Retroceso en la integración comunitaria. Las políticas restrictivas han frenado los procesos de integración social y cultural de las comunidades migrantes, fomentando el aislamiento y la segregación. Barrios enteros han visto disminuir la participación de residentes migrantes en actividades comunitarias, celebraciones locales y espacios públicos por temor a exponerse a autoridades migratorias. Este retroceso debilita el tejido social de comunidades enteras y reduce oportunidades de diálogo intercultural.

Estas consecuencias no se limitan a las comunidades migrantes, sino que afectan profundamente a la sociedad estadounidense en su conjunto, deteriorando su cohesión social y contradiciendo valores fundamentales de inclusión y diversidad que históricamente han definido al país.

Respuesta internacional y diplomática. La crisis migratoria bajo la administración Trump ha generado respuestas diplomáticas significativas, especialmente desde México y otros países latinoamericanos.

Visión empresarial. La escalada de las acciones contra migrantes bajo la administración de Trump ha desencadenado una crisis humanitaria con repercusiones a múltiples niveles. Desde la violencia en las calles de Los Ángeles y Dallas hasta la respuesta de líderes internacionales como Claudia Sheinbaum, el aumento del autoritarismo en Estados Unidos está poniendo a prueba la integridad de la democracia.

Aunque los jueces han emitido fallos en contra de algunas de estas medidas, la intervención de la Suprema Corte genera preocupaciones sobre el futuro de los derechos humanos. Ante un contexto global donde el autoritarismo parece estar en auge, es fundamental que tanto los ciudadanos como los líderes políticos busquen formas de reafirmar los valores democráticos y proteger la dignidad de todos, independientemente de su estatus migratorio. La resiliencia de la democracia estadounidense dependerá de la respuesta colectiva ante la violencia y la injusticia que actualmente se viven.

Desde la perspectiva empresarial, este panorama político presenta desafíos significativos para las corporaciones que operan en Estados Unidos. Muchas empresas dependen de la mano de obra migrante y las políticas restrictivas actuales amenazan sus modelos de negocio, especialmente en sectores como la agricultura, construcción, hostelería y servicios.

Las grandes corporaciones estadounidenses se encuentran en una encrucijada. Por un lado, deben mantener relaciones cordiales con la administración federal para evitar represalias económicas. Por otro, enfrentan presiones de consumidores, accionistas y empleados para defender valores de inclusión y diversidad que chocan frontalmente con las políticas migratorias actuales.

Esta tensión ha llevado a que varias empresas importantes, como *Apple*, *Google* y *Microsoft*, hayan expresado públicamente su rechazo a las medidas antiinmigrantes, incluso presentando recursos legales contra algunas de ellas. Estas compañías argumentan que la innovación estadounidense depende de la diversidad de talento, incluyendo el aporte crucial de profesionales extranjeros y migrantes.

El sector agrícola ha sido particularmente vocal sobre las consecuencias negativas de estas políticas, señalando pérdidas millonarias debido a la escasez de trabajadores para cosechar cultivos. En California, Washington y otros estados agrícolas, existen reportes de productos que se pudren en los campos ante la imposibilidad de encontrar mano de obra suficiente.

A nivel macroeconómico, diversos análisis sugieren que las políticas restrictivas migratorias podrían provocar una contracción del PIB estadounidense entre un 1.3 y 2.6 % en los próximos cinco años, afectando negativamente al mercado laboral, los sistemas de pensiones y la recaudación fiscal.

Para las empresas con operaciones internacionales, la imagen deteriorada de Estados Unidos en el escenario global complica sus actividades en mercados extranjeros, especialmente en Latinoamérica donde el sentimiento antiestadounidense ha crecido significativamente.

Frente a este escenario, algunas corporaciones están desarrollando estrategias de contingencia que incluyen la relocalización de operaciones a países con políticas migratorias más estables, la automatización de procesos para reducir dependencia de mano de obra, y el fortalecimiento de programas de responsabilidad social corporativa orientados a proteger comunidades vulnerables.

Joseph Stiglitz: con Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos

El reconocido economista Joseph Stiglitz advierte sobre los peligros que representa Donald Trump para la democracia estadounidense, señalando que bajo su presidencia existe la posibilidad de que el sistema democrático desaparezca en los Estados Unidos (*El País*, 10 de junio de 2025).

En una entrevista exclusiva, el premio nobel de economía 2001 expresó su profunda preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas durante la anterior administración Trump y los riesgos de un posible retorno al poder. «Las señales son alarmantes. Hemos visto cómo se socavaron las normas democráticas, se atacaron a los medios independientes y se debilitaron los contrapesos institucionales», afirmó Stiglitz.

El economista destacó que la amenaza no es meramente retórica, sino que se basa en acciones concretas observadas durante el mandato anterior, como los intentos de influir en el Departamento de Justicia, el cuestionamiento sistemático de los resultados electorales y la polarización extrema de la sociedad estadounidense. «Lo que está en juego no es simplemente una diferencia de políticas económicas o sociales, sino la supervivencia misma del sistema democrático tal como lo conocemos», explicó.

Stiglitz también señaló que las consecuencias de un colapso democrático en Estados Unidos tendrían repercusiones

globales significativas, afectando la estabilidad política y económica mundial. «El mundo está observando con preocupación. Una erosión democrática en la potencia más influyente del planeta enviaría un mensaje devastador sobre el futuro de la democracia como sistema político viable».

Advertencia sobre la amenaza a la democracia

Joseph Stiglitz ha expresado su profunda preocupación sobre el futuro de la democracia estadounidense en razón de las decisiones del presidente Donald Trump. En su entrevista con *El País*, Stiglitz afirma categóricamente: «Con Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos».

Esta declaración refleja la gravedad con la que el economista percibe la situación política actual en su país, donde las instituciones democráticas podrían verse seriamente comprometidas por el retorno de Donald Trump al poder.

Stiglitz fundamenta su preocupación en patrones observados durante la administración anterior de Trump, como el debilitamiento sistemático de los contrapesos institucionales, los ataques constantes a la prensa libre y la polarización extrema de la sociedad estadounidense. «No estamos hablando de simples discrepancias políticas, sino de ataques frontales a los pilares fundamentales que sostienen el sistema democrático», explica el economista.

El premio nobel advierte que los signos de erosión democrática son evidentes en múltiples frentes: desde los intentos de manipulación del sistema judicial, pasando por la propagación de teorías conspirativas sobre fraude electoral, hasta la incitación a la violencia política. Según Stiglitz, estos comportamientos representan un peligro real y tangible para las instituciones que han sostenido la democracia americana durante más de dos siglos.

La advertencia de Stiglitz se produce en un contexto de creciente preocupación entre académicos, politólogos e historiadores sobre el estado de la democracia no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. El economista señala que un colapso democrático en la principal potencia mundial tendría conse-

cuencias devastadoras para la estabilidad política internacional y podría desencadenar un efecto dominó en democracias frágiles alrededor del mundo.

Análisis de Stiglitz sobre el impacto de Trump

En su análisis, Stiglitz profundiza en cómo las políticas y la retórica de Trump han erosionado los pilares fundamentales de la democracia estadounidense. El economista señala que Trump está mostrando «un desprecio por las instituciones democráticas, los controles y equilibrios constitucionales, y el Estado de derecho». Según Stiglitz, estos comportamientos no son simples desviaciones, sino indicativos de una tendencia autoritaria que podría intensificarse conforme avance su segundo mandato, llevando potencialmente a la desaparición del sistema democrático tal como lo conocemos.

El economista advierte que los signos de erosión democrática ya eran evidentes durante el primer mandato de Trump, y que las consecuencias podrían ser mucho más graves con su regreso a la Casa Blanca, especialmente considerando su retórica cada vez más divisiva y sus ataques a las instituciones.

Contexto económico de la advertencia

Como uno de los economistas más influyentes del mundo, Stiglitz no limita su análisis al ámbito político, sino que lo enmarca en un contexto económico más amplio. En su entrevista, relaciona la amenaza a la democracia con las políticas económicas implementadas por Trump, señalando que estas decisiones económicas están generando profundas implicaciones para el tejido democrático del país.

Políticas fiscales regresivas. Stiglitz critica las reducciones de impuestos que está proponiendo Trump que beneficiarán principalmente a los más ricos, aumentando la desigualdad económica que, según el economista, socava los fundamentos de la democracia. Argumenta que estas políticas han exacerbado las divisiones sociales, creando un entorno donde el poder económico se concentra en pocas manos, lo que distorsiona el proceso democrático y limita la representación efectiva de las mayorías.

Debilitamiento institucional. El ataque a instituciones económicas independientes como la Reserva Federal representa, según Stiglitz, un patrón más amplio de erosión institucional que amenaza los cimientos democráticos. El economista destaca cómo los intentos de politizar organismos económicos autónomos socavan los controles y equilibrios necesarios para una economía estable, creando condiciones donde el Poder Ejecutivo puede interferir en decisiones que deberían basarse en criterios técnicos y no políticos.

Polarización económica. Stiglitz enfatiza que la creciente brecha entre ricos y pobres ha intensificado la polarización social, creando terreno fértil para discursos populistas que amenazan el consenso democrático. Según el premio nobel, cuando los ciudadanos perciben que el sistema económico está manipulado en favor de las élites, su confianza en las instituciones democráticas se deteriora, haciendo que sean más receptivos a soluciones autoritarias que prometen resultados rápidos pero que, en realidad, erosionan aún más las libertades fundamentales.

En su análisis, Stiglitz establece una conexión directa entre la salud económica de una nación y la solidez de sus instituciones democráticas. Advierte que las políticas económicas que promueven la desigualdad extrema y el clientelismo corporativo no solo dañan la economía, sino que también crean las condiciones para el surgimiento de tendencias autoritarias que pueden, eventualmente, dismantelar el sistema democrático desde dentro.

Precedentes históricos mencionados por Stiglitz. En su entrevista con *El País*, Stiglitz establece paralelismos históricos para contextualizar la gravedad de la situación actual. El economista recuerda cómo otras democracias han sucumbido ante líderes populistas que inicialmente llegaron al poder a través de medios democráticos. Menciona específicamente casos como la República de Weimar en Alemania, donde el colapso económico y la polarización social facilitaron el ascenso del autoritarismo, y ejemplos más recientes en Hungría y Polonia, donde gobiernos democráticamente elegidos han erosionado sistemáticamente los controles institucionales.

Stiglitz advierte que la historia ha demostrado que las democracias no son inmunes al colapso, y que incluso sistemas aparentemente robustos como el estadounidense pueden desmoronarse si no se protegen activamente. Esta perspectiva histórica refuerza su preocupación de que «con Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos». El nobel enfatiza que muchas democracias caídas a lo largo del siglo XX compartían características institucionales similares a las de Estados Unidos antes de su colapso, incluyendo sistemas de pesos y contrapesos que fueron gradualmente debilitados. Señala que la erosión democrática suele ser gradual, con pequeños ataques a las instituciones que eventualmente conducen a un punto de no retorno, un patrón que ve reflejado en las acciones y retórica de Trump.

Stiglitz detalla cómo este proceso de «muerte lenta» de la democracia comienza típicamente con ataques a la prensa libre, seguidos por intentos de controlar el sistema judicial y culminando en la manipulación de los procesos electorales. Según el economista, estos patrones históricos no son coincidencias, sino señales de alerta que deben tomarse en serio.

En su análisis, también destaca el papel crucial de las crisis económicas como catalizadores del deterioro democrático. Explica que los periodos de intensa desigualdad económica y estancamiento para las clases medias y trabajadoras crean un terreno fértil para que los movimientos autoritarios ganen apoyo. El economista traza un paralelo entre la Gran Depresión que precedió al auge del fascismo en Europa y las secuelas de la crisis financiera de 2008, sugiriendo que ambos periodos generaron similares vulnerabilidades democráticas que líderes populistas han sabido explotar.

El papel de las instituciones económicas en la democracia

Independencia institucional. Stiglitz enfatiza la importancia de mantener la independencia de instituciones económicas como la Reserva Federal y agencias reguladoras.

Confianza pública. Plantea que la confianza en las instituciones económicas es fundamental para la estabilidad democrática.

Equidad económica. Propone **que** una distribución más equitativa de la riqueza fortalece los cimientos democráticos.

Protección contra la autocracia. Establece la necesidad de contar con instituciones económicas sólidas que actúan como baluarte contra tendencias autoritarias. En su análisis, Stiglitz destaca cómo Trump ha socavado sistemáticamente estas instituciones durante su mandato, creando condiciones que facilitan el deterioro democrático que tanto le preocupa.

Impacto global de la erosión democrática en EE. UU.

Stiglitz no limita su análisis a las consecuencias domésticas, sino que también aborda las implicaciones globales de un posible colapso democrático en Estados Unidos. Como potencia mundial, lo que ocurre en EE. UU. tiene repercusiones en todo el planeta, afectando tanto a las democracias consolidadas como a aquellas en desarrollo.

Efecto dominó democrático. El economista advierte que la caída de la democracia estadounidense podría desencadenar un efecto dominó, alentando tendencias autoritarias en otras naciones que tradicionalmente han mirado a EE. UU. como modelo democrático.

Esta preocupación se intensifica en un contexto global donde ya se observa un retroceso democrático en varias regiones del mundo. Según Stiglitz, el deterioro del sistema democrático estadounidense enviaría una poderosa señal a líderes autoritarios de que incluso las democracias más antiguas y supuestamente robustas pueden ser vulnerables.

Asimismo, considera que la diplomacia estadounidense perdería credibilidad y legitimidad moral para defender los valores democráticos en el escenario internacional, debilitando significativamente los esfuerzos globales para promover la gobernanza democrática.

Desestabilización de la económica global

Stiglitz señala que la incertidumbre política en Estados Unidos, especialmente bajo un liderazgo que desprecia las nor-

mas democráticas, podría generar inestabilidad en los mercados financieros globales y en el sistema económico internacional.

Los aranceles impredecibles, las guerras comerciales y la ruptura de acuerdos internacionales podrían tener efectos devastadores en las cadenas de suministro globales y en economías dependientes del comercio. El economista advierte que la volatilidad resultante afectaría desproporcionadamente a los países en desarrollo y a las poblaciones más vulnerables.

Además, Stiglitz destaca que la erosión democrática suele ir acompañada de políticas que favorecen a élites económicas a expensas del bienestar general, lo que podría exacerbar las desigualdades globales y aumentar las tensiones geopolíticas en un momento en que la cooperación internacional es más necesaria que nunca para enfrentar desafíos como el cambio climático y las pandemias.

En su análisis, Stiglitz concluye que el debilitamiento de la democracia estadounidense representa una amenaza existencial no solo para su propio país sino para el orden internacional basado en reglas que ha predominado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según el economista, está en juego no solo el futuro político de Estados Unidos, sino también la estabilidad del sistema económico global y la viabilidad de la cooperación multilateral para abordar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.

Propuestas de Stiglitz para proteger la democracia

Por ello, no se limita a señalar el problema, sino que también ofrece perspectivas sobre cómo fortalecer las instituciones democráticas para resistir estas amenazas.

Fortalecimiento legal. Reforzar las leyes que protegen la independencia judicial y la integridad electoral para prevenir abusos del Poder Ejecutivo.

Educación cívica. Promover una mejor comprensión de los valores democráticos y la importancia de las instituciones entre la ciudadanía.

Reducción de desigualdades. Implementar políticas económicas que reduzcan la desigualdad, fortaleciendo así la cohesión social necesaria para una democracia saludable.

Medios independientes. Apoyar un ecosistema mediático diverso e independiente que pueda actuar como contrapeso al poder y difundir información veraz.

Visión prospectiva de Joseph Stiglitz

La entrevista de Joseph Stiglitz con *El País* concluye con un llamado urgente a la acción. El economista reitera su advertencia principal: «Con Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos», subrayando que esta no es una exageración retórica sino una posibilidad real basada en patrones observables de comportamiento político y tendencias históricas. Tengamos en cuenta que La democracia no es un estado permanente, sino un sistema frágil que requiere vigilancia constante y defensa activa por parte de ciudadanos e instituciones.

Stiglitz enfatiza que el momento actual representa una encrucijada crítica para la democracia estadounidense. Las decisiones que se tomen en los próximos años, tanto por los líderes políticos como por los ciudadanos, determinarán si Estados Unidos continúa siendo un bastión democrático o si sucumbe a tendencias autoritarias que ya han comenzado a manifestarse.

Al analizar los riesgos actuales, el economista destaca particularmente la convergencia de múltiples factores desestabilizadores: la creciente polarización política, la erosión de normas institucionales, la difusión masiva de desinformación y el aumento de la desigualdad económica. Según Stiglitz, esta combinación crea un terreno fértil para líderes populistas con tendencias autoritarias que pueden explotar el descontento social para socavar los cimientos democráticos.

En su reflexión sobre las lecciones históricas, Stiglitz recuerda cómo otras democracias han caído no mediante golpes militares abruptos, sino a través de un proceso gradual de erosión institucional, donde las protecciones democráticas son debilitadas sistemáticamente desde dentro del propio sistema. «La historia nos enseña que cuando las instituciones se debilitan, la

democracia puede desvanecerse no con un estallido, sino con un gemido», advierte el premio nobel.

Stiglitz no omite mencionar las implicaciones económicas de este retroceso democrático potencial. Según su análisis, los sistemas autoritarios tienden a favorecer a grupos económicos privilegiados, aumentando la concentración de riqueza y poder, lo que a su vez socava aún más los principios democráticos de igualdad y representación. Este círculo vicioso, explica, puede acelerarse rápidamente una vez iniciado.

En cuanto a soluciones, el economista aboga por reformas estructurales profundas que fortalezcan la resiliencia democrática. Estas incluyen una mayor transparencia en el financiamiento político, protecciones más robustas para el derecho al voto, reformas al sistema judicial para garantizar su independencia, y políticas económicas que reduzcan la desigualdad y reconstruyan la clase media.

El premio nobel concluye con una nota de esperanza cautelosa, sugiriendo que, aunque los desafíos son formidables, la conciencia sobre estos peligros es el primer paso para enfrentarlos efectivamente. «Las democracias que han sobrevivido a amenazas similares lo han hecho gracias a ciudadanos vigilantes que reconocieron el peligro y actuaron decididamente para proteger sus instituciones», afirma Stiglitz, instando a una movilización ciudadana sin precedentes en defensa de los valores democráticos fundamentales.

Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán y mata al jefe de la Guardia Revolucionaria

El jueves 12 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque contra instalaciones nucleares y militares en Irán, causando la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Este acontecimiento marca una escalada significativa en el conflicto entre ambas naciones y tendrá importantes repercusiones geopolíticas en Medio Oriente y a nivel global.

Según fuentes militares, el ataque israelí utilizó aviones de combate F-35 y misiles de precisión para alcanzar objetivos estratégicos en varias ciudades iraníes, incluyendo instalaciones relacionadas con el programa nuclear y bases militares de la Guardia Revolucionaria. La operación, que ocurrió durante la madrugada, tomó por sorpresa a las defensas antiaéreas iraníes.

Este ataque se produce tras semanas de creciente tensión entre ambos países, después de que Irán lanzara cientos de misiles y drones contra territorio israelí el mes pasado. Las autoridades israelíes han declarado que la operación fue una respuesta necesaria para defender la seguridad nacional, mientras que el gobierno iraní ha prometido una «venganza severa» por lo que considera una «flagrante violación de su soberanía».

Analistas internacionales temen que este intercambio de ataques pueda desencadenar un conflicto regional más amplio, con la posible intervención de aliados de ambas partes. La comunidad internacional ha hecho llamados urgentes a la conten-

ción, mientras que los mercados energéticos globales ya muestran signos de volatilidad ante el temor de una interrupción en el suministro de petróleo desde la región del golfo Pérsico.

Detalles del ataque israelí

El ataque israelí se dirigió específicamente contra instalaciones nucleares estratégicas y bases militares en territorio iraní. Según fuentes oficiales, la operación fue meticulosamente planificada y ejecutada con precisión, logrando alcanzar objetivos de alto valor para el programa nuclear iraní.

Entre los objetivos atacados se encontraban centros de enriquecimiento de uranio, instalaciones de investigación nuclear y bases militares donde se alojaban unidades de élite de la Guardia Revolucionaria.

La muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria representa un duro golpe para la estructura militar y de seguridad de Irán, ya que esta fuerza de élite es responsable de proteger el régimen islámico y supervisar operaciones militares estratégicas tanto dentro como fuera del país.

Reacciones inmediatas en Medio Oriente

Irán. El gobierno iraní ha prometido una «respuesta contundente y devastadora» contra Israel, calificando el ataque como una flagrante violación de su soberanía. El líder supremo ha convocado a una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Grupos aliados de Irán. Hizbulá en Líbano, los hutíes en Yemen y diversas milicias en Irak y Siria han expresado su solidaridad con Irán y han amenazado con intensificar sus ataques contra Israel y objetivos occidentales en la región.

Países árabes moderados. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros estados del golfo han llamado a la contención, expresando preocupación por una posible escalada regional que podría desestabilizar toda la región.

Israel. El gobierno israelí ha elevado el nivel de alerta de sus fuerzas armadas y activado sistemas de defensa antimisiles, preparándose para posibles represalias. Ha justificado el

ataque como una medida preventiva necesaria para su seguridad nacional.

Postura de Estados Unidos. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se encuentra en una posición diplomática delicada. Por un lado, la administración estadounidense ha reafirmado su compromiso con la seguridad de Israel, pero por otro lado ha expresado preocupación por la escalada del conflicto.

El presidente ha convocado a una reunión de emergencia con su equipo de seguridad nacional y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con el primer ministro israelí como con líderes europeos y árabes moderados. Sin embargo, las primeras declaraciones de Donald Trump son de apoyo a Israel y de amenaza al gobierno iraní de que si no acepta el plan de desnuclearización que desde hace varias semanas plantea Washington, las acciones militares aumentarán.

Es evidente que la decisión de Netanyahu no está desligada de la intención de la administración Trump de poner contra la pared al gobierno iraní, no obstante los riesgos que ello conlleva de ampliar el escenario bélico con China y Rusia aliados en el propósito de fracturar la dominancia estadounidense en la región y en el contexto global.

Apoyo estratégico. Washington ha reforzado su presencia militar en la región, desplegando un grupo de portaaviones adicional en el Mediterráneo oriental y aumentando las capacidades de defensa antimisiles en sus bases en Oriente Medio.

Llamado a la contención. Simultáneamente, diplomáticos estadounidenses están trabajando intensamente para evitar una escalada mayor, instando a todas las partes a ejercer la máxima contención.

Presión interna. La administración enfrenta presiones internas divididas: sectores que exigen un apoyo incondicional a Israel y otros que critican lo que consideran un respaldo excesivo a acciones militares que podrían desencadenar un conflicto regional más amplio.

Reacciones de China y Rusia

China. El gobierno chino ha condenado enérgicamente el ata-

que israelí, calificándolo como una «grave violación del derecho internacional» y una «amenaza para la paz y estabilidad regional». Pekín ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas inmediatas.

China, que mantiene importantes relaciones económicas con Irán, ha ofrecido su apoyo diplomático a Teherán mientras advierte contra cualquier acción que pueda desestabilizar aún más la región.

Rusia. Moscú ha expresado su «profunda preocupación» por el ataque y ha condenado lo que considera una «agresión injustificada». El presidente ruso ha mantenido conversaciones telefónicas con su homólogo iraní, ofreciendo apoyo diplomático y técnico.

Rusia ha convocado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y ha advertido sobre las graves consecuencias que podría tener esta escalada para la seguridad internacional.

Posición de la Unión Europea

La Unión Europea se encuentra dividida en su respuesta a la crisis. Mientras algunos Estados miembros han expresado su comprensión por las preocupaciones de seguridad de Israel, otros han condenado lo que consideran una acción militar desproporcionada.

Llamado al diálogo. El alto representante para Asuntos Exteriores de la UE ha hecho un llamamiento urgente al diálogo y la desescalada, ofreciendo los buenos oficios de la Unión para facilitar negociaciones entre las partes.

Preocupación por el programa nuclear. La UE ha reiterado su preocupación por el programa nuclear iraní, pero ha insistido en que la solución debe encontrarse por vías diplomáticas, recordando la importancia de preservar el acuerdo nuclear de 2015.

Impacto económico. Los países europeos están evaluando el posible impacto económico de una escalada del conflicto, particularmente en lo relacionado con el suministro energético y las rutas comerciales en el golfo Pérsico.

Marco histórico del conflicto Israel-Irán

1979: Revolución islámica en Irán. Tras la revolución que derrocó al sah y estableció la República Islámica, Irán adopta una postura hostil hacia Israel, negando su derecho a existir y apoyando a grupos que se oponen al Estado judío.

1980-2000: Hostilidad creciente. Durante estas décadas, la retórica antiisraelí se intensifica en Irán, mientras Israel observa con preocupación el creciente apoyo iraní a grupos como Hizbulá en Líbano y Hamás en los territorios palestinos.

2002-2015: Crisis nuclear. El descubrimiento del programa nuclear iraní desata una crisis internacional. Israel considera el programa una amenaza existencial y contempla opciones militares, mientras la comunidad internacional impone sanciones a Irán.

2015: Acuerdo nuclear. Se firma el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) entre Irán y las potencias mundiales para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Israel se opone firmemente al acuerdo.

2018-2023: Escalada de tensiones. Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear bajo la administración Trump. Irán reanuda el enriquecimiento de uranio. Se intensifican los ataques cibernéticos, asesinatos selectivos y sabotajes entre ambos países.

2025: Ataque directo. Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán, matando al jefe de la Guardia Revolucionaria, en lo que representa la confrontación más directa y grave hasta la fecha.

Implicaciones para el programa nuclear iraní

El ataque israelí ha tenido como objetivo principal dañar la infraestructura del programa nuclear iraní, que Israel y varios países occidentales consideran orientado al desarrollo de armas nucleares, aunque Irán siempre ha insistido en su carácter pacífico.

Daño a instalaciones. Según informes preliminares, varias instalaciones clave de enriquecimiento de uranio han sufrido daños significativos, lo que podría retrasar el programa nuclear iraní por meses o incluso años.

Pérdida de experiencia. El ataque también habría causado bajas entre científicos y técnicos nucleares iraníes, lo que representa una pérdida de conocimiento especializado difícil de reemplazar a corto plazo.

Respuesta de seguridad. Irán probablemente reforzará la protección de sus instalaciones nucleares restantes, posiblemente trasladando algunas actividades a ubicaciones subterráneas más seguras.

Aceleración del programa. Paradójicamente, el ataque podría fortalecer la determinación de Irán de desarrollar capacidades nucleares como elemento disuasorio contra futuros ataques.

Posibles escenarios de escalada

Conflicto regional limitado. Intercambios de ataques entre Israel, Irán y sus aliados sin llegar a una guerra total.

Guerra por delegación intensificada. Aumento significativo de ataques de grupos respaldados por Irán contra Israel y sus aliados.

Confrontación directa a gran escala. Guerra abierta entre Israel e Irán con posible participación de potencias regionales.

Conflicto internacional. Intervención de potencias globales y riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente.

Los analistas coinciden en que la respuesta de Irán será inevitable, pero difieren en cuanto a su magnitud y naturaleza. Teherán debe equilibrar la necesidad de una respuesta contundente que satisfaga a su población y mantenga su credibilidad, con el riesgo de provocar una reacción aún más devastadora de Israel y posiblemente de Estados Unidos.

La capacidad de los actores regionales e internacionales para contener la crisis en los próximos días será crucial para determinar si el conflicto se mantiene dentro de ciertos límites o si escala hacia un enfrentamiento regional más amplio con consecuencias imprevisibles.

Impacto económico global

Los mercados financieros globales han reaccionado con nervio-

sismo ante la escalada del conflicto. El precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo debido a los temores de una interrupción en el suministro desde el golfo Pérsico, una de las arterias energéticas más importantes del mundo.

Sector energético. Los precios del petróleo y el gas natural han subido más de un 30 % en las primeras 48 horas tras el ataque, generando preocupación por posibles efectos inflacionarios a nivel global.

Mercados bursátiles. Las principales bolsas mundiales han registrado caídas significativas, con los sectores de aerolíneas, turismo y comercio internacional entre los más afectados.

Cadenas de suministro. Existe preocupación por posibles interrupciones en las rutas comerciales marítimas del golfo Pérsico y el Mar Rojo, lo que podría afectar las cadenas de suministro globales ya tensionadas.

La geopolítica de la incertidumbre sigue ganando terreno a la geopolítica de la esperanza, como bien lo señaló durante su visita a la Universidad Olmeca el expresidente del gobierno español en marzo próximo pasado. Mi optimismo, que él cuestionó en razón de su indiscutible experiencia, se ha debilitado, pero debo reconocer que todavía perdura en mí la esperanza, la que muere al último.

Panorama geopolítico mundial: riesgos y desafíos

El escenario geopolítico actual está marcado por una serie de riesgos y desafíos que amenazan la estabilidad global. Desde la creciente tensión entre Estados Unidos y China hasta el avance de la ultraderecha en diferentes partes del mundo, pasando por conflictos regionales no resueltos y crisis globales como el cambio climático y la migración. Este análisis profundiza en estos temas cruciales y sus posibles implicaciones para México, considerando el contexto de cambio de gobierno y la polarización interna del país.

La confrontación entre Estados Unidos y China se intensifica en múltiples frentes: comercial, tecnológico, militar y de influencia geopolítica. Esta rivalidad está reconfigurando las alianzas internacionales y forzando a países como México a replantear sus estrategias diplomáticas y comerciales para no quedar atrapados en medio de esta pugna entre potencias.

Por otra parte, el auge de movimientos de ultraderecha en Europa, América Latina y otras regiones representa un cuestionamiento al orden liberal internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno, caracterizado por el nacionalismo extremo, políticas antiinmigración y el rechazo a instituciones multilaterales, podría redefinir el sistema de gobernanza global en los próximos años.

Los conflictos regionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, y la crisis en Medio Oriente entre Israel y Palestina, no solo generan devastación humanitaria, sino que también deses-

tabilizan regiones enteras y alteran los mercados energéticos y alimentarios mundiales. Estos conflictos irresueltos ponen a prueba la capacidad de las instituciones internacionales para mantener la paz y seguridad globales.

Mientras tanto, las crisis transnacionales como el cambio climático y los flujos migratorios masivos exigen respuestas coordinadas que frecuentemente se ven obstaculizadas por intereses nacionales divergentes. Para México, ubicado en una posición geográfica estratégica, estos fenómenos representan tanto vulnerabilidades como oportunidades de liderazgo regional que el nuevo gobierno deberá valorar cuidadosamente.

Confrontación entre Estados Unidos y China. La rivalidad entre estas dos superpotencias ha evolucionado hasta convertirse en una competencia multidimensional que está reconfigurando el orden mundial. Esta nueva Guerra Fría tiene implicaciones profundas para la estabilidad global y afecta directamente a países como México que mantienen relaciones estratégicas con ambas naciones.

Tensiones económicas. La guerra comercial entre las dos potencias ha llevado a la imposición de aranceles y restricciones comerciales, afectando las cadenas de suministro globales y la economía mundial.

Los desacuerdos sobre prácticas comerciales, subsidios estatales y protección de propiedad intelectual han erosionado la cooperación económica. China busca reducir su dependencia de tecnología estadounidense mientras Estados Unidos intenta relocalizar industrias estratégicas.

Disputas tecnológicas. La carrera por el dominio tecnológico, especialmente en áreas como la tecnología 5G e inteligencia artificial, ha generado preocupaciones sobre seguridad nacional y espionaje.

Las restricciones a empresas como Huawei, TikTok y los controles a la exportación de semiconductores avanzados reflejan el temor de Estados Unidos ante el rápido avance tecnológico chino. Pekín, por su parte, acusa a Washington de intentar contener su desarrollo legítimo y promover la «desvinculación tecnológica».

Influencia geopolítica. Ambas naciones compiten por expandir su influencia en regiones estratégicas como el Mar de China Meridional y África, aumentando las tensiones diplomáticas y militares.

La iniciativa china de la Franja y la Ruta contrasta con el renovado interés estadounidense en fortalecer alianzas en el Indo-Pacífico. Esta competencia se manifiesta también en instituciones multilaterales donde ambos poderes buscan establecer normas globales alineadas con sus intereses y valores.

Tensiones militares. El rápido crecimiento del poderío militar chino y la modernización de sus fuerzas armadas ha generado una respuesta estratégica de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico.

Los ejercicios militares, las patrullas navales en aguas disputadas y la creciente retórica sobre Taiwán han elevado el riesgo de confrontaciones accidentales. El desarrollo de armas hipersónicas, capacidades cibernéticas y espaciales está creando nuevos campos de competencia y posible conflicto.

Esta confrontación presenta desafíos significativos para el sistema internacional, especialmente para países que, como México, deben navegar cuidadosamente sus relaciones con ambas potencias. La manera en que evolucione esta rivalidad determinará en gran medida la configuración del poder global en las próximas décadas y tendrá implicaciones directas para la política exterior mexicana, el comercio internacional y la seguridad regional.

El avance de la ultraderecha en el mundo

Causas del auge. El descontento con la globalización, la crisis económica y la percepción de amenaza cultural han impulsado el crecimiento de movimientos de extrema derecha en muchos países.

Impacto en políticas. El aumento de la influencia de la ultraderecha ha llevado a políticas más restrictivas en inmigración y un cuestionamiento de acuerdos internacionales y organizaciones multilaterales.

Desafíos para la democracia. La retórica populista y nacionalista de estos movimientos plantea riesgos para los siste-

mas democráticos y los derechos de las minorías en diversos países.

Guerra Rusia-Ucrania: una crisis no resuelta

Impacto humanitario. El conflicto ha resultado en miles de muertes, millones de desplazados y una crisis humanitaria en Ucrania que requiere atención internacional urgente.

Consecuencias económicas. Las sanciones contra Rusia y la disrupción del suministro de energía han tenido repercusiones económicas globales, afectando especialmente a Europa.

Tensiones geopolíticas. La guerra ha exacerbado las tensiones entre Rusia y Occidente, llevando a un replanteamiento de las alianzas y estrategias de seguridad global.

El conflicto Israel-Palestina: una herida abierta

Orígenes históricos. El conflicto tiene raíces profundas en la historia del siglo XX, con disputas territoriales y religiosas que han llevado a décadas de enfrentamientos. La creación del Estado de Israel en 1948, las guerras subsecuentes y el desplazamiento de la población palestina establecieron las bases para un conflicto prolongado. La Guerra de los Seis Días en 1967 y la ocupación de territorios palestinos intensificaron las tensiones existentes.

Escaladas recientes. Los últimos años han visto un aumento en la violencia, con confrontaciones en Gaza y Cisjordania que han resultado en numerosas víctimas civiles. Los ataques con cohetes desde Gaza hacia Israel y las operaciones militares israelíes han creado ciclos de violencia difíciles de romper. El avance de asentamientos en territorios ocupados y la represión en áreas palestinas han exacerbado el conflicto, mientras la política interna en ambos lados dificulta las concesiones necesarias para la paz.

Esfuerzos de paz estancados. Los intentos de mediación internacional y las negociaciones de paz han fracasado repetidamente, dejando el conflicto sin una solución clara a la vista. Los Acuerdos de Oslo, la Hoja de Ruta para la Paz y otras iniciativas no han logrado resultados duraderos. La polarización

política, la falta de voluntad para compromisos significativos y la desconfianza mutua han obstaculizado cualquier progreso hacia una solución de dos Estados que por décadas ha sido considerada la más viable.

Impacto global. El conflicto israelí-palestino tiene repercusiones que trascienden Oriente Medio, afectando relaciones diplomáticas, seguridad energética y estabilidad regional. Ha servido como catalizador para extremismos, influido en políticas exteriores de potencias globales y generado divisiones en organismos internacionales como la ONU. Para México y América Latina, representa un desafío diplomático que requiere equilibrio entre principios de autodeterminación, derechos humanos y pragmatismo en las relaciones internacionales.

Sheinbaum planteó al G7 una cumbre para el bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó a los líderes del G7 la realización de una cumbre global enfocada en el bienestar de los pueblos, buscando establecer un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Como es bien sabido, la jefa del Poder Ejecutivo no pudo reunirse personalmente con su homólogo de los Estados Unidos, pero informó que tuvo una buena comunicación telefónica con Donald Trump el día de ayer.

Pero su presencia en esta cumbre fue bien aprovechada por la mandataria mexicana ya que además de realizar acuerdos bilaterales con los jefes de Estado y gobierno de Canadá, India y Brasil, pudo realizar esta propuesta para la realización de una cumbre para el bienestar.

Durante su participación en el foro internacional, Sheinbaum explicó que su concepto de bienestar va más allá del tradicional enfoque económico, abarcando dimensiones sociales, ambientales y culturales. «El bienestar debe ser entendido como un derecho humano fundamental que incorpora el acceso a la salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente sano», declaró la mandataria mexicana ante los líderes de las principales economías del mundo.

La propuesta de Sheinbaum se enmarca en la continuidad de la política exterior mexicana que busca posicionar al país

como un actor relevante en la construcción de soluciones a problemas globales. Según analistas internacionales, esta iniciativa podría representar un contrapeso al enfoque predominantemente económico y de seguridad que ha caracterizado las agendas de foros como el G7 y el G20 en las últimas décadas.

El G7 como interlocutor estratégico

La elección del G7 como destinatario de esta propuesta no es casual. Este grupo, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, representa aproximadamente 45 % del PIB mundial y tiene una influencia determinante en la gobernanza global. Al dirigirse a este foro, la presidenta mexicana busca que su iniciativa tenga el respaldo de las economías más poderosas, lo que facilitaría su implementación a escala global.

Fuentes cercanas a la presidencia mexicana han señalado que la propuesta incluye la creación de nuevos indicadores de desarrollo que no se limiten al crecimiento económico, sino que integren métricas de salud pública, equidad social, sostenibilidad ambiental y preservación cultural. «Se trata de repensar cómo medimos el éxito de nuestras sociedades», explicó un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que prefirió mantener el anonimato.

Las reacciones a la propuesta han sido diversas. Mientras algunos líderes como Mark Carney, de Canadá y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, han expresado su respaldo entusiasta, otros han mantenido una postura más cautelosa, pendientes de conocer los detalles específicos de la iniciativa. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han celebrado la propuesta como un paso necesario hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.

De concretarse, esta cumbre para el bienestar podría representar un hito en la diplomacia mexicana y posicionar a Sheinbaum como una líder con visión global, capaz de articular propuestas innovadoras en el escenario internacional. Sin embargo, expertos señalan que el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de México para construir alianzas estratégicas

y demostrar la viabilidad práctica de un nuevo paradigma de bienestar en el contexto de los complejos desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta la comunidad internacional.

Propuesta de una cumbre global sobre bienestar

Iniciativa presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto formalmente a los líderes del G7 la realización de una cumbre internacional centrada en el bienestar de los pueblos a realizarse en 2026.

Nuevo paradigma internacional. Esta propuesta busca establecer un nuevo enfoque en las relaciones internacionales, priorizando el bienestar colectivo sobre otros intereses.

Participación global. La iniciativa contempla la participación de líderes mundiales para discutir estrategias que promuevan el bienestar como eje central de las políticas públicas.

Objetivos de la cumbre propuesta

Enfoque en el bienestar. La cumbre propuesta por Sheinbaum tendría como objetivo principal discutir y establecer políticas centradas en el bienestar de los ciudadanos a nivel global, más allá de los indicadores económicos tradicionales.

Se busca replantear las prioridades internacionales para poner a las personas en el centro de las decisiones políticas y económicas.

La presidenta mexicana ha enfatizado la importancia de crear espacios de diálogo donde el bienestar sea el eje central de la discusión internacional.

El G7 como interlocutor clave. La elección del G7 como destinatario de esta propuesta no es casual. Este grupo, conformado por algunas de las economías más poderosas del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), tiene una influencia significativa en la agenda global.

Estados Unidos. Principal economía mundial y actor clave en las decisiones del G7.

Japón. Potencia asiática con gran influencia económica y tecnológica.

Alemania. Motor económico de Europa y líder en políticas de bienestar social.

Reino Unido. Nación con importante peso diplomático e histórico en relaciones internacionales.

Francia. País con tradición de liderazgo en iniciativas de cooperación global.

Italia. Economía mediterránea con importante papel en el contexto europeo.

Canadá. Nación reconocida por sus políticas de bienestar y calidad de vida.

El concepto de bienestar según Sheinbaum

La propuesta de Sheinbaum se basa en una concepción integral del bienestar que va más allá de los indicadores económicos tradicionales como el PIB. Este enfoque holístico busca reorientar las políticas públicas hacia una medición más humanista del progreso, reconociendo que el desarrollo económico solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas.

La visión de Sheinbaum está influenciada por corrientes de pensamiento latinoamericanas como el «buen vivir» o *sumak kawsay*, así como por modelos nórdicos de estado de bienestar, adaptados a la realidad mexicana y sus desafíos particulares.

Este enfoque considera aspectos fundamentales como:

- Acceso universal a servicios básicos: garantizando que toda la población tenga acceso a agua potable, electricidad, vivienda digna, internet, transporte público eficiente y servicios de salud de calidad, independientemente de su condición socioeconómica.
- Reducción de desigualdades sociales: implementando políticas redistributivas que disminuyan la brecha entre los más ricos y los más pobres, a través de sistemas fiscales progresivos, salarios dignos y programas sociales focalizados en grupos vulnerables.
- Sostenibilidad ambiental: asegurando que el desarrollo económico no comprometa los recursos naturales para las generaciones futuras, con énfasis en la transición energé-

tica, la protección de ecosistemas y la mitigación del cambio climático como parte integral del bienestar colectivo.

- Respeto a la diversidad cultural: valorando y preservando las distintas expresiones culturales, cosmovisiones indígenas y formas de organización comunitaria como elementos enriquecedores del tejido social y fuentes de conocimiento alternativo.
- Participación ciudadana en la toma de decisiones: fortaleciendo mecanismos democráticos que permitan a los ciudadanos incidir directamente en las políticas públicas que afectan sus vidas, a través de consultas, presupuestos participativos y gobiernos locales transparentes.

Esta concepción del bienestar representa un cambio paradigmático respecto a las políticas neoliberales que dominaron México y gran parte de Latinoamérica en décadas anteriores, priorizando ahora el interés colectivo sobre intereses particulares o corporativos.

El bienestar debe ser entendido como un estado donde las necesidades fundamentales de las personas son satisfechas en un contexto de justicia social, respeto a los derechos humanos y armonía con el medio ambiente.

La presidenta mexicana ha señalado repetidamente que esta visión del bienestar no es meramente aspiracional, sino que debe traducirse en indicadores concretos y medibles que puedan orientar las políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional.

Para Sheinbaum, el concepto de bienestar está también profundamente ligado a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Según su perspectiva, cada nación debe tener la capacidad de definir su propio modelo de desarrollo en función de sus particularidades históricas, culturales y sociales, sin imposiciones externas.

A nivel práctico, esta filosofía se ha materializado en México a través de programas como:

- Pensiones universales para adultos mayores.

- Becas estudiantiles para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Fortalecimiento del sistema público de salud.
- Inversión en infraestructura en zonas históricamente marginadas.
- Políticas de austeridad gubernamental que redirigen recursos a programas sociales.

Esta conceptualización del bienestar representa no solo una postura política, sino una propuesta ética sobre cómo organizar la sociedad y las relaciones internacionales desde valores de solidaridad, justicia y respeto mutuo.

Antecedentes de la propuesta

Campaña presidencial. Durante su campaña, Sheinbaum ya había adelantado su intención de promover una política exterior basada en el bienestar de los pueblos.

Toma de posesión. En su discurso inaugural como presidenta, mencionó la necesidad de replantear las relaciones internacionales con un enfoque humanista.

Primeros meses de gobierno. Ha implementado políticas nacionales centradas en el bienestar, que ahora busca proyectar a nivel internacional.

Propuesta formal al G7. Presentación oficial de la iniciativa para realizar una cumbre global sobre bienestar.

Implicaciones para la política exterior mexicana

Nuevo posicionamiento internacional. La propuesta de Sheinbaum representa un intento de posicionar a México como un actor propositivo en la escena internacional, capaz de generar iniciativas que influyan en la agenda global.

Este enfoque marca una evolución en la tradicional política exterior mexicana, manteniendo principios históricos como la no intervención, pero añadiendo un componente más activo en la promoción de valores específicos.

Continuidad y cambio. La iniciativa mantiene elementos de continuidad con la política exterior del gobierno anterior,

pero introduce matices propios del estilo y visión de Sheinbaum.

Se observa un énfasis particular en temas como la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental como componentes esenciales del bienestar.

Desafíos para la implementación de la cumbre

Agenda internacional saturada. Encontrar un espacio en el calendario de eventos internacionales y lograr la participación de líderes clave representa un desafío logístico importante.

Consenso sobre objetivos. Lograr un acuerdo sobre los objetivos específicos y el alcance de la cumbre requerirá intensas negociaciones diplomáticas previas.

Resultados concretos. Asegurar que la cumbre produzca compromisos tangibles y no solo declaraciones de intenciones será fundamental para su éxito.

Además de estos desafíos, la administración de Sheinbaum deberá trabajar en la construcción de alianzas estratégicas con otros países que puedan apoyar y fortalecer esta iniciativa, especialmente naciones con visiones similares sobre el bienestar como eje de las políticas públicas.

Perspectivas futuras de la propuesta

El futuro de la propuesta de Sheinbaum dependerá de diversos factores, incluyendo la receptividad de los líderes del G7, el contexto geopolítico global y la capacidad de México para construir alianzas estratégicas que respalden esta iniciativa.

Año propuesto. Se propone que esta cumbre se realice en 2026 considerando los tiempos necesarios para su organización.

Países potenciales. Los invitados serían todos los países miembros si la cumbre se abre más allá del G7, incluyendo a todos los miembros de la ONU.

ODS relacionados. Objetivos de Desarrollo Sostenible que podrían alinearse con la propuesta de bienestar global.

Independientemente del resultado inmediato, la propuesta ya ha logrado poner en la mesa de discusión internacio-

nal la necesidad de replantear los objetivos de la cooperación global, poniendo el bienestar de las personas en el centro del debate. Este podría ser considerado un logro diplomático en sí mismo para la administración de Sheinbaum.

Pedro Sánchez: adelantar elecciones generales o retrasar el fracaso, he ahí el dilema

La situación política en España ha tomado un giro inesperado en los últimos días, desafiando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a tomar decisiones críticas respecto a la celebración de elecciones generales. La posibilidad de adelantar las elecciones se ha convertido en un asunto candente, y el dilema radica entre evitar un colapso inminente y mantener la estabilidad gubernamental hasta la fecha prevista de julio de 2027.

Actos de corrupción cometidos por dos secretarios de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han salpicado a quien al tiempo es secretario general de esa organización política y presidente del gobierno.

Sánchez se encuentra en una encrucijada política sin precedentes. Por un lado, la presión dentro del PSOE aumenta día tras día, con voces críticas que cuestionan la viabilidad de mantener la actual coalición de gobierno hasta el final de la legislatura. Por otro lado, los partidos de la oposición han intensificado sus ataques, aprovechando el desgaste del ejecutivo y las tensiones entre los socios de gobierno.

Los últimos sondeos no son favorables para Sánchez. Las encuestas muestran un progresivo deterioro de la imagen del gobierno, con una pérdida significativa de apoyos en regiones tradicionalmente afines al PSOE. Sin embargo, adelantar elec-

ciones podría interpretarse como una admisión de fracaso y no garantiza mejores resultados. De hecho, algunos analistas políticos advierten que precipitar los comicios podría consolidar la tendencia negativa actual.

Este escenario plantea interrogantes profundos sobre la estrategia política a seguir. ¿Debe el presidente arriesgarse a un adelanto electoral con la esperanza de reconfigurar el tablero político antes de que la situación empeore? ¿O es preferible agotar el mandato actual, implementando reformas que puedan revertir la tendencia negativa y recuperar la confianza ciudadana? La decisión no es trivial y determinará no solo el futuro político de Pedro Sánchez, sino también el rumbo de España en los próximos años.

Felipe González, expresidente del gobierno español que a inicios de este año estuvo en la Universidad Olmeca, en el conversatorio que nos regaló visualizaba un futuro complejo para la administración de Pedro Sánchez. Hoy, en este escenario más complicado, son los miembros distinguidos del PSOE que consideran que la ruta menos sinuosa pasa por el adelanto de las elecciones generales para no afectar las comunitarias y regionales.

La crisis catalana, que parecía moderadamente controlada tras los acuerdos de investidura, ha vuelto a emerger como un factor desestabilizador. Los partidos independentistas, socios necesarios para la gobernabilidad, han endurecido sus posiciones ante la lenta implementación de lo pactado. Esta situación ha generado un clima de desconfianza que complica aún más la ya frágil aritmética parlamentaria con la que cuenta el gobierno.

A nivel económico, los indicadores tampoco acompañan la narrativa gubernamental. Aunque España mantiene un crecimiento por encima de la media europea, la inflación persistente y el estancamiento del mercado laboral han erosionado la percepción ciudadana sobre la gestión económica. Las reformas estructurales prometidas han quedado diluidas en negociaciones interminables, lo que ha alimentado la frustración tanto en el electorado como en sectores empresariales clave.

El desgaste institucional representa otro factor crítico en esta ecuación. Las tensiones entre poderes del Estado, particularmente con el Judicial, han alcanzado niveles preocupantes. La polémica ley de amnistía y los continuos enfrentamientos con la oposición han polarizado el debate público, dificultando cualquier intento de alcanzar consensos en políticas fundamentales para el país.

Los barones territoriales del PSOE, especialmente aquellos que gobiernan comunidades autónomas, se encuentran divididos. Mientras algunos abogan por un adelanto electoral que minimice el daño en futuras contiendas regionales, otros temen que precipitar los comicios sin una estrategia clara pueda resultar en una debacle mayor. Esta división interna complica enormemente la toma de decisiones y debilita la posición negociadora de Sánchez frente a sus socios de gobierno.

El contexto internacional tampoco ofrece un escenario favorable. La creciente inestabilidad geopolítica y las tensiones en la Unión Europea sobre políticas migratorias y económicas han limitado el margen de maniobra del gobierno español. La presidencia española del Consejo de la UE, que debía servir como plataforma para fortalecer el liderazgo internacional de Sánchez, ha quedado ensombrecida por las crisis internas.

Ante este panorama, Pedro Sánchez enfrenta quizás la decisión más determinante de su carrera política. Convocar a elecciones anticipadas podría permitirle reconfigurar el PSOE, renovar su liderazgo y establecer nuevas alianzas políticas. Sin embargo, esta opción conlleva riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de una derrota que ponga fin a su ciclo político. Por otra parte, agotar la legislatura le daría tiempo para implementar reformas integrales y buscar una recuperación en las encuestas, pero podría prolongar una agonía política que termine por ser aún más costosa.

La pregunta fundamental que recorre los pasillos de La Moncloa es si Pedro Sánchez, conocido por su resiliencia política y capacidad para reinventarse en momentos críticos, podrá una vez más revertir un escenario adverso. La historia reciente del líder socialista está marcada por resurrecciones políticas impro-

ables, desde su regreso a la Secretaría General del PSOE tras ser destituido, hasta la formación de gobiernos aparentemente imposibles mediante complejas alianzas parlamentarias.

Este dilema multifacético no tiene soluciones simples. Cualquier decisión implicará sacrificios y compromisos difíciles. Lo que está claro es que el próximo movimiento de Sánchez no solo definirá su legado político, sino que también reconfigurará el sistema de partidos español en un momento de profunda transformación europea. España se encuentra, sin duda, ante una encrucijada histórica cuyas consecuencias trascenderán el actual ciclo político.

Luego del batacazo recibido por la difusión de audios parte de la investigación de la Guardia Civil que obligó al presidente del gobierno y líder del PSOE a pedir perdón y, especialmente a manifestar su desaprobación del trato a mujeres que se evidencian en esas grabaciones, el martes pasado, Pedro Sánchez, en una carta a los militantes de su partido acusa a la derecha de usar el informe de la ECO «para derribar a un gobierno legítimo».

Si bien Sánchez ha tomado el control del barco, como corresponde a un capitán, no ha logrado menguar las presiones del Partido Popular y de los propios socios del PSOE que exigen adelantar sus explicaciones en el Congreso, pero el partido en el poder y La Moncloa han esgrimido que la agenda internacional del presidente «obliga a fijar el pleno hasta el 9 de julio».

El jefe del gobierno español ha manifestado que no convocará a elecciones anticipadas y, claro de que a las oposiciones no les alcanzan los votos, ha retado al líder del Partido Popular a que presente una moción de censura, paso previo a la convocatoria para un adelanto de los comicios programados para julio de 2027.

El País publicó el martes 17 de junio un artículo de Carlos E. Cué, en el que refiere que, en la misiva enviada por Sánchez a la militancia del PSOE, en la que manifiesta compartir el dolor, la indignación, el desconcierto y la tristeza por el informe de la UCO. «La sospecha de que compañeros que ocuparon altas responsabilidades hayan traicionado la confianza de

este partido y de los ciudadanos, es una herida que nos duele a todos».

La oposición intensifica sus ataques

En este escenario, la oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox ha intensificado su ataque, aprovechando la debilidad del PSOE para posicionarse como alternativas viables. Este renovado ímpetu de los partidos opositores ha encontrado un respaldo popular, en un momento en que los ciudadanos sienten la necesidad de un cambio. Las encuestas más recientes muestran un aumento significativo en la intención de voto para estas formaciones, especialmente en regiones tradicionalmente socialistas donde el descontento con las políticas actuales ha crecido notablemente.

La estrategia de la oposición se ha centrado en tres ejes fundamentales: la crítica a la gestión económica, el cuestionamiento de los pactos con partidos independentistas y la denuncia de casos de presunta corrupción vinculados al entorno gubernamental. Esta ofensiva coordinada ha logrado erosionar la imagen del gobierno y ha generado una creciente presión mediática y social que complica aún más la ya delicada posición del Ejecutivo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es consciente de esta situación y, aunque reconoce que no dispone de los apoyos suficientes para formar un nuevo gobierno en este instante, está listo para capitalizar cualquier debilidad que pueda mostrar el Ejecutivo de Sánchez. Su estrategia parece orientada a presentarse como un político moderado y gestor eficiente, contrastando con la imagen de inestabilidad que proyecta la actual coalición gubernamental.

Mientras tanto, Vox ha adoptado una postura más agresiva, exigiendo la inmediata convocatoria de elecciones y criticando duramente tanto al gobierno como al PP por lo que consideran una oposición insuficientemente contundente. Esta dualidad en la oposición genera una presión constante desde diferentes flancos, obligando al gobierno a defenderse simultáneamente de acusaciones de diversa índole y severidad.

Los partidos regionales, por su parte, han comenzado a recalculiar sus alianzas, conscientes de que un posible cambio de gobierno podría alterar significativamente su capacidad de influencia en la política nacional. Esta reconfiguración del tablero político añade un factor adicional de incertidumbre a la ya compleja ecuación que enfrenta Pedro Sánchez.

La encrucijada estratégica. Desde una perspectiva más estratégica, Sánchez se enfrenta a una encrucijada. Si decide postergar las elecciones y continuar al frente del gobierno, corre el riesgo de que la situación empeore, lo que podría conducir a un desmoronamiento total de su administración.

Postergar elecciones. Riesgo de empeoramiento de la situación política.

Crisis sin resolver. Cada día alimenta la narrativa de un gobierno incapaz.

Pérdida de confianza. Posible derrota catastrófica electoral.

Cada día que pasa sin resolver las crisis de corrupción juega en su contra, alimentando la narrativa de un gobierno incapaz. A la larga, esto podría resultar en una derrota catastrófica si los votantes pierden la fe en su capacidad para gobernar de manera ética y eficiente.

El riesgo de adelantar elecciones

Al mismo tiempo, adelantar las elecciones podría dar paso a un panorama incierto, donde el PSOE arriesga aún más su posición en un clima electoral adverso. La fragmentación del voto y el ascenso de Vox podría potenciar la posibilidad de que una coalición derechista acceda al poder, lo que podría transformar radicalmente el sistema político español. Esto es un hecho que preocupa a muchos dentro del PSOE, quienes están condicionados a prever un posible escenario poselectoral tan caótico como el actual.

Las encuestas recientes no favorecen al partido socialista, mostrando un descenso significativo en la intención de voto que podría traducirse en una pérdida sustancial de escaños en el Congreso. Los analistas políticos señalan que el desgaste

del gobierno actual, sumado a las controversias relacionadas con la gestión de crisis recientes, ha erosionado la confianza del electorado tradicional del PSOE.

Además, el creciente descontento entre los votantes de izquierda podría llevar a una mayor abstención o a la migración hacia otras opciones políticas como Sumar o incluso partidos regionales, fragmentando aún más el voto progresista. Esta división en el bloque de izquierdas contrasta con la aparente consolidación del voto en el espectro conservador.

Por otra parte, el *timing* electoral resulta crucial. Un adelanto en medio de tensiones económicas o sociales podría amplificar el voto de protesta, beneficiando a formaciones que prometen soluciones radicales a problemas complejos. Los estrategas del PSOE son conscientes de que el momento elegido para las elecciones podría ser determinante para su supervivencia política.

En el seno del partido, algunos sectores abogan por resistir y agotar la legislatura con la esperanza de que una mejora en los indicadores económicos o algún éxito político relevante pueda revertir la tendencia negativa. Otros, sin embargo, consideran que prolongar la agonía solo aumentará el coste electoral, prefiriendo enfrentar las urnas antes de que la situación se deteriore aún más.

Este dilema no solo afecta a la estrategia electoral inmediata, sino que podría determinar el futuro del partido a medio y largo plazo. Una derrota contundente no solo alejaría al PSOE del gobierno, sino que podría desencadenar una crisis interna de liderazgo y propósito que tardaría años en resolverse.

La pregunta clave: ¿puede Sánchez reconfigurar al PSOE?

Restablecer la confianza pública. Es fundamental recuperar la credibilidad perdida ante los ciudadanos españoles tras los escándalos de corrupción y las controvertidas alianzas políticas. La transparencia y una comunicación más efectiva serán elementos cruciales para este objetivo.

Evitar elecciones anticipadas. Encontrar mecanismos para mantener la gobernabilidad sin necesidad de convocar a

las urnas antes de tiempo. Esto implica fortalecer alianzas parlamentarias, negociar apoyos puntuales y gestionar las tensiones internas del partido para mantener la estabilidad.

Reformar la gestión política. Implementar cambios significativos en la forma de gobernar y comunicarse con la ciudadanía. Una renovación de las políticas económicas y sociales podría ser clave para distinguirse de administraciones anteriores y proyectar una imagen de cambio real.

Renovar el liderazgo interno. La reconfiguración del partido pasa necesariamente por una revisión de los cuadros directivos y las estructuras de poder territorial. Sánchez necesita equilibrar la lealtad con la renovación para mantener la cohesión sin perpetuar prácticas obsoletas.

Redefinir la identidad ideológica. El PSOE enfrenta el desafío de clarificar su posicionamiento ideológico en un escenario político fragmentado. Debe encontrar un equilibrio entre sus valores históricos y las demandas de un electorado progresista cada vez más diverso y exigente.

Por lo tanto, la pregunta clave que se plantea es: ¿puede Pedro Sánchez reconfigurar el PSOE lo suficiente como para restablecer la confianza pública y evitar la necesidad de elecciones anticipadas? La respuesta determinará no solo el futuro inmediato del partido, sino posiblemente el rumbo político de España durante los próximos años.

Los observadores políticos señalan que esta reconfiguración debe ir más allá de simples cambios cosméticos o de personal. Se requiere una transformación profunda que aborde las raíces de la desconexión entre el partido y amplios sectores de la sociedad española. El tiempo juega en contra del presidente, quien debe demostrar resultados tangibles antes de que la presión interna y externa hagan inevitable la convocatoria electoral.

Históricamente, el PSOE ha demostrado una notable capacidad de reinvención en momentos críticos, pero el actual escenario presenta desafíos sin precedentes: fragmentación parlamentaria, polarización social, crisis económica pospandemia y tensiones territoriales que complican cualquier intento de reforma estructural.

La necesidad de reformas integrales. En este sentido, es esencial que el líder socialista implemente reformas no solo en la gestión política sino también en la comunicación con los ciudadanos. Debería ofrecer una respuesta proactiva a las demandas sociales y económicas de la población, especialmente en un contexto marcado por el descontento generalizado y los desafíos económicos.

Mejorar la comunicación. Establecer canales más transparentes con la ciudadanía.

Atender demandas sociales. Responder a las necesidades económicas de la población.

Combatir la corrupción. Implementar medidas anticorrupción efectivas dentro del partido.

Renovar liderazgos. Promover nuevas figuras dentro del PSOE.

Un dilema multifacético. En conclusión, el dilema al que se enfrenta Pedro Sánchez es multifacético y de gran complejidad. La decisión entre adelantar las elecciones generales o intentar mantener el gobierno hasta 2027 podría determinar no solo su futuro personal como líder del PSOE, sino también el rumbo político, económico y social del país durante la próxima década.

En un contexto donde la corrupción y la desconfianza son pan de cada día, la capacidad de Sánchez para navegar estos turbulentos mares es crucial. Su habilidad para gestionar tanto las presiones internas dentro de su partido como las externas provenientes de la oposición y la ciudadanía definirá el éxito o fracaso de esta etapa política.

Los analistas políticos coinciden en que la situación actual representa uno de los momentos más desafiantes para el liderazgo socialista en los últimos años. La combinación de escándalos de corrupción, descontento ciudadano y una oposición fortalecida configura un escenario donde cada movimiento debe ser calculado con extrema precisión.

Además, factores como la estabilidad económica, los compromisos internacionales y la cohesión territorial de España añaden capas adicionales de complejidad a este dilema. La de-

cisión final de Sánchez no solo tendrá consecuencias inmediatas en las urnas, sino que podría reconfigurar el panorama político español durante generaciones.

Estrategias posibles ante la crisis

Estrategia de apertura. Optar por una estrategia de apertura y autocrítica podría ofrecer una vía de escape para el gobierno de Sánchez. Reconocer errores y mostrar voluntad de cambio podría ayudar a recuperar parte de la confianza perdida.

- Admitir fallos en la gestión de crisis.
- Proponer reformas concretas y visibles.
- Abrir diálogo con la oposición moderada.

Consecuencias del miedo al fracaso. Por otro lado, el miedo al fracaso y la impopularidad podrían llevar al PSOE y a sus aliados a una derrota inminente. Mantener una postura defensiva sin cambios significativos podría acelerar la pérdida de apoyo.

- Negación de problemas internos.
- Confrontación constante con la oposición.
- Pérdida progresiva de apoyos parlamentarios.

El juego de poder y sus implicaciones. En este juego de poder cada decisión cuenta y cada día en el cargo se convierte en un desafío significativo que podría sellar la suerte del gobierno español en los próximos años.

Decisiones estratégicas. Cada movimiento político tiene consecuencias a corto y largo plazos.

Equilibrio de fuerzas. Mantener el apoyo de los partidos aliados es crucial para la gobernabilidad.

Factor tiempo. El momento elegido para cada acción puede determinar su éxito o fracaso.

Respuesta ciudadana. La percepción pública influye directamente en los resultados electorales.

El contexto de desconfianza generalizada

Escándalos mediáticos. Las acusaciones de corrupción han ocu-

pado portadas y generado un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Descontento económico. La situación económica pospandemia ha generado malestar en amplios sectores de la población española.

Fragmentación política. El panorama político español está más dividido que nunca, dificultando la formación de mayorías estables.

Este contexto de desconfianza generalizada complica aún más la toma de decisiones para Pedro Sánchez, quien debe considerar no solo las dinámicas internas de su partido sino también el sentir de una ciudadanía cada vez más crítica con la clase política.

El futuro político de España en la balanza

Finalmente, la decisión que tome Pedro Sánchez respecto a las elecciones generales no solo definirá su legado político personal, sino que podría reconfigurar el mapa político español para la próxima década. El peso de esta responsabilidad es innegable, considerando la polarización actual y los desafíos que enfrenta el país tanto a nivel económico como social.

Si opta por adelantar las elecciones, se arriesga a una derrota que podría significar el fin de su carrera como líder del PSOE. Los sondeos actuales no favorecen a su partido, y el desgaste de la gestión gubernamental ha erosionado significativamente su capital político. Esta estrategia, aunque arriesgada, podría permitirle controlar el momento y las condiciones del proceso electoral, evitando un mayor deterioro de su imagen.

Si decide mantenerse hasta 2027, deberá implementar cambios profundos para recuperar la confianza perdida. Esto implica no solo una renovación de su gabinete, sino también un replanteamiento de las políticas económicas y sociales que han generado controversia. La estabilidad institucional podría beneficiarse de este enfoque, pero requeriría concesiones importantes a sus socios parlamentarios y una capacidad de diálogo con la oposición que hasta ahora ha sido limitada.

Los expertos políticos señalan que cualquier decisión estará condicionada por factores internacionales, como la situación económica europea y las tensiones geopolíticas, que podrían influir decisivamente en la percepción ciudadana del gobierno actual. Además, el auge de nuevos movimientos políticos complica aún más el escenario, fragmentando el voto y dificultando la formación de mayorías estables.

En cualquier caso, el sistema político español se encuentra en un momento de inflexión, donde las viejas fórmulas de gobernabilidad parecen agotadas y los ciudadanos demandan nuevas respuestas a problemas cada vez más complejos. El dilema de Sánchez es, en última instancia, un reflejo de la encrucijada en la que se encuentra la democracia española en su conjunto. La resolución de esta crisis podría determinar no solo el futuro del PSOE, sino también el modelo de Estado y el sistema de partidos que prevalecerá en España durante los próximos años.

El gobierno de Estados Unidos fabrica indocumentados

Eunice Rendón (*El País*, 13 de junio de 2025) hace un detallado análisis de la política migratoria del presidente Donald Trump en el que plantea cómo se están fabricando indocumentados y generando un escenario caótico para justificar sus acciones, dando sentido a la criminalización de los migrantes indocumentados y justificando una política fascista y xenofóbica que alienta el radicalismo a tal grado que en Florida se pide no manifestarse porque se puede perder la vida.

Esta fabricación de indocumentados representa una estrategia política deliberada que busca crear una crisis para luego presentarse como la solución. Las políticas implementadas, como la separación familiar, la cancelación de programas de protección temporal y las restricciones al asilo, no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que artificialmente aumentan el número de personas en situación irregular.

La criminalización sistemática de los migrantes ha sido una constante en este gobierno, etiquetándolos como «ilegales», «criminales» o «invasores», a pesar de que los estudios muestran que los inmigrantes cometen menos delitos que los ciudadanos nativos. Este discurso no solo distorsiona la realidad, sino que alimenta prejuicios y justifica tratos inhumanos en centros de detención que han sido comparados con campos de concentración por diversos observadores internacionales.

Existe además una profunda contradicción económica en estas políticas, pues mientras se persigue a los trabajadores indocumentados, la economía estadounidense depende significativamente de su mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Esta hipocresía revela que el verdadero objetivo no es proteger la economía nacional sino mantener una fuerza laboral vulnerable y explotable.

Frente a esta situación, diversas organizaciones de derechos humanos, comunidades migrantes y ciudadanos conscientes han organizado una resistencia sin precedentes, exigiendo una política migratoria humana y justa que reconozca la dignidad inherente a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o país de origen.

La fabricación de indocumentados como estrategia política

La administración de Donald Trump ha implementado una estrategia deliberada para fabricar indocumentados en Estados Unidos. Esta política no es accidental, sino una táctica calculada para crear un problema que luego puede ser utilizado como justificación para medidas cada vez más draconianas contra la población migrante.

El gobierno estadounidense está generando un escenario caótico en materia migratoria, donde las personas que buscan asilo o una mejor vida se encuentran atrapadas en un sistema diseñado para criminalizarlas. Esta fabricación de indocumentados sirve a un propósito político claro: mantener viva la narrativa de una «crisis migratoria» que requiere mano dura.

Criminalización sistemática de los migrantes

La criminalización de los migrantes indocumentados se ha convertido en un pilar fundamental de la política migratoria de Trump. Al etiquetar a estas personas como ilegales y asociarlas constantemente con la delincuencia, se crea una percepción pública distorsionada que facilita la implementación de políticas cada vez más restrictivas.

Esta estrategia no solo afecta a quienes cruzan la frontera sin documentos, sino también a solicitantes de asilo legítimos y

a personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas, contribuyendo a la economía y formando parte del tejido social del país.

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado, separando familias y generando un clima de miedo en comunidades de inmigrantes por todo el país. Esta táctica de terror forma parte de la estrategia más amplia de criminalización.

Políticas xenofóbicas y fascistas

Las políticas migratorias implementadas por la administración Trump no solo son restrictivas, sino que tienen características claramente xenofóbicas y elementos que recuerdan a regímenes fascistas históricos. La demonización del «otro», la creación de un enemigo común y la justificación de medidas extremas en nombre de la «seguridad nacional» son tácticas que han sido utilizadas por movimientos autoritarios a lo largo de la historia.

Estas políticas no surgieron de la nada, sino que responden a una estrategia deliberada para movilizar a una base electoral mediante el miedo y el resentimiento. La xenofobia institucionalizada se ha convertido en un pilar fundamental de un proyecto político que busca dividir a la sociedad estadounidense y desviar la atención de otros problemas estructurales.

Separación familiar

La política de separar a niños de sus padres en la frontera, causando traumas psicológicos severos, refleja una deshumanización sistemática de los migrantes. Miles de familias fueron destrozadas bajo esta política de tolerancia cero, con casos documentados de niños tan pequeños como de cuatro meses separados de sus madres. Muchas de estas separaciones se realizaron sin sistemas adecuados para reunificar a las familias posteriormente, resultando en cientos de padres deportados sin sus hijos.

Condiciones inhumanas

Los centros de detención con condiciones precarias, hacin-

miento y falta de atención médica adecuada demuestran un desprecio por la dignidad humana de los detenidos. Inspecciones independientes han documentado personas obligadas a beber de inodoros, niños sin acceso a jabón o cepillos de dientes, y detenidos durmiendo en el suelo de concreto. Estas «jaulas» han sido escenario de numerosas muertes que podrían haberse evitado con atención médica básica, especialmente entre menores y adultos vulnerables.

Retórica deshumanizante

El uso constante de términos como «invasión» y la caracterización de los migrantes como criminales y portadores de enfermedades busca despojarlos de su humanidad. Esta retórica oficial no es simplemente cuestión de palabras; ha inspirado actos de violencia contra comunidades latinas, como el tiroteo masivo en El Paso, Texas, donde el atacante expresó explícitamente su intención de responder a la «invasión hispana». La deshumanización verbal precede y facilita el abuso físico sistemático.

Ataques al asilo político

La administración ha implementado políticas como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México, en condiciones peligrosas, mientras sus casos son procesados. Estos solicitantes, que ejercen un derecho reconocido internacionalmente, son forzados a vivir en campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas donde son frecuentemente víctimas de secuestros, violaciones y asesinatos. Esta política representa una violación directa del principio de *non-refoulement*, piedra angular del derecho internacional de refugiados.

Persecución a santuarios. El gobierno federal ha atacado agresivamente a las ciudades santuario que limitan su cooperación con el ICE para proteger a sus comunidades inmigrantes, amenazando con retirar fondos federales y aumentando operativos en estas jurisdicciones.

Esta guerra contra los gobiernos locales que intentan proteger a sus residentes indocumentados refleja un desprecio

por el federalismo cuando este opera en favor de los derechos humanos. La presencia intensificada de agentes federales en estas ciudades ha causado terror en comunidades enteras, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses de origen latino.

Este conjunto de políticas no representa simplemente un enfoque estricto hacia la inmigración irregular, sino un proyecto ideológico con claras reminiscencias de los movimientos ultranacionalistas del siglo XX. La diferencia fundamental es que estas políticas se están implementando en una de las democracias más antiguas del mundo, utilizando las instituciones del Estado para avanzar una agenda fundamentalmente contraria a los valores fundacionales de la nación.

El radicalismo alentado desde el poder. La retórica incendiaria utilizada por Trump y sus aliados ha tenido consecuencias directas en el aumento del radicalismo y la violencia contra inmigrantes y minorías en Estados Unidos. El discurso oficial ha legitimado y normalizado sentimientos xenófobos que antes permanecían mayormente en los márgenes de la sociedad.

Este clima de hostilidad ha llegado a tal extremo que en estados como Florida, activistas y defensores de derechos humanos advierten a las comunidades migrantes que no se manifiesten públicamente porque podrían perder la vida. La amenaza de violencia física se ha convertido en una realidad cotidiana para muchas personas.

El ciclo de la fabricación de indocumentados

Restricción de vías legales. Reducción drástica de visas, eliminación de programas de protección temporal y obstaculización del proceso de asilo.

Criminalización. Etiquetado de migrantes como ilegales y asociación constante con delincuencia en el discurso público.

Persecución. Aumento de redadas, detenciones y deportaciones, incluso de personas sin antecedentes criminales.

Justificación política. Uso del «problema migratorio» para implementar políticas más restrictivas y ganar apoyo político.

Este ciclo perpetúa la situación, creando constantemente nuevos indocumentados mientras se utiliza su existencia para justificar medidas cada vez más severas.

Impacto en las comunidades migrantes

Miedo constante. Las comunidades migrantes viven en un estado permanente de ansiedad, temiendo que cualquier interacción con autoridades pueda resultar en deportación.

- Evitan servicios médicos esenciales.
- No denuncian delitos de los que son víctimas.
- Limitan su participación en actividades comunitarias.

Separación familiar. Miles de familias han sido separadas debido a deportaciones, dejando a niños estadounidenses sin sus padres y creando traumas psicológicos profundos.

- Niños en custodia del Estado.
- Familias divididas entre países.
- Impacto económico por pérdida del sostén familiar.

Explotación laboral. El miedo a la deportación hace que muchos migrantes soporten condiciones laborales abusivas, beneficiando a empleadores inescrupulosos.

- Salarios por debajo del mínimo legal.
- Condiciones de trabajo peligrosas.
- Imposibilidad de denunciar abusos.

La contradicción económica de la política migratoria

Existe una profunda contradicción en la política migratoria estadounidense: mientras se criminaliza a los migrantes indocumentados, la economía del país depende en gran medida de su trabajo.

Agricultura esencial. El sector agrícola estadounidense depende de la mano de obra migrante, con hasta 70 % de los trabajadores agrícolas siendo inmigrantes.

Construcción y desarrollo. La industria de la construcción se sustenta con aproximadamente 8 % del PIB generado por el trabajo de los indocumentados.

Hostelería y servicios. Restaurantes, hoteles y servicios domésticos dependen de trabajadores migrantes que contribuyen con 1.2 billones anualmente en impuestos.

Esta contradicción revela que el verdadero propósito de la política migratoria no es eliminar la migración indocumentada, sino mantenerla en un estado de vulnerabilidad que permita la explotación laboral y sirva como chivo expiatorio político. Aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas viven y trabajan en EE. UU., sosteniendo sectores económicos vitales mientras son criminalizadas por el mismo sistema que se beneficia de su labor.

Resistencia y defensa de derechos humanos

A pesar del clima hostil, numerosas organizaciones, activistas y comunidades continúan resistiendo y luchando por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Esta resistencia toma múltiples formas, desde la asistencia legal directa hasta la organización comunitaria y la incidencia política.

Asistencia legal. Organizaciones que proporcionan representación legal gratuita a migrantes en procesos de deportación, solicitudes de asilo y regularización de estatus migratorio.

Ciudades santuario. Municipios que limitan su cooperación con autoridades federales de inmigración para proteger a sus residentes indocumentados y mantener la confianza de la comunidad.

Educación y concientización. Campañas informativas que buscan contrarrestar la desinformación y los estereotipos negativos sobre los migrantes, destacando sus contribuciones a la sociedad estadounidense.

Acción directa. Protestas, manifestaciones y otras formas de activismo que visibilizan la injusticia de las políticas migratorias actuales y exigen cambios estructurales.

Hacia una política migratoria humana y justa

La situación actual exige un replanteamiento completo de la política migratoria estadounidense, alejándose del enfoque puni-

tivo y xenófobo para adoptar uno basado en los derechos humanos, la dignidad de las personas y el reconocimiento de las realidades económicas y sociales que impulsan la migración.

Regularización. Crear vías para que los millones de indocumentados que ya viven y trabajan en EE. UU. puedan regularizar su situación y salir de las sombras.

Cooperación internacional. Abordar las causas fundamentales de la migración mediante la cooperación con los países de origen, invirtiendo en desarrollo económico, seguridad y gobernanza.

Sistema de asilo justo. Reformar el sistema de asilo para garantizar procesos justos, rápidos y respetuosos de los derechos humanos para quienes huyen de la persecución y la violencia.

Integración. Implementar políticas que faciliten la integración de los migrantes en la sociedad estadounidense, reconociendo sus contribuciones culturales, económicas y sociales.

El cambio hacia una política migratoria más humana no solo beneficiaría a los migrantes, sino a toda la sociedad estadounidense, fortaleciendo su economía, enriqueciendo su cultura y reafirmando su compromiso con los valores de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana que dice defender.

Democracia y disrupción digital: retos para la educación superior iberoamericana

Érika Rodríguez Pinzón (*El País*, 23 de junio de 2025) es especialista en educación, nos regala un análisis muy interesante cuando señala en su artículo que la educación superior en Iberoamérica enfrenta desafíos significativos ante la disrupción digital y los cambios democráticos en la región. En ese contexto, plantea que las universidades deben adaptarse a nuevas realidades tecnológicas mientras fortalecen su papel en la formación de ciudadanos comprometidos con valores democráticos.

Esta disrupción digital se manifiesta en múltiples dimensiones que afectan directamente al ecosistema educativo. La acelerada transformación tecnológica no solo modifica los métodos de enseñanza y aprendizaje, sino que reconfigura profundamente el mercado laboral para el cual las instituciones están formando a sus estudiantes. La automatización, la inteligencia artificial y el *big data* están creando nuevas profesiones mientras otras se vuelven obsoletas, exigiendo una adaptación constante de los currículos académicos.

Paralelamente, el contexto democrático en la región iberoamericana presenta un panorama complejo y diverso. Mientras algunos países consolidan sus sistemas democráticos, otros enfrentan retrocesos, polarización política y desconfianza institucional. Las universidades no pueden permanecer ajenas a esta

realidad, pues su misión trasciende la mera formación técnica para abarcar la construcción de ciudadanía crítica y participativa.

Las brechas digitales constituyen otro desafío fundamental. El acceso desigual a internet, dispositivos tecnológicos y alfabetización digital reproduce y amplifica desigualdades sociales preexistentes. Las instituciones de educación superior deben implementar estrategias que garanticen la inclusión digital de todos sus estudiantes, especialmente aquellos provenientes de contextos vulnerables.

En este escenario, las universidades iberoamericanas están llamadas a convertirse en laboratorios de innovación democrática digital. Esto implica no solo incorporar tecnologías emergentes en sus procesos educativos, sino también fomentar el pensamiento crítico sobre las implicaciones éticas, sociales y políticas de estas tecnologías. La formación en competencias digitales debe ir acompañada de una sólida educación en valores democráticos como el respeto a la diversidad, la deliberación pública y la participación ciudadana.

El reto es mayúsculo, pero también representa una oportunidad histórica para reimaginar la misión de la educación superior en nuestras sociedades. La colaboración regional, el intercambio de experiencias y la construcción de redes de conocimiento serán fundamentales para enfrentar colectivamente estos desafíos y aprovechar el potencial transformador de la revolución digital en beneficio del fortalecimiento democrático.

El contexto democrático iberoamericano

Fragilidad democrática. La región iberoamericana experimenta una fragilidad en sus sistemas democráticos, con desafíos persistentes que amenazan la estabilidad política y social. Los retrocesos en materia de separación de poderes, independencia judicial y libertad de prensa evidencian una preocupante erosión de las instituciones democráticas en varios países.

Desigualdad estructural. Las profundas desigualdades económicas y sociales continúan siendo un obstáculo para la consolidación democrática en muchos países de la región. La

concentración de riqueza, el acceso inequitativo a servicios básicos y las disparidades territoriales generan ciudadanías de distintas categorías, limitando la participación efectiva en los procesos democráticos.

Polarización política. El aumento de la polarización política dificulta el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos necesarios para el fortalecimiento democrático. Este fenómeno, amplificado por las redes sociales y la desinformación, fragmenta el tejido social y debilita la confianza en las instituciones públicas, creando terreno fértil para discursos populistas y autoritarios.

Crisis de representación. La desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos tradicionales y las instituciones representativas ha provocado una crisis de legitimidad. Los bajos niveles de participación electoral, el surgimiento de movimientos antisistema y la desafección política representan síntomas de un malestar democrático que requiere atención urgente.

Debilidad institucional. La fragilidad de las instituciones públicas, la corrupción sistémica y la impunidad socavan la credibilidad del sistema democrático. La incapacidad estatal para garantizar seguridad, justicia y servicios básicos en algunos territorios crea vacíos de poder que son aprovechados por actores no estatales, comprometiendo la gobernabilidad democrática.

Estos factores configuran un panorama complejo para las instituciones educativas, que deben formar ciudadanos capaces de enfrentar estos retos mientras navegan por un entorno político cambiante. Las universidades iberoamericanas enfrentan la doble responsabilidad de analizar críticamente estas realidades y contribuir a la formación de líderes comprometidos con valores democráticos fundamentales como la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.

En este contexto, resulta fundamental que las instituciones de educación superior desarrollen programas académicos que promuevan el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la cultura del diálogo. Asimismo, deben fortalecer su vinculación con las comunidades locales para contribuir a la

construcción de ciudadanía activa y a la regeneración del tejido democrático desde los territorios.

La revolución digital y su impacto

Transformación acelerada. La revolución digital ha transformado radicalmente todos los aspectos de la sociedad iberoamericana, desde la economía hasta las relaciones sociales, creando nuevas oportunidades, pero también profundizando brechas existentes. Esta transformación representa el cambio más significativo desde la Revolución Industrial, alterando fundamentalmente cómo trabajamos, aprendemos y nos relacionamos.

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el big data y la automatización están reconfigurando el mercado laboral y exigiendo nuevas competencias a los profesionales. Se estima que más de 60 % de los empleos actuales experimentarán algún grado de automatización en la próxima década, lo que plantea desafíos significativos para la formación profesional.

Impacto en la educación superior

Las universidades iberoamericanas enfrentan el reto de actualizar sus currículos y metodologías para formar profesionales capaces de adaptarse a un entorno laboral en constante evolución. La educación basada en competencias digitales, el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas se han vuelto esenciales.

La velocidad de estos cambios supone un desafío sin precedentes para las instituciones educativas tradicionales, que deben adaptarse rápidamente para mantener su relevancia en el siglo XXI.

Democratización del conocimiento. El acceso a la información y al conocimiento se ha democratizado gracias a internet y las plataformas digitales, permitiendo que más personas accedan a recursos educativos de calidad. Sin embargo, esta democratización no es uniforme y está condicionada por factores socioeconómicos y geográficos.

Desafíos sociales y éticos. La digitalización plantea importantes dilemas éticos relacionados con la privacidad, la se-

guridad de los datos y la influencia de los algoritmos en la toma de decisiones. Las sociedades iberoamericanas deben desarrollar marcos regulatorios adecuados para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin obstaculizar la innovación.

La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente estos procesos de transformación digital, evidenciando tanto el potencial de las tecnologías para mantener la continuidad educativa como las profundas desigualdades existentes en el acceso y uso efectivo de herramientas digitales.

Brechas digitales en Iberoamérica

Acceso desigual. Persisten importantes disparidades en el acceso a internet y dispositivos digitales entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes estratos socioeconómicos.

Alfabetización digital. Muchos estudiantes y docentes carecen de las habilidades necesarias para aprovechar plenamente las herramientas digitales disponibles.

Infraestructura tecnológica. Las instituciones educativas enfrentan limitaciones en su infraestructura tecnológica, dificultando la implementación de modelos educativos innovadores.

Políticas públicas. Existe una necesidad urgente de políticas públicas coordinadas que aborden estas brechas de manera integral y sostenible.

Estas brechas digitales representan uno de los mayores obstáculos para que la educación superior iberoamericana pueda responder efectivamente a los desafíos de la era digital.

El papel de las universidades en la formación democrática

Las instituciones de educación superior iberoamericanas tienen una responsabilidad fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos con los valores democráticos. Esto implica no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también desarrollar pensamiento crítico, capacidad de diálogo y compromiso cívico. Las universidades deben ser espacios de pluralismo, donde se fomente el debate respetuoso y la confrontación de ideas como elementos esenciales de la vida democrática.

En un contexto de creciente polarización política y auge de la desinformación, las universidades tienen el deber de promover la alfabetización mediática y el análisis crítico de la información, habilidades fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en la era digital.

Estrategias para la formación democrática

Existen diversas estrategias que las universidades pueden implementar para fortalecer su papel en la formación democrática:

- Integración de contenidos sobre ciudadanía democrática en los planes de estudio de todas las disciplinas.
- Creación de espacios de diálogo interdisciplinario sobre problemas sociales complejos.
- Promoción de la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario.
- Desarrollo de proyectos de vinculación con comunidades locales y organizaciones civiles.

Desafíos contemporáneos

La tarea formativa de las universidades enfrenta importantes desafíos en el contexto actual:

La fragmentación del debate público y la creación de «burbujas informativas» dificultan el intercambio genuino de ideas. Las instituciones educativas deben diseñar experiencias que expongan a los estudiantes a perspectivas diversas y fomenten el diálogo constructivo entre diferentes visiones del mundo.

Asimismo, la mercantilización de la educación superior ha llevado en algunos casos a priorizar la formación técnica orientada al mercado laboral por encima del desarrollo integral de ciudadanos críticos. Las universidades deben resistir estas presiones y reafirmar su compromiso con la formación humanística y cívica.

Experiencias innovadoras. En diversas universidades iberoamericanas han surgido iniciativas prometedoras, como programas de aprendizaje-servicio que vinculan la formación académica con proyectos de impacto social, observatorios ciudadanos que monitorean la calidad democrática o laboratorios

de innovación cívica que utilizan metodologías colaborativas para abordar problemas públicos.

Estas experiencias demuestran que la formación democrática no se limita al ámbito teórico, sino que requiere espacios de práctica donde los estudiantes puedan ejercitar habilidades cívicas y comprender la complejidad de los procesos democráticos.

La autonomía universitaria, principio fundamental en la tradición iberoamericana, adquiere especial relevancia en este contexto, pues garantiza la libertad necesaria para que las instituciones educativas puedan cumplir su función crítica sin presiones externas que limiten el pensamiento independiente.

Desafíos para la educación superior en la era digital

Actualización curricular. Adaptar los planes de estudio para incorporar competencias digitales y habilidades blandas demandadas por el mercado laboral actual.

Formación docente. Capacitar al profesorado en el uso pedagógico de tecnologías digitales y metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje.

Modelos híbridos. Desarrollar modelos educativos que combinen lo mejor de la presencialidad con las ventajas de la educación virtual.

Investigación aplicada. Fomentar la investigación orientada a resolver problemas sociales concretos y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

Estos desafíos requieren un esfuerzo coordinado entre instituciones educativas, gobiernos y sector privado para garantizar una transformación digital inclusiva y democrática.

Inteligencia artificial y educación superior

La inteligencia artificial generativa (IA) representa tanto una oportunidad como un desafío para la educación superior iberoamericana. Por un lado, ofrece posibilidades para personalizar el aprendizaje, automatizar tareas administrativas y mejorar la accesibilidad educativa, permitiendo que estudiantes con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje reciban una formación adaptada a sus características particulares.

Los sistemas de tutoría inteligente pueden ofrecer retroalimentación inmediata y personalizada, mientras que las analíticas de aprendizaje permiten identificar patrones y predecir dificultades académicas antes de que se conviertan en problemas graves. Estas herramientas están revolucionando la forma en que docentes y estudiantes interactúan con el conocimiento.

Sin embargo, también plantea interrogantes éticos sobre la privacidad de datos, la transparencia algorítmica y el riesgo de profundizar desigualdades existentes si no se implementa de manera reflexiva y equitativa. La recopilación masiva de datos sobre el comportamiento de los estudiantes genera preocupaciones legítimas sobre su uso y protección.

El sesgo algorítmico representa otro desafío significativo, pues los sistemas de IA pueden reproducir y amplificar prejuicios presentes en los datos con los que fueron entrenados, afectando negativamente a grupos históricamente marginados.

Las universidades deben no solo adoptar estas tecnologías, sino también liderar la reflexión crítica sobre sus implicaciones sociales, éticas y políticas. Esto implica incorporar estos debates en los currículos, crear comités de ética específicos para la implementación de IA y desarrollar políticas institucionales que garanticen un uso responsable de estas herramientas.

La IA está transformando rápidamente el panorama educativo global, y las instituciones iberoamericanas deben prepararse para este cambio disruptivo. En países como España, México y Brasil, ya existen iniciativas pioneras que integran *chatbots* para atención estudiantil, sistemas de detección temprana de deserción y plataformas adaptativas de aprendizaje.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha implementado UNAMIA, un asistente virtual que responde consultas administrativas y académicas, mientras que la Universidad de Barcelona utiliza algoritmos predictivos para identificar factores de riesgo en el abandono estudiantil.

Los laboratorios de investigación en IA educativa están surgiendo en diversas instituciones de la región, generando conocimiento local y soluciones adaptadas al contexto iberoamericano. La red AULA (Alianza Universitaria Latinoamericana

para la IA) reúne a investigadores de distintos países para desarrollar proyectos colaborativos en este campo.

El futuro de esta integración tecnológica dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones para formar docentes en competencias digitales avanzadas, establecer marcos regulatorios adecuados y fomentar una cultura de innovación responsable que ponga el bienestar humano en el centro de las decisiones tecnológicas.

La colaboración entre universidades, gobiernos y empresas tecnológicas será fundamental para aprovechar el potencial transformador de la IA sin comprometer valores fundamentales como la equidad, la autonomía y el pensamiento crítico que caracterizan a la educación superior iberoamericana.

Cooperación regional e internacional

Redes académicas. Fortalecer las redes de colaboración entre universidades iberoamericanas para compartir experiencias, recursos y buenas prácticas en la transformación digital.

Investigación conjunta. Desarrollar proyectos de investigación colaborativos que aborden desafíos comunes de la región en materia de democracia y tecnología.

Movilidad académica. Promover programas de intercambio de estudiantes y docentes que enriquezcan la experiencia educativa y fomenten una perspectiva regional.

La cooperación internacional se vuelve especialmente relevante en un contexto donde los recursos son limitados y los desafíos compartidos. Las alianzas estratégicas con instituciones de otras regiones pueden aportar conocimientos y recursos valiosos para la transformación digital de la educación superior iberoamericana.

Políticas públicas para la transformación digital educativa

El éxito de la transformación digital de la educación superior requiere un enfoque integral de políticas públicas que aborden simultáneamente los diversos aspectos del problema, desde la infraestructura hasta la formación docente y la inclusión digital.

El futuro de la educación superior iberoamericana

El futuro de la educación superior en Iberoamérica dependerá de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con los valores democráticos y la equidad social.

Flexibilidad y adaptabilidad. Las instituciones deberán desarrollar estructuras más ágiles y flexibles que les permitan responder rápidamente a los cambios tecnológicos y sociales.

Aprendizaje permanente. La educación superior deberá reorientarse hacia modelos de aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo oportunidades de actualización constante para profesionales en todas las etapas de su carrera.

Compromiso social. Las universidades deberán fortalecer su vinculación con la sociedad, contribuyendo activamente a la solución de problemas locales y regionales desde una perspectiva democrática e inclusiva.

El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad de construir un nuevo modelo de educación superior que combine lo mejor de la tradición académica iberoamericana con las posibilidades que ofrece la revolución digital, al servicio del fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible de la región.

Los BRICS en la nueva era geopolítica: desafíos y oportunidades

En estos tiempos de incertidumbre es importante analizar el papel emergente de los BRICS en el escenario geopolítico global, con especial atención a la reunión extraordinaria del 6 y 7 de julio en Brasil. Examinaremos la evolución del bloque, sus objetivos estratégicos, las tensiones internas entre sus miembros y las implicaciones de su posible expansión. También analizaremos la propuesta de una moneda común, el papel de cada país miembro, la reacción de Estados Unidos ante el creciente poder de este grupo, y el significado de la participación de México como observador. Finalmente, evaluaremos el futuro de los BRICS y su capacidad para constituirse como un contrapeso efectivo al orden occidental liderado por Estados Unidos

Antecedentes y evolución de los BRICS

El acrónimo BRIC fue acuñado en 2001 por el economista Jim O'Neill, de Goldman Sachs, para referirse a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China, que proyectaban un potencial de crecimiento significativo para el siglo XXI. Lo que comenzó como un término económico se transformó en una alianza política formal cuando estos países celebraron su primera cumbre oficial en 2009 en Ekaterimburgo, Rusia. Sudáfrica se unió al grupo en 2010, completando el acrónimo BRICS tal como lo conocemos hoy.

En sus inicios, los BRICS se concebían principalmente como un foro económico para promover la cooperación comercial y financiera entre economías emergentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el grupo ha evolucionado hacia una plataforma con ambiciones geopolíticas más amplias, buscando reformar las instituciones de gobernanza global establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, que consideran dominadas por Occidente.

2001. Jim O'Neill acuña el término BRIC para identificar a las economías emergentes con mayor potencial de crecimiento.

2009. Primera cumbre oficial BRIC en Ekaterimburgo, Rusia, marcando el inicio formal de la cooperación política entre estos países.

2010. Sudáfrica se une al grupo, que pasa a denominarse oficialmente BRICS, ampliando su representación al continente africano.

2014-2015. Creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Acuerdo de Reservas de Contingencia, primeras instituciones financieras propias.

2023. Expansión histórica con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como miembros plenos.

Un evento fundamental en la evolución de los BRICS fue la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) en 2014, también conocido como Banco de los BRICS, y el Acuerdo de Reservas de Contingencia (ARC). Estas instituciones representaron un desafío directo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, respectivamente, señalando la ambición del grupo de crear estructuras financieras alternativas a las dominadas por Occidente.

En 2023, los BRICS experimentaron su expansión más significativa hasta la fecha, incorporando a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como miembros plenos. Esta ampliación refleja la creciente influencia del bloque y su atractivo para países que buscan diversificar sus alianzas más allá del eje occidental. La reunión extraordinaria de julio de 2024 en Brasil representa un momento crucial en esta nueva etapa de

los BRICS ampliados, donde se debatirán estrategias para consolidar su papel como contrapeso al orden internacional liderado por Estados Unidos.

Objetivos estratégicos de la reunión en Brasil

La reunión extraordinaria de los BRICS programada para el 6 y 7 de julio en Brasil no es un encuentro rutinario. Se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y representa un esfuerzo concertado para redefinir el papel del bloque en un mundo cada vez más multipolar. Bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil busca posicionar a los BRICS como un foro fundamental para la articulación de alternativas al orden económico y político dominado por Occidente.

Expansión estratégica del bloque. Uno de los principales objetivos es evaluar nuevas solicitudes de adhesión y establecer criterios claros para la incorporación de nuevos miembros. Tras la histórica expansión de 2023, varios países han expresado su interés en unirse, incluyendo naciones de América Latina como Argentina, Cuba y Venezuela. La ampliación busca incrementar la representatividad geográfica y el peso económico del grupo.

Respuesta coordinada al proteccionismo. Los miembros buscan establecer mecanismos de respuesta conjunta frente a las políticas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos bajo la administración Trump y continuadas por Biden. Esto incluye fortalecer los lazos comerciales intra-BRICS y desarrollar cadenas de suministro alternativas menos dependientes de Occidente.

Exploración de una moneda común. Quizás el tema más ambicioso y controversial de la agenda es la discusión sobre la viabilidad de crear una moneda común para transacciones entre los países BRICS. Esta iniciativa busca reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional y proteger a los miembros de las sanciones financieras occidentales.

Además de estos objetivos principales, la reunión abordará otros temas estratégicos como el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo, la cooperación en materia de seguridad

energética y el desarrollo de infraestructuras digitales independientes de las tecnologías controladas por empresas occidentales. Brasil, como anfitrión, buscará también impulsar la agenda ambiental, aprovechando su liderazgo en temas de conservación de la Amazonía y desarrollo sostenible.

Un aspecto notable es la participación de México como observador, representado por el canciller José Ramón de la Fuente. Esta presencia refleja el interés del gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum de diversificar sus relaciones internacionales más allá de su tradicional dependencia de Estados Unidos, aunque manteniendo una postura cautelosa que evite tensiones con su principal socio comercial.

El proyecto de moneda común: desafío al dólar

La propuesta de crear una moneda común para los BRICS representa uno de los desafíos más directos al sistema monetario internacional dominado por el dólar estadounidense. Esta iniciativa ha ganado impulso en los últimos años, especialmente tras las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania, que evidenciaron la vulnerabilidad de los países que dependen del sistema financiero occidental.

El concepto no es crear una moneda única como el euro, sino establecer una unidad de cuenta para el comercio intrabloque que coexistiría con las monedas nacionales. El modelo más discutido es similar al del «bancor» propuesto por John Maynard Keynes durante las negociaciones de Bretton Woods: una moneda supranacional utilizada exclusivamente para las transacciones internacionales entre los bancos centrales de los países miembros.

China, el mayor impulsor de esta iniciativa, ve en ella una oportunidad para internacionalizar gradualmente el yuan y reducir los riesgos asociados con sus enormes reservas en dólares. Rusia, por su parte, busca desesperadamente alternativas al sistema SWIFT del que ha sido parcialmente excluida. Brasil e India mantienen posturas más cautelosas, reconociendo los beneficios potenciales, pero también los riesgos de antagonizar a Estados Unidos.

Protección contra sanciones. Reducir la vulnerabilidad ante sanciones financieras occidentales al crear canales alternativos de pago.

Reducción de costos. Disminuir los costos de transacción en el comercio intrabloque al eliminar la necesidad de conversión al dólar.

Estabilidad económica. Menor exposición a la volatilidad del dólar y a las decisiones unilaterales de la Reserva Federal de EE. UU.

Influencia geopolítica

Mayor autonomía y capacidad de influencia en el sistema financiero internacional.

Los obstáculos técnicos para implementar esta moneda común son considerables. Las economías de los BRICS tienen estructuras y ciclos económicos muy diferentes, así como distintos regímenes cambiarios. China mantiene un estricto control sobre el yuan, mientras que Brasil e India tienen monedas que flotan más libremente. Estas disparidades complican la creación de un sistema de tipos de cambio estable entre las monedas participantes.

Más allá de los desafíos técnicos, la implementación de una moneda común tendría profundas implicaciones geopolíticas. Estados Unidos ha utilizado históricamente el estatus del dólar como moneda de reserva global para ejercer influencia, imponiendo sanciones económicas y controlando el acceso al sistema financiero internacional. Una alternativa viable al dólar socavaría significativamente esta herramienta de poder blando estadounidense, precipitando potencialmente una reconfiguración del orden económico mundial.

En esta reunión se espera que los líderes de los BRICS discutan un plan de implementación gradual, comenzando posiblemente con acuerdos bilaterales de comercio en monedas locales, seguidos por la creación de una unidad de cuenta digital para el comercio intrabloque y, eventualmente, el establecimiento de un sistema de pagos independiente. El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la voluntad política, sino tam-

bién de la capacidad del bloque para superar sus diferencias internas y presentar un frente unido ante las inevitables presiones externas.

China y Rusia: el eje central de los BRICS

El binomio China-Rusia se ha consolidado como el eje central que impulsa la agenda estratégica de los BRICS. Ambas potencias comparten un interés común en desafiar la hegemonía occidental liderada por Estados Unidos y en promover un orden mundial multipolar. Esta alianza, descrita por algunos analistas como una «asociación sin límites», se ha fortalecido significativamente tras la invasión rusa a Ucrania y las subsecuentes sanciones occidentales.

China, con su impresionante crecimiento económico y su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida como la Nueva Ruta de la Seda), representa el motor económico del grupo. El proyecto, anunciado por Xi Jinping en 2013, abarca más de 140 países y contempla inversiones por más de un billón de dólares en infraestructura global. Este megaproyecto ha permitido a China extender su influencia económica y política a través de Asia, África, Europa y América Latina, creando una red de países dependientes de su financiamiento e inversión.

Rusia, por su parte, aporta al bloque su considerable peso geopolítico, su capacidad militar y sus vastos recursos energéticos. Aislada por las sanciones occidentales tras la anexión de Crimea en 2014 y más severamente después de la invasión a Ucrania en 2022, Moscú ha reorientado significativamente su economía hacia Asia, con China como su principal socio comercial. Para el Kremlin, los BRICS representan una plataforma crucial para demostrar que no está aislado internacionalmente y para buscar alternativas al sistema financiero occidental.

La complementariedad entre ambas economías es evidente: China necesita los recursos energéticos y materias primas rusas, mientras que Rusia depende del mercado chino y su tecnología. Sin embargo, esta relación no está exenta de tensiones subyacentes. Rusia teme convertirse en un mero «apéndice de recursos» para China, y hay recelos históricos sobre la influencia

china en el Lejano Oriente ruso y en Asia Central, considerada por Moscú como su «patio trasero».

En el contexto de los BRICS, el binomio China-Rusia impulsa las iniciativas más ambiciosas y potencialmente disruptivas, como la creación de una moneda común y el desarrollo de sistemas financieros alternativos. Su capacidad para coordinar posiciones en foros internacionales y presentar un frente unido ante Occidente ha aumentado significativamente la relevancia geopolítica del bloque, aunque también ha generado tensiones con otros miembros como India, que mantienen relaciones más complejas con las potencias occidentales.

India: el contrapeso estratégico dentro de los BRICS

La posición de India dentro de los BRICS representa uno de los equilibrios más delicados y complejos del grupo. Como la democracia más grande del mundo y una potencia emergente con ambiciones globales propias, India se ha resistido consistentemente a convertirse en un socio menor dentro de un bloque dominado por China. Esta tensión fundamental define la participación india en los BRICS y explica sus frecuentes posturas divergentes en cuestiones estratégicas clave.

Las relaciones entre India y China están marcadas por una profunda desconfianza histórica, disputas territoriales no resueltas y una creciente competencia por la influencia en Asia. Los enfrentamientos militares en la región fronteriza de Ladakh en 2020, que resultaron en bajas en ambos lados, ejemplifican estas tensiones subyacentes. A pesar de que ambos países son socios comerciales importantes, con un intercambio bilateral que supera los 135 000 millones de dólares anuales, esta relación económica es altamente asimétrica, con un déficit comercial significativo para India.

Alianza estratégica con EE. UU. India ha fortalecido su cooperación militar y estratégica con Estados Unidos, formando parte del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) junto con Japón y Australia, visto como un contrapeso a China.

Equilibrio pragmático. Mantiene su autonomía estratégica participando simultáneamente en los BRICS y en alianzas oc-

cidentales, negándose a alinearse completamente con cualquier bloque.

Multilateralismo selectivo. Aprovecha los BRICS para promover reformas en instituciones internacionales y aumentar su voz global, sin comprometer sus intereses nacionales.

La política de «autonomía estratégica» de India, heredera del Movimiento de Países no Alineados, durante la Guerra Fría, le ha permitido mantener relaciones pragmáticas con todas las grandes potencias. Bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, Delhi ha fortalecido significativamente sus lazos con Washington, particularmente en el ámbito de la seguridad, sin romper sus vínculos históricos con Moscú, de quien sigue dependiendo para gran parte de su equipamiento militar.

En relación con las principales iniciativas de los BRICS, India ha adoptado posturas cautelosas. Respecto a la propuesta de una moneda común, Delhi ha expresado reservas, temiendo que pueda beneficiar desproporcionadamente a China y amenazar la soberanía monetaria india. De manera similar, aunque participa en el Nuevo Banco de Desarrollo, ha sido reticente a comprometerse plenamente con iniciativas financieras que podrían aumentar la influencia china en la región.

La incorporación de Irán como miembro pleno de los BRICS en 2023 ha añadido otra capa de complejidad a la posición india. Aunque India mantiene relaciones históricas con Teherán y tiene intereses estratégicos en el desarrollo del puerto de Chabahar como contrapeso a la influencia china en Pakistán, las crecientes sanciones estadounidenses contra Irán han obligado a Delhi a reducir sus importaciones de petróleo iraní y a calibrar cuidadosamente su relación con este país.

En la próxima reunión de Brasil, se espera que India adopte una postura constructiva pero cautelosa, apoyando iniciativas de cooperación económica y desarrollo sostenible, pero resistiéndose a propuestas que perciba como demasiado antagonistas hacia Occidente o que puedan aumentar desproporcionadamente la influencia china dentro del grupo. Esta posición ambivalente de India, lejos de ser una debilidad, podría considerarse como un factor equilibrador crucial que impide que los

BRICS se conviertan en un bloque explícitamente anti-occidental, manteniendo su carácter de foro de cooperación entre economías emergentes diversas.

Brasil: puente hacia América Latina y ambiciones regionales

Brasil, bajo el liderazgo renovado de Luiz Inácio Lula da Silva, ha asumido un papel proactivo dentro de los BRICS, posicionándose como el representante de América Latina y como puente entre las grandes potencias emergentes y el Sur Global. Como anfitrión de la reunión extraordinaria de julio, Brasil busca aprovechar esta plataforma para reafirmar su liderazgo regional y promover una agenda que combine sus intereses nacionales con aspiraciones más amplias de reforma del orden internacional.

El regreso de Lula al poder en 2023 marcó un cambio significativo en la política exterior brasileña, abandonando el alineamiento con Estados Unidos característico de la administración Bolsonaro y retomando la tradición diplomática de multilateralismo activo y diversificación de relaciones. Esta reorientación ha revitalizado el papel de Brasil en los BRICS, donde Lula ve una oportunidad para impulsar un orden mundial más equitativo y multipolar.

Expansión regional. Brasil impulsa activamente la incorporación de más países latinoamericanos a los BRICS, con Argentina como candidato principal, seguido por Cuba y Venezuela. Esta ampliación reforzaría la influencia brasileña como articulador regional dentro del bloque.

Agenda ambiental. Lula ha posicionado la protección de la Amazonía y la lucha contra el cambio climático como ejes de su diplomacia internacional, buscando convertir a Brasil en líder global en desarrollo sostenible y utilizando los BRICS como plataforma para esta agenda.

Reformas financieras. Brasil apoya la creación de mecanismos financieros alternativos dentro de los BRICS, incluyendo el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo y esquemas de comercio en monedas locales, aunque mantiene cierta cautela respecto a una moneda común.

La estrategia brasileña dentro de los BRICS refleja las com-

plejidades de su posición geopolítica. Por un lado, China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, con intercambios que superaron los 150 000 millones de dólares en 2023, centrados principalmente en la exportación de materias primas agrícolas y minerales. Esta relación ha generado preocupaciones sobre una excesiva dependencia y desindustrialización, llevando a Lula a buscar un equilibrio que preserve la autonomía económica brasileña.

Por otro lado, Brasil mantiene importantes vínculos económicos y políticos con Estados Unidos y Europa, que siguen siendo cruciales para su economía. Esta realidad obliga a Brasil a evitar posiciones demasiado antagónicas hacia Occidente, adoptando un enfoque más moderado que el de Rusia o China en cuestiones geopolíticas controvertidas.

En términos regionales, Brasil ve en los BRICS una oportunidad para consolidar su liderazgo en América Latina, históricamente disputado por Estados Unidos y, más recientemente, por China. La invitación a México para participar como observador en la reunión de julio puede interpretarse como parte de esta estrategia, buscando tender puentes con la segunda economía latinoamericana a pesar de sus tradicionales vínculos con Estados Unidos.

La capacidad de Brasil para equilibrar estas diferentes dimensiones —su papel dentro de los BRICS, sus relaciones con Occidente, y sus ambiciones de liderazgo regional— determinará en gran medida el éxito de la reunión de julio y la evolución futura del bloque. Como país democrático con una diplomacia experimentada y respetada, Brasil podría jugar un papel crucial en mantener a los BRICS como un foro constructivo de cooperación Sur-Sur, evitando que se convierta en un bloque meramente antioccidental.

La reacción de Estados Unidos: entre el recelo y la contención

La creciente influencia de los BRICS ha generado una respuesta compleja y multifacética por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump (ya ocurría en su primer mandato) observa con evidente preocupación la consolidación de un bloque

que explícitamente busca reducir la hegemonía de este país en el sistema internacional.

El mandatario estadounidense ha expresado abiertamente un recelo particular hacia los BRICS, considerándolos una amenaza directa a la primacía económica y política de Estados Unidos. Su administración está implementando una serie de medidas proteccionistas y sanciones dirigidas especialmente contra China y Rusia, dos de los pilares fundamentales del grupo. La guerra comercial con China y la intensificación de sanciones contra Rusia tras la anexión de Crimea ejemplifican esta postura de confrontación.

La administración de Joe Biden, aunque suavizó la retórica, mantuvo en esencia la misma orientación estratégica de Trump (2016-2020) reconociendo a China como el principal competidor sistémico de Estados Unidos y a Rusia como una amenaza a la seguridad europea. La respuesta estadounidense a los BRICS se articula en varios niveles:

Población mundial. Los BRICS originales representan 42 % de la población global, tras la expansión supera el 45 %.

Comercio global. Participación aproximada de los BRICS en el comercio mundial, con tendencia creciente.

Contención económica. Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para reducir su dependencia económica de China, promoviendo la desvinculación (*decoupling*) en sectores estratégicos como los semiconductores, las tecnologías avanzadas y las cadenas de suministro críticas. La Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS representan intentos de reindustrializar la economía estadounidense y reducir su vulnerabilidad frente a rivales estratégicos.

Diplomacia de contrapeso

Washington ha revitalizado sus alianzas tradicionales y creado nuevos formatos de cooperación para contrarrestar la influencia de los BRICS. El fortalecimiento del QUAD (EE. UU., Japón, India, Australia) y la creación de AUKUS (Australia, Reino Unido, Estados Unidos) ejemplifican esta estrategia, buscando establecer un «cordón sanitario» alrededor de China en la región Indo-Pacífico.

Defensa del dólar. Ante los intentos de los BRICS de desarrollar alternativas al dólar en el comercio internacional, Estados Unidos ha reforzado su control sobre el sistema financiero global, utilizando activamente su capacidad de imponer sanciones financieras como herramienta de política exterior. Simultáneamente, la Reserva Federal ha acelerado sus estudios sobre un posible dólar digital que mantenga la relevancia de la moneda estadounidense en la era digital.

Diplomacia divisiva. La estrategia estadounidense incluye también intentos de explotar las divisiones internas entre los miembros de los BRICS. El fortalecimiento de las relaciones con India, evidenciado por la visita de Estado del primer ministro Modi a Washington en 2023, busca evitar que Delhi se alinee completamente con el eje China-Rusia dentro del bloque.

La participación de México como observador en la próxima reunión de los BRICS representa un dilema particular para Estados Unidos. Como principal socio comercial de México y tras la renovación del acuerdo T-MEC, Washington observa con preocupación cualquier acercamiento significativo de su vecino al bloque liderado por China.

En última instancia, la respuesta estadounidense a los BRICS refleja la tensión fundamental entre un orden internacional establecido, que busca preservar sus prerrogativas, y potencias emergentes que demandan mayor voz y representación. La capacidad de Washington para adaptar su estrategia a esta nueva realidad multipolar, evitando tanto la confrontación directa como la pasividad, será determinante para la evolución del sistema internacional en las próximas décadas.

México como observador: implicaciones y perspectivas

La participación de México como observador en la reunión extraordinaria de los BRICS, representado por el canciller José Ramón de la Fuente, marca un hito significativo en la política exterior mexicana y refleja las complejas dinámicas geopolíticas que nuestro país enfrenta en un mundo cada vez más polarizado. Esta decisión no es meramente protocolar, sino que representa un cuidadoso cálculo estratégico con implicaciones

potencialmente profundas para el posicionamiento internacional de México. Claudia Sheinbaum, con su participación en la reunión del G7 ha marcado un rumbo claro en materia internacional.

Su gobierno ha mantenido una postura de autonomía en política exterior, buscando diversificar las relaciones internacionales de México más allá de su tradicional dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, esta autonomía se ha ejercido dentro de los límites impuestos por la realidad económica: aproximadamente 80 % de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense y la integración económica entre ambos países, consolidada a través del T-MEC, es profunda y estructural.

En este contexto, la participación de México como observador en los BRICS puede interpretarse como un intento de abrir nuevos espacios de maniobra diplomática sin comprometer sus relaciones fundamentales con Estados Unidos. Esta aproximación cautelosa refleja varios intereses estratégicos:

Diversificación económica. Reducir la dependencia de EE. UU. y explorar nuevos mercados para exportaciones e inversiones, especialmente con China y otros mercados emergentes.

Mayor influencia global. Participar en foros alternativos que permitan a México amplificar su voz en asuntos globales y posicionarse como un actor relevante en el Sur Global.

Cooperación Sur-Sur. Acceder a mecanismos de financiamiento para desarrollo e infraestructura a través del Nuevo Banco de Desarrollo y otras iniciativas de los BRICS.

Autonomía estratégica. Mantener opciones abiertas en un escenario internacional incierto, especialmente ante el posible retorno de Trump y políticas proteccionistas en EE. UU.

Para Brasil, la participación mexicana como observadora representa un éxito diplomático significativo, permitiéndole ampliar la influencia latinoamericana dentro del bloque y potencialmente crear un contrapeso regional a la dominación del eje China-Rusia. China, por su parte, ve en México un mercado atractivo y un posible punto de entrada adicional al mercado

norteamericano, complementando sus inversiones en otras partes de América Latina.

El futuro de la relación entre México y los BRICS dependerá en gran medida de la evolución del contexto político interno mexicano en la era trumpiana, y en el marco de las dinámicas geopolíticas globales, particularmente en torno a las relaciones entre Estados Unidos y China.

Considero que no está en la agenda de la presidente mexicana solicitar su incorporación formal al grupo, lo que representaría un realineamiento geopolítico significativo en Norteamérica, con profundas implicaciones para el equilibrio de poder regional y global. Me parece que esta participación está enfocada a fortalecer el sentido autónomo y la defensa a ultranza de nuestra soberanía e independencia nacionales.

El futuro de los BRICS: desafíos y perspectivas

La reunión extraordinaria de los BRICS en Brasil representa un momento pivotal para un bloque que se encuentra en plena transformación. Tras la histórica expansión de 2023, que incorporó a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, el grupo enfrenta el desafío de redefinir su identidad y propósito estratégico. ¿Se consolidará como un verdadero contrapeso al orden occidental o permanecerá como un foro de cooperación entre economías emergentes diversas?

Los BRICS originales compartían características como economías emergentes de gran tamaño con aspiraciones de mayor representación en las instituciones internacionales. Sin embargo, la reciente expansión ha incorporado a países con perfiles muy diferentes, desde monarquías petroleras del golfo hasta Estados con sistemas políticos abiertamente antagonistas a Occidente como Irán. Esta diversidad plantea interrogantes sobre la cohesión interna del grupo y su capacidad para articular posiciones comunes más allá de la retórica.

BRICS+. Un bloque ampliado, pero con membresía selectiva, manteniendo cierta coherencia entre sus miembros.

Red de influencia global. Evolución hacia una plataforma menos institucionalizada, pero con mayor alcance global,

funcionando como un foro flexible de coordinación Sur-Sur.

Bloque antioccidental. Transformación en una alianza más explícitamente opuesta a las estructuras de poder occidentales, liderada por el eje China-Rusia.

Institucionalización profunda. Desarrollo de estructuras institucionales robustas, incluyendo un sistema financiero alternativo completo y mecanismos de seguridad colectiva.

El éxito de las iniciativas más ambiciosas de los BRICS, como la creación de una moneda común o el desarrollo de sistemas financieros alternativos, dependerá en gran medida de la voluntad política de sus miembros para asumir los costos y riesgos asociados con el desafío directo a la hegemonía occidental. Los intereses divergentes entre países como India, que mantiene fuertes vínculos con Occidente, y Rusia, que busca activamente socavar el orden liderado por Estados Unidos, representan un obstáculo significativo para la cohesión del grupo.

La capacidad de los BRICS para atraer a más países del Sur Global dependerá de su habilidad para ofrecer alternativas concretas y ventajas tangibles frente al orden establecido. El Nuevo Banco de Desarrollo ha comenzado a consolidarse como una fuente alternativa de financiamiento para infraestructura, pero su escala sigue siendo modesta en comparación con el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales.

La creciente fragmentación del orden internacional, acelerada por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, ofrece oportunidades y desafíos para los BRICS. Por un lado, el escepticismo hacia la globalización liderada por Occidente ha aumentado, creando un terreno fértil para propuestas alternativas. Por otro lado, las tensiones geopolíticas han llevado a una mayor polarización, dificultando la posición de países que, como India o Brasil, buscan mantener buenas relaciones con ambos campos.

La reunión de Brasil será crucial para evaluar si los BRICS pueden superar estas contradicciones internas y avanzar hacia un proyecto coherente de reforma del orden internacional. El resultado de esta reunión enviará señales importantes sobre la capacidad del grupo para actuar como un bloque cohesionado

en un escenario global cada vez más complejo y turbulento.

Más allá de los resultados concretos de la cumbre, la mera existencia y expansión de los BRICS refleja un cambio tectónico en la distribución del poder global. El sistema internacional está evolucionando hacia una configuración más multipolar, donde potencias emergentes como China, India y Brasil demandan mayor voz y representación. En este contexto, los BRICS, con todas sus limitaciones y contradicciones, representan uno de los intentos más significativos de articular una visión alternativa del orden mundial para el siglo XXI.

Para analistas políticos y económicos, seguir de cerca la evolución de los BRICS resulta fundamental para comprender las dinámicas de poder en el sistema internacional contemporáneo. La reunión de Brasil no solo definirá el futuro inmediato del bloque, sino que también ofrecerá valiosas pistas sobre la dirección que tomará el orden global en las próximas décadas, mientras el centro de gravedad económico y político continúa desplazándose gradualmente desde Occidente hacia el Este y el Sur Global.

El Babel norteamericano

En un análisis de la tensa relación entre Estados Unidos y México durante la presidencia de Donald Trump, Jorge Zepeda Patterson (*El País*, 30 de junio de 2025) recomienda transitar de la animadversión hacia un acuerdo colaborativo que respete la soberanía nacional, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la cabeza fría en este Babel de dos vecinos cada día más distantes.

La metáfora del Babel norteamericano refleja con precisión el diálogo de sordos que caracteriza actualmente la relación bilateral. Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante, amenazando con aranceles punitivos y deportaciones masivas, mientras acusa a México de «enviar» criminales y drogas hacia el norte. Por su parte, la administración de Sheinbaum ha respondido con firmeza diplomática, recordando la interdependencia económica y la colaboración en seguridad que beneficia a ambas naciones.

Las amenazas del mandatario estadounidense generan incertidumbre en los mercados financieros y en las cadenas de suministro que integran a ambas economías desde la firma del TLCAN en 1994, ahora renovado como T-MEC. Los analistas económicos advierten que un deterioro en las relaciones comerciales podría tener consecuencias devastadoras para industrias clave en ambos lados de la frontera, desde la automotriz hasta la agrícola.

El fenómeno migratorio continúa siendo el punto más álgido de tensión. México se encuentra en la difícil posición de gestionar tanto la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos como la presión política y económica de su vecino del norte. Simultáneamente, el tráfico de fentanilo se ha convertido en otro tema central de la agenda bilateral, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades compartidas en esta crisis de salud pública.

Zepeda Patterson establece que, ante este panorama complejo, la estrategia más efectiva para México es mantener la dignidad nacional sin caer en provocaciones, priorizando una diplomacia pragmática que salvaguarde los intereses de ambos países. «En esta torre de Babel donde las palabras pierden significado la única salida es construir puentes de entendimiento basados en intereses mutuos, no en discursos incendiarios».

La retórica antiinmigrante de Trump

La retórica antiinmigrante de Donald Trump ha alcanzado niveles inéditos desde su campaña electoral y a partir de su segunda gestión presidencial (20 de enero de 2025). Sus declaraciones sobre los migrantes mexicanos, a quienes ha calificado de «criminales» y «violadores», han escalado a amenazas de deportaciones masivas y la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.

El republicano ha prometido la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ha amenazado con utilizar al ejército para llevarla a cabo. También ha anunciado que impondrá aranceles de hasta 25 % a todas las exportaciones mexicanas si el gobierno de México no detiene el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo.

La respuesta de México

Frente a estas amenazas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por mantener la cabeza fría. Ha evitado responder a las provocaciones y ha instruido a su gabinete a no entrar en polémicas con el candidato republicano. La estrategia parece ser la

de no alimentar la confrontación y esperar a que pase la campaña electoral.

Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de críticas. Algunos analistas consideran que México debería adoptar una posición más firme y responder a las provocaciones de Trump. Otros, en cambio, apoyan la estrategia de Sheinbaum, argumentando que entrar en una guerra verbal con el candidato republicano solo serviría para alimentar su narrativa antiinmigrante.

La presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura diplomática y mesurada frente a las provocaciones de Trump, evitando alimentar la confrontación.

El impacto económico de las amenazas. Las amenazas de Trump no son solo retórica; tienen un impacto real en la economía mexicana. La mera posibilidad de que se impongan aranceles a las exportaciones mexicanas ha generado incertidumbre en los mercados y ha afectado la inversión extranjera en México.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio comercial que supera los 600 000 millones de dólares anuales. La imposición de aranceles afectaría gravemente a ambas economías, pero especialmente a la mexicana, que depende en gran medida de sus exportaciones al vecino del norte.

La interdependencia económica. A pesar de la retórica antiinmigrante de Trump, la realidad es que Estados Unidos y México están profundamente interconectados económicamente. La integración de las cadenas de suministro entre ambos países es tal que una disrupción en el comercio bilateral tendría consecuencias devastadoras para ambas economías.

Manufactura. Las cadenas de suministro en sectores como el automotor están tan integradas que los componentes cruzan la frontera varias veces antes de que el producto final esté listo.

Agricultura. México es un importante proveedor de productos agrícolas para Estados Unidos, especialmente en frutas y verduras.

Energía. Existe un intercambio significativo de productos energéticos, con México importando gas natural y gasolina de Estados Unidos.

Servicios. El sector de servicios, incluyendo turismo, finanzas y telecomunicaciones, también está altamente integrado entre ambos países.

Esta interdependencia económica debería ser un factor moderador en la relación bilateral, pero la retórica política a menudo ignora estas realidades económicas.

El desafío migratorio

El tema migratorio es uno de los más complejos en la relación bilateral. Estados Unidos acusa a México de no hacer lo suficiente para detener el flujo de migrantes que cruzan su territorio con destino a la frontera norte. México, por su parte, argumenta que el problema es regional y que requiere una solución integral que aborde las causas estructurales de la migración.

La realidad es que México ha endurecido su política migratoria en los últimos años, desplegando a la Guardia Nacional en sus fronteras y deteniendo a miles de migrantes. Sin embargo, el flujo migratorio continúa, impulsado por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en los países de origen, principalmente en Centroamérica.

Según datos oficiales, en 2023 más de 400 000 personas fueron detenidas por autoridades mexicanas mientras intentaban llegar a Estados Unidos, un aumento significativo respecto a años anteriores. Esto demuestra tanto la magnitud del fenómeno como los esfuerzos de México por contenerlo, a pesar de sus limitados recursos.

El gobierno mexicano ha implementado programas como Sembrando Vida en países centroamericanos, buscando crear alternativas económicas que reduzcan la necesidad de migrar. No obstante, estos esfuerzos resultan insuficientes ante la complejidad del fenómeno migratorio, que involucra redes de tráfico humano, corrupción institucional y crisis humanitarias recurrentes.

Por su parte, Estados Unidos ha oscilado entre políticas restrictivas como *Quédate en México* y enfoques más humanitarios, dependiendo de la administración en turno. Esta inconsistencia política dificulta el establecimiento de estrategias migratorias efectivas y sostenibles a largo plazo.

Las organizaciones internacionales como la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han señalado repetidamente que el enfoque puramente securitario de la migración está condenado al fracaso. Proponen, en cambio, un modelo de responsabilidad compartida donde los países de origen, tránsito y destino colaboren en programas de desarrollo económico, fortalecimiento institucional y ampliación de vías legales de migración.

La solución al desafío migratorio requiere de la cooperación entre Estados Unidos, México y los países de origen de los migrantes. Sin embargo, la retórica antiinmigrante de Trump dificulta esta cooperación y polariza aún más el debate sobre la migración.

Un aspecto frecuentemente ignorado es el aporte económico y cultural de los migrantes a las sociedades de destino. Estudios económicos demuestran que, contrario a la narrativa populista, los migrantes suelen contribuir más en impuestos y seguridad social de lo que reciben en servicios públicos, además de cubrir sectores laborales esenciales que enfrentan escasez de mano de obra local.

El cambio climático representa otro factor que intensificará los flujos migratorios en las próximas décadas. Sequías prolongadas, huracanes más intensos y la pérdida de tierras cultivables en Centroamérica y el Caribe empujarán a más personas a buscar nuevos horizontes, añadiendo urgencia a la necesidad de encontrar soluciones estructurales al fenómeno migratorio.

El problema del fentanilo

Otro punto de fricción en la relación bilateral es el tráfico de fentanilo. Trump ha acusado a México de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de esta droga sintética, que ha causado una crisis de sobredosis en Estados Unidos.

México argumenta que el problema del fentanilo es principalmente estadounidense, tanto en términos de demanda como de producción. Aunque reconoce que los cárteles mexicanos están involucrados en el tráfico de esta droga, señala que

los precursores químicos provienen principalmente de Asia y que el consumo se da en Estados Unidos.

Muertes anuales. Más de 100 000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de opioides, principalmente fentanilo.

Potencia. El fentanilo es hasta 50 veces más potente que la heroína, lo que lo hace extremadamente peligroso.

Dosis letal. Tan solo 2 miligramos de fentanilo pueden ser letales para un adulto promedio.

La solución al problema del fentanilo, al igual que el de la migración, requiere de la cooperación bilateral. Sin embargo, las acusaciones mutuas y la politización del tema dificultan esta cooperación.

De la animadversión a la colaboración

Frente a estos desafíos, Jorge Zepeda Patterson recomienda transitar de la animadversión a la colaboración. Argumenta que, a pesar de las diferencias y las provocaciones, México y Estados Unidos están condenados a entenderse debido a su proximidad geográfica y su interdependencia económica.

Animadversión. La retórica hostil y las amenazas solo generan tensión y dificultan la cooperación en temas cruciales como la migración y el tráfico de drogas.

Diálogo. Es necesario mantener canales de comunicación abiertos, incluso en momentos de tensión, para abordar los desafíos comunes.

Colaboración. La cooperación bilateral es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos compartidos, respetando siempre la soberanía de ambos países.

Esta transición hacia la colaboración no implica ceder ante las presiones o renunciar a la defensa de los intereses nacionales. Por el contrario, se trata de buscar soluciones que beneficien a ambos países, reconociendo la interdependencia y la necesidad de cooperación.

Mantener la cabeza fría

En este contexto de tensión y provocaciones, la estrategia de

Claudia Sheinbaum de mantener la cabeza fría parece ser la más adecuada. Evitar responder a las provocaciones y centrarse en la defensa de los intereses nacionales a través de canales diplomáticos es una muestra de madurez política. Esta postura, que prioriza el diálogo constructivo sobre la confrontación, ha sido respaldada por diversos analistas internacionales que ven en ella una oportunidad para desescalar las tensiones bilaterales.

Esta estrategia no implica pasividad o sumisión. Por el contrario, requiere de una diplomacia activa y firme, que defienda los intereses de México sin caer en la confrontación estéril. También implica prepararse para diferentes escenarios, incluyendo la posibilidad de que Trump gane las elecciones y cumpla con sus amenazas.

Preparación jurídica. México debe fortalecer su equipo legal internacional para enfrentar posibles aranceles o medidas comerciales unilaterales que violen los acuerdos del T-MEC.

Diversificación económica. Acelerar la diversificación de mercados para reducir la dependencia económica de Estados Unidos, fortaleciendo lazos con Europa, Asia y América Latina.

Fortalecimiento interno. Desarrollar políticas que mejoren las condiciones económicas y de seguridad en México para abordar las causas estructurales de la migración.

La administración de Sheinbaum también debe considerar una estrategia de comunicación clara y consistente, tanto para audiencias nacionales como internacionales. Esto incluye transmitir mensajes de cooperación y beneficio mutuo, enfatizando la interdependencia económica y cultural entre ambos países, sin dejar de defender la dignidad y soberanía nacional. El uso estratégico de aliados en el Congreso estadounidense, el sector empresarial y la sociedad civil podría ser fundamental para contrarrestar narrativas negativas.

«Mantener la cabeza fría en esta Babel en la que se encuentra la relación de dos vecinos cada día más distantes» es el consejo de Jorge Zepeda Patterson para navegar este complejo momento en la relación bilateral.

Esta Babel, esta confusión de lenguas y entendimientos, requiere de líderes que puedan comunicarse efectivamente y

construir puentes, no muros, entre ambos países. La metáfora bíblica es particularmente acertada: en la torre de Babel, la incapacidad para comunicarse efectivamente llevó al fracaso de un proyecto común. De manera similar, la falta de entendimiento mutuo y comunicación efectiva entre México y Estados Unidos amenaza con obstaculizar la colaboración necesaria para abordar desafíos compartidos.

Un enfoque prudente también requiere mantener y fortalecer alianzas estratégicas con otros actores globales. La diversificación de relaciones diplomáticas y comerciales no solo ofrece alternativas económicas sino también mayor influencia geopolítica. México, como miembro del T-MEC, del G20 y con una creciente presencia en foros internacionales, puede utilizar estas plataformas para defender el multilateralismo y las normas internacionales frente a tendencias proteccionistas o unilateralistas.

Finalmente, es esencial que esta estrategia de «cabeza fría» no sea meramente reactiva sino proactiva. México podría tomar la iniciativa proponiendo nuevos mecanismos de cooperación en áreas de interés común, como la seguridad fronteriza, el desarrollo económico regional o la transición energética. Estas propuestas constructivas podrían cambiar la narrativa de confrontación por una de colaboración, demostrando que México es un socio serio y responsable, dispuesto a contribuir a soluciones compartidas, pero no a ceder ante presiones injustificadas.

Hacia un acuerdo colaborativo

El camino hacia adelante, según Zepeda Patterson, pasa por la construcción de un acuerdo colaborativo que respete la soberanía nacional de México. Este acuerdo debería abordar de manera integral los desafíos compartidos, como la migración, el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza, reconociendo la responsabilidad compartida en estos temas.

Respeto a la soberanía. Cualquier acuerdo debe respetar la soberanía nacional de México y su derecho a determinar sus propias políticas internas.

Responsabilidad compartida. Los desafíos como la migración y el tráfico de drogas son responsabilidad de ambos países y requieren soluciones conjuntas.

Beneficio mutuo. Las soluciones deben buscar el beneficio de ambos países, reconociendo la interdependencia económica y social.

Este acuerdo colaborativo no será fácil de construir, especialmente en un contexto de polarización política en ambos países. Sin embargo, es el único camino viable para superar la actual crisis en la relación bilateral y construir una relación más constructiva y beneficiosa para ambos países.

En última instancia, México y Estados Unidos están condenados a entenderse. La geografía, la historia y la economía los han unido de manera indisoluble. La tarea de los líderes de ambos países es encontrar la manera de que esta unión sea lo más armoniosa y beneficiosa posible, a pesar de las diferencias y los desafíos.

Lamentable la declaración de una funcionaria de la administración Trump calificando a México como adversario de los Estados Unidos. Sin duda, seguimos siendo vecinos distantes como señalara en los años setenta en su libro homónimo Alan Riding, pero no enemigos.

La ley fiscal de Trump amenaza la esperanza económica de la relocalización de empresas en México

La reciente aprobación de la ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump representa un desafío significativo y multifacético para la economía mexicana. Esta legislación, cuya piedra angular es la drástica reducción de impuestos a las corporaciones y a los contribuyentes más ricos, busca fortalecer la economía interna de Estados Unidos. Simultáneamente, otorga más recursos para intensificar los esfuerzos en frenar la migración ilegal y eleva el techo de la deuda federal, elementos que, en conjunto, podrían complicar seriamente las perspectivas económicas de México.

El fenómeno del *nearshoring*, o la relocalización de empresas, había sido una fuente de gran optimismo para México, posicionándolo como un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Se esperaba que la proximidad geográfica, los acuerdos comerciales como el T-MEC, y una mano de obra competitiva impulsaran un flujo considerable de capital y la creación de empleo en el país.

Sin embargo, al reducir sustancialmente la carga impositiva para las empresas que operan en suelo estadounidense, la nueva ley fiscal de Trump disminuye drásticamente el incentivo económico para establecer o mantener operaciones en México. Esto no solo amenaza con detener el flujo de nuevas inversiones de *nearshoring*, sino que incluso podría propiciar la

repatriación de empresas ya establecidas en México de vuelta a Estados Unidos, invirtiendo la tendencia de relocalización.

Adicionalmente, el incremento de recursos destinados a políticas migratorias más restrictivas por parte de Estados Unidos, si bien no directamente fiscal, genera un clima de incertidumbre y presión en la frontera. Este endurecimiento puede afectar indirectamente el dinamismo económico y social de las regiones fronterizas mexicanas, impactando la movilidad laboral y los flujos comerciales transfronterizos.

Finalmente, la elevación del techo de la deuda estadounidense, aunque una medida interna, tiene implicaciones globales. Un mayor endeudamiento de la economía más grande del mundo podría generar volatilidad en los mercados financieros internacionales y presiones inflacionarias, afectando la estabilidad económica de socios comerciales como México y haciendo menos predecible el entorno para la inversión extranjera directa tan necesaria para el crecimiento.

En suma, la ley fiscal de Trump, con su triple impacto en la fiscalidad corporativa, la política migratoria y la estabilidad financiera global, se erige como una amenaza multidimensional para la promesa de crecimiento económico de México, especialmente aquella ligada al *nearshoring*, obligando al país a reevaluar sus estrategias de desarrollo en un nuevo y desafiante panorama geopolítico y económico.

Detalles de la nueva ley fiscal de Trump

Reducción de impuestos. La nueva legislación contempla una significativa reducción de impuestos para las grandes corporaciones y los contribuyentes de mayores ingresos, creando un entorno fiscal más atractivo para las empresas estadounidenses.

Recursos para control migratorio. La ley asigna fondos adicionales para fortalecer las políticas de control migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, lo que podría intensificar las tensiones bilaterales.

Elevación del techo de la deuda. Se ha aprobado un incremento en el límite de endeudamiento federal, permitiendo

mayor capacidad de gasto e inversión dentro de los Estados Unidos.

Estos cambios legislativos forman parte de la estrategia económica «America First» que ha caracterizado la administración Trump, priorizando los intereses económicos estadounidenses por encima de las relaciones comerciales regionales.

Impacto en el *nearshoring* y la economía mexicana

El freno al *nearshoring*. La esperanza económica de México estaba fuertemente vinculada al fenómeno del *nearshoring*, una estrategia que prometía una significativa relocalización de empresas internacionales desde centros de producción en Asia hacia México. Esta cercanía geográfica con el vasto mercado estadounidense, aunado a acuerdos comerciales como el T-MEC y una mano de obra competitiva, posicionaban a México como un destino ideal para la inversión. Sin embargo, la reciente ley fiscal impulsada por la administración Trump, con sus agresivos incentivos fiscales en EE. UU., ha introducido un factor disruptivo, provocando que un número creciente de empresas reconsideren drásticamente esta estrategia de *nearshoring*.

En efecto, la reducción sustancial de impuestos corporativos en Estados Unidos, sumada a otros beneficios fiscales y regulatorios, está creando un ambiente de negocios doméstico excepcionalmente atractivo. Esto se traduce en que muchas corporaciones, que previamente veían en México una puerta de entrada estratégica y económicamente viable al mercado norteamericano, ahora están evaluando la repatriación de sus operaciones directamente a suelo estadounidense.

Este escenario no solo amenaza con detener el flujo de nuevas inversiones que se esperaban para México, sino que incluso podría incentivar la desinversión y la relocalización inversa de empresas ya establecidas, eliminando a México como un eslabón clave en sus cadenas de suministro y redefiniendo la dinámica comercial regional.

La relocalización de empresas hacia México, que se proyectaba como un motor crucial de crecimiento económico y desarrollo para el país, enfrenta ahora un panorama de profunda

incertidumbre. Los nuevos incentivos fiscales estadounidenses, al disminuir el atractivo de invertir en territorio mexicano, erosionan la ventaja comparativa que México ofrecía en términos de costos y acceso al mercado. Esta situación no solo ralentiza la creación de empleos de alta calidad y la transferencia tecnológica, sino que también pone en riesgo la diversificación productiva y la integración de México en cadenas de valor globales más sofisticadas, impactando negativamente las proyecciones de crecimiento del PIB y el bienestar social a largo plazo.

Consecuencias económicas para México

Reducción de la inversión extranjera. La disminución en el flujo de inversiones extranjeras directas afectará la creación de empleos y el desarrollo industrial en México.

Pérdida de oportunidades manufactureras. El sector manufacturero mexicano perderá oportunidades de crecimiento al reducirse la relocalización de plantas productivas.

Desequilibrio comercial. El balance comercial entre México y Estados Unidos podría deteriorarse, afectando la estabilidad económica mexicana.

Aumento del desempleo. La menor creación de empleos en el sector industrial podría elevar las tasas de desempleo en regiones clave del país.

Estos efectos combinados amenazan con provocar una desaceleración económica significativa en México, justo cuando el país buscaba recuperarse de los impactos de la pandemia y otros desafíos económicos recientes.

Alternativas para la economía mexicana

Diversificación de mercados. México necesita reducir su dependencia del mercado estadounidense buscando fortalecer relaciones comerciales con otras regiones como Europa, Asia y América Latina.

Impulso a la innovación. Desarrollar sectores de alto valor agregado y tecnología que ofrezcan ventajas competitivas más allá de los costos laborales, como biotecnología, energías renovables y servicios digitales.

Fortalecimiento educativo. Invertir en educación y capacitación para crear una fuerza laboral altamente calificada que atraiga inversiones en sectores avanzados.

Estas alternativas requieren una visión estratégica a largo plazo y una coordinación efectiva entre el gobierno, el sector privado y las instituciones educativas para transformar los desafíos actuales en oportunidades de desarrollo.

El Plan México como respuesta a la crisis

Ante la amenaza que representa la nueva ley fiscal estadounidense, el gobierno mexicano ha propuesto el Plan México como estrategia para contrarrestar sus efectos negativos y evitar una recesión económica. Este plan busca fortalecer la economía interna y mantener la competitividad del país frente a los cambios en el entorno internacional.

Desarrollado como una iniciativa integral, el Plan México surge tras un análisis exhaustivo de los riesgos que implica la política fiscal de Trump y sus posibles impactos en la economía nacional. Los expertos económicos del gobierno, en colaboración con representantes del sector privado, han diseñado una serie de medidas estratégicas orientadas tanto a mitigar los efectos inmediatos como a generar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo.

Incentivos fiscales locales. El Plan contempla la creación de zonas económicas especiales con beneficios fiscales competitivos para retener y atraer inversiones. Estas zonas ofrecerán exenciones impositivas, créditos fiscales para la generación de empleo y deducciones especiales para inversiones en tecnología e innovación.

Desarrollo de infraestructura. Inversión en infraestructura logística, energética y de comunicaciones para reducir costos operativos y aumentar la eficiencia. Se priorizarán proyectos estratégicos en corredores industriales y puntos fronterizos clave para facilitar el comercio.

Simplificación administrativa. Reducción de trámites burocráticos y tiempos de respuesta gubernamental para facilitar la operación empresarial. Se implementará una ventanilla

única digital para gestionar permisos, licencias y trámites empresariales en plazos significativamente menores.

Fortalecimiento del mercado interno. Programas de estímulo al consumo nacional y sustitución de importaciones para reducir la dependencia externa. Se impulsarán cadenas de valor locales mediante alianzas estratégicas entre grandes empresas y pymes mexicanas, creando un ecosistema productivo más robusto y resiliente.

Diplomacia económica activa

Negociaciones bilaterales con Estados Unidos para lograr excepciones o compensaciones por las nuevas políticas fiscales. Simultáneamente, se intensificarán esfuerzos para diversificar relaciones comerciales con otros bloques económicos como la Unión Europea, Asia-Pacífico y América Latina.

La implementación del Plan México requerirá una inversión pública estimada en 500 000 millones de pesos durante los próximos tres años, con la expectativa de generar una movilización adicional de capital privado de al menos el doble de esta cantidad. Los análisis preliminares sugieren que, de ejecutarse correctamente, estas medidas podrían compensar hasta 70 % del impacto negativo proyectado por la nueva política fiscal estadounidense.

El éxito de esta estrategia dependerá no solo de la efectividad en su implementación, sino también de la capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar certidumbre jurídica para los inversionistas. El gobierno ha anunciado la creación de un consejo de seguimiento con participación empresarial para monitorear los avances y realizar ajustes cuando sea necesario.

Desafíos para la implementación del Plan México

Limitaciones presupuestarias. La capacidad del gobierno mexicano para implementar incentivos fiscales competitivos está restringida por las limitaciones presupuestarias y el compromiso con la disciplina fiscal.

Resistencia institucional. La burocracia y la resistencia al cambio en las instituciones públicas pueden ralentizar la implementación de las reformas necesarias para mejorar el clima de negocios.

Inseguridad y Estado de derecho. Los problemas de seguridad y la percepción de debilidad en el Estado de derecho continúan siendo factores que disuaden la inversión extranjera, independientemente de los incentivos económicos que se ofrezcan.

Dependencia energética. Las políticas energéticas actuales, que han generado incertidumbre entre inversionistas del sector, podrían limitar la competitividad industrial de México frente a Estados Unidos.

Estos desafíos plantean interrogantes sobre la efectividad que podría tener el Plan México para contrarrestar los efectos de la ley fiscal estadounidense y evitar una recesión económica en el país.

La perspectiva empresarial mexicana

Los empresarios mexicanos enfrentan una disyuntiva: adaptarse rápidamente al nuevo entorno competitivo o arriesgarse a perder relevancia en las cadenas globales de valor. La comunidad empresarial mexicana se encuentra dividida en su respuesta ante los desafíos que plantea la nueva ley fiscal estadounidense.

Mientras algunos líderes empresariales comprenden la gravedad de la situación y están dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones, otros parecen no dimensionar completamente el impacto que estos cambios tendrán en sus negocios. Esta diversidad de percepciones dificulta la creación de un frente común empresarial que pueda trabajar coordinadamente con el gobierno para enfrentar los retos económicos que se avecinan.

Comparativa de escenarios económicos para México

Escenario optimista. El Plan México logra compensar parcialmente los efectos de la ley fiscal estadounidense mediante incentivos efectivos y mejoras en competitividad. Se mantiene parte del *nearshoring* y se diversifican mercados.

- Crecimiento económico moderado (2-3 % anual).
- Atracción selectiva de inversiones en sectores estratégicos.
- Estabilidad en el tipo de cambio.

Escenario neutral. Implementación parcial del Plan México con resultados mixtos. Algunas empresas regresan a EE. UU. mientras otras permanecen en México por ventajas logísticas y laborales.

- Crecimiento económico bajo (0.5-1.5 % anual).
- Estancamiento en la inversión extranjera directa.
- Presiones moderadas sobre el peso mexicano.

Escenario pesimista. El Plan México fracasa en contrarrestar los incentivos estadounidenses. Se produce un éxodo significativo de empresas y una caída en la inversión extranjera.

- Recesión económica (-1 a -3 anual).
- Aumento del desempleo y la informalidad.
- Depreciación significativa del peso.

La materialización de cualquiera de estos escenarios dependerá tanto de la efectividad de las políticas mexicanas como de la evolución de la economía global y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Visión prospectiva

La nueva ley fiscal propuesta por la administración Trump representa un desafío de magnitudes considerables para la economía mexicana. Al incentivar el regreso de capitales y operaciones a Estados Unidos, esta política amenaza directamente la dinámica del *nearshoring*, que ha sido un motor clave para la inversión y el empleo en México. No obstante, más allá de la amenaza inminente, esta coyuntura crítica también puede y debe convertirse en una oportunidad estratégica para que México reevalúe y redefina fundamentalmente su estrategia de desarrollo económico, impulsando una mayor autonomía y resiliencia.

Urgencia de acción estratégica. México necesita implementar rápidamente medidas no solo reactivas, sino proactivas que consoliden y aumenten su atractivo como destino de inversión. Esto implica ir mucho más allá de la simple ventaja de costos laborales bajos, enfocándose en la creación de un ecosistema que valore la innovación, la eficiencia logística, la certeza jurídica y el desarrollo de talento altamente calificado. La velocidad de respuesta es crucial para mitigar la fuga de capitales y proyectos que ya se vislumbra.

Colaboración público-privada indispensable. El éxito del ambicioso Plan México, y cualquier otra iniciativa para contrarrestar este impacto, dependerá de una colaboración genuina y estrecha entre el gobierno y el sector empresarial mexicano. Los líderes empresariales deben internalizar la gravedad de la situación y la necesidad urgente de una transformación económica profunda. Esta alianza debe traducirse en un diálogo constante, la cocreación de políticas públicas efectivas y el compromiso conjunto con inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano que fortalezcan la competitividad nacional.

Visión de desarrollo a largo plazo. Más allá de las medidas inmediatas para contener el impacto de la ley fiscal estadounidense, México necesita desarrollar e implementar una visión económica de largo aliento. Esta visión debe estar orientada a reducir su vulnerabilidad intrínseca ante los ciclos políticos y económicos de Estados Unidos, diversificando sus mercados de exportación e importación, y fortaleciendo sus cadenas de valor internas. El objetivo es construir una economía más robusta, diversificada y menos dependiente, que le permita fortalecer su posición en la economía global como un actor con identidad y ventajas propias.

Para asegurar una resiliencia económica sostenida, es imperativo que México también se enfoque en los siguientes pilares estratégicos:

Diversificación de relaciones comerciales. Expandir y profundizar los lazos comerciales con otras regiones y países, como la Unión Europea, Asia-Pacífico y América Latina. Esto

incluye la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y la consolidación de los existentes para no depender excesivamente de un solo socio.

Inversión en capital humano y tecnología. Fomentar la educación de calidad, la formación técnica especializada y la investigación y desarrollo (I+D). Una fuerza laboral altamente capacitada y la adopción de tecnologías avanzadas son cruciales para escalar en la cadena de valor global y atraer inversiones de alto impacto.

Desarrollo sostenible y energías limpias. Posicionar a México como un líder en la transición hacia una economía verde. Invertir en energías renovables y prácticas sostenibles no solo atiende una demanda global creciente, sino que también reduce la dependencia de fuentes energéticas volátiles y mejora la competitividad industrial a largo plazo.

Fortalecimiento del Estado de derecho. Garantizar la seguridad jurídica, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones para crear un entorno de negocios predecible y justo. La confianza en el marco legal es un pilar fundamental para atraer y retener la inversión tanto nacional como extranjera.

En resumen, el futuro económico de México en este nuevo panorama global dependerá críticamente de su capacidad para adaptarse de manera ágil y estratégica. Esto significa no solo implementar políticas innovadoras que contrarresten los efectos adversos de las medidas externas, sino también transformar estos desafíos en catalizadores para una profunda renovación. Solo a través de una visión unificada y una estrecha colaboración entre todos los sectores de la sociedad mexicana, el país podrá construir una prosperidad más autónoma y resiliente frente a la volatilidad del entorno internacional.

La actividad económica en México acumula 21 meses a la baja

La economía mexicana ha experimentado un declive sostenido durante los últimos 21 meses, según datos recientes publicados por fuentes oficiales. Este periodo representa uno de los ciclos de contracción más prolongados en la historia económica reciente del país.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) muestra una tendencia negativa consistente, con una caída acumulada de aproximadamente 3.2 % desde el inicio de este ciclo. Los analistas atribuyen esta contracción prolongada a una combinación de factores tanto internos como externos que han impactado severamente el desempeño económico nacional. Entre los factores más relevantes que han contribuido a esta situación destacan:

- La persistente incertidumbre política y cambios regulatorios que han afectado la confianza de inversionistas.
- La disminución de la inversión pública en proyectos de infraestructura.
- Las disrupciones en las cadenas globales de suministro.
- La volatilidad en los precios internacionales de materias primas.
- El incremento en las tasas de interés para contener la inflación.

Por sectores, la industria manufacturera ha sido la más afectada con una contracción de 4.7 %, seguida por la construcción con

una caída de 3.9 %. El sector servicios, que representa aproximadamente 60 % del PIB nacional, ha mostrado mayor resistencia, pero igualmente registra números negativos en los últimos siete trimestres consecutivos.

Las regiones más impactadas son aquellas con alta dependencia de la manufactura orientada a la exportación, particularmente los estados del norte como Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. En contraste, los estados del sureste han experimentado un declive menos pronunciado, beneficiados parcialmente por los proyectos de infraestructura federales en esa región.

Los expertos señalan que esta prolongada contracción requiere una respuesta coordinada de política económica que incluya estímulos fiscales focalizados, políticas monetarias más flexibles y medidas para recuperar la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Factores principales del declive económico

Producción industrial. El sector manufacturero ha mostrado una contracción significativa, con una disminución en la producción de bienes de consumo y de capital. Las exportaciones industriales también han sufrido debido a la menor demanda global.

Inversión extranjera. La inversión extranjera directa ha disminuido considerablemente durante este periodo, afectando el desarrollo de nuevos proyectos y la expansión de empresas existentes en el territorio nacional.

Consumo interno. El consumo de los hogares mexicanos ha mostrado signos de debilitamiento, con una reducción en la compra de bienes duraderos y servicios no esenciales, reflejando una menor confianza en la economía.

Impacto por sectores económicos

Los sectores más afectados durante estos 21 meses de contracción económica han sido el turismo y la construcción, con caídas superiores a 15 %. El sector manufacturero también ha experimentado una significativa reducción, mientras que la agricultura ha mostrado mayor resistencia frente a la tendencia general.

Indicadores macroeconómicos clave

Producto interno bruto. El PIB de México ha registrado una contracción acumulada de 4.7 % durante este periodo de 21 meses, afectando significativamente las proyecciones de crecimiento anual que habían sido establecidas por organismos internacionales y el propio gobierno federal.

Inflación. La tasa de inflación ha mostrado un comportamiento mixto, con periodos de aceleración seguidos por estabilización, pero manteniéndose por encima del objetivo establecido por el Banco de México, lo que ha complicado la política monetaria.

Tipo de cambio. El peso mexicano ha experimentado subes y bajas frente al dólar estadounidense, reflejando la incertidumbre económica y la salida de capitales de inversión de portafolio.

Empleo formal. Se ha registrado una pérdida acumulada de aproximadamente 780 000 empleos formales durante este periodo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afectando principalmente a los sectores de servicios y manufactura.

Perspectiva regional. El impacto de la contracción económica ha sido heterogéneo a lo largo del territorio mexicano, creando diferentes realidades regionales que reflejan las estructuras productivas locales y su integración con mercados nacionales e internacionales.

Norte y frontera. Los estados fronterizos con Estados Unidos han mostrado mayor resistencia a la contracción económica, principalmente debido a la integración con la economía estadounidense y la fortaleza del sector exportador manufacturero, aunque también han experimentado desaceleración.

En Nuevo León, Chihuahua y Baja California, la caída ha sido de 2.8 % en promedio, significativamente menor que el 4.7 % nacional. La industria maquiladora ha sostenido aproximadamente 1.2 millones de empleos en la región, aunque con una reducción de 5 % en nuevas contrataciones. El comercio transfronterizo ha mantenido un flujo constante, aunque afec-

tado por las fluctuaciones en la demanda estadounidense y los cuellos de botella en las cadenas de suministro.

Centro del país. La región central, incluyendo Ciudad de México y el Estado de México, ha sufrido un impacto significativo debido a su dependencia del sector servicios y el consumo interno, con una contracción superior al promedio nacional.

La actividad económica en Ciudad de México ha caído 5.3 %, afectada por la disminución del turismo (reducción de 42 % en ocupación hotelera) y la contracción del sector financiero. Querétaro y Puebla han registrado caídas de 4.9 y 5.1 % respectivamente, con el sector automotor particularmente afectado por la escasez de componentes electrónicos. El empleo en el sector servicios ha disminuido en 320 000 puestos, representando 41 % de las pérdidas nacionales de empleo formal.

Sur y sureste. Los estados del sur y sureste han experimentado la mayor contracción económica, agravando las condiciones de desigualdad preexistentes. Sin embargo, algunos proyectos de infraestructura gubernamental han amortiguado parcialmente el impacto en ciertas zonas.

Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero muestran contracciones del 5.6., 2, 5.9, y 6.7 %, respectivamente. El sector turístico en destinos como Cancún y la Riviera Maya ha visto una reducción del 37 % en ingresos, aunque muestra signos de recuperación gradual. Los proyectos estratégicos como el Tren Maya han generado aproximadamente 105 000 empleos temporales, pero no han compensado las pérdidas en otros sectores. Las remesas han aumentado un 12.3 % en la región, proporcionando un alivio parcial a las economías locales.

Occidente y bajo. La región occidental y el bajo han mostrado un comportamiento intermedio, con sectores específicos mostrando resiliencia mientras otros sufren contracciones importantes.

Jalisco ha mantenido cierta estabilidad gracias a la diversificación de su economía, con una contracción limitada al 3.8 %, mientras que Guanajuato ha experimentado un impacto más severo (5.3 %) debido a las dificultades en la industria del calzado y automotriz.

El sector agroindustrial ha demostrado ser uno de los más resistentes, con una caída de solo 1.9 % en su producción, mientras que el sector tecnológico en Guadalajara ha continuado atrayendo inversiones, aunque a un ritmo 35 % menor que en años anteriores. La reducción en el turismo nacional ha afectado destinos como San Miguel de Allende y Puerto Vallarta con caídas en ocupación del 28 %.

Estas disparidades regionales plantean desafíos específicos para las políticas de recuperación económica, que deberán considerar las características particulares de cada zona para implementar estrategias efectivas y equitativas que permitan reactivar el crecimiento en todo el territorio nacional.

Comparativa internacional

México

Contracción acumulada de 4.7 % en 21 meses.

- Debilidad en inversión extranjera.
- Disminución del consumo interno.
- Afectación severa en turismo y construcción.

Brasil

Contracción acumulada de 3.2 % en periodo similar.

- Mayor diversificación económica.
- Recuperación más rápida del sector agrícola.
- Políticas de estímulo más agresivas.

Colombia

Contracción acumulada de 5.1 % en periodo similar.

- Mayor dependencia de exportaciones de materias primas.
- Inestabilidad política adicional.
- Menor capacidad fiscal para estímulos.

Chile

Contracción acumulada de 2.8 % en periodo similar.

- Mayor solidez institucional.
- Políticas contracíclicas efectivas.
- Diversificación de mercados de exportación.

En comparación con otras economías importantes de América Latina, México ha experimentado una contracción económica más prolongada y profunda que Brasil y Chile, aunque ligeramente menos severa que Colombia. Las diferencias se atribuyen principalmente a la estructura económica, las políticas fiscales implementadas y la capacidad de adaptación a las condiciones globales cambiantes.

Respuestas de política económica

Política fiscal. El gobierno mexicano ha mantenido una postura de austeridad fiscal durante este periodo, limitando el gasto público y priorizando proyectos de infraestructura específicos. Esta estrategia ha sido criticada por diversos analistas que consideran necesario un estímulo fiscal más agresivo para reactivar la economía.

«La política de austeridad ha limitado la capacidad del gobierno para implementar medidas contracíclicas efectivas durante este prolongado periodo de contracción económica». Análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Política monetaria. El Banco de México ha implementado una serie de ajustes en la tasa de interés de referencia, buscando un equilibrio entre el control de la inflación y el estímulo a la actividad económica. Sin embargo, el margen de maniobra se ha visto limitado por la presión inflacionaria y la volatilidad cambiaria.

Las reservas internacionales han jugado un papel importante como mecanismo de estabilización durante este periodo, aunque su utilización ha sido cautelosa para mantener la confianza de los mercados internacionales.

Perspectivas y proyecciones

Corto plazo (6 meses). Se anticipa que la contracción económica continúe durante al menos dos trimestres adicionales, aunque a un ritmo menos pronunciado. Los sectores de turismo y servicios podrían comenzar a mostrar signos de estabilización hacia finales del año.

Mediano plazo (1-2 años). La recuperación podría iniciar gradualmente, impulsada principalmente por el sector exportador y una posible reactivación de la inversión extranjera directa, especialmente en manufacturas orientadas a la exportación.

Largo plazo (3-5 años). Se proyecta una recuperación más sostenida, aunque el ritmo dependerá de las reformas estructurales que se implementen y la evolución del entorno económico global. La diversificación económica será clave para reducir la vulnerabilidad ante futuros choques.

Los analistas económicos coinciden en que la recuperación de la economía mexicana requerirá de políticas públicas más agresivas y coordinadas, así como de un entorno global favorable. La capacidad de adaptación de los diferentes sectores económicos y la implementación de reformas estructurales serán factores determinantes para superar este prolongado periodo de contracción y establecer las bases para un crecimiento más sostenible en el futuro.

Nuevo orden mundial

Tomo I

de *Emilio Alberto de Ygartua Monteverde*

Fue editado por
Universidad Olmeca

Su maquetación y diseño se concluyeron en la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, México
en marzo de 2026.

Para la composición del texto se utilizó la fuente
Book Antiqua de 10, 11 y 40 puntos

